

D0465  
3  
2-j

LA CRISIS POLITICA EN ARGENTINA  
ENTRE 1955 y 1976

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE  
MAESTRIA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS  
DE LA FCPYS - UNAM

PRESENTA: EDUARDO CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ

ASESOR: PROFESOR SERGIO BAGU

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

1991



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1	
EL MARCO LATINOAMERICANO DE LA CRISIS ARGENTINA.....	4
CAPÍTULO 2	
ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA.....	12
Características de la burguesía argentina.....	12
Efectos de la crisis internacional.....	13
Inferencias de la burguesía nacional con el capital extranjero.....	19
El desarrollo social y político.....	23
La Unión Cívica Radical.....	23
El Peronismo.....	24
Los sindicatos.....	46
La organización del movimiento peronista.....	55
El derrumbe del peronismo.....	60
CAPÍTULO 3	
LA APERTURA DE LA CRISIS POLÍTICA.....	66
La crisis abierta en 1955.....	75
Las divisiones al interior de las Fuerzas Armadas.....	76
El proyecto político de Lonardi.....	79
La política económica.....	81
La presidencia del gral. Aramburu.....	83
Evolución de la economía desde 1955.....	87
Las divisiones en el gobierno militar.....	90
Las diferentes tendencias dentro del régimen.....	96
La reemplazación del sindicalismo peronista.....	98
CAPÍTULO 4	
CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DE FRONZIZI.....	100
El gobierno de Frondizi.....	100
La evolución de la economía.....	103
La oposición al gobierno.....	109
Los partidos Unidos Frente al gobierno de Frondizi.....	112
La consolidación del "varonismo".....	114
El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.....	117
El golpe contra Frondizi.....	120
El gobierno de facto.....	122
Las tres fuerzas predominantes en el campo político.....	122
El gobierno radical de A. Illia.....	126

La política económica y la situación del empresariado.....	14
La política de los sindicatos.....	15
La represión del primer gobierno.....	17
<b>CAPÍTULO 5</b>	
<b>LA RECONSTRUCCIÓN IMPUESTA EN 1956.....</b>	<b>128</b>
Los objetivos políticos de la dictadura.....	131
Las Fuerzas Armadas en el momento del golpe.....	133
El personal del gobierno y la dictadura.....	134
La dirigencia sindical frente a la dictadura.....	134
La política económica de la dictadura.....	137
Las diferencias al interior del régimen.....	152
<b>CAPÍTULO 6</b>	
<b>EL REORGANIZAMIENTO DE LA LUCHA POPULAR.....</b>	<b>171</b>
Nuevas formas de acción y organización popular.....	177
Consecuencias económicas del "Carabobo".....	183
El gobierno Arvin-Stein-Ferrari.....	189
Organización de la oposición.....	194
La "Realidad" Leuzens-Perón.....	199
<b>CAPÍTULO 7</b>	
<b>EL SEGUNDO GOBIERNO PERONISTA.....</b>	<b>210</b>
El proyecto político de Perón.....	212
La situación en los sindicatos y las Fuerzas Armadas.....	213
La situación internacional.....	219
Contradicciones de los objetivos económicos.....	219
Los 90 días de Cámpora.....	224
La presidencia de Perón.....	225
Características de la represión.....	228
Los sectores radicales frente a la presidencia de Perón.....	231
Los sindicatos combativos.....	236
La presidencia de Isabel Perón.....	240
La caída del gobierno peronista.....	244
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>247</b>
<b>NOTAS.....</b>	<b>.....</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>.....</b>

INTRODUCCION

En este trabajo se estudiará la evolución política argentina durante el período comprendido entre los dos gobiernos peronistas, el primero, que comprende las dos presidencias de Perón entre 1946 y 1955, y el segundo, de 1973 a 1976, en que tiene lugar su tercera presidencia.

Se prestará especial atención a la agudización de las contradicciones al interior de ese movimiento en la última parte del primer gobierno y a la permanente inestabilidad política que caracteriza a los veinte años que siguen al derrocamiento del mismo en 1955.

A partir de este último año y hasta la instalación del nuevo gobierno peronista en 1973, la situación se caracteriza por la marginación política de la clase obrera como consecuencia de la proscripción del movimiento peronista, y por el constante intervencionismo de los militares en la política nacional.

Ambos hechos son la manifestación de una crisis de las instituciones políticas, que se muestran incapaces de canalizar el conflicto social por la vía constitucional.

La agudización de este conflicto se produce no sólo por el enfrentamiento entre la clase obrera y el conjunto de la burguesía, sino también por las contradicciones entre las diferentes fracciones burguesas, ya sea respecto de sus intereses económicos inmediatos, o de la forma en que cada fracción pretende resolver la "cuestión peronista", entrelazándose así la contradicción social fundamental capital-trabajo, con las contradicciones secundarias entre sectores burgueses.

Este será un hecho fundamental a tener en cuenta para comprender el desarrollo político del período en estudio, ya que es a partir de ese entrelazamiento que se constituirán las distintas alianzas o campos políticos en que se ubicarán los sectores que tienen su origen en la estructura socioeconómica.

Es a partir de estos mecanismos que intentará comprenderse la relación entre esta estructura y las acciones que se observan en la superestructura política.

En otras palabras, la lucha en el terreno político no refleja siempre la contradicción fundamental entre el capital y el trabajo que surge de la estructura económica. Por el contrario, el entrelazamiento entre esa contradicción fundamental con las contradicciones secundarias y la conformación de alianzas que de ello deriva, llevará

que la contradicción fundamental quede muchas veces oculta al articularse en otros tipos de contradicciones que adoptan el papel principal al aparecer en el primer plano de la lucha política.

Esto será un hecho recurrente durante el período estudiado, en el que la convergencia en determinados momentos de la clase obrera y sectores de la burguesía nacional que buscan dirimir diferencias con la fracción burguesa del gran capital extranjero y nacional asociado a él, lleva a que el enfrentamiento que aparece a primera vista como el principal no es entre clases -burguesía contra proletariado-, sino entre el "pueblo", que incluye a esos sectores de la burguesía nacional, y la "oligarquía" del gran capital, o entre la "Nación" y el imperialismo, poniendo a la "liberación nacional" como un paso previo a la liberación social -del trabajo frente al capital-, cuando no puede producirse una sin la otra.

Este fenómeno, típico de las políticas populistas, al constituirse en una de las líneas principales de la lucha política en Argentina en esos años, demuestra los efectos que tiene la persistencia de la ideología peronista en los sectores mayoritarios de la clase obrera.

Para analizar la conformación de estos campos políticos en que convergen distintos sectores sociales, se seguirá en este trabajo la evolución de la economía durante estos años con la intención de distinguir las diferentes fracciones burguesas que se van constituyendo y que adoptarán diferentes comportamientos en el terreno político.

De esta forma, los orígenes de la crisis política, que se extiende desde 1955 a lo largo de todo el período considerado en este trabajo, y la incapacidad de las clases dominantes para legitimar esa dominación restableciendo las formas constitucionales e incorporando en ellas a la clase obrera dando fin a la proscripción del peronismo, serán buscados en varias direcciones.

En el terreno económico se tendrá en cuenta la modificación, a principios de los años cincuenta, del patrón de acumulación del capital que, de anovar en la ampliación de la masa absoluta de plusvalía extraída a los trabajadores mediante la expansión de la producción y de la mano de obra utilizada, pasa a anovar en la ampliación de la plusvalía relativa extraída mediante aumentos de la productividad a través de la incorporación de nuevas tecnologías pero también de mayores niveles de explotación de la clase obrera. Situación incompatible con las formas de movilización popular que acompañan a los regímenes populistas.

Pero al mismo tiempo, se tendrá en cuenta que los cambios ocurridos

en la economía mundial, la presión de las inversiones de la burguesía que se desempeñan en los principales ámbitos de esa actividad, acentuando las contradicciones existentes entre ellas, que se suman a la tensión que caracteriza a la contradicción fundamental capital-trabajo, produciéndose las combinaciones entre esas señalada arriba.

La creciente polarización social, que como se verá en el capítulo primero es una tendencia general en este período en América Latina, dificulta las vías de salida intermedias del tipo del reformismo populista que concierne a trabajadores y burgueses.

En la última parte de este trabajo se verá el ascenso de la lucha popular a que lleva esta situación, junto a una movilización popular que desde fines de los años cincuenta desborda los mecanismos de control del Estado, surgen sectores cuyas demandas superan a las típicas del reformismo paramilitar, llegando a proclamar la necesidad de derrocar las estructuras sociales vigentes.

En el último capítulo se verá cómo esta situación de polarización social es la que lleva al proceso al tercer gobierno peronista de 1973/76, desbordado desde ambos extremos del espectro político, ya sea por el boicot del gran capital predominante en los sectores más dinámicos de la economía, o por la movilización popular que rebasa los marcos partidarios y sindicales establecidos por la legalidad burguesa como mecanismos para canalizar y controlar la expresión de esos sectores.

Sin embargo, como pudo verse a mediados de los años setenta, esta situación conflictiva se resolvió en todos los países de Sudamérica en favor de los sectores de la reacción que aplastaron a todos los movimientos populares en ascenso en los años anteriores.

Si cada uno de estos casos tuvo sus características particulares, el elemento común a todos ellos, en el que podría buscarse una de las causas de esas derrotas fue el carácter reformista de todos esos movimientos que, como se verá para el caso argentino, pretendían aplicar programas económicos que dejando intactas las bases fundamentales de la estructura socioeconómica, busca retornar a las políticas redistributivas de los primeros populismos de los años treinta y cuarenta, cuando la situación internacional y local era totalmente diferente.

Hay que agregar además la fuerte presión que se desata a partir de los años cincuenta por parte de los Estados Unidos sobre las fuerzas armadas de los países latinoamericanos a través de programas de entrenamiento y adiestramiento para orientarlas hacia la represión interna.

El desarrollo de esas luchas, en el marco de las intenciones con que se lo haya producido, de la movilización generada por los regímenes populistas de la primera época, que con el tiempo adquirieron una tendencia a rebasar a sus propios dirigentes.

En el primer capítulo de este trabajo se exponerá la situación y los cambios por los que pasa el conjunto de Latinoamérica para poder ubicar al caso argentino como una parte de este proceso global de polarización social y surgimiento de la lucha popular.

Las derrocas de esas luchas en la primera mitad de los años setenta muestran el agotamiento general de los proyectos de carácter reformista para dar solución a los problemas más graves que afectan a las masas de la región.

En el segundo capítulo se verá la conformación de los distintos sectores de la sociedad argentina desde principios de siglo y sus formas políticas de expresión, hasta llegar a los años de las crisis internacionales que crean las condiciones, junto al propio desarrollo interno de esta sociedad, para el surgimiento del populismo peronista.

Se observará el aumento de las contradicciones sociales que, acentuadas por la evolución del propio régimen peronista, llevarán finalmente a su caída.

En el tercer capítulo se tratará el estallamiento de la crisis abierta tras el derrocamiento del gobierno peronista en 1955. La incapacidad de las clases dominantes, desde entonces, para integrar a la clase obrera a los marcos institucionales de participación política ponen a estos en una posición de enfrentamiento frontal con el Estado burgués, dejando al descubierto ante esa clase las relaciones de dominación y explotación burguesas.

Es también a partir del golpe de 1955 que el involucramiento directo de las fuerzas armadas en las cuestiones políticas repercute al interior de esa institución en forma de divisiones internas de acuerdo a las posiciones que cada sector adopta respecto a la forma de solucionar esas cuestiones y según los sectores de la sociedad civil con que mantiene contacto.

En el cuarto capítulo se analizarán los intentos por volver a la legalidad institucional, buscando incorporar gradualmente al peronismo a la misma. Procesos que se ven interrumpidos por la acción de los sectores más reaccionarios de la burguesía y las fuerzas armadas.

Mientras estos sectores se oponen terminantemente a toda forma de



participación efectiva de las masas populares en el gobierno del país. Otros sectores de la burguesía y los militares ven en el peronismo un canal para la participación popular mediante el cual ésta puede ser mantenida dentro de la legalidad burguesa. El temor que la continuación de la marginación política de la clase obrera la lleve a posiciones extremas.

En el quinto capítulo se verá cómo, ante los reiterados fracasos por reorganizar el sistema político de acuerdo a las formas prescritas por la Constitución, una nueva dictadura militar implantada en 1966 intentará llevar adelante una reestructuración profunda y definitiva de las formas de organización y acción política, estableciendo un régimen de carácter corporativista.

El rechazo generalizado que este intento recibirá por el conjunto de la población, incluso de parte de sectores de la burguesía, lleva a una movilización popular que se hace incontrolable para el gobierno dictatorial, y es entonces cuando un sector de las fuerzas armadas verá como único camino para contener la creciente movilización popular, permitir la participación política del peronismo tal como lo venían reclamando los sectores populares desde hacía dos décadas.

En el sexto capítulo se exponerán las formas que adoptó ese ascenso de la lucha popular, las nuevas formas de organización, el tipo de demandas y las formas de acción.

Finalmente, en el séptimo capítulo se tratará el gobierno peronista que surge como producto de esas luchas. El carácter contradictorio de su programa económico y sus objetivos políticos de acuerdo a la situación que se vivía en esos momentos en el país.

Las conclusiones y la bibliografía utilizada cerrarán el trabajo.

La revolución social argentina durante el período estudiado en este trabajo se describe, más allá de sus características particulares, en las transformaciones sociales por las que pasó América Latina y que culminaron en el ascenso de la lucha popular y las derrotas en todos los países de Sudamérica en que esa lucha se dio, en la primera mitad, aproximadamente, de los años setenta.

Al principio y al final de estos años se encuentra en Argentina dos gobiernos peronistas, el de 1946/55 y el de 1973/76, y las diferentes experiencias vividas en ambos ponen de manifiesto las cambios sufridos en el país y en general en Latinoamérica entre uno y otro de esos gobiernos.

Así como el primero de ellos fue la expresión argentina, aunque tardía y con elementos propios, de las experiencias populistas y reformistas que surgieron en otros países de la región en los años treinta y cuarenta, el fracaso del segundo en 1976 acompañó a la derrota en esos años de los demás movimientos y gobiernos populares en otros países sudamericanos.

Considerando que el carácter reformista con que se inició el gobierno peronista en 1973 fue general a esos otros regímenes populistas, que al igual que en Argentina todos fueron afectados por la reacción y que esas derrotas un factor fundamental fueron las contradicciones internas de esos gobiernos, que los llevaron en algunos casos a una situación de verdadera parálisis política y económica, los hechos considerados en este trabajo pueden ser vistos como el caso argentino de un fenómeno generalizado en Latinoamérica, consistente en el agotamiento del reformismo populista como régimen capaz de dar respuesta a las revoluciones socioeconómicas que surgen a partir de la nueva orientación que toma el desarrollo histórico de la región desde los años cincuenta.

La situación internacional generada por la crisis de los años treinta y la segunda guerra mundial crearon las condiciones favorables para el desarrollo de sectores nuevos en América Latina y para afectar los intereses de las oligarquías tradicionales dominantes y del imperialismo en sus formas más agresivas y ostensibles.

Los movimientos populistas surgieron como una respuesta a esta situación internacional y local, buscando alentar, y al mismo tiempo encabezar, la movilización popular para convertirla en un pilar del que-

que existía, en el cual, como resultado de la benevolencia estatal, se lograba un equilibrio entre las necesidades de las zonas rurales y las necesidades de los sectores urbanos en expansión -comercio industrial y el sector de servicios- la tradicional oligarquía terrateniente y minera, en consecuencia cuestionada por el conjunto de la población, carecía de ninguna manera liquidada por los regímenes populistas.

En el subcontinente, ese equilibrio fue quebrado al llegar de los nuevos Estados que apoyó a ciertos gobiernos reformistas que tomaron el poder mediante la vía de las reparaciones significativas.

Este es el caso del triunfo popular en la Revolución de 1952 en Bolivia que llevó al Movimiento Nacionalista Revolucionario al gobierno. También el populismo cardenista tuvo como antecedente el proceso revolucionario de la década de 1910. Incluso en Guatemala, la insurrección popular apoyada por una fracción de las fuerzas armadas en la llamada "Revolución de Octubre" de 1944 implicó una definición contundente en su favor a los nuevos depositarios del poder.

Si los temas de estos gobiernos en el plano socioeconómico tuvieron rasgos comunes, hay que señalar diferencias importantes en el terreno político e ideológico. Mientras que el varguismo en Brasil y el populismo en Argentina tuvieron una marcada tendencia a imitar las formas de organización corporativista de la sociedad según el modelo del fascismo, el cardenismo -Porán hablaba de la necesidad de tener "un pueblo organizado y perfectamente encuadrado" (por el Estado)-, las experiencias de Bolivia, en sus inicios, y fundamentalmente la de Guatemala de Arévalo y J. Arbenz mostraron un contenido netamente popular. En este último país fue importante la participación de dirigentes de izquierda, del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista) en el subsecuente crecimiento de la organización obrera y campesina y en la reforma agraria de carácter avanzado implementada por el gobierno de Arbenz.

En cualquier caso, un hecho común a todos estos gobiernos fue su caída o devaluación por haberse verificado a las pocas una participación efectiva en la dirección de las poblaciones conquistadas. Así, C. Llanos señaló que "en México, a partir de 1940, el cardenismo quedó superado en la opinión oficial. En Guatemala, en 1944, los sectores urbanos y campesinos, que apoyaba el presidente Arbenz no resistieron al ejército de rebeldías encabezado por el coronel Carlos Castillo Armas. En la Argentina, cuando cayó por haber que fue el propio pueblo-

no se Arsenio el que favorece las inclinaciones reaccionarias populares para que le sean entregadas armas). En Bolivia, después de la revolución popular de 1952, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) fue perdiendo poco a poco a las proporciones de las fuerzas políticas y económicas reaccionarias, o quizá, permitiendo que éstas recuperaran el poder. En Perú, al contrario, bajo la jefatura de Víctor Raúl Haya de la Torre, surgió un carácter de revolución imaginaria de la clase media. En Argentina, Perón fue depuesto sin que las acciones responsabilizadoras (porque tampoco se les dio la oportunidad de hacerlo) de las fuerzas políticas que la crisis parecía suscitar. En Brasil, en 1964, la deposición del presidente Goulart no provocó una respuesta revolucionaria de las masas, acción que los propios golpistas tenían.

A esta situación se llegó por la incidencia de varios factores. El carácter reformista de esos gobiernos permitió la subsistencia de estructuras y sectores sociales tradicionales que tuvieron parte activa en su derrocamiento. En los casos de los golpes contra Vargas en 1964 y Perón en 1955, las fuerzas golpistas contaron con el apoyo de sectores medios ojerosos a las prácticas dictatoriales de esos gobiernos. La presión del imperialismo también se hizo sentir, en algunos casos como Guatemala en 1954, en forma abierta.

Las contradicciones surgidas al interior de esos gobiernos, con la burocratización y burguesamiento de sus propios dirigentes fue otro factor decisivo que los miró desde adentro facilitando las acciones golpistas.

Pero hay además un hecho común a los países de desarrollo industrial más avanzado de la región, Argentina, Brasil y México, al que se refieren los cambios ocurridos en la situación internacional.

El rápido crecimiento del sector industrial debido a las políticas de "substitución de importaciones" livianas aplicadas desde mediados de los años treinta comienza a encontrar sus límites en los mercados internos, no porque se hayan satisfecho las necesidades del consumo de la población sino se refieren a los sectores que forman parte de un mercado según la estructura socioeconómica de esos países.

Por otra parte, la substitución liviana se apoya en la importación de maquinarias e insumos industriales, por lo que se hace necesario acceder al "mercado externo de desarrollo industrial" dirigido a prove-

en estos elementos al sector productor de bienes de consumo mediante la creación de un sector productor de bienes de capital e intermedios.

Si bien Getulio Vargas había proyectado llevar a cabo esta estructura industrial pesada, estableciéndose la siderúrgica de Volta Redonda, las otras proyectadas no fueron alcanzadas.

Entre tanto, desde mediados de la década de 1930, el capital norteamericano, que hasta entonces se había orientado hacia la reconstrucción de la Europa de posguerra, comienza a presionar para introducirse en el sector productivo industrial de los países latinoamericanos.

La convergencia de estas dos situaciones de nacimiento a una nueva etapa en el desarrollo industrial de estos países en la que, al fin se realizan inversiones de capital, principalmente norteamericanas, en la industria de base, esculpe predominantemente el sector productivo de bienes de consumo durable -automóviles, artefactos para el hogar, etc.-.

Por una parte, esta nueva orientación de la economía implica continuar con la necesidad de importaciones de maquinaria y equipos, a lo que se agrega el flujo de divisas hacia el exterior debido a los recursos de financiación por parte de las nuevas empresas extranjeras.

Esto, aún que un paso hacia la independencia económica, implica un cambio en las relaciones de dependencia con los países desarrollados. Según V. Fauriol "La expansión del sector de bienes de consumo durable provocó una atrofia relativa, pero muy acentuada, del representante I (productos de bienes de capital y sus insumos), el cual volvió a ubicarse en los países capitalistas centrales". Esta situación creó "un patrón de relaciones centro-periferia en un nivel más alto de la división internacional del trabajo del sistema capitalista, aumentando a su vez -y aquí se constituye su singularidad- una crisis estructural de la balanza de pagos, que empuja la contradicción entre una actividad orientada al mercado interno, pero financiada y controlada por el capital extranjero, y la permanente inundación de artículos de poco intercambiable para recoger la parte del excedente que pertenece al capital extranjero o la circulación internacional de capitales... Las crisis del exterior patran de acumulación de mercancías, existiendo la circulación de mercancías pero no se puede hacer un intercambio, sobre el nuevo patrón, los artículos son de circulación de difícil salida".

En el capítulo 7 de este trabajo, que el punto sobre la evolución de la economía desde 1989 en Argentina se expone más detalladamente esta situación.

Pero esta nueva orientación de la economía tiene efectos inmediatos en la estructura social y política de los países en que tiene lugar, principalmente México, Brasil, Chile y Argentina. Siguiendo a Durand se debe indicar que "en primer lugar, se debe señalar que el desarrollo del bien-estar del productor de bienes de consumo durables exige la presencia de un mercado consumidor de bienes durables -el cual ya existía en parte, dada la concentración de la renta preexistente- que posibilite la adquisición de importaciones, pero que debe reproducirse de manera ampliada. Ese mercado se amplía mediante la transferencia de parte del excedente generado por los aumentos en la productividad -siempre mucho más altos que el crecimiento de los salarios- a los sectores medios de la sociedad, ya sea mediante el pago de sueldos más altos, ya por medio de la apertura de crédito para el financiamiento de la compra de esos bienes. Estas acciones de redistribución de la renta implican necesariamente el aumento de la distancia social que existe entre esos sectores medios y los trabajadores asalariados, los trabajadores inscritos en el llamado mercado informal y los campesinos, que en conjunto constituyen la mayoría de la población. Pero esa distancia social, que viene a ampliarse, representa una división de la población en una minoría que tiene el mercado consumidor de bienes durables y una mayoría que está excluida del mismo o que participa en él de manera marginal. En la medida que la reproducción de esta división de la sociedad es una exigencia para viabilizar el patrón de acumulación y que, por lo tanto, se torna estructural, permanente, se define la existencia de una distancia de primera y de segunda".

Es evidente que la nueva orientación de la economía en este sentido era incompatible con la naturaleza de los regímenes populistas. Más aun cuando el capital extranjero, que según su control sobre todos los sectores, más allá de la economía, buscaba para desestructurar las medidas intervencionistas del Estado en este área, con lo que se fortalecía las tendencias a la concentración de los ingresos y a la distancia social.

En general, el nuevo rumbo lento de la economía y la presión del capital extranjero, imponen una reestructuración social que en Argentina fue dada por la nueva política de los recortes del Fondo Mo-

relativo Internacional, cuyo nivel es requerido por el capital extranjero para efectuar inversiones en las zonas del Mercado Negro. No es casualidad, por lo tanto, que en 1955 fueron entre los países latinoamericanos aquellos que recibieron y se sustruyeron las imposiciones de una institución, al darse compromisos bajo proclamados objetivos antiinflacionarios o de "saneamiento" de las economías, cuando su efecto inmediato es provocar transferencias de capital hacia los sectores más poderosos y concentrados que controlan la economía, provocando situaciones recesivas que afectan no sólo a los sectores asalariados, sino también al empresariado local de pequeño y mediano capital.

Al respecto Celso Furtado señala "que las políticas antiinflacionarias impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, seguidas en Chile a fines de los años cincuenta, y en Argentina y Brasil en los años sesenta, (han) provocado retracciones de la actividad económica sin lograr, pese a todo, una razonable estabilidad en el nivel de precios".

Las citas transcriptas de V. Durand, referidas específicamente al caso brasileño, se aplican también, como se verá más adelante a la Argentina. También en México, M. Canacho Solís señala que desde la primera mitad de los años cincuenta el partido de gobierno abraza el proyecto de desarrollo nacionalista y se orienta cada vez más a una apertura hacia las inversiones de capital extranjero.

En Chile, aunque su desarrollo político muestra diferencias importantes con esos tres países, también se produjo una situación similar.

Si bien en este país no se constituyó un régimen de las características de los populismos, el papel que éstos cumplieron en cuanto a la ampliación de la participación popular en la política y en fomentar el desarrollo industrial en los años de las crisis internacionales, lo heredó el Frente Popular en el que, junto al Partido Radical se agruparon los partidos Socialista y Comunista, al igual que el Frente obrero de la VII Conferencia de la III Internacional de formación del "Comité Popular" socialista.

El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1958 llevó la presidencia de Chile a Pedro Aguirre Cerda. De este gobierno es que surgió la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) que ha sido un instrumento crucial en el desarrollo industrial chileno.

El populismo en Chile, al igual que en los regímenes populistas, "el 1958"

El Frente Popular no fue otro que el programa de la burguesía democrática, la propia dinámica que implicaba ese gobierno en el terreno económico y político llevó a un acentuamiento de las contradicciones sociales y al interior del mismo Frente entre los sectores burgueses y obreros que lo componían.

A pesar de la ruptura del Frente, todavía en 1946 el Partido Comunista apoyó la candidatura a la presidencia de Gabriel González Videla por el Partido Radical.

Fue durante los años en que éste ejerció la presidencia (1946/52) que comienza a reorganizarse la economía en sentido autoproductor, rearticulándose los vínculos entre las clases de acuerdo a la nueva situación.

El acentuamiento de la rápida expansión económica provocada por las políticas del Frente Popular llevó a un punto crítico la contradicción entre el papel que debía jugar ese gobierno, y el propio Estado, como garante de la acumulación capitalista y al mismo tiempo como limitador del sistema socioeconómico vigente mediante una redistribución de ingresos en favor de las clases trabajadoras.

Por otro lado, la movilización popular a que había dado lugar ese gobierno, empujó crecientemente a la burguesía, aun a los sectores industriales favorecidos por la política gubernamental, a romper la coalición con los sectores trabajadores integrantes del Frente.

Esta situación se acentuó durante el gobierno de Gonzalo Videla, en que los Estados Unidos lanzan la política de "Guerra Fría" contra el comunismo. Se produce entonces un giro a la derecha del gobierno de forma tal que "nunca antes se había aplicado una política tan reaccionaria por un gobierno elegido por fuerzas de izquierda. La burguesía empobrecida a través del proceso de industrialización impulsado por los gobiernos anteriores, burguesesados por el radicalismo (dentro del Frente Popular), se asoció a la oligarquía terrateniente y a los conservadores agrarios para desarrollar una política, que había precedido a una gran masa de obreros en el seno de la capitalización de los sectores populares, mediante medidas represivas en virtud de las facultades de excepción y de la ley de Defensa Permanente de la Democracia (Ley de Defensa Permanente "Ley Videla" por el pueblo) aprobadas por el Poder Ejecutivo. Este presidente dispone durante la mitad de su período de gobierno de facultades extraordinarias, que le permitieron suspender la vigencia de las garantías constitucionales y libertades fundamentales. En "El Radical" circulaba en 1948 il-



colaboró al Partido Comunista, eliminando a sus miembros de los registros electorales, y sometió a las organizaciones sindicales al control policial, limitando sus prerrogativas en materia de negociación colectiva y derecho de huelga".

En esta época, en otros años también en Chile comienza a reapreciarse la acumulación y el control de la acumulación del capital bajo de ser el predominio durante el gobierno populista y cedió a las regimenes populistas, y que es el que se apoya a la emigración de la producción y de la mano de obra calificada, generando una mayor masa absoluta de plusvalía como consecuencia de la nueva masa de trabajo explotado.

El nuevo patrón de acumulación que se apoya a las inversiones de capital extranjero que siguen a la caída de los populismos se apoya en una mayor extracción de plusvalía relativa, aumentando los niveles de explotación mediante reducciones salariales y ausentes de la productividad, no sea mediante la utilización de tecnologías más modernas incorporadas a la nueva maquinaria, o simplemente aumentando los ritmos de trabajo, sin que aumente el número de operarios industriales.

En Chile se cuenta con este caso en Chile que "A partir de 1933 el carácter adverso de la conjuntura económica, inicialmente favorable, agudizó los conflictos de la lucha social. El modo de acumulación que comenzó a gestarse entonces -la profundización del capitalismo dependiente bajo el signo de la penetración de capitales extranjeros- mostró su incompatibilidad con los intereses de los sectores populares."

"Desde el punto de vista económico lo que estuvo detrás de la crisis política chilena era el agotamiento de un modo de acumulación, de un proceso de desarrollo basado en la expansión de la industria liviana que constituía el sector dinámico. En la década de 1960 comenzaron a sobrevenir las actividades vinculadas al sector de producción de bienes de capital de mayor y costosos (industria siderúrgica, metalúrgica, etc.). Este sector, vinculado con el crecimiento del Aluminio (1964), vivió la evolución de los años 60 bajo el gobierno de la UCR (Unión Demócrata Radical). Importa señalar que el proceso provocó modificaciones profundas en el modo de acumulación. Lo fundamental de notar es que en ese sector el peso simbólico de la tecnología, más el carácter rentista del sector, las nuevas tecnologías, requería una política de precios elevados sustentada en un esfuerzo de disciplina relativa en el comercio exterior, más la estructura mundial de altas tasas de interés y aumento de la de-

ferenciación existente entre éstos y el resto de los habitantes)." 11

A pesar del carácter de esta nueva etapa de crecimiento, conocida genéricamente como "desarrollista", la modalidad política de su aplicación se basó en estructuras políticas originadas en el período populista, como en Argentina y Brasil, o en el apoyo de nuevos sectores populares hasta entonces excluidos de la política.

Los sectores más conservadores de las clases dominantes veían con reticencia estas políticas desarrollistas. Para las élites se pretendía la reafirmación del desarrollo industrial implicaba reforzar la presencia de la fracción industrial de la burguesía y la del proletariado, provocando además una transformación de las estructuras sociales, todo lo cual provocaría una pérdida de su tradicional poder económico y político. Más aun cuando el proyecto desarrollista fue apoyado por la Alianza para el Progreso impulsada por el gobierno de John Kennedy en los Estados Unidos, que incluía entre sus propuestas realizar una reforma agraria en Latinoamérica y una reforma fiscal que buscaba terminar con la coexistencia de las burguesías de la región, especialmente los sectores oligárquicos tradicionales, de no pagar impuestos.

Organizada tras el triunfo de la revolución en Cuba, la Alianza para el Progreso tenía por objetivo impulsar el desarrollo de Latinoamérica para eliminar los casos de pobreza extrema y de esta forma la posibilidad de nuevos estallidos revolucionarios.

Con los dos medios señalados se intentaba terminar con los casos de campesinado pobre y reforzar la recaudación del Estado, fortaleciendo su capacidad para implementar medidas de asistencia social y obras de infraestructura para impulsar el desarrollo.

Los oligarcas latinoamericanos se opusieron terminantemente a este proyecto, combatiendo para ello con el apoyo del pentágono que, dentro de las intenciones, junto con las posturas de la derecha latinoamericana se oponían a una política de la Administración Kennedy, sosteniendo que el desarrollo industrial requeriría las posibilidades de alianzas revolucionarias al fortalecer el crecimiento de las clases obreras y la proletarianización del campesinado. Para estos sectores sólo una mayor integración servía para obtener el "colonizado" en el continente, iniciada en ello con las élites locales.

Al mismo tiempo, los sectores que habían formado parte de las reformas desarrollistas se aliaban con sus políticos industrialistas,

los proyectos desarrollistas no costaban como la continuidad del desarrollo industrial que había tenido lugar en aquellos regímenes.

Así fue como en Brasil, el proyecto desarrollista apoyado en las inversiones de capital extranjero fue impulsado por el gobierno de Juscelino Kubitschek (1956/60), quien llegó a la presidencia apoyado por el Partido Social Democrático, el Partido Trabalhista Brasileiro y el Partido Comunista Brasileño, los dos primeros partidos fueron organizados durante el movimiento varguista, el primero englobaba al sector burgués de ese movimiento y el segundo al sector obrero.

Como escribió R. Aron: "La acción conjunta de las fuerzas de la izquierda (USP más PCB) y del PEB -según la vieja política de Vargas- hizo posible la elección de Juscelino Kubitschek a la presidencia de la República. Aparentemente ese triunfo electoral consagraba la victoria de las fuerzas nacionalistas. En realidad, el gobierno de Kubitschek marcó el fin de los principios de Vargas. Las fuerzas nacionalistas y los grupos de izquierda se tornaron más radicales durante ese período, mientras que la burguesía nacional, instalada en una posición puramente defensiva sobre terreno en el plano económico ante la penetración masiva del capital extranjero. La atmósfera democrática y liberal que inicialmente reinó bajo el gobierno de Kubitschek sirvió, en realidad, para disimular esa penetración del capital extranjero y enmascarar la nueva realidad económica del país.

"...La constitución general del Ministerio de Hacienda y de las instituciones que de él dependían, permaneció favorable durante todo este período al principio de integración con los Estados Unidos. Los hombres del gobierno católico, casi siempre ganados por los puntos de vista norteamericanos, y, por supuesto, las presiones externas no faltaban para impulsar la adopción de los planes. La corriente proteccionista estaba de un momento a otro en todas las grandes cuestiones de política comercial e industrial.

"La burguesía nacional perdió con esto la hegemonía económica de la que había gozado hasta entonces".

Como se verá más adelante, también en Argentina, este proyecto fue impulsado por el gobierno, el de Arturo Frondisi, que para acceder a la presidencia del país se llevó a cabo en febrero de 1958, concertó un plan con el presidente, realizando los seguidores de una izquierda ligada a la política interior con sus seguidores.

También en Chile, la implementación de este proyecto desarrollada debió buscar una base de apoyo en la movilización de sectores populares, como ocurrió con el gobierno de Eduardo Frei de la Democracia Cristiana entre 1964 y 1970.

Una democracia cristiana apareció en la escena política-electoral chilena, en 1964, ofreciendo una alternativa que -como en los últimos tres gobiernos populistas en Brasil o el frendimiento en Argentina- se proponía legitimar una nueva forma de acumulación inducida por los cambios en el sistema capitalista mundial, en el que las empresas multinacionales comenzarían a tener un papel más gravitante y expansivo. La alternativa a la crisis política supuso un reordenamiento de las fuerzas que actuaban dentro del bloque hegemónico. La fórmula de poder que llevó a Frei a la presidencia descansaba en una alianza con ciertos sectores de las clases dominadas, fundamentalmente con el campesinado y el proletariado rural hasta entonces excluidos de la sociedad política, y con los sectores marginales urbanos (los sin casa). Esta base social de apoyo era movilizada en torno de contradicciones estructuralmente secundarias: el gran latifundio en el campo, el problema de la vivienda en la ciudad. La profundización y modernización del capitalismo dependiente suponía "limpiar" del mercado a los "ineficientes".

Movilizar a las masas populares para llevar adelante programas de este tipo no podía dejar de traer graves consecuencias.

C. Izuri, refiriéndose a una estrategia seguida por el gobierno de Kubitschek señala que "una evolución de la economía, una modificación de la orientación de la política económica, fue realizada en los cuadros de la democracia populista. Hubo una conciliación enojosa de la política económica internacionalista con la política de clases, de base nacionalista. Por eso, los años posteriores fueron de una crisis. Para el gobierno de Juscelino Kubitschek el objetivo no realizó la liquidación de la democracia populista, se estableció y creció el divorcio entre las tendencias de la estructura y las tendencias de la estructura del poder. En especial, la democracia populista se volvió un elemento cada vez más incómodo e inconveniente. La diferenciación entre el poder político y el poder económico se acentuó."

El vaivén y el resquebrajamiento de las contradicciones sociales en esos años. Contradice una que se agravaría con los gobiernos popu-

listas de Juan B. Justo y Juan B. Justo, en que la movilización popular alcanzó niveles inéditos en el país, hasta desembocar en el golpe de Estado de abril de 1964 que impuso una dictadura militar que se extendió hasta 1976.

En Argentina, la Oposición de los sectores más reaccionarios de la oligarquía y las fuerzas armadas, logró derrocar al gobierno de Perón debido a su estrategia política de coalición con el imperialismo, aunque su política económica se orientaba decididamente en favor del gran capital y respetaba el pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional.

La experiencia de la DC en Chile demostró igual polarización. Como indica L. B. Rúa: "La contradicción básica entre la profundización capitalista y la solución política reformista selló el dilema con que se enfrentó la DC en sus seis años de gobierno. El talón de Aquiles de su proyecto político no residió en la ausencia de apoyo popular -punto que movilizó en su apoyo a aquellos sectores 'disponibles' para cualquier proyecto que les tomara en cuenta- sino, por el contrario, en sus sus niveles de legitimación por desajuste populares."

"Este amargo selló el corte populista del proyecto de la DC en la desilusión doctrinaria. Reconfiguró los escenarios de especulación y activó simultáneamente las demandas políticas y económicas de nuevos sectores eran dos objetivos contradictorios y la realidad se ofreció a modo de protesta".<sup>11/</sup>

Se observa entonces, en los países considerados aquí, una creciente presencia de las nuevas movilizaciones coexistiendo con políticas económicas que le permitieron estructurar negocios en la dependencia del exterior y la reacción del imperialismo orientan cada vez más en un sentido antipopular.

Si durante los años de los primeros populismos también se produjo una fuerte expansión de la movilización popular, eso ocurría en una coyuntura internacional y local que permitió canalizar soluciones favorables que involucraron tanto a los sectores populares como a las burguesías autóctonas.

Hoy en los días oscuros en que ya se agudiza y la polarización social se acentúa, se le hace indispensable a las burguesías latentes la situación económica y política para la cual se está haciendo de los sectores populares una conciencia la tensión en favor de una necesidad de legitimación de las instituciones de cambio fundamental en la estructura social y económica del país. En este sentido social se moverá el

sentado contrario mediante dictaduras militares que consolidan la estructura económica dependiente y antipopular a través de fuertes niveles represivos.

En definitiva, cuando se unificaron generalizado de la lucha popular a fines de los años sesenta y principios de los setenta que permitió que llevarlo a la práctica de las soluciones mencionadas, los grupos opositivos mantuvieron la actividad, logrando una contra-fuerza que finalmente sobrevivió en la medida de las soluciones en surin, Sudamérica.

Este movimiento entonces que fue lo que llevó al fracaso a todas las movilizaciones populares, sin excepción en la región, que sirvieron de estímulo por las dictaduras que, para mediados de la década de 1970,

salvo las "dictaduras" colombiana y venezolana, controlaban toda Sudamérica, y también Centroamérica.

Al respecto puede decirse que, frente al creciente poder del capital monopolístico extranjero y local subordinado a él y a la orientación de las fuerzas armadas hacia la represión interna en base a la "doctrina de seguridad nacional", los gobiernos populares de este período -Alfonso Araya en Perú, Salvador Allende en Chile, Juan Domingo Perón en Uruguay y Perón en Argentina- intentaron aplicar medidas reformistas que, mientras afectaban los intereses de los sectores burgueses más poderosos, permitían su subsistencia, así como la de las fuerzas armadas convalidadas con el mantenimiento del orden burgués en América, sin tomar ningún recaudo que le permitiera a los sectores populares defenderse del seguro ataque que proveniría de los sectores dominantes afectados.

Como se indicó respecto a la crisis de los primeros movimientos populares en las décadas pasadas, también en estos nuevos casos, todos los que se plantearon cayeron en la medida de la posibilidad, sin dejar oportunidades a los cambios-estructurales de América.

El movimiento español, por lo tanto, en la persistencia de proyectos reformistas apoyados por los sectores populares mayoritarios en un momento en que estos recibían una invasión de algunas áreas como Argentina y Uruguay, estas tendencias reformistas aparecen junto al fenómeno que es la estructura de una institución burguesa a pequeña escala en la crisis económica, el fracaso gubernamental.

Faltó entonces el movimiento burgués para asegurar un cambio social profundo, al respecto se debe decir que con una estructura de un momento

buscara hacer nica en la clase obrera con un análisis de la realidad y presentara ideas que lo diferenciaron de los partidos reformistas

... aunque aceptara una alianza momentánea con los partidos reformistas que aglutinaban a la amplia mayoría de la clase obrera.

En Argentina, la confianza de la mayoría de la clase obrera en el gobierno peronista de 1973/74 y la política equívoca de 1976, que terminó volviendo a descalabrarnos hacia la derecha, llevó a los sectores populares a la conclusión y los empujó a un nivel y materialmente de apoyo a la represión de la dictadura que le sucedió.

En las capitales siguientes se verá como se desarrolló este proceso desde la caída del primer gobierno populista peronista en 1955 hasta la caída del segundo en 1976.

Capítulo 2. ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA

Características de la burguesía argentina

En este capítulo se explicará cómo se llega a la crisis que tiene lugar en la primera mitad de la década de 1950 y que desemboca en el golpe militar que derroca al gobierno peronista en septiembre de 1955.

En primer lugar se verán las principales líneas del desarrollo económico, social y político que llevan a esa crisis, con el objeto de entender cómo se conformaron las fuerzas políticas que actúan en la sociedad argentina durante ese período y a partir de él, entendiendo por tales fuerzas a sectores de la sociedad que poseen formas de articulación a través de las cuales canalizar sus intereses y con capacidad de producir efectos importantes sobre el cuadro político.

En lo que respecta a la burguesía, la evolución de la economía, caracterizada desde sus orígenes por un alto grado de concentración, proporciona la base sobre la que surgen las dos fracciones de esa clase mencionadas en la introducción, que en determinados momentos presentan diferencias en su comportamiento político y, en general, en cuanto al proyecto de sociedad que cada una pretende para Argentina.

Esa concentración se presenta tanto en lo que concierne a la propiedad de la tierra como en la propiedad y control de los sectores industrial, comercial y financiero de la economía, en manos de un estrato social burgués en gran parte de la tradicional oligarquía terrateniente que con el tiempo se evolucionando y diversificando sus intereses de acuerdo a los cambios producidos en la economía mundial y, consiguientemente, en la Argentina. Sus integrantes están estrechamente relacionados entre sí y fuertemente vinculados y asociados al capital extranjero. Es a este sector social al que se hace referencia en este trabajo como el de la fracción mono u oligopólica de la burguesía argentina.

La concentración en la propiedad de la tierra queda indicada por los datos proporcionados por la sección agropecuaria del Censo Nacional de 1947, según el cual el 1.5 % de las explotaciones acaparraba en ese año el 46.2 % de las tierras, mientras que a las explotaciones de 100 hectáreas o menos, que representaban el 65.4 % del total de las explotaciones, les correspondía el 5.4 % del total de las tierras.

Pero debido a que el Censo toma en cuenta solamente las explotaciones, sin considerar a quienes pertenecen, ignora el grado aun más alto de concentración de la propiedad, ya que hay casos en que más de un establecimiento

cientos



pertenecen a un mismo propietario. Según cálculos de Hilcádo Peña, 3 10<sup>7</sup> terratenientes en todo el país poseían en ese momento 13.5 millones de hectáreas<sup>1</sup> en la región pampeana, donde se concentran las mejores tierras, "1 348 latifundios, propiedad de un número insignificante de propietarios, abarcan 14.1 millones de hectáreas"<sup>2</sup>.

La entidad que agrupa y representa los intereses de este estrato de terratenientes, en su gran mayoría dedicados a la ganadería, es la Sociedad Rural Argentina (SRA).

La actividad agrícola se practica generalmente en explotaciones de menor extensión, a cargo de campesinos, arrendatarios en un 64 % y el resto propietario.

Los que explotan parcelas de 100 hectáreas o menos, mencionados arriba, suman alrededor de 295 000 del total de 450 000 explotaciones, y les corresponden 8.9 millones de hectáreas, con un promedio de 30 hectáreas para cada explotación. Entre ellos hay 160 000 con 25 hectáreas o menos, con un promedio de 10 hectáreas para cada uno.

El resto de trabajadores del sector agropecuario, hasta alcanzar el total de 1 654 280 indicados en el censo de 1947, son trabajadores familiares o asalariados.

El propietario y el arrendatario medio y rico están representados por la Federación Agraria Argentina (FAA).

El sector financiero también presenta un alto grado de concentración. En gran parte, desde fines del siglo pasado y primera mitad del presente, en manos de los grandes terratenientes a través del control que ejercían sobre los principales bancos nacionales; el Banco de la Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, conjuntamente con otros sectores, especialmente el capital extranjero, el Banco Central de la República Argentina, desde su fundación en 1935 hasta su nacionalización en 1946.

Leovoldo Allub señala el "prominente rol jugado por los principales terratenientes en el mundo de la banca y las finanzas". "Los Castros, Arceobrenas, Casares, Lavallol, Ramos Mejía, Guerricos, Martínez de Abz, Castañeres, Pacualdo, Sanillosa, Cobo, todos terratenientes, fundaron el Banco Nacional (antecesor del Banco de la Nación) en 1872. Los terratenientes también controlaron la mayor parte del tiempo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era el más importante banco provincial en el país".<sup>3</sup>

Para el Banco de la Nación también estaba fuertemente relacionado con las grandes firmas que monopolizaban el comercio exterior de exportación, frigoríficos y cereales. "El Banco de la Nación proveía capital nativo

<sup>1</sup> del total de los 165 millones, aproximadamente, evaluados por el censo

o las mayores crisis cerealeras y frigoríficas a través de otros "servicios" que facilitaban el dinero necesario durante las actividades estacionales". Las mayores firmas exportadoras de cereales, "Bunge y Born y Dreyfus, realizaban entre el 20 y el 30 % del total de las operaciones de giro del banco. Otras 3 a 10 compañías comercializadoras extranjeras tenían otro 25 % y el 50 % restante correspondía a sólo 240 clientes". "Esto significa que sólo 12 firmas exportadoras controlaban la estructura financiera de la economía exportadora y la mayor parte de los ahorros del país". Con lo que queda se manifiesta el grado de concentración que privaba en esos momentos también en el sector comercial de la economía argentina.

En 1910 el Banco de la Nación controlaba más del 50 % de todas las operaciones bancarias en Argentina.

También "el Banco de la Provincia de Buenos Aires estaba estrechamente vinculado con los ganaderos y comerciantes, cuyos intereses giraban en torno al comercio exterior de la ciudad-puerto de Buenos Aires". <sup>4/</sup>

Sobre el Banco Central, organizado en 1935 sobre un proyecto de Sir Otto Niemeyer, director del Banco de Inglaterra, y cuyo control compartían la oligarquía argentina y el capital extranjero, decía Carlos Ibarguren "el peligro que traía consigo el Banco del Señor Niemeyer -que se convirtió más tarde en el Banco Central Argentino- de delegar en una sociedad por acciones, en la que el Estado no tenía eficaz participación ni fiscalización, la soberanía económica de la República; y anotaba el riesgo de que la asamblea de accionistas, constituida en su mayoría por bancos extranjeros, fuese manejada por entidades que sólo miran el interés propio, y que el gobierno económico del país, dirigido por extraños al Estado, sufriendo la influencia foránea representada por los intereses de la mayoría de la banca extranjera". <sup>5/</sup>

El sector industrial tampoco escapa a estas características. En la Estadística Industrial de 1937 puede verse la fuerte concentración que ya entonces predominaba en la producción industrial. De 49 300 establecimientos censados, correspondía a sólo 700, el 1.4 % del total, el 57.6 % del total de la producción industrial. Mientras que el 90 % de los establecimientos, 44 370, producían el 16.4 % del total. <sup>6/</sup>

Esta característica se mantiene en los años de los Censos Nacionales de 1947 y 1954, en cuya sección industrial se observa que 2 254 establecimientos, el 2.6 % del total, y un número parecido, 2 229, en el primero y segundo casos, se hacen cargo del 65 y del 61.41 %, respectivamente, del total de la producción industrial de esos años. <sup>7/</sup>

o no en este caso también ocurre lo señalado respecto del caso empresario en cuanto al control de la propiedad de más de un establecimiento por un mismo propietario. En general, como es común en los países capitalistas, las mayores empresas industriales están en manos de un reducido número de grandes grupos empresariales que llegan a controlar hasta 50 o más empresas cada uno. Entre los principales en este período figuran los grupos Tornquist, Lang Roberts, Braun-Monéniz Behety, Mosero y Bunge y Torn. Según un estudio citado por José Luis de Irujo, en 1959 había "pocos grupos básicos" en la economía argentina. <sup>3/</sup>

Algunos surgieron como producto de inversiones de familias de la oligarquía terrateniente, otros tienen distinto origen -según Adolfo Borjas, Ernesto Tornquist se inició en 1866 como dependiente de comercio- pero al aumentar el volumen de sus negocios comienzan a vincularse con los empresarios y, a través de ellos, con la oligarquía terrateniente.

Las formas de vinculación e interrelación entre estos Holdings son múltiples. Una de ellas es la inversión conjunta en determinadas empresas. P. González Alberdi, citando un trabajo de Jaime Fuchs, señala diez empresas en las cuales intervienen conjuntamente los capitales de Tornquist, Lang Roberts y Braun-Monéniz Behety. <sup>2/</sup> También es común la inclusión en los directorios de las empresas de uno o más grupos, de individuos integrantes de los directorios de las empresas de otro grupo. Lo que permite una relación y comunicación directa entre todos estos Holdings, de forma tal que se multiplique su capacidad como grupo de presión sobre el Estado, gobiernos y demás sectores de la sociedad.

Las inversiones de estos grupos son fuertes en todos los sectores de la economía argentina, tierras, industria, banca y finanzas y comercio, como puede verse, sólo para algunos casos, en la <sup>12/</sup>tabla confeccionada por M. Sarmiento manteniendo una parte importante del control de estos sectores, conjuntamente con las empresas de capital extranjero, a las que, por otra parte, están estrechamente vinculados, entre otras formas, mediante las dos señaladas arriba por las que se relacionan entre ellos, inversiones conjuntas y colocando directores de una empresa en los directorios de otras.

Además, si bien generalmente estos grupos son constituidos por empresarios argentinos, el capital extranjero va penetrando en ellos, aumentando con el tiempo su control sobre los mismos. M. Peña se refiere a "Lang Roberts, tras quien está el capital financiero inglés (Midland bank, Lloyds Bank, Barclays Bank, Westminster Bank, National Bank, los cinco grandes bancos ingleses)" <sup>12/</sup> Luis V. Jona indica que en "la antigua firma Tornquist

... de los principales grupos de la burguesía

INDUSTRIAL

Nombre	Interés industrial	Interés terrateniente
Aguirre, Ernesto	OSRAM, AEG, Daperial, Diadema Argentina,	Ganadera Les Mesetas
Auchterea, Alberto de, Enrique de, Nicolás de y Nazario de	República, Comercial, Industrial y Financiera,	El Dorado, S. A. 369.600 Ha
Asta, Tito	Cia. Italo-Argentina de Electricidad INSUD-Hanomag, CAIDE, Tamet, Sudametal, INDÚSTRILA, Colorin, Fibroemento Monolite Formito Argentina	Frigerífico La Negra, Victoria Cia. de Colonización, La Criolla, Argentino-Británica de Inmuebles
Atucha, Jorge de	Hiram Walker	83.900 Ha
Bacigalupo, Domingo	Manufactura Algodonera Argentina, Crédito Industrial y Comercial Argent., Cervecería Palermo, Safac	Santa Margarita, Vivina, Cia. Inmobiliaria Argentina Sol
Baque, Santiago	Philips Arg., Industrias Arg. del Papel	Crédito Inmobiliario Argentino
Bracht, Federico	Crédito Industrial y Comercial Arg. Eternit	Estancias y Tierras del Pilaga, Estancia La Peregrina
Bunge & Born	Daperial, La Química, Grafa, CAICO, La Fabril, Alba, Consorcio Industrial, Financ. e Industrial	Quebrachales Paraguayos, La Invernada Vivoratá, Establim. Agrícola Inmobiliaria del Río de la Plata Fomento Territorial, Estancias Unidas, Media Luna Rural, Estancias Loma Alta, Omega Ganadera, CODEC, Establ. Agrícola,  SALICO Hipotecaria Rural, Estancias Estansr, Los Altalares, Cia. Rural
Braun-Menéndez Bchetty	Fármaco Arg., Atanor CAIDE, Ferrum, Cristalerías Hipolleau Sudamericana de Fósforos	Estancias Sara Braun, Los Ranqueles, Pastoral, Estanc. Puerto Veloz, Ganadera Los Lagos, Ganadera Valle, Huemul, Ganadera Oriental, Ganadera M. Bchetty
Brazzoni, Horacio	La Cantábrica	3.200 Ha
Catala de Meria, E.	General Electric	La Vascongada

Fuente: H. ...  
Industria, ...  
Asociación Nacional ...  
Buenos Aires, 1960.

Nombre	Interés industrial	Interés terrateniente
Calatayud, Pablo	Siam Ji Tella, Aceitera Argentina, Eremi, S.K.F. Argentina Cia. Argentina de Neumático.	Punta Alta, Cia. Agrícola, Ganad. e Inmobiliaria
Crespo, R. G.	General Electric	Estancia Sta. Catalina
Méndez Dellín, Antonio	CATITA	Estancia El Cóndor Los Ranqueles
Dj Tella, familia	Siam, Siat	Cabaña Nogales
Drysdale, Alejandro M.	CADE, Vidriera Arg., Noel y Cia., Siam, Eveready, Philco Arg., Atkinson Ltda.	La Forestal Argent., Quebrachales Asociados del Norte, La Inmobiliaria Agrícola Ganadera, El Yatay y Cia., Agrícola Ganadera 77.500 Ha
Frazer, Roberto	Fábrica Argentina de Alpargatas, CADE, El Globo Ltda. Ferrus	La Forestal
Caravaglio y Zorrain	SAIAR, CAEBA	La Merced S.A. Agrícola, Comercial y Forestal
Herlika, Mauro	Papelera Pedotti, Inyecta Arg.	La Austral, Cia. General de Bienes Raíces y Much. Industrias Rurales de Río Negro
Lalosen, Christal	Sedalana	Frigerífico Armour, Los Naranjos,
Mayer, Carlos M.	CADE, Duperial, Química Ciba, Industrias Argentinas del Papel	Frigerífico Armour, Los Naranjos,
Medini, Pedro	Cia. Argentina Industrial, Comercial, Agrícola y Ganadera	Inmobiliaria y Financiera Ltda.
Roberts, William R.	El Globo, Fábrica Argentina de Alpargatas	Leach Argentine The Smithfield Meat, La Rosario Agrícola
Rubiola, M.	Siam	Estancias Argentinas "El Hornero"
Santamarín, Antonio	CATITA	158.000 Ha
Shaw, Alejandro	Cotécnica, Ferrum, Tamet	La Agraria, Cia. Territorial Río de la Plata
Tanquist, Carlos A., Eduardo A., Ernesto Martín	CADE, Formo Argentina, Picardo y Cia., Fibrocemento Monolith, Tamet, Ferrum, Cristalerías Rigo-leau	La Criolla, Cia. Territorial Río de la Plata, 36.000 Ha, Crédito Territorial de Santa Fe

Fuente: M. Peña, Industria, burguesía industrial y liberación nacional.

y Cia., los banqueros alemanes tienen hoy (1945) una participación importante. Podemos afirmar que el caso Tornquist ha sufrido en los últimos años un profundo proceso de germanización. En el grupo industrial-financiero que tiene como eje la Sociedad Anónima Tornquist y Cia., los capitales alemanes son hoy los que tienen mayor preponderancia".ii/

Bunge y Born, que controla más de 60 sociedades anónimas, gran terrateniente y ligado por lazos familiares a los más selectos de la oligarquía criolla, "junto con la Superior, el trust yanqui Duront de Nemours y la Imperial Chemical controlan la industria química en la Argentina"<sup>12/</sup> a través de la Cia. Química, de su propiedad, está también ligado a la empresa alemana líder en esa rama industrial, la I.G. Farben.

Así se fue conformando esta fracción de la burguesía argentina que, conjuntamente con el capital extranjero, controla la mayoría de las grandes empresas mono u oligopólicas de capital privado en todos los sectores de la economía argentina, originada en gran parte en la tradicional oligarquía terrateniente y asimilando a los grandes empresarios "nuevos".

La estrecha relación existente entre las empresas y grupos empresariales de este sector de la burguesía facilita su identidad como grupo de intereses, coincidiendo sus integrantes, fundamentalmente, y más allá de circunstanciales diferencias en el terreno económico inmediato, en la orientación que pretenden imponerle al desarrollo económico, social y político del país.

En el terreno económico siempre sostuvieron la necesidad de encabezar el desarrollo del país sobre la base del respeto a una división del trabajo, concertada con sus socios y aliados del capital extranjero, entre los sectores que correspondía desarrollar a los empresarios argentinos y los que deben quedar a cargo de las empresas transnacionales.

Esta posición fue explícitamente expuesta por el presidente de la entidad que representa los intereses, a nivel industrial, de esta burguesía monopolítica y del capital transnacional, la Unión Industrial Argentina

(UIA). En 1944 Luis Colombo expresó frente al presidente de la Federación de Industrias de Londres, de visita en Buenos Aires, que "por algunas décadas seremos importadores de las industrias británicas, norteamericanas y de otros países europeos, de maquinaria industrial, de transporte, etc., que cubrirá fácilmente los saldos que por compras de productos ganaderos y agrícolas nos adeudan". Agregando que "Si fuera necesario... podría recomendarse la comisión de industria local de reciente formación en la Cámara

ra de Comercio Británico en la Argentina que un discernimiento de sectores industriales debería preceder a toda iniciativa, evitando duplicaciones peligrosas y sus consecuencias, los estados de superproducción... La química, la metalurgia, los talleres tienen maravilloso campo para la industria británica y, por encima de todo lo tiene la industria ferrocarrilera que es tradicional, llena de circuitos que cubrir en el territorio argentino y que pueden afrontar las empresas existentes o nuevas empresas particulares, estatales u oficiales". Alabando el "cálido patrocinio" de Gran Bretaña, "a ella se debe, consecuentemente e inseparable en nuestras desgracias y nuestros éxitos... nada se vislumbra con mayor certidumbre que la conjunción de los esfuerzos argentino-británicos". 15/

Palabras que no sólo reafirman la voluntad de mantener la mencionada división del trabajo entre el capital nacional y el extranjero, sino que además se hacen cargo de los intereses agropecuarios de la burguesía monárquica, y de la oligarquía terrateniente en general, al sostener la necesidad de mantener las importaciones de bienes industrializados británicos para que Gran Bretaña siga importando productos agrícolas y ganaderos argentinos.

Con este tipo de desarrollo... está de acuerdo el enviado británico, quien afirma que "Una industria próspera en Brasil o en la Argentina no significa competencia para los productos británicos porque existe campo para una inmensidad de productos, más que más bien significará un mercado más amplio y un nivel más elevado de prosperidad en esos países y al mismo tiempo en Gran Bretaña". Esto se debe a que el desarrollo industrial argentino debía quedar limitado, según la burguesía monárquica en esta época, a la producción, fundamentalmente, de bienes de consumo inmediato, elaborados principalmente por las ramas de la industria de la alimentación y la textil, y utilizando como materia prima la producción del sector primario agrícola-ganadero. Con lo que se busca una forma de colocar los excedentes de la producción primaria que a partir de la crisis que estalla en 1929, no pueden venderse al exterior, y al mismo tiempo, sustituir la importación de aquel tipo de bienes con el objeto de equilibrar la balanza comercial afectada por el fuerte descenso de los precios internacionales de la producción agropecuaria que tuvo lugar en ese momento.

Pero este tipo de industrialización requiere del constante abastecimiento de maquinaria, equipo e insumos industriales producidos por la industria básica que, según lo señalado por el presidente de la IA, debe quedar en

manos de los países centrales, cuyas exportaciones crecerán, por lo tanto, con la implementación de estas formas de industrialización sustitutiva liviana que comienza a tener lugar en esos años en los países dependientes.

Cabe señalar que el propio presidente de la UIA, L. Colombo, que ejerció ese cargo durante veinte años hasta la intervención de esa entidad en 1946, estaba personalmente vinculado al capital extranjero. Alberto Ciria señala que era "empleado de la firma bancaria e industrial inglesa Leng Roberts y Cía." (De: Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata, p. 153); "La Unión Industrial dirigida por Luis Colombo estaba ligada a las oligarquías del interior. Dueño de bodegas en Mendoza, Luis Colombo era presidente de la Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Tomba y enlazaba sus operaciones con los bancos que regulaban la industria del vino y con Mr. Williams Roberts, comisionado de la banca extranjera y presidente de Bodegas El Globo. Vicepresidente de Bodegas Arizu, Luis Colombo era también miembro del directorio de la Leng, Roberts y Cía.. Un diario lo llamaba 'representante de la banca extranjera'. Asesor de la Junta Reguladora de la Industria Vitivinícola, además, era director del Bancó Central en representación de la industria nacional y sus negocios se entremezaban con los ferrocarriles británicos. Luis Colombo intervino en la designación del ministro Pinedo" (De: Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, p. 295).

Conjuntamente con el alto grado de concentración, también se hace presente tempranamente y en forma importante el capital extranjero en la economía argentina, como puede observarse en lo escrito arriba.

Según un estudio de la CEPAL, del total del capital fijo existente en el país en 1913, cerca de la mitad era extranjero, el 47.7%. En ese momento es preponderante el de origen británico y los principales rubros de inversión son los servicios (Ferrocarriles, Electricidad, etc.) y títulos públicos.

En el sector industrial el reducido número de empresas extranjeras que se establecían durante las dos primeras décadas del siglo pertenecen principalmente al sector extractivo: frigoríficos, petróleo, cemento.

En los '20s se produce un aumento importante en la entrada de establecimientos industriales, dirigidos ya al sector de la industria manufacturera, que implica la elaboración de productos para consumo final a partir de las materias primas provistas por la industria extractiva. Diversificándose los ramos en que estas empresas actúan.



### Efectos de la crisis internacional

El riser descenso en el monto total del capital extranjero invertido en el país tiene lugar en la década de 1930, afectando principalmente a las inversiones en ferrocarriles y títulos públicos. Frente a un descenso general, el único rubro en que esto no sucede es el correspondiente al de capitales norteamericanos dirigidos al sector privado ("Varias" en el cuadro), que continúa en menor medida la tendencia en rápido ascenso de la década anterior.

#### CUADRO

#### INVERSION EXTRANJERA TOTAL EN ARGENTINA (Millones de dólares)

Años	Gran Bretaña		Europa Continental		Estados Unidos		Total en FC	
	1	2	1	2	1	2		
								FC
1923	1134	386	306	922	67	37	106	1954
1931	1312	444	270	837	144	360	294	2349
1940	1055	371	253	826	30	388	241	2109
1945	1009	302	103	654	18	375	190	1642

1: Inversiones varias

2: Títulos públicos

Fuente: Rorman, A. y Romero, L., Sistema socioeconómico... 15/

El aspecto característico de los años 30s es el importante incremento en la entrada de empresas dirigidas al sector de la industria manufacturera, al coincidir la necesidad de exportar capitales y maquinaria en Estados Unidos, ante la recesión que implica la crisis, y la necesidad de sustituir importaciones en Argentina. "Poderosas compañías de renombre mundial reanuda parte de sus máquinas y de sus técnicos, con el objeto de edificar fábricas a todo y semejanza de las originarias, dedicadas a la elaboración de los mismos productos, sin perder su viaculación orgánica con el tronco del que han brotado", según señala A. Rorman, agregando que "las convulsiones políticas, y luego militares, derivadas de la crisis general del imperialismo, compelieron a muchos capitales europeos a abandonar un teatro cada vez más inseguro de operaciones".

Mi bien durante el proceso de industrialización sustitutiva, que adquiere un fuerte ímpetu en la segunda mitad de la década, surge una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, son fundamentalmente las grandes inversiones de capital extranjero y de la burguesía económica local las que conducen este proceso.

Como puede verse en los dos cuadros siguientes, las ramas que encabezan este crecimiento industrial son invadidas por empresas transnacionales por su volumen y niveles tecnológicos ocupan un lugar preponderante, sobre

Este momento, en el desarrollo industrial del país.

Con estas ramas, la textil y las que giran alrededor de la industria automotriz: Vehículos y maquinaria; Caucho (pneumáticos); Derivados del petróleo (gasolina); y Cemento (carreteras), cuya producción nacional se duplica entre 1925 y 1938 según datos de A. Dorfman.

Cuadro 4.6. Tasa anual media de crecimiento de la producción bruta real en las industrias manufactureras, 1925-61, CEPAL y CONADE (porcentajes).

	1925-29/ 1937-39 <sup>a</sup>	1937-39/ 1948-50	1948-50 1959-61
Total de industrias manufactureras	3,4	5,0	3,7
Alimentos y bebidas	2,1	2,6	1,1
Tabaco	0,5	4,9	1,5
Productos textiles	10,8	9,1	0,8
Confecciones	-0,4	4,4	0,7
Productos de la madera	-2,2	6,4	0,1
Papel y cartón	-1,7	6,3	4,4
Imprenta y publicaciones	-2,2	2,3	-0,2
Productos químicos	-0,4	7,7	6,5
Derivados del petróleo	12,6	5,0	6,7
Productos de caucho	39,0 <sup>b</sup>	3,0	7,1
Artículos de cuero	-2,2	7,2	0,9
Piedras, vidrios y cerámica	-2,5	6,3	2,5
Metales	5,1	5,1	7,8
Vehículos y maquinaria, excluida la eléctrica	8,3	8,3	10,6
Maquinaria y artefactos eléctricos	40,5 <sup>b</sup>	8,7	17,6
Otras manufacturas	0,1	5,1	3,9
Artesanías	- <sup>c</sup>	3,7	0,4

<sup>a</sup> Es evidente que diferentes ponderaciones darían por resultado tasas de crecimiento total muy distintas para 1925-29/1937-39.

<sup>b</sup> La producción fue desahujable en 1925-29.

<sup>c</sup> El guión indica que no se dispone de datos.

Fuente: Los datos para 1937-61 se obtuvieron del CONADE; para 1925-37, igual que en el cuadro 2.1.

Fuente: Díaz Alejandro, C., Ensayos sobre la historia económica... 16/

PRINCIPALES INDUSTRIAS EXTRANJERAS INSTALADAS  
EN LA ARGENTINA

Ramo y empresa	Año instalación	País de procedencia
<b>SUBSECTOR DE ALIMENTICIAS:</b>		
Trigotifican Swift Co. ....	1907	EE. UU.
Trigotifican Wilson Co. ....	1911	"
Trigotifican Armour Co. ....	1911	"
Argentine Extracts of Bovril Ltd. ....	1922	Inglaterra
Debits Extracts Meat Co. ....	1895	"
The Southfield and Argentine Meat Co. ....	1903	"
Vermont Cuzino y Cia. ....	1922	Italia
Conchra Bols .....	1913	Holanda
Roché .....	1930	Suiza
Faith .....	1930	EE. UU.
Cross and Blackwell .....	1930	Inglaterra
Laboradora Argentina de Cereales (Quaker Oats) .....	1938	EE. UU.
<b>INDUSTRIAS QUÍMICAS:</b>		
<b>A. — Perfumería y tocador.</b>		
Hofrance .....	1935	Francia
City .....	1934	"
Boutique .....	1930	"
Ashtrom .....	1927	EE. UU.
Pharbeck Arden .....	1931	"
Frank Morgan's Sons Inc. ....	1932	"
Colgate, Palmolive, Peps, Co. (Incluye Cia. de Jabón Crown) .....	1927	"
Bogart y Raudell .....	1930	"
Geoffain .....	1930	Francia
Perfumería Gal .....	1928	España
Ever Flow .....	1933	Inglaterra
<b>B. — Productos químicos y farmacéuticos</b>		
Millet y Roux .....	1935	Francia
De Wirt y Co. ....	1929	Inglaterra
Callo Ucha .....	1934	Italia
Hindelman Argentina Inc. ....	1934	EE. UU.
Quinma Merck .....	1930	Alemania
Quinma Shering Kabalbaum .....	1926	"
Quinma Bayer .....	1928	"
Emily Fruit Salt .....	1932	Canadá
Johnson and Johnson .....	1911	EE. UU.
Lambert Pharmaceutical Co. ....	1932	"
Parke Davis Co. ....	1926	"
Scott and Bowne Inc. ....	1934	"
Williams Chemical and Medical .....	1925	"

En este rubro podemos incluir también compañías que agrupan varias otras entidades, como sería el caso de:

*Del Valle Ltda.*, fabrica para: J. B. Williams Co., Kolynos Co., Lehn and Frink Co., Lily Tulip Cup Co., R. L. Watkins Co., L. D. Vaulk Home Products Co., A. S. Hinds Co.

*Compañía Argentina Sidney Ross* fabrica para: Sidney Ross Co., Lambert Pharmaceutical Co., Williams Medical Co., Mc Coy Laboratories.

Johnson, A., Evolución industrial argentina.

Paño y empresa	Año instalación	País de procedencia
<b>C. — Herramientas y artículos de goma.</b>		
Firell	1910	Italia
Good Year	1910	E. U.
Ernesto	1911	"
Michelin	1914	Francia
Dunlop	1915	Inglaterra
<b>D. — Pinturas y barnices.</b>		
Pingston Johnson	1911	Inglaterra
Goodell, Wall y Cia.	1911	"
Dupont Nemours	1912	E. U.
<b>E. — Varías.</b>		
Imperial de Sella tartárico	1915	E. U. - Ingl.
Clay Manufacturing Co. (Química industrial)	1912	E. U.
Coon Products Refining Co.	1913	"
Ches. Extractos Tintories Tanant de Le Havre	1928	Francia
Frogel de ácido sulfúrico	1935	"
<b>INDUSTRIAS DE LOS METALES:</b>		
National Lead Co.	1915	E. U.
St. Joseph Lead	1915	"
Compañía Partridge Jones and John Hlaton (chapa galvanizada)	1927	Inglaterra
Parsons	1903	E. U.
Thyssen	1913	Alemania
ARMCO (American Rolling Mill Co.)	1913	E. U.
Compañía Cuero Belimpago	1911	"
Compañía Frigidaire	1914	"
General Motors Co.	1925	"
Ford Motors Co.	1922	"
Aircraft Pen Co.	1915	"
Crui Elevator Co.	1927	"
<b>INDUSTRIAS TEXTILES:</b>		
Janzon Co. S. A.	1914	E. U.
Sulmintex	1913	"
Andrew, Clayton and Cie.	1916	"
Godle, Balin, Mandin	1910	Francia
Linen Thread Co. (Cia. de Hilos de Lino)	1918	Inglaterra
Seda artificial Rhodizeta	1913	Francia
Seda artificial Duperial	1916	E. U.
Tuñafco y Centífico Nazionale	1917	Italia
<b>INDUSTRIAS ELÉCTRICAS:</b>		
Empresas Phillips	1914	Holanda
Empresas Osram	1914	Alemania
National Carbon Co. (Baterías Eveready)	1916	E. U.
Marzili S. A.	1912	Italia
Brook Brown Cia.	1926	Suiza
Samson Schuckert		Alemania
A. E. G.		"
General Electric	1916	E. U.
Bronschwie Radio of Argentina	1929	"
B. C. A. Victor	1911	"
The Argentine Talking Machine	1925	Holanda
International Telephone and Telegraph Co.	1910	E. U.
American and Foreign Power Co.		"
Accumulatoren Fabrik Aktienges. (Acumuladores Varta)	1909	Alemania
<b>INDUSTRIAS VARIAS:</b>		
International Cement Co.	1917	E. U.
Standard Oil Co.	1917	"
The Turkish Tobacco Co.	1910	"
Fab. y Sulamericana de Aceites	1919	Holanda
International Products Corporation (extracto de tabaco)	1928	E. U.
Tabacchi (artes gráficas)	1920	Italia
Fibra (fabricador de fibrocemento)	1919	Bélgica

El apoyo de la burguesía nacionalista argentina y de su sector industrial al igual que el del Estado a la inversión de capitales extranjeros puede observarse en el siguiente párrafo de M. Peña: "En junio de 1937, al inaugurar la empresa Ducilo, filial del consorcio internacional de los productores químicos (Du Pont de Nemours), decía el presidente de la Unión Industrial Argentina: 'No hace muchos años, presentados por el señor de Marvall llegaron hasta mí los señores Denham y Wallace de la compañía Du Pont, manifestando que su empresa proyectaba invertir una fuerte suma en nuestro país, creando una industria que no existía, pero que no encontraban en nuestra legislación aduanera la defensa ni las perspectivas de una orientación favorable para el incremento de las industrias. Traté de inspirarles la misma confianza que yo sentía en el futuro de mi país y les incité a no demorar su incorporación a nuestras actividades. El señor Denham aceptando en principio las posibilidades que mi entusiasmo reflejaban, pidió, si era posible, visitar al señor presidente de la Nación para exponerle su proyecto y oír de él algunas palabras que pudieran ser alentadoras. Tuve el honor de presentarles en el día al Presidente General Justo y al malogrado ministro de Tomaso quienes lo estimularon a invertir capitales con la plena seguridad que el gobierno de la Nación no habría de omitir esfuerzos para asegurar el desarrollo de las industrias como una de las fuentes de mejoramiento económico que el país reclamaba. Y he aquí cómo se han cumplido aquellas promesas. Surge así Ducilo!'"

"Como puede observarse, desde 1930 los terratenientes -agrupados en la Sociedad Rural Argentina- (de quienes es principal representante el gobierno fraudulento en ese entonces) lejos de oponerse al proteccionismo industrial lo apoyaron e impulsaron desde el Estado". <sup>17/</sup>

La importante presencia del capital extranjero en la industria argentina ya en 1935 se evidencia en el cálculo que realizó A. Dorfman en base al Censo Industrial de ese año, agregando servicios de electricidad y gas. "Tomemos sólo las empresas más notables y más notoriamente respaldadas, directa o indirectamente, por capitales formados en el extranjero. Los asientos de electricidad ocupan el primer puesto en cuanto a su importancia, sumando unos 1 200 millones de pesos moneda nacional. Les siguen los frigoríficos con unos 150 millones, compañías de petróleo con 110, talleres de ferrocarriles con 100, compañías de gas con más de 90, fábricas de cubiertas para automotores y artículos de caucho en general con 20 millones. Los talleres que arman en el país automóviles y camiones, procedentes de sus casas matrices ubicadas del otro lado de las fronteras argentinas, concurren

con un capital arrondado de 10 millones, talleres de tranvías 4 millones, compañías mineras de plomo y estaño arriba de un millón, cemento 2 millones, tabaco unos 50 millones, etc., etc. En conjunto suman arriba de 2 000 millones, o sea la mitad del capital total de la industria argentina, a pesar de que la información suministrada es evidentemente trunca.

"Estos capitales dominan en forma casi monopólica varias ramas de la actividad industrial del país, como por ejemplo: frigoríficos, usinas eléctricas, compañías de gas, cemento, armado de autos y motores, elaboración de artículos de caucho, seda artificial, y algunas otras, ejerciendo una influencia de peso en ramas como tabaco, petróleo, fabricación de conductores eléctricos, de aparatos para radiotelefonía, productos farmacéuticos, galvanización de chapas de hierro, ascensores, etc.". <sup>18/</sup>

La tendencia es de un constante aumento. Sólo para los capitales norteamericanos, L. Sommi indica que "a fines de 1946, (existían) en el país 203 sociedades anónimas argentinas, subsidiarias de corporaciones norteamericanas... El capital activo de dichas sociedades comprende la suma de 3 790 millones de pesos. Aclaramos que este capital está integrado por las reinversiones de las ganancias no distribuidas, por bienes de otras compañías y por los depósitos de los dos bancos yanquis (The National City Bank of New York que entró en 1914 y The First National Bank of Boston en 1917). De las 203 sociedades en cuestión 12 fueron fundadas antes de 1910, 21 en la década del 10, 55 en la del 20, 60 en la del 30 y 55 en los primeros siete años de lo que va de esta década". Estas son sociedades cuya propiedad corresponde totalmente a capitales norteamericanos. A ellas se agregan otras 204 en las que tales capitales dominan o participan directa o indirectamente, con un activo total de 6 350 millones de pesos. De tal forma, el capital total controlado por el conjunto de estas 407 empresas suma 10 140 millones de pesos, o 2 528 millones de dólares de ese año, lo que representa cerca de la mitad del total del capital industrial en el país en ese año, 22 900 millones de pesos según cálculos de la CIPAL. <sup>19/</sup>

"Una parte importante de los más grandes capitales privados argentinos (por lo general de origen terrateniente ganadero) y algunas empresas europeas que actúan en el país se han aliado o buscan la alianza con el imperialismo yanqui formando una poderosa constelación capitalista que ha aumentado enormemente la importancia del imperialismo yanqui en la Argentina".

Están en combinación con los capitales norteamericanos los grupos, Bodeño, Benberg, Sauge y Berni, Dreyfus, Lang Roberts, entre otros.

En 1954, un estudio de Ruth Sautu señala que de 59 ramas industriales de las que empresas grandes, de 100 o más obreros producen 50 % o más del 10-

tal, en 1943 hay firmas o tranjeras operando. En 30 de las 53 ramas, el 50% o más de la producción corresponde a sólo 4 o menos empresas de 100 obreros o más. En 22 de ellas hay firmas o tranjeras. De las 6 restantes, en 2 las empresas más grandes son estatales y en las 4 restantes las empresas principales son nativas, tres de las cuales de vieja data. En 11 de las 22 ramas en que actúan empresas extranjeras, las plantas que producen ese 50% o más son de 500 o más obreros.<sup>10</sup>

Dado el volumen de la producción de las empresas extranjeras y sus niveles tecnológicos superiores a las de las nacionales, puede inferirse el papel predominante de aquéllas en las ramas en que actúan y la correlación existente entre presencia de empresas extranjeras y concentración industrial.

Como ya se señaló, estas empresas incluyen en sus directorios a representantes de las grandes empresas de la burguesía monopolítica argentina, lo cual, junto con otras formas de vinculación, como las inversiones conjuntas, provisión de tecnología, etc. contribuye a reforzar la alianza y la convergencia de intereses entre estos dos sectores.

Por otra parte, desde fines de la década de 1920, las Fuerzas Armadas comienzan a establecer y dirigir establecimientos industriales, principalmente en el sector metalúrgico, lo que las vincula a nivel empresarial con el sector privado. Algunas de estas empresas son de carácter mixto, participando en ellas conjuntamente las Fuerzas Armadas, industriales nacionales y empresas extranjeras. Finalmente, y sobre todo a partir de 1955, las empresas privadas comienzan a incluir altos oficiales de las Fuerzas Armadas en sus directorios con el objetivo de involucrar a esa institución con los intereses económicos de la gran burguesía.

Queda constituido de esta forma un fuerte entrelazamiento entre los intereses de los grandes capitales de la burguesía monopolítica local, del capital extranjero y de las Fuerzas Armadas. Este es el núcleo del poder económico en Argentina y, a través de las Fuerzas Armadas, del poder político en última instancia.

#### Diferencias de la burguesía nacional con el capital extranjero

Junto a ese sector existe la masa de pequeños y medianos empresarios de capital nacional no directamente vinculados al sector de la burguesía monopolítica, nacional y extranjera, y en muchos casos se plantean contradicciones entre los intereses económicos de estos sectores.

En el caso de las inversiones de capitales extranjeros, la descapitalización<sup>11</sup> éstos provocan en el mercado interno a través de la absorción del

ahorro interno y la revisión de capitales al exterior afecta directamente la capacidad crediticia de las empresas que, ante su falta de vinculación al capital transnacional, no tienen acceso al crédito externo y deben licitarse o obtenerlo en el mercado local. Por ejemplo, entre 1957 y 1963 el valor de los activos de las empresas estadounidenses afincadas en Argentina pasó de 333 a 1.284 millones de dólares. Este incremento tuvo su origen en un ingreso neto de capital de 52 millones y una reinversión de utilidades de 787 millones de dólares. Sin embargo se remitieron al exterior en concepto de utilidades 649 millones, siendo ésta sólo una de las formas en que los empresarios transnacionales retiran capitales del país, agregándose los pagos por provisión de tecnología, la importación de maquinarias, equipos y demás insumos industriales, muchas veces desde sus propias casas matrices en el exterior y sobrefacturadas, mecanismo mediante el cual escapan a los controles gubernamentales, cuando existen, sobre la remisión de capitales al exterior.

Por otra parte, estas empresas utilizan ampliamente el crédito interno, compitiendo en situación ventajosa, dada su mayor capacidad de pago, con las empresas nacionales en su obtención. Hacia junio de 1955, la empresa automotriz Kaiser (IKA) había sido autorizada a introducir equipos por un valor de hasta 8 millones de dólares, equivalentes a 60 millones de pesos argentinos al cambio de ese momento, mientras que en el mercado de capitales interno consiguió 165 millones de pesos a través de acciones colocadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, un crédito del Banco Industrial por hasta 200 millones de pesos y un aporte del gobierno por 50 millones.

Las contradicciones entre la fracción minoritaria de la burguesía y el resto de la burguesía nacional se acentúan durante los períodos de crisis y recesión en que termina toda fase expansiva de la economía argentina donde que la industria se convirtió en su sector más dinámico y de mayor volumen. Al estar dirigido a la producción de bienes de consumo, el proceso de industrialización sustitutiva que recibió un fuerte impulso a partir de mediados de los años 30s, se hizo dependiente de las importaciones de maquinaria, tecnología y demás insumos industriales. Por otra parte, al apoyarse hasta fines de los 40s en la expansión del mercado interno, provocó un aumento en el consumo de productos alimenticios, los principales exportables del país, con lo que disminuyó el volumen de las ventas al exterior. Finalmente, al aumentar en forma constante la presencia de las empresas transnacionales en el proceso de industrialización, cuyo objetivo es, como se señaló arriba, acumular ganancias en el mercado interno para cambiarlas por divisas y enviarlas al exterior, práctica que también realizan habitualmente los grandes empresarios nacionales, se acentúa considerablemente la desventaja económica



medas. En los períodos de expansión económica se agudizan estas tendencias llevando a crisis de la balanza de pagos que son enfrentadas con medidas recesivas para revertir el ciclo. Fundamentalmente se apela a fuertes devaluaciones de la moneda nacional que encarecen las importaciones y favorecen las exportaciones. Como consecuencia ascienden las compras en el exterior de insumos industriales, cayendo la producción de este sector de la economía, con aumento de quiebras de los empresarios más débiles, descensos en los salarios y aumento del desempleo.

Por otra parte, al ser los clientes el principal producto de exportación y al regirse su precio en el mercado interno por el cambio a moneda nacional del precio que obtienen los exportadores en el exterior, la devaluación encarece automáticamente los productos básicos de consumo popular, provocando una contracción del mercado interno.

Esta situación afecta principalmente al pequeño y mediano empresariado industrial y también a los grandes empresarios cuyas actividades se concentran en este sector de la economía, mientras que para los grupos más fuertes de la burguesía monopolística, la diversificación de sus intereses les permite sobrellevar la recesión, e incluso obtener beneficios mediante la transferencia de recursos y reorientación de sus negocios desde los sectores más perjudicados de la economía hacia los que reportan beneficios en estas circunstancias, como el exportador, en el que las devaluaciones permiten obtener rápidas e importantes ganancias, y el financiero, especulando con las necesidades apremiantes a que lleva la crisis al conjunto del empresariado. Por otra parte este sector de la burguesía cuenta con acceso preferencial al crédito externo y mejores recursos económicos con los que soportar más fácilmente la crisis y ampliar en su beneficio la concentración del capital que tiene lugar en estos momentos.

Para las empresas transnacionales es, además, imprescindible el equilibrio en las cuentas externas que posibilite la disponibilidad de divisas para repatriar sus ganancias al exterior.

Con esta serie de consecuencias y las presiones de los grupos monopolísticos nacional y extranjero para que sean aplicados estos "planes de estabilización", contando para ello con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, lo que lleva a que sean generalmente los gobiernos dictatoriales los que instrumentan estas políticas recesivas. Mientras que los partidos políticos en el gobierno, obligados por cuestiones electorales deben impulsar políticas de expansión económica que beneficien al conjunto de la sociedad e implican automáticamente una, aunque sea mínima, redistribu-

ción de ingresos y una atomización del proceso de concentración de la economía, permitiendo un mayor desenvolvimiento del empresariado nacional que también se beneficia con la expansión del poder adquisitivo del mercado interno, del que es estrechamente dependiente.

Estas son las bases sobre las que surgen contradicciones entre la burguesía monopolística y la de capital nacional. Si con esta última expresión se hará referencia en este trabajo al pequeño y mediano empresariado y también a los de gran volumen pero menos vinculados al capital extranjero, no integrados a la fracción monopolística y que por su estrecha dependencia respecto del mercado interno se interesan por un desarrollo más integral del país que el promovido por la burguesía monopolística y el capital extranjero, es porque, aunque la fracción monopolística está integrada también por empresarios argentinos, su estrecha vinculación con el capital extranjero y la coincidencia con éste en cuanto a la orientación que ambos pretenden imponerle al desarrollo del país, la coloca en un plano que se sitúa más allá de la nación, siendo por el contrario un elemento del imperialismo y el eje alrededor del cual se estructura la dependencia del país respecto de este último.

Durante la primera mitad del siglo los pequeños y medianos empresarios carecieron de una organización que los articule como fuerza política capaz de ejercer presión sobre el Estado. En 1952/3 se organiza la CGE, Confederación General, formada integrada por la CI, Confederación Industrial, que tiene por objetivo agrupar al conjunto del empresariado industrial del país, la Confederación del Comercio y la Confederación de la Producción (agropecuaria), con los mismos objetivos. Pero son los empresarios más grandes los que dirigen este organismo, al que se integran, por otra parte, en el momento de su constitución las organizaciones empresarias tradicionales de la burguesía monopolística, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio, y las cámaras industriales que integraban la, en esos momentos intervenida y luego disuelta, UIA. Los empresarios de estas organizaciones también se integraron a la dirección de la CGE, y tuvieron participación en las acciones de importancia de esta organización. Así, entre los integrantes de la comisión de esa entidad que realizó una visita a los Estados Unidos en abril de 1954 y que a su retorno se pronuncia por "Promover a las (inversiones financieras de capital estadounidense) que se apliquen a intensificar la explotación de las reservas petrolíferas argentinas", se encuentran en integrantes de los cuerpos directivos de la SRA, la UIA y la Cámara de Comercio. Lo que señala que esa organización estaba lejos de representar al "pequeño y mediano empresariado del interior del país".

\* Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Sin embargo, la unificación de todo el empresariado en la CGE no significa que hayan desaparecido las diferencias entre ambas fracciones de la burguesía. Al convertirse la CGE en la entidad empresarial oficialista durante los gobiernos peronistas, con acceso a las esferas de decisión gubernamental, la UIA adoptará como estrategia unificarse con aquella entidad, a través de la cual podrá incidir también en los centros de toma de decisiones estatales. Pero las contradicciones señaladas entre la burguesía monopolística nacional y transnacional y la burguesía de capital vorazmente nacional siguen existiendo. Fundamentalmente porque para esta última su desarrollo depende del desarrollo general del país, mientras que para la primera, en coincidencia con sus socios extranjeros, cada sector de la economía argentina debe desarrollarse o no según lo indique la estrategia del imperialismo en cada momento.

Será después de 1955, con el golpe militar que derroca al gobierno peronista y la reconstitución de las entidades tradicionales que representan los intereses de la burguesía monopolística -que incluso se unificarán para promover los intereses conjuntos del gran capital nacional y extranjero- cuando se expresen abiertamente las diferencias entre estas entidades y la CGE. Aunque ahora será esta última la que reclamará insistentemente reintegrarse a la UIA -y así lo harán en forma individual muchos de sus integrantes-, sin embargo, será una constante crítica de las políticas burocratistas desnacionalizantes y concentradoras que impulsen los gobiernos dictatoriales en favor del capital monopolístico.

La Unión Cívica Radical

Las características señaladas respecto a la estructura económica y la acentuada concentración en manos de una fracción de la burguesía se manifiestan en la forma en que se organizaron los <sup>partidos</sup> mayoritarios en Argentina. Sus bases se reclutaron entre las clases obrera y media, que reclamaban mejores condiciones de vida y formas de participación política. Mientras que sus dirigencias provienen de sectores medios e incluso altos pero que se encuentran en situación de subordinación frente a la burguesía monopolística, y que buscan superar esa desventaja mediante su acceso al gobierno encabezando la movilización popular.

Así ocurrió con el surgimiento de la Unión Cívica Radical, cuyo soporte electoral está constituido principalmente por sectores medios de los principales centros urbanos del país y parte de la clase obrera de la Capital Federal y su área metropolitana, el Gran Buenos Aires. Agregándose pequeños y medianos productores agrícolas de la provincias de mayor producción de la región pampeana: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Todos ellos ligados al proceso de expansión económica, y en los centros urbanos, principalmente a los sectores terciarios. Cuenta además este partido en los primeros años de su actuación con la adhesión de importantes sectores del ejército.

Su organización en la última década del siglo pasado acompaña un proceso de rápidos cambios en la sociedad argentina a partir de la incorporación de su economía agraria al mercado internacional, y de la expansión de las tierras explotadas en base a relaciones capitalistas de producción en las provincias de la región pampeana, generalmente mediante el arriendo de parcelas a cultivadores de origen inmigrante reciente.

Según G. Germani, en las zonas urbanas "En 1900 ya estaba constituida una clase media suficiente ente numerosa como para representar una fuerza económica (tipo de mercado de consumo, especialmente) y política, pues constituía una cuarta parte de la población (además, en virtud de la concentración en las áreas más "desarrolladas", es decir, el litoral (región pampeana), su "peso" económico y político era mucho mayor que su mera proporción numérica). Al mismo tiempo se había formado un proletariado urbano de tipo moderno, y, en términos generales, se puede decir que al comenzar el siglo el país ya estaba urbanizado (en 1895 más del 24 % de la población vivía en ciudades de 20 000 habitantes o más, y esta proporción se elevaba al 37 % tomando como límites centros urbanos de 2 000 y más habitantes).

"La estructura social se secularizaba. Es decir, no se trató de una mera concentración urbana física, sino que los modos modernos de vida transforma-

ban el comportamiento de la población".<sup>23/</sup>

Sin embargo, los dirigentes de este partido están insertos en su gran mayoría en la estructura económica tradicional, "pertenecen a la misma clase social que ha ejercido el poder hasta ese momento (la oligarquía terrateniente, comercial y financiera), o al pequeño sector de políticos profesionales que ha tenido a su cargo la maquinaria del Estado.

"Roque Sáenz Peña (Presidente del gobierno oligárquico que dictó la ley de sufragio universal masculino y secreto) e Hipólito Yrigoyen (principal dirigente de la Unión Cívica Radical), que no por estar sintéticos toda una época política, desde posiciones distintas, fueron correligionarios en el Partido Republicano. Hipólito Yrigoyen era un rico estanciero bonaerense, miembro de una familia radicada en la zona desde hacía mucho. En 1897, cuando se produce una importante escisión en la joven Unión Cívica Radical, Yrigoyen es jefe de uno de los grupos: del otro lo es Bernardo de Yrigoyen, uno de las fortunas más sólidas de la época, hecha principalmente en operaciones de compra y venta de ganado y estancias".<sup>24/</sup>

Pero en esta época se estaban produciendo importantes cambios en la clase dirigente argentina. Por un lado surgen nuevos sectores, sobre todo en el interior del país "Algunos de los cuales quedaron marginados del poder político-administrativo e ingresaron luego a la UCR". Al mismo tiempo surgen divisiones en el grupo económico principal, entre terratenientes bonaerenses que se adaptan a los cambios que tienen lugar en la actividad económica y acrecientan su poder, y sectores nuevos consolidados y ligados a actividades agropecuarias y comerciales tradicionales, que comenzaron a perder influencia y "tanto en el interior como en el litoral, fortalaron en las filas de la oposición, ya sea desde el mitrismo o del surgente radicalismo".<sup>25/</sup>

Uno de los cambios más importantes que tienen lugar en ese momento en la actividad agropecuaria es la diferenciación entre ganaderos "invernadores" y "criadores" que se produce como consecuencia de la aparición del frigorífico. Los primeros poseen las mejores tierras, cerca del puerto de Buenos Aires, donde se radican esos establecimientos, y con pastos permanentes, lo que les permite constituirse en los abastecedores directos de la industria frigorífica, actuando como intermediarios entre ella y los "criadores" que los proveen de animales para la etapa del engorde final, y que están ubicados más lejos de Buenos Aires y con tierras de peor calidad. La posición preeminente de los "invernadores" los transforma en el sector más poderoso de los grandes terratenientes y el más influyente en el gobierno oligárquico, mientras que salen principalmente del segundo grupo los dirigentes de

la UCR. De tal forma "la 'elite' radical presenta rasgos de diferenciación con los conservadores (representantes en el gobierno del sector más fuerte) que permiten considerarla en situación de marginalidad, situación que apreciaba superable con reajustes en la estructura del poder político-administrativo". 25/

Esta heterogénea composición entre las bases y la dirigencia de la UCR es la causa de la carencia de programas de gobierno con contenidos concretos, limitándose sus campañas electorales a reivindicar la vigencia de la legalidad constitucional y de las libertades y derechos democráticos. Según lo afirman algunos de sus dirigentes al momento de constituirse como partido, la explicitación de medidas de gobierno concretas haría surgir discrepancias al interior del partido entre los sectores con distintos intereses. O por el contrario, esta característica puede llevar a la estrategia seguida en la campaña electoral del partido en las elecciones realizadas en el país a partir del fin de la dictadura en 1983, incluyendo en los discursos propuestas específicas para cada uno de los sectores que se supone constituyen el electorado de ese partido.

A partir de 1990 comenzó una serie de levantamientos cívico-militares organizados por la UCR en Buenos Aires y las provincias del interior, comenzando con la llamada "Revolución del 90" que logró la adhesión de importantes sectores del ejército y superioridad militar en Buenos Aires, siendo derrotada debido a la mala conducción de las operaciones militares que habían sido puestas al mando de un general del ejército.

Se suceden desde entonces levantamientos en varias provincias del país, en muchos casos logrando apoderarse del gobierno hasta que la intervención de las tropas federales enviadas por ferrocarril desde Buenos Aires volvían los hechos a la situación anterior. Así ocurrió en la provincia de Buenos Aires cuando en agosto de 1993 las tropas revolucionarias victoriosas entran a la capital provincial, La Plata, encabezadas por Hérolito Irigoyen y nombran como gobernador a un integrante del partido elegido por el Comité de la Provincia reunido bajo la presidencia de Irigoyen.

En 1995 se produce una nueva insurrección simultáneamente en la Capital Federal y varias provincias, alcanzando éxitos momentáneos en algunas de ellas. 26/

Esta situación llevó a que la oligarquía, adelantándose a la posibilidad de un triunfo definitivo de la revolución, dictara la Ley de Sufragio Universal, obligando y al mismo tiempo salvando el propósito de encuadrar las acciones de la UCR dentro de los canales constitucionales y desviarla de su actividad revolucionaria. La primera

elecciones nacionales realizadas bajo esa ley dieron el gobierno del "Frente" en 1916 a ese partido, llevando a Virólitto Yrigoyen a la Presidencia.

Para ello, la oligarquía contaba además con una época de prosperidad económica que proporcionaba una situación favorable para la realización de un maneo político, calculando que podría entregar el rotar formal a la ley para neutralizar la movilización social, mientras ella seguiría haciendo sus negocios normalmente.

Pero tras el estallido de la crisis del capitalismo en 1929, esta clase y sus socios del capital extranjero necesitaban apoderarse nuevamente del control directo del Estado para trasladar los efectos negativos de la nueva situación económica al resto de la sociedad. Así el 6 de Septiembre de 1930 un golpe de Estado dio fin a los primeros catorce años de gobierno democrático en Argentina, comenzando un período de gobiernos dictatoriales y fraudulentos que terminaría en 1943 con la elección de Perón a la Presidencia. Existieron también otras causas que llevaron a ese golpe de Estado, entre ellas la posibilidad de que el gobierno radical aprobara una ley de nacionalización del petróleo y, fundamentalmente, la causa por la que la burguesía económica siempre fue y es antidemocrática en Argentina, que es la posibilidad de las clases populares de movilizarse y manifestar sus reclamos por mejores condiciones de vida, obligando además a que las relaciones de dominación sean instrumentadas a través de la legalidad constitucional y no mediante la arbitrariedad que el control del poder económico y político le permite a esa clase durante los gobiernos de facto.

### El peronismo

En el caso del peronismo, también convergen en su conformación la movilización de las clases trabajadoras que estaba adquiriendo creciente fuerza en los años previos, con una dirigencia, en este caso surgida principalmente de un sector del ejército, que busca canalizar esa movilización e instrumentarla como apoyo a su proyecto político.

Pero en este caso, y mucho más que en el del partido Radical, es llevada a su máxima expresión la división entre las bases partidarias, el peronismo de "abajo" y la dirigencia, el peronismo de "arriba".

Las bases se conformaron a partir de una clase obrera tradicionalmente dispersa, organizada en base a los ideales anarquistas y socialistas traídos al país por los inmigrantes de fines de siglo pasado y principios del presente y que dieron lugar a las primeras formas de organización de la clase.

Al igual que en la década de 1930 la dirigencia peronista dio lugar a un

San en ese momento al acelerarse fuertemente el proceso de sustitución de importaciones y abastecido por la corriente de migración interna rural urbana, conformando lo que se llamó "nueva clase obrera", los sectores más politizados de la clase obrera "tradicional" a guisa existencial y podían convertirse en el núcleo a partir del cual la verdadera conciencia de la clase obrera se difundiera a los nuevos trabajadores que llegaban a los grandes centros urbanos, principal entre Buenos Aires y su área metropolitana, libuidos de concepciones más tradicionalistas, como las que prevalecían en el interior del país. Esta posible evolución ideológica hacia una radicalización del conjunto de una clase obrera en rápido crecimiento es lo que intentó detener Perón, buscando reestablecer la verdadera ideología de la clase obrera por otra basada en la "conciliación de clases", sobre la cual sustentaba una alianza entre los trabajadores, la burguesía nacional y un sector nacionalista del Ejército. Con esto al peronismo, al hacer incapió en la contradicción existente en todo país dependiente, entre el capital extranjero junto a los sectores de la burguesía nacional asociados a él, y el resto de la sociedad "nacional", procuraba poner en un segundo plano la contradicción fundamental entre el capital y el trabajo.

Considerando el concepto de "alianza" como la coincidencia entre clases o fracciones de clase en un aspecto determinado, mientras subsisten los conflictos en otras cuestiones, <sup>226</sup> esta existió en el caso del peronismo, en tanto los trabajadores se beneficiaron con medidas que elevaron su nivel de ingresos, aumentando su participación en la distribución del producto durante los primeros años de ese gobierno, y fue el apoyo político de la clase obrera el que permitió al sector peronista del Ejército mantenerse en el poder e implementar un programa de gobierno que favorecía el desarrollo de la burguesía nacional, aunque no sólo de ésta. Perón identificaba como el sector de la burguesía nacional aliado al imperialismo a la "oligarquía" terrateniente, considerando que un fuerte desarrollo de la industria socavaría el poder político de aquella, sin embargo, como ya se señaló al comienzo del capítulo, las empresas industriales más grandes estaban por lo general en manos de esta oligarquía o sectores vinculados a ella, ya tenía una importante presencia el capital extranjero. Por lo tanto, la burguesía económica nacional y extranjera también se vieron beneficiadas por el crecimiento industrial, aunque sus intereses en otros sectores de la economía sí se vieron perjudicados, principalmente en el de comercio exterior y el financiero.

Como ocurre en general en los países latinoamericanos exportadores de bienes primarios, sólo una pequeña proporción de las ganancias provenientes



de las ventas argentinas en el exterior de carnes y cereales quedan en manos de los productores nacionales, apropiándose de la mayor parte los oligopolios que intervienen en su comercialización. En el caso de los cereales, cuatro grandes empresas controlaban más de las tres cuartas partes de esas ventas, entre ellas Bunge y Born.<sup>28</sup> El gobierno peronista creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) que, desplazando a esas empresas "ejercía un monopolio legal sobre las principales exportaciones del país: cereales, pieles, carnes, grasas animales, tanino, linaza; y, en algunos casos, monopolizaba también la comercialización interna de otros productos básicos, como el trigo. Se daba por sentado que regularía los precios, inclusive en mercados en que no era el único comprador. También participaba activamente en las importaciones; por ejemplo, compraba gigantescas cantidades de vehículos excedentes de la guerra, así como ejercía un monopolio sobre todas las importaciones hechas por organismos y empresas gubernamentales. Además de lo que puede calificarse como artículos usuales de comercio, su gestión podía abarcar todo aquello en que las autoridades consideraran útil su intervención. El IAPI contribuyó a nacionalizar los ferrocarriles, a la compra de la principal compañía telefónica del país (de la ITT), a la construcción de un gasoducto para llevar gas natural desde el sur del país hasta Buenos Aires, a la adquisición de buques para la flota mercante estatal, etc." 29

En cuanto al sector financiero, con la reforma implementada por el gobierno en 1946 que aseguraba el control del Estado sobre ese sector de la economía, se produjo lo que la prensa especializada extranjera (The Economist) calificó de "la más arrolladora interferencia con la banca comercial, sin llegar a la absoluta nacionalización, que se haya visto hasta ahora en ningún país". Como uno de los resultados de esta medida, la proporción entre los préstamos otorgados por los bancos privados y los oficiales, que era de 63.5 % en favor de los primeros en 1946, descendió a 14.8 % en 1955, año del derrocamiento del gobierno peronista; a partir del cual se revierte esa tendencia para llegar al 50 % para los bancos privados en 1959. La participación de los bancos extranjeros privados respecto del resto de los bancos, se redujo de 12.1 % a 4.4 % en el mismo período, subiendo nuevamente a 11.1 % en 1959. <sup>20/</sup>

También las remisiones de dividendos al exterior por parte de las empresas extranjeras radicadas en el país sufrieron serias restricciones durante estos años. Según informa la publicación mensual del Departamento de Comercio del gobierno de los Estados Unidos en su número de noviembre de 1949, "los pagos hacia las casas matrices ubicadas en ese país disminuyeron entre el primer semestre de 1947 y el segundo de 1948, de 11.3 millones de dólares a 7.3, 4.9 y 0.1 millones por semestre. Señalando además que esas restricciones obligaban a las filiales establecidas en Argentina a reinvertir prácticamente la totalidad de sus ganancias, determinando que, aunque las inversiones provenientes de aquel país disminuyeron en esos años, su monto total aumentara de 380 millones de dólares en 1945 a 446 millones en 1955.

Todo esto era posible a partir de la forma en que el peronismo instrumentaba la intervención del Estado en la economía, Estado cuyo control había arrebatado a la burguesía monopolística nacional y extranjera, que lo había ejercido en forma directa desde 1930 hasta 1943, y desde el cual había realizado una serie innumerable de negociados en su beneficio. Pero la necesidad de mantener el control sobre el Estado era para esa burguesía algo que iba más allá de las posibles ganancias inmediatas. Como señaló A. Jauretche, político honesto de tendencia nacionalista populista, refiriéndose a esos negociados efectuados durante los gobiernos oligárquicos de la década de 1930: "El problema no era un problema parcial... No se trataba aquí del interés ferroviario o tranviario (británicos), allá del interés de uno o dos frigoríficos (principalmente norteamericanos, con participación accionaria de la oligarquía ganadera bonaerense), de un grupo de bancos o de determinados actos financieros. No se trataba siquiera del

beneficio de un grupo de ricos...ni tampoco del beneficio de unos cuantos industriales por la limitación de la producción a través de las Juntas Reguladoras. Se trataba de una política integral destinada a limitar el desarrollo del país, mantenerlo como monoprodutor, restringirle sus posibilidades de comerciar en el exterior con libre competencia, e impedir el ascenso social a las masas, como consecuencia de todo esto, para conservar un limitado mercado consumidor, que no aclarara la demanda interna como competidora en el precio de lo que llamaban nuestros saldos exportables".<sup>31/</sup>

Se trataba, por lo tanto, de la necesidad de controlar el Estado para mantener desde allí la aplicación de una política económica como la impulsada por la oligarquía local en asociación con el capital extranjero señalada antes en este capítulo, que tenía al mismo tiempo directas connotaciones políticas y sociales. Mantener atrasado el desarrollo económico posibilitaba la persistencia de un modelo social políticamente controlable.

El desarrollo industrial y el proceso de urbanización que cobran fuerza desde mediados de los años treinta atentaban contra ese modelo social oligárquico al impulsar la expansión de relaciones sociales propias del modo de producción capitalista. Por eso los gobiernos oligárquicos, hasta 1943, intentaron mantener ese desarrollo en un nivel limitado, considerándolo como un aspecto complementario de la economía argentina, que tendría que seguir siendo fundamentalmente agroexportadora, con un proletariado reducido, con un mercado interno también de poca magnitud, que no demandara excesivas importaciones de productos industriales y no consumiera grandes volúmenes de la producción agropecuaria exportable, manteniendo así saldos positivos en la balanza de comercio exterior, que evitara, además, la formación de una fuerte fracción burguesa industrial con intereses opuestos a los de la oligarquía y el capital extranjero, y que, convergiendo con las clases trabajadoras, llevara al tipo de movimientos políticos típicos de las revoluciones democrático burguesas anti-oligárquicas.

Pero precisamente, el peronismo aparece apoyándose en la movilización social generada por ese nuevo desarrollo, e impulsándola, además, como medio para llegar al poder. Y al mismo tiempo expresa sus intenciones de impulsar el desarrollo integral de la industria, especialmente la de base. Contrariando así todos los esquemas políticos y económicos de la oligarquía gobernante hasta ese momento.

Lo que Gaitanó no entendió fue que en un momento de expansión como el que se vivía entonces, poneros a la cabeza de esa revolución social era la mejor forma de, al mismo tiempo, dirigirla y controlarla, mediante una serie de medidas dirigidas a los sectores populares en que se combinaban condiciones en el plano económico con medidas de control y represión en el plano político fascista.

Los métodos oligárquicos basados únicamente en la represión y el fraude electoral no se servían, y por el contrario, llevaban a una creciente polarización social en que los sectores mayoritarios, alentados por la situación económica próspera que facilitaba las formas de movilización y acrecentaban la confianza de los sectores populares, terminaban convergiendo para derribar a la minoría privilegiada.

Formar la permanencia de las viejas estructuras había que la sociedad terminara estallando.

Por otra parte, las intenciones de Perón por desviar a la clase obrera de sus verdaderos objetivos quedaba de manifiesto claramente cuando en discursos como el pronunciado en mayo de 1943 decía que "(Los obreros peronistas) han anulado el efecto de comunistas y socialistas por infiltrarse en sus masas y sabotear, con huelgas y maniobras inconscientes, las conquistas del pueblo... Si las masas obreras que me apoyan han vencido a aquellos otros elementos en todos los terrenos, es porque su fe es superior a todo el espíritu del mal que domina a las fuerzas rojas ocupadas en lanzar el veneno del caos sobre los pueblos".<sup>12/</sup>

Además de las divergencias políticas entre el peronismo y la oligarquía, se encontraron las cuestiones más concretas de los intereses económicos y éticos. Aunque muchas de las medidas iniciales de ese gobierno que perjudicaron esos intereses fueron acompañadas por otras, menos violentas, de sentido ambiguo que las compensaban o incluso fueron luego revertidas durante ese mismo gobierno, una cuestión fundamental que mantenía el conflicto en forma permanente era la del control del Estado.

Si para todos los empresarios privados la política estatal es un elemento fundamental en la determinación de sus niveles de acumulación del capital, más aún lo es para los terratenientes bonapartes que controlan el grueso de la clase media y para los grandes capitales financieros e industriales nacionales y extranjeros asociados económicamente o políticamente con aquella, todo eso, cuanto mejor es el volumen de los negocios realizados, más se relacionan estos, de una u otra manera, con el Estado.

Trabaja el período el control directo del Estado al establecerse el gobierno peronista. Como sectores del gran capital no desearían perder el control de la economía, el Estado con el golpe militar de 1943.

La movilización de la clase obrera venía acentuándose en el país desde mediados de la década de 1930 a partir de los profundos cambios que tuvieron lugar en la sociedad argentina como consecuencia del estallido de la crisis del capitalismo en 1929. A través del comercio y el flujo de capitales con el exterior, la situación mundial repercutió en la estructura económico-social interna, y a partir de ahí en la situación política. Las entradas de divisas por exportaciones se redujeron en un 40 %, no por una disminución en los volúmenes exportados, que sólo cayeron en un 7 %, sino por el descenso de los precios internacionales de los productos primarios que exporta Argentina, que alcanzó al 50 % y fue mucho mayor que la caída de los precios de los productos manufacturados que se importan de los países desarrollados, con lo que los términos de intercambio cayeron para Argentina en un 33 %.<sup>37</sup> La necesidad de reducir las importaciones condujo a una obligada política de industrialización sustitutiva de aquéllas, dirigida a la producción de bienes de consumo y dando lugar a un rápido crecimiento de la clase obrera industrial y al surgimiento de una masa de pequeños empresarios, aunque como ya se señaló anteriormente, los volúmenes principales de las inversiones corrieron a cargo de los grandes empresarios de la burguesía monopólica y de empresas transnacionales.

La evolución a partir de 1935, año en que ya se superaban los niveles de producción anteriores a la crisis, es la siguiente:

Cuadro . Indices de producción y cantidad de personas.

	PIB	producción industria manufacturera	personal ocupado en ind. manuf.	obreros industr.
1935	100	100	590 000 (100)	472 074 (100)
1939	112.6	120.6	785 000 (133.1)	618 792 (131.1)
1943	120.9	138.2	980 000 (166. )	—
1947	157.6	188.2	1 184 110 (200.7)	936 387 (196.6)
1954	176.6	220.6	1 410 944 (239.1)	1 055 496 (223.6)

La fuerza humana de mano de obra industrial fue abastecida mediante la corriente de migración interna rural-urbana que suceso en esos años y compensa el descenso en el saldo neto de inmigrantes extranjeros que se establecen en el país, que de 873 000 en la década de 1920 cae a 72 200 en la siguiente. Sin embargo el promedio anual de inmigrantes argentinos y extranjeros llegados al Gran Buenos Aires aumenta de 8 000 entre los años de 1935 y 1935 a 72 000 anuales entre 1936 y 1943, llegando a 117 000 por año entre 1947 y 1954, debido al aumento de la migración interna. <sup>34/</sup>

Este crecimiento de la producción y del empleo industrial generó un aumento en la movilización obrera y cambios importantes en las organizaciones sindicales.

El número de huelgas y huelguistas aumentó de un índice 100 en 1939 a 250.5 y 202.13 respectivamente en 1942. <sup>35/</sup>

Como puede verse en el cuadro que sigue, el aumento del número de obreros afiliados a sindicatos no sigue el ritmo del crecimiento de esa clase en la industria y demás sectores de la economía. Pero considerando los obreros industriales y de la construcción se observa un incremento en el número y la proporción de trabajadores afiliados sobre el total de ocupados. Estos sindicatos comienzan a organizarse en esta década, con la expansión industrial. Tanto el sindicato de la construcción, la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), como la Federación Obrera de la Alimentación, la Unión Obrera Textil y la Federación Nacional Metalúrgica son organizadas por militantes del Partido Comunista. El primero se convierte en el segundo sindicato más importante del país después de la tradicionalmente fuerte Unión Ferroviaria, cuya influencia es fundamental en la principal central obrera, la Confederación General del Trabajo (CGT). Con el paso de la dirección de ese sindicato <sup>la UF</sup> de una corriente "sindicalista" -apolítica y colaboracionista con el régimen oligárquico en ese momento- a otra cercana al Partido Socialista, se produce un cambio en la dirección de la CGT. Dirigentes de esta última corriente toman la sede de la entidad a fines de 1935 y desplazan a la anterior dirigencia sindicalista que ya era totalmente minoritaria. Más adelante, ante el creciente peso de los sindicatos de dirección comunista, se produce una división en las filas de los dirigentes socialistas entre quienes aceptan una alianza con aquéllos y los que se oponen. En mayo de 1943 se reúne el Comité Central de la entidad para elegir nueva dirección, conformándose dos listas, una por la alianza de socialistas y comunistas y otra por los socialistas que rechazan esa alianza. Por la primera votan los delegados de los sindicatos de la Construcción, de Empleados de

finitas consisten en apenas  
 parte de la industria ma-  
 alicero, compensa las per-  
 cion recibida— la exten-  
 de Ley 49.331 adherentes  
 l. pero en la primera  
 adheridos y en la segunda

1930 y 1941, por ramo:

acción	128
terrestres	-1
finanzas	-6
	-29
Estado, los incrementos	

industria manufacturera  
 ha y sido considerable-  
 del cumplimiento de  
 textiles, moderna o meta-  
 cegueras sindicadas era  
 al nuevos en la Capital  
 considerable de la clase  
 an alicerono.  
 que competa el cie-  
 rda en la participación

1930 y 1941, por ramo:

acción	128
terrestres	-1
finanzas	-6
	-29
Estado, los incrementos	

ADHERENTES A LOS SINDICATOS 1935-36, 1911

	Años 1935-1936				Año 1911			
	Entidades	Afiliados	Obreros en la rama	% de afiliados	Entidades	Afiliados	Obreros en la rama	% de afiliados
Alimentación y tabaco	18	10 688	107 167 <sup>a</sup>	10.0	39	29 171	147 286	19.8
Confeccción	7	9 428	28 016	33.6	10	12 906	35 575	35.5
Textil	2	5 550	50 212	11.0	2	12 501	76 029	16.5
Gráficos	4	3 700	20 181	18.5	2	5 045	25 444	19.3
Madera	5	8 827	30 910	28.6	10	6 304	53 454	11.8
Metales	3	1 925	85 751	2.3	4	4 459	156 811	3.3
Químicas	2	166	12 651	1.3	2	250	21 557	1.2
Industria manufacturera								
Total 1	44	40 331	331 901	12.4	69	70 639	496 177	14.2
Industria manufacturera.								
Total 2	44	40 331	396 303	10.20	69	70 639	598 269	11.8
Construcción	14	32 588	76 115 <sup>a</sup>		31	74 283	338 027 <sup>b</sup>	22.0
Transportes terrestres	23	141 562			30	149 601	313 500 <sup>c</sup>	44.8
Comercio y finanzas	80	64 876			69	69 811	584 911 <sup>d</sup>	10.4
Estado	14	44 655			15	31 480	299 010 <sup>e</sup>	10.5

<sup>a</sup> Según el Censo de 1935, hay, además, 32 818 trabajadores domiciliarios.  
<sup>b</sup> Cifra general del Censo de población de 1916 que incluye probablemente actividades manufactureras, como canteras, y no deduce el personal jerárquico y los propietarios de establecimientos.  
<sup>c</sup> Calculado sobre estimación de Germani basada en el Censo general de 1946.  
<sup>d</sup> Calculado sobre estimaciones de Germani basadas en el Censo de Comercio de 1916.  
<sup>e</sup> Cifra de población ocupada en "Servicios del gobierno general", datos cens., citado por Alejandro Díaz, *op. cit.*  
<sup>f</sup> Estadística Industrial correspondiente al año 1937. Citado por Celia Duruy, *Clase obrera y patronato*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1969.

Comercio, Trabajadores del Estado, Municipales, Textiles, Metalúrgicos y Gráficos. Por la segunda sólo la Unión Ferroviaria, La Fraternidad (conductores de locomotoras), Unión Tranviaria Automotor y Cervecedores. Se produce entonces una escisión en la central. Los sindicatos que rechazan la alianza forman la CGT N°1, la otra lista la CGT N°2. Tras el golpe de Estado del 4 de junio esta última será prohibida por "organización extralegal y subversiva" así como todos los sindicatos que la integran y la mayoría de sus dirigentes serán detenidos, organizando el gobierno sindicatos paralelos con dirigencias que aciertan sujetarse a las directivas del Estado y a los que se otorga los beneficios de las nuevas leyes sociales dictadas por el gobierno. La unión Ferroviaria y La Fraternidad fueron intervenidas.

Sin embargo, a partir de noviembre de 1943, en que Perón se puso al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la política oficial hacia la clase obrera, luego de haber eliminado a los sindicatos más combativos y comprometidos ideológicamente, se orienta hacia un acercamiento con los dirigentes sindicales dispuestos a colaborar con el régimen, iniciándose la tendencia que caracterizará desde ese momento en adelante a las dirigencias nacionales del sindicalismo en Argentina, colaborar en cada momento con el régimen de turno y participar en la represión de las bases y los dirigentes locales combativos.

El régimen necesitaba una base sólida de apoyo social que le permitiera consolidarse y emprender la aplicación de su proyecto de gobierno que en un principio se basa en la industrialización del país con el objetivo de lograr la autosuficiencia nacional en esa área y en el equipamiento bélico de las Fuerzas Armadas. Si bien el gobierno estaba encabezado por militares, gran parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas se había comprometido durante los trece años anteriores de régimen fraudulento la llamada "Década Infame", con la oligarquía y sus viejos socios británicos y los nuevos y de creciente peso, los estadounidenses. El proyecto peronista atentaba contra la estructura de la economía que aseguraba el predominio indiscutido de la oligarquía y la vinculación a esos dos imperialismos. Había además diferencias en las posiciones respecto de la situación internacional, ya que el sector peronista del ejército era simpatizante del Eje nazi fascista en la guerra mundial. Por lo tanto había serias fracturas dentro de las FFAA como para ser consideradas por Perón un apoyo inquebrantable. Los hechos lo demostrarían en octubre de 1945 y luego durante el gobierno peronista hasta 1955.

Se iniciaron contactos y se buscó el apoyo de la central industrial, la UIA, dirigida por los grandes empresarios oligonómicos, exigiendo el gobierno la implementación de ciertos cambios en la entidad dirigidos a su-



mentar la participación en ella del resto del empresariado del país y ubicar en su dirección representantes de organismos estatales relacionados con la política industrial. Se organizó una Comisión para estudiar el tema, originada en la Vicepresidencia y con la participación de algunos grandes empresarios, A. Fortabat (cemento), Caspouzar (textil), A. Ferlini (presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos), etc. Pero en las elecciones internas de la entidad para elegir nueva dirección triunfó la lista opositora al gobierno, cuyo principal dirigente estaba comprometido con la entrega de dinero a los partidos de oposición organizados en la "Unión Democrática". La entidad fue intervenida por el régimen y luego sería disuelta, aunque como ya se señaló, los grandes empresarios que la integraban se incorporaron a la futura entidad industrial oficialista, la OIE, desde la cual tuvieron un canal de acceso a las decisiones gubernamentales. Esta sería, por otra parte, la política que adoptaría siempre en estos casos la UIA. Durante el gobierno peronista de 1973 a 1976 volvería a disolverse, esta vez por decisión propia y a integrarse nuevamente con la OIE conformando una nueva central industrial unificada, la CINA. En 1988, ante la posibilidad del triunfo en las elecciones por parte del partido Justicialista, la prensa informa que "Un grupo de dirigentes empresarios, encabezados por el vicepresidente de la UIA, Arnaldo Etchart, constituyó el Movimiento Empresario Justicialista, con el objetivo de incorporarse orgánicamente a la estructura partidaria, según afirmaron sus integrantes".<sup>37/</sup>

Esta situación llevó al régimen a buscar una base de apoyo en la clase obrera. Dado el grado de combatividad que estaba mostrando esta clase a nivel de bases, el apoyo al gobierno no podía limitarse a simples acuerdos de cúpula, debiendo, por el contrario, buscar la conformidad de las bases mediante la aplicación de medidas concretas por parte del gobierno en beneficio de los trabajadores. Se implementan entonces el aguinaldo, vacaciones y feriados pagos, Tribunales del Trabajo, congelamiento de precios básicos, etc. Finalmente se llega a un acuerdo con las dirigencias que "hizo posible que parte del liderazgo peronista mantuviera el control de sindicatos claves y desempeñara un rol principal en la sindicalización de los obreros industriales así como en organizar los sindicatos de acuerdo con su experiencia pasada. Su contribución más significativa fue resultado de la campaña que introdujeron en el código laboral propuesta por el régimen militar hacia fines de 1944. Inicialmente los líderes obreros se negaron a respaldar la iniciativa oficial sosteniendo que no satisfacía las aspiraciones del movimiento laboral. Así, insistieron en la necesidad de que el código incluyera los lineamientos organizativos de acuerdo con el modelo adoptado por los

principales sindicatos, a la vez que exigieron la inclusión de garantías legales para los derechos económicos y políticos de los sindicatos y la protección de los militantes sindicales". 32/

La organización sindical culminó en una central única que, si bien contribuía a la centralización y mejor control sobre la clase obrera, confinó un grado de unidad al movimiento obrero que causó su capacidad de presión, mientras se mantuviera dentro de los lineamientos establecidos por el gobierno. Era el logro de una mayor capacidad de presión por demandas económicas inmediatas a cambio de la pérdida de la autonomía política.

Esta situación contrasta con la existente en otros países de la región, "La capacidad de negociación que disminuyeron los viejos dirigentes sindicales en la elaboración del régimen de asociaciones profesionales emerge con claridad cuando se lo compara con los regímenes establecidos en Chile y Brasil. El código laboral chileno fue sancionado en 1924 y estipuló que los obreros y los empleados debían organizarse en sindicatos diferentes. La unidad básica de organización la constituía la empresa, y en ese plano sólo podía existir un sindicato reconocido y con capacidad de negociación. El código establecía, además, que aun cuando los sindicatos de empresa podían integrarse a una federación sobre la base de actividades afines, dicha federación no podía desempeñar las funciones reservadas al sindicato de empresa, como la negociación colectiva. Se previó también la creación de confederaciones sindicales, cuyas funciones legalmente reconocidas eran similares a las de la federación; sin embargo, nunca lograron reconocimiento por parte del Estado y sólo tuvieron una existencia de facto. El código sindical de Brasil fue implantado durante la primera presidencia de Getulio Vargas, en 1939. En él la unidad básica de organización era el sindicato, que representaba a todos los trabajadores de una actividad dentro de una determinada jurisdicción municipal. En aquellas provincias o estados donde existían cinco o más sindicatos organizados sobre la base de una misma actividad, estos podían nuclearse en una federación provincial. En aquellas ramas donde existían tres o más federaciones, éstas podían agruparse dentro de una de las tres grandes confederaciones, de la industria, del comercio y del transporte. El régimen no preveía la creación de una confederación sindical única y, al igual que el implantado en Chile, respondía a un modelo de organización que deliberadamente apuntaba a la fragmentación del movimiento obrero". 33/

Pero uno de los aspectos más importantes de la forma en que se organizó la estructura sindical fue el alto grado de penetración que alcanzó a nivel de planta a través de la creación de comisiones internas, directamente integradas a la estructura de los sindicatos.

La implantación de estas comisiones internas aseguró importantes beneficios tanto al obrero como al sindicato. Aumentó la eficacia de éste para proteger los derechos económicos y sociales del trabajador dentro de la empresa y creó un vínculo permanente entre la organización sindical y las bases, ofreciendo una garantía efectiva para el cumplimiento de la legislación laboral y los acuerdos colectivos negociados por el sindicato al crear directamente en la planta un cuerpo orgánico reconocido que pudo negociar con los patrones las demandas de los trabajadores sin temor a represalias. La presencia permanente de los delegados dentro de la empresa reafirmó en la conciencia de los trabajadores la importancia del sindicato. Es importante además para elevar el grado de participación en acciones de protesta como huelgas o trabajo a reglamento.

De aquí la oposición que siempre manifestaron las patronales frente a este tipo de organización de base, sabiendo que significan el fin del control unilateral que ejercían sobre la vida laboral en la empresa, aunque aceptan la organización de sindicatos como una forma de control y un canal de negociación con la clase obrera.

La implantación de las comisiones internas fue resultado directo de las presiones ejercidas por los obreros y por sus organizaciones y no se vio beneficiada por un respaldo legal proveniente del régimen de asociaciones profesionales. El código de trabajo <sup>peronista</sup> hacía referencia explícita a ellas, y en cierta forma eran una extensión de los anteriores comités de reclamo que casi todos los sindicatos lograron introducir en las empresas antes del golpe militar de 1943. Por supuesto que la necesidad del gobierno de contar con el apoyo de la clase obrera creaba un clima favorable para la imposición de estas formas de organización, pero esto no significa que el sindicalismo haya aparecido en Argentina con el peronismo. Fue este movimiento político el que buscó asentarse sobre un movimiento obrero ya preexistente, y al mismo tiempo controlarlo. Será esta combatividad propia de la clase obrera argentina la que se expresa, después del golpe militar de 1955 que derroca al gobierno peronista, al organizar la "Resistencia" contra todos los gobiernos antipopulares que se instalan a partir de entonces, debiendo luchar además contra las propias dirigencias burocráticas de los sindicatos, que inmediatamente se pasan al campo enemigo.

El aliento por parte del gobierno a la organización sindical y la afiliación obligatoria que establecía el Código de Trabajo llevaron a un aumento en el total de trabajadores sindicalizados, desde los 441 412 en 1941 a 1 077 353 en 1946 y 2.256 580 en 1954, el año anterior a la caída de ese gobierno. 102/

Por este punto, para presentarse a las elecciones nacionales de febrero de 1946 que lo llevaron a la presidencia, Perón se apoyó en la estructura política del recientemente constituido Partido Laborista, cuya base fue la unidad de sindicatos pertenecientes a la CGT N°1, la Unión Sindical Argentina (USA) de tendencia sindicalista, autónomos, otros de reciente creación, y los organizados paralela ente a los que integraban la CGT N°2.

Esta constitución determinó que el apoyo de <sup>eso</sup> partido a la candidatura de Perón implicara una total subordinación a su entorno político, conservando un grado importante de autonomía. Incluso su líder, Enrique Sanjurjo, L. Gay, también dirigente del sindicato telefónico, fue elegido Secretario General de la CGT en noviembre de 1946 contra la voluntad oficial. Finalmente Perón disolvió al Partido Laborista, reemplazándolo por el Peronista y Gay debió renunciar a la dirección de la CGT, comenzando a consolidarse la dirección vertical desde la cúpula del gobierno sobre la organización partidaria y la sindical.

En la conformación de la dirigencia del movimiento peronista confluyen representantes de diversos sectores sociales.

Del empresariado industrial, se obtuvo el apoyo a nivel individual de algunos empresarios importantes más que del sector en su conjunto. Como ya se señaló, la organización de una entidad representativa de carácter oficialista recién se produjo al final del gobierno peronista, cuando, por otra parte, la orientación oficial hacia el sector privado se hace explícita con el anuncio del Segundo Plan Quinquenal, centrado en el apoyo estatal a ese sector y con menos énfasis en las cuestiones de carácter social.

El empresario Gelbard, que sería elegido presidente de la CGE en 1953, sintetizó años después esos esfuerzos del gobierno (en organizar esa entidad), con los siguientes términos: 'Bajo manifiesta inspiración oficialista el 20 de mayo de 1946 se constituye la Asociación Argentina de la Producción Industria y Comercio (AAPIC) como órgano supletorio de la Unión Industrial Argentina, entonces intervenida y en franco estado de crisis. La nueva entidad suscitó en agosto de 1947 el Congreso de la Economía Argentina pero las conclusiones del evento resultaron adversas a los propósitos de sus organizadores que buscaban convertirlo en un aval de la política oficial de ese momento. Tras la poca exitosa gestión en AAPIC, en asamblea del 20 de agosto de 1948 se resuelve, siempre bajo la inspiración oficial, convertir a la entidad en la Confederación Económica Argentina (CEA), cuyo signo distintivo serán los pronunciamientos ortodoxamente oficialistas'. <sup>Al</sup> La CEA fue una de las entidades que participaron en la formación de la CGE.

A esta situación y a las características que adquiere la CEN en esos años se llega como producto de un proceso de evolución de algunos empresarios de capital nacional favorecidos por la política de fomento industrial del gobierno peronista.

Como puede apreciarse en la cita anterior, las dificultades que encontró el gobierno en organizar a los empresarios en una entidad de carácter oficialista muestran el clima de oposición que existía entre este sector social hacia el peronismo. A pesar de la política oficial industrialista, cuyos resultados se venían a más largo plazo, los empresarios percibían en forma directa e inmediata los efectos de las políticas sociales del gobierno: pago de mayores salarios, del aguinaldo, vacaciones y feriados, mayor poder de negociación de la clase obrera a través de los sindicatos nacionales y dentro de las mismas fábricas, etc., lo que llevó a esa actitud de oposición. Sin embargo, algunos empresarios nacionales lograron un gran crecimiento en esos años y, comprendiendo la situación favorable creada por el gobierno, buscaron un acercamiento con éste.

Un ejemplo es el caso de J. Gelbard, quien comenzó sus actividades como empresario en el interior del país. En un escrito de años posteriores señaló las dificultades que él, y el conjunto del pequeño y mediano empresario del interior, encuentran para desarrollarse frente a los monopolios concentrados en Buenos Aires: "Nuestra lucha fue desigual. No constituíamos una postulación teórica sino sencilla ante la expresión de un país que, desde el interior, se oponía a la desventaja que significaba, en las nuevas etapas de la evolución argentina, el monopolio porteño (de Buenos Aires). Ese monopolio equivalía a retener al país en su condición de exclusivo productor de materias primas, con todos los riesgos que Pellegrini había enunciado hacía más de medio siglo, y dejando en manos extranjeras, desde la fijación de los precios de esas materias primas, hasta la administración del ahorro nacional, a través de un sistema bancario que no pertenecía al país y que, sin embargo, orientaba el crédito; es decir, gravitaba decisivamente sobre la economía argentina, aplicando el ahorro nacional de acuerdo a criterios que no siempre respondían al interés nacional.

"Estos créditos nunca llegarían a la pequeña y mediana empresa nacional, aliadas naturales del progreso del país desde adentro del país mismo..."

En 1950 hablaba en el Segundo Congreso Económico del Noroeste Argentino, señalando la necesidad de crear "un organismo (empresarial) de carácter nacional auténtico".

Pero es el crecimiento de sus negocios lo que, una vez no brado directamente de la Cef en 1955 cuya dirección conjunta con los empresarios de la burguesía monopolística que se integraron a ella, lo lleva a actuar conjuntamente con estos últimos, como ocurrió en la visión a Estados Unidos señalada más arriba.

Finalmente, como se verá más adelante, durante el Congreso de la Productividad celebrado en marzo de 1955, el mismo Galbarrá se convierte en el portavoz de los reclamos del conjunto del empresariado contra la política obrera del peronismo.

Se produjo así un hecho que fue común en los gobiernos populistas en varios países de Latinoamérica. Sectores de la burguesía nacional que en un principio apoyaron a esos regímenes, pues se veían favorecidos por sus políticas de aliento al capital nacional, que les permitieron subsistir y aun crecer frente al mayor poder económico del capital monopolístico nacional y extranjero, al convertirse en grandes empresarios gracias a esa política gubernamental, terminan alejándose de esos regímenes y acercándose a los representantes del capital monopolístico. Esta conducta no difiere de la adoptada por algunos empresarios pertenecientes a este último sector, los que, mientras el gobierno peronista se mantenía firme en el poder, adoptaron una actitud oficialista y obtuvieron ingentes ganancias durante el mismo. De hecho, según un cuadro confeccionado por González Algorri con los beneficios empresariales de los años 1946, 47 y 48, -en el caso gobierno peronista-, las mayores ganancias siguieron convergiendo en las grandes empresas de la burguesía monopolística nacional y extranjera. <sup>43/</sup>

Esto no significa que desaparezcan las diferencias entre estas dos fracciones de la burguesía, la monopolística y la de capital propiamente nacional. Las contradicciones entre ambas serán un factor de importancia en determinadas situaciones coyunturales que se presentan en los años posteriores al derrocamiento del peronismo en 1955.

Políticamente, como ya se señaló, mientras la fracción monopolística será la directamente representada y beneficiada por los gobiernos dictatoriales, la fracción nacional se beneficiará con las políticas expansivas promovidas por los gobiernos constitucionales o los partidos políticos. Por otra parte, como señala G. Dueño: "El análisis de la extracción social de (los dirigentes de estos partidos) Balbín, Concepción, Alfonsín, Trócoli, Paladino, Caffaro, Gómez Morales, etc., los ubica nítidamente sin ninguna duda dentro de la clase media empresaria y profesional independiente. Esto es la primera contradicción secundaria que hay que tener en cuenta dentro del régimen (militar de 1966-73)". <sup>44/</sup>

En la constitución de la estructura partidaria del peronismo, además de la dirigencia del Partido Laborista, un sector escindido de la Unión Cívica Radical que organizó la UCR-Junta Renovadora, partido que también postuló la candidatura de Perón en las elecciones nacionales de 1946 y del que salió el segundo componente de la fórmula, H. Quijano. También fueron importantes dirigentes del Partido Conservador, como el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la "Década Infame", H. Fresco, y otros de otras provincias.

En un principio también la Iglesia dio su apoyo al peronismo, sobre el carácter anticomunista de la política obrera impulsada por este último y por haber impuesto, al régi en instaurado en junio de 1945, la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas primarias y secundarias. La UCR pastoral emitida poco antes de las elecciones se llamaba a no votar por partidos que promovieran la separación de la Iglesia y el Estado o la enseñanza laica. Considerando que los partidos que conformaban la alianza opositora, la Unión Democrática Argentina, eran la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista, aquel llamado implicaba un voto abierto a la fórmula peronista.

Finalmente, como se señaló, un sector del ejército fue uno de los principales apoyos del movimiento.

Pero la base fundamental fue el apoyo obtenido en la clase obrera a partir de la política social instrumentada desde el Estado. Esto fue corroborado por la movilización del 17 de octubre de 1945 que evitó la interrupción de la aplicación del proyecto político peronista.

A principios de ese mes, el sector antiperonista del ejército, que comandaba la principal guarnición cercana a Buenos Aires, la de Campo de Mayo, pidió la separación de Perón del gobierno. Aunque éste contaba con apoyo en otras bases militares no opuso resistencia y presentó su renuncia. Inmediatamente la patronal comenzó a tomar represalias contra los obreros, ignorando la aplicación de la legislación laboral recientemente impuesta. Espontáneamente se realizaron entonces una serie de huelgas y paros en el Gran Buenos Aires en abierto desafío a la cúpula sindical, la que procuraba un entendimiento con el general Avalos (jefe de Campo de Mayo). Ante la presión de las bases obreras, el 16 de octubre la CFT declara una huelga general para el día 18 de octubre, prolongando el mantenimiento de las conquistas sociales y en contra de la entrega del gobierno a la Corte (Suprema de Justicia). El 17 de octubre la exigencia de liberar a Perón cambió drásticamente el curso de los acontecimientos. Provocó el alejamiento del general Avalos del gobierno, dejando a Perón dueño absoluto de la situación, y siendo los difamados cargos del gabinete y las intervenciones cubiertas por militares.

su confianza". <sup>45/</sup>

Esta movilización se atribuye en algunos casos a una organización y manipulación por sectores adictos a Perón, y en otros a una espontánea muestra de apoyo de la clase obrera a aquél. Por un lado, una movilización de las características masivas como ésta y su convergencia en un punto determinado, la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, no puede producirse espontáneamente sin una dirección. Pero, al mismo tiempo, una dirección no podría llevar a cabo un hecho de esa magnitud sin una clase obrera dispuesta a movilizarse en la forma en que lo hizo esa día. Fue por lo tanto la convergencia de esas dos acciones la que llevó a la mayor movilización de masas que hasta entonces se había producido en el país.

La respuesta obrera es aún más remarcable si se tienen en cuenta las huelgas y paros realizados por las bases mientras la cúpula sindical buscó negociar con los militares antiperonistas, lo que se repetirá después del golpe de 1955, cuando la dirigencia de la COT llama a mantener la calma y no interrumpir el trabajo, buscando un entendimiento con el gobierno golpista que emprende una represión con fusilamientos masivos contra las bases obreras peronistas, sus dirigentes de base y los pocos altos dirigentes consecuentes con esas bases. A partir de este último año los enfrentamientos políticos en Argentina cambian de características, convirtiéndose la violencia y los asesinatos en el aspecto cada vez más predominante, correspondiendo siempre la iniciativa en estos hechos a las fuerzas representativas de la burguesía.

La convivencia entre los distintos sectores burgueses dirigentes del peronismo y entre todos ellos y la clase obrera no mantendrá a partir de la constitución del movimiento mientras la situación económica fue floreciente. Durante la segunda guerra mundial, Argentina había acumulado importantes reservas en divisas provenientes de las exportaciones a los países beligerantes y de las dificultades en las importaciones, hasta llegar a los 1.500 millones de dólares en 1945.

Esto facilitó la promoción del crédito a la burguesía industrial y la adquisición de bienes de capital en el exterior, contribuyendo a la expansión de la economía y permitiendo aplicar la política de nacionalizaciones, de limitación al capital extranjero y de apoyo al capital nacional. <sup>46/</sup>

El crédito industrial se expande desde el 2.6-2.7 % del Producto Nacional Bruto en 1944 hasta el 4.4 % en 1948 y el 6.7 % en 1955. Disminuyendo la proporción absorbida por el sector de Alimentos, bebidas y tabaco desde el 50 % del total en 1943 al 25 % en 1955, mientras que los sectores textil y metalúrgico aumentaron entre esos años desde el 12.1 y el 11.6 % hasta el 21 y el 30 %, respectivamente. <sup>47/</sup>



Entre tanto, según datos del Banco Central, la tasa de ganancia anual del empresariado se elevó del 33 al 50 % en el período 1946-53 respecto de 1935-39, siendo el aumento mayor aun en el sector industrial y con valores superiores al promedio durante 1946-48, los años de mayores incrementos salariales.<sup>48/</sup> Esto fue posible debido a los subsidios pagados por el Estado a las empresas, permitiendo mantener reducidos los precios de los productos básicos de consumo al mismo tiempo altas tasas de ganancia.

Mientras el gasto público entre 1945 y 1955 medido en moneda corriente se incrementó desde 3 565.5 millones de pesos en el primer año hasta 36 495.0 en el último, las cantidades correspondientes a "aportes a las empresas y subsidios al sector privado" pasaron de 36.2 millones a 7 161.1 en el mismo período.<sup>49/</sup>

El derrumbe del peronismo

En 1949, con el agotamiento de las reservas del Banco Central, tiene lugar la primera crisis de balanza de pagos a que lleva, como ya se señaló, la industrialización sustitutiva de importaciones apoyada en las importaciones de maquinaria, equipos, insumos y materias primas industriales. Comenzaron a aplicarse entonces, desde el Estado, la serie de medidas a las que se recurriría de año en adelante cada vez que se presente la misma situación. Se devaluó la moneda nacional con el objetivo de encarecer y restringir las importaciones y alentar las exportaciones de productos agropecuarios. Dado que los precios internos de estos productos se rigen por los obtenidos en el mercado internacional traducidos a moneda local, la devaluación provoca un alza en los precios internos de los alimentos, disminuyendo el consumo popular y aumentando así los saldos exportables. Al mismo tiempo ese encarecimiento deja un menor margen del ingreso salarial para la adquisición de productos de origen industrial. A esta reducción de la demanda, los industriales deben sumar el encarecimiento de los insumos importados como consecuencia también de la devaluación. Esta situación determina una caída de la producción industrial, aumentando el desempleo y reduciéndose los salarios para mantener el nivel de la tasa de ganancia empresarial. La tendencia recesiva se acentúa aún más debido a las medidas de contracción crediticia y del gasto fiscal para detener la inflación provocada por la devaluación y por el gasto público sin respaldo efectivo.<sup>50/</sup>

Fue así que entre 1949 y 1953 la producción industrial se estancó, dando fin al período de rápido crecimiento que se extendió desde mediados de los años treinta hasta el primero de aquellos años. Aumentó el desempleo

los salarios cayeron un 20 %.

De esta forma se seti nen las dos balanzas sobre las que se apoyaba la acumulación de capital durante esta etapa; la constante expansión de la producción y la ampliación del mercado interno al que iba dirigida. La burguesía debe impulsar entonces las ferias de acumulación sobre nuevas bases que, en las condiciones de estancamiento y retracción del mercado, sólo pueden consistir en una mayor explotación de la clase obrera, reduciendo los salarios, como ya estaba ocurriendo, y aumentando los niveles de productividad para reducir sus más los costos de la mano de obra.

Se produce entonces un cambio en la orientación de la política económica oficial. Ante el reclamo de los empresarios, los salarios se congelan en marzo de 1952 por dos años, finalizando la redistribución de ingresos en favor de los trabajadores. La necesidad de reactivar la inversión lleva al gobierno a adoptar una mayor flexibilidad frente al capital extranjero. Se envían misiones a Estados Unidos solicitando un aumento en sus inversiones en Argentina y en 1953 se aprueba la Ley de Inversiones Extranjeras. Como resultado, se establecen grandes empresas extranjeras a partir de entonces. En 1954 la automotriz FIAT y en enero de 1955 la Kaiser. Comienzan negociaciones con la Standard Oil de California a la que se le ofrece un vasto territorio en la Patagonia con amplias facilidades, pero el tema queda trabado en el Congreso debido a las condiciones leoninas de los términos en que se firmaría el contrato.

Por otra parte, mientras se restringe el crédito interno, se otorgan importantes préstamos a las empresas transnacionales que entran al país. Con un activo total por 365 millones de pesos para la FIAT según el balance correspondiente al fin del ejercicio de 1955, el Banco Industrial le había concedido líneas de crédito por 256 millones de pesos. A Kaiser se le otorgan 200 millones, para un activo de 370 millones en junio de 1955.<sup>51/</sup> La promesa de fuerte financiamiento por parte del Banco Industrial fue importante en atraer todas las inversiones extranjeras que Argentina obtuvo durante el período desde 1953 hasta 1958.<sup>52/</sup>

La nueva situación económica y el cambio en la orientación de la política oficial repercutieron inmediatamente al interior del movimiento peronista, tanto en sus bases obreras como entre los distintos sectores de su dirección burguesa.

En el primer caso, comenzó a producirse acciones de protesta obrera y abierto desafío a sus dirigencias sindicales burocráticas. Así ocurrieron los grandes sindicatos de la industria alimenticia pues "Ante la necesidad de reducir sus compromisos financieros, el gobierno anunció hacia fines de 1955

su intención de terminar con los costosos subsidios a la industria de azú-  
cares".

Comenzan entonces los despidos masivos de trabajadores. Los ingenieros  
azucareros dejan en la calle para enero de 1949 a 7.000 trabajadores. Des-  
pués de dos semanas de huelga el gobierno ordena la reincorporación del per-  
sonal despedido. Inicialmente el sindicato (COTIA, uno de los que conserva-  
ba mayor grado de autonomía respecto del gobierno central) exigió un aumento  
salarial. Tras meses de negociaciones sin resultados se declara una huelga  
general en la industria del azúcar. Como respuesta el gobierno sustenta la  
personalidad jurídica del sindicato "por medida de la Ley", ordena el cierre de  
sus locales y encarcela a sesenta dirigentes, mientras Perón, en un discurso  
el 12 de diciembre de ese año, señala que "el conflicto no tenía razón de  
existir si no hubiera sido provocado por la acción de los malos dirigentes,  
por los comunistas infiltrados..."<sup>53</sup> El sindicato queda intervenido hasta la  
finalización del gobierno peronista. Los trabajadores deben retomar el tra-  
bajo por carecer de medios de subsistencia y el gobierno ordena un aumento  
salarial de la mitad del reclamado.

Algo similar ocurrió en la industria frigorífica. Los empresarios solicita-  
ban al gobierno la eliminación de conquistas obtenidas en los años previos  
por los trabajadores. El gobierno apoya el pedido y emite una resolución que  
en palabras del Sindicato de la Carne "En la forma en que estaba redactada  
esta resolución del ministro de Trabajo, había dado por perdidas un 30%  
de las conquistas del convenio de 1946". A principios de 1950 hay 5.000 tra-  
bajadores despedidos. El sindicato declara una huelga general. El gobierno  
responde declarándola ilegal, encarcela a varios dirigentes e interviene al  
sindicato, poniéndolo en manos de un grupo opoeditor a la anterior conducción,  
que consiente la gradual liquidación de los restantes derechos políticos de  
los trabajadores a nivel de empresa.

Otros conflictos importantes estallaron en los grandes bancario y ferro-  
viario, "la falta de eco a las demandas de la masa obligó a los trabajadores  
a recurrir a violentas huelgas y paros antes de 1950: los bancarios realiza-  
ron una huelga no autorizada en 1948 y los ferroviarios organizaron varios  
periódicos entre 1946 y 1949 con el apoyo de las autoridades sindicales".  
A noviembre de 1950 los ferroviarios van a la huelga por aumentos salaria-  
les. El gobierno promete un aumento, pero inmediatamente el sindicato, la  
Unión Ferroviaria, interviene a ocho filiales implicadas en la huelga y el  
gobierno rescinde el acuerdo y reduce los aumentos salariales que había pro-  
metido, encarcelando y despidiendo a algunos huelguistas. Los trabajadores  
volvieron a la huelga, que finalizó cuatro días más tarde con un nuevo acuer-

o que restituía los cuantios salariales prometidos. Pero el gobierno se intervinó, llevando los interventores una política antagónica a los trabajadores, negándose a normalizar las asociaciones locales que habían sido cerradas, mientras por otra parte continuaban las huelgas de huelguistas. Comenzó entonces una nueva huelga, abarcando a todos los trabajadores con el objeto de presionar a los interventores para que resistieran de su política represiva y para obtener la libertad de los dirigentes presos. Esta huelga fue de inmediato declarada ilegal y los trabajadores movilizados por el Ejército. Cerca de 2 000 trabajadores fueron detenidos y quedaron presos antes de finalizar la huelga tres días más tarde.

Esta ola de movilización llevó al régimen a efectuar una "reeducación disciplinada de militantes obreros entre 1943 y 1950", contando para ello con el apoyo de la CGT y de las direcciones sindicales burocráticas a nivel nacional.

Las nuevas direcciones impuestas, sumisas al régimen, y la crisis económica de los años siguientes, en que la preocupación de los trabajadores es más por mantener el puesto de trabajo que por aumentos salariales, disminuyeron los niveles de movilización. Pero mientras tanto aumentaba el descontento de las direcciones contra los trabajadores y, cuando en 1954 mejoró la situación económica permitiendo reanudar la movilización para recuperar las pérdidas de los años anteriores, "los niveles de descontento habían llegado a tal punto que amenazaron con desencadenar una serie de huelgas salvajes que podían dañar seriamente la posición política del régimen". En efecto, como puede observarse en los cuadros siguientes, la movilización crece en ese año, pero mientras que los conflictos que se produjeron entre 1952 y 1951 eran indicativos de crisis sectorialmente limitadas que podían ser resueltas mediante subsidios estatales, "esta nueva avalancha de conflictos apuntaba a una extensión de la crisis a todo el parque industrial" y aunque "la mayoría de los conflictos registrados en 1954 fueron encabezados por las organizaciones obreras. Sin embargo, hay que admitir que al final los trabajadores se enfrentaron con sus organizaciones, que perdieron el espíritu combativo que caracterizó el período anterior."

Con esto se relaciona la aparición de dirigentes alternativos de base, los que hacen referencia los dirigentes de la CGT a mediados de ese año al señalar el estado de "confusión (entre los trabajadores) que ha sido creado por factores ajenos a sus intereses" llevando al "peligro de que las organizaciones sean cooptadas". La CGT pide respuestas a Perón para evitar perder su control sobre el movimiento obrero. Este contesta que "es la primera vez que la Confederación se colocó la espada en el escudo, para"

verdad y justicia" refiriéndose también a "esos que están haciendo por las calles sus serán los líderes defensores de los asalariados".

El hecho es que la crisis puso al peronismo ya en este año de 1954 frente a su principal contradicción, que surge de haber incluido en el movimiento a los dos sectores sociales enfrentados por la contradicción fundamental de la sociedad argentina, la burguesía y el proletariado.

Si bien la intención en un primer momento pudo haber sido crear las condiciones para el fortalecimiento de la burguesía industrial de capital nacional, ya se vio que bajo la cobertura de la organización empresaria que representa los intereses de esta fracción, actúa también la del capital monopolístico. Por otra parte, la política oficial de apoyo a la industria permitió que un sector de la fracción nacional se fortaleciera económicamente y comenzara a demandar capital y tecnología que la orillaron a conciliarse con los monopolios extranjeros, al mismo tiempo que exigía nuevas condiciones en la organización del trabajo dentro de las empresas con el objetivo de introducir reformas que permitieran elevar el nivel de productividad y explotación de la clase obrera. En el Congreso de la Productividad, el presidente de la CSE, J. Gelbard se hace cargo de estos reclamos de los industriales y expresa que "Cuando se observa la posición ocupada por las Comisiones Internas de los sindicatos, que han alterado el concepto de que la obligación del trabajador es dar un día de trabajo honesto por una justa paga, no es presuntuoso pedir, de acuerdo con las ideas prevalecientes hoy en día, que ellas ayuden a consolidar el normal funcionamiento de la planta y los avances en la productividad. Ni es aceptable que por cualquier razón, el delegado de los trabajadores toque un silbato y la fábrica se pare". 54

Tras el derrocamiento del peronismo en 1955 se negociaron nuevos contratos colectivos que eliminaron los mecanismos de negociación dentro de las fábricas, las Comisiones Internas y los delegados de los trabajadores comenzaron a languidecer, sus poderes se redujeron drásticamente, fueron aplastados por invitaciones a la corrupción y por las amenazas de represión. Al mismo tiempo se quitaron las trabas a la aplicación de las nuevas técnicas para aumentar la productividad, comenzando a generalizarse el sistema Taylorista, con formas de evaluación del trabajo, control de velocidad con cronómetro, pago según producción, etc.

De esta manera, la defección de la "alianza" peronista por parte de la "burguesía nacional", la creciente movilización de los trabajadores y la paulatina pérdida de control sobre los mismos por parte de la burocracia sindical señalan el definitivo agotamiento del populismo en Argentina en esos años, por lo que el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, fue

que el resultado de las fuerzas que lo promovieron, fue el fruto de la desconocición interna del régimen.

CAPITULO 2: El desarrollo de la crisis politica

Los problemas económicos y políticos se tornaban crecientemente conflictivos en los últimos años del gobierno peronista como efecto del progresivo agotamiento del régimen, tanto en lo concerniente a su inicial programa económico como a su estructura política.

Sin embargo, estos problemas, que implicaban una tensión creciente entre las distintas clases y sectores de la sociedad argentina, se manifestaban de forma particular debido a las características del régimen peronista.

Este había buscado englobar dentro de sí mismo al conjunto de esos sectores, intentando resolver los problemas que se suscitaban entre ellos a través de negociaciones entre sus cúpulas dirigentes cooptadas por el régimen.

De tal forma, el conflicto entre esos sectores, por ejemplo, entre la burguesía industrial y el proletariado, se trasladaba y aparecía como un conflicto interno del propio régimen, minando su solidez y estabilidad.

Pero al mismo tiempo, la escasa representatividad de esas cúpulas dirigentes con respecto a sus bases sociales conducía a que en muchas ocasiones estos conflictos surgieran impulsados por esas bases, fuera del control de sus dirigencias y por lo tanto del gobierno, desde cuya perspectiva adquirirían un carácter de ilegalidad, transformándose lo que en el fondo eran enfrentamientos entre sectores sociales, en enfrentamientos de la sociedad civil contra el Estado.

A esto había que agregar los enfrentamientos que sí iban dirigidos directamente contra el gobierno, como los encabezados por la Iglesia, los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas y los partidos políticos de la oposición.

Estos conflictos, que escapaban al control del gobierno y aparecían como enfrentamientos de sectores de la sociedad civil contra el Estado, caracterizándose por lo tanto de canales orgánicos para resolverlos, demostraban que los mecanismos de mediación del conflicto social que poseía el régimen peronista eran ya insuficientes. Esto señalaba su agotamiento como estructura política de gobierno.

En lo que respecta a los partidos políticos, su actividad era dificultada por el gobierno. No se les daba acceso a su expresión a través de la radio y la prensa prácticamente no publicaba noticias referidas a ellos. Los mítines en la vía pública, principal forma de expresi-

sión, eran generalmente interrumpidos por provocadores.

Esto era parte de las características de ese gobierno, que al igual que en el plano económico, se quedaba en posiciones intermedias y en lugar de aplicar medidas de fondo, por ejemplo en lo político, implantar claramente un régimen de partido único, pretendía mantener la apariencia de un sistema multipartidario pero apelaba a acciones de carácter ilegal y desleales para impedir la actividad de los restantes partidos.

Estas acciones, junto con la política oscurantista seguida en la enseñanza, y en la universitaria principalmente luego de haberse derogado la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas primarias y secundarias para lo que contaba con la colaboración de declarados fascistas como Ottalagano e Ivanisevich, acentuaba la oposición de amplios sectores de clase media al gobierno.

El conflicto con la Iglesia adquirió proporciones alarmantes en el último año del gobierno. Si la sociedad en general desconocía las causas de fondo del mismo, éste aparecía como un intercambio cada vez más fuerte de provocaciones de uno y otro lado, sin que el gobierno, también en este caso se atreva a tomar medidas de fondo para acabar con el importante poder político ideológico que tiene la conservadora Iglesia argentina.

Estas dificultades políticas, sumadas a las surgidas en el terreno económico, alentaban a los sectores capitalistas opositores al gobierno, oligarquía terrateniente, gran capital nacional y extranjero, que necesitaban de un cambio de gobierno para profundizar la orientación hacia la liberalización de la economía ya emprendida por el propio Perón.

La actitud del gobierno de retroceder en lugar de profundizar en su política de reformas en el momento que comenzaron las dificultades, fortalecía aun más a sus enemigos y debilitaba a sus bases de apoyo.

Como es común a los movimientos reformistas, el peronismo caía en posiciones que lo enfrentaban a sus propias bases y por lo tanto a sí mismo.

De esta forma se llegaba, en 1955, a una situación que era radicalmente diferente a la que en 1945 había facilitado el ascenso de ese gobierno. Algo similar ocurría en el plano internacional, en el que los cambios ocurridos desde la finalización de la segunda guerra mundial iban en contra de la permanencia del peronismo en el gobierno.



La creación de un movimiento de masas en aquel momento estuvo relacionada con la posibilidad de estructurar un régimen de características bonapartistas en lo que respecta al grado de autonomía alcanzado por el Estado frente a la clase de la elite.

El país venía de un régimen que había gobernado durante más de una década en representación de la fracción más fuerte de esa clase, la del gran capital diversificado en todos los sectores de la economía, nacional y extranjero. Se había acordado del gobierno al desmoronarse el presidente H. Yrigoyen y se había mantenido en él mediante el fraude electoral y, fundamentalmente, había alcanzado un total desprestigio entre los sectores mayoritarios de la sociedad sobre a los escandalosos negociados en que se había envuelto.

En aquellos sectores de la burguesía urbana, desarrollados en los últimos años merced al proteccionismo automático que significó la situación creada por la guerra, existía el temor que de continuar ese régimen se volvería, una vez finalizado el conflicto y normalizado el comercio internacional, a la economía agroexportadora orientada hacia el exterior, lo que llevaría a la quiebra a muchos de ellos como ya había ocurrido al finalizar la primera guerra mundial en 1913.

Dentro del propio sector del gran capital existían divisiones surgidas a raíz de la posición que debía tomar el país durante la guerra, entre los más cercanos a Gran Bretaña y que apoyaban el mantenimiento de la neutralidad como convenir a esa nación y los que sostenían la posición exigida por Estados Unidos de ubicarse abiertamente al lado de los países aliados.

Las divisiones entre sectores de la burguesía, que debilitaban a esa clase políticamente, impidiéndole mostrar un frente unificado, junto con la fuerte movilización de sectores populares a través de la importante migración interna desde el interior del país hacia Buenos Aires y el acelerado incremento de la clase obrera industrial y en el sector servicios, con un aumento en el movimiento huelguístico y la incipiente sindicalización en las nuevas ramas industriales encabezada principalmente por el Partido Comunista, determinaron un equilibrio de fuerzas favorable a la toma del poder por un sector de la burocracia estatal, el Ejército, con un proyecto propio de gobierno en 1943.

La crisis del sistema político <sup>generada por</sup> tres años de gobiernos oligárquicos ilegítimos hacía más acentuado aun para vastos sectores sociales la implantación de ese nuevo régimen.

Al apoyarse en la movilización popular crecientemente controlada a través de los sindicatos que fueron sometidos al Estado por el nuevo gobierno, éste adquiriría un grado de autonomía con respecto a los sectores más poderosos de la burguesía tradicional y el capital extranjero que habían ejercido el poder en los años anteriores, que le permitiría aplicar las políticas reformistas en que se apoyaba su programa de gobierno.

En el plano internacional, el hecho de que los países desarrollados quedaran enfrascados en la guerra, sumado a las dificultades comerciales y financieras internacionales, creó las condiciones para que en varios países de Latinoamérica se intentaran proyectos de desarrollo nacional con mayor autonomía frente al capital extranjero.

Por otra parte, el papel intervencionista del Estado en la economía, impulsado por el gobierno peronista, era un hecho que se había generalizado en la primera mitad de este siglo cualquiera que sea el régimen de gobierno. Para organizar la economía de guerra durante los dos conflictos mundiales, y para salvar al capitalismo de la quiebra durante la crisis de la década de 1930.

En América Latina el papel regulador del Estado sobre la economía también fue uno de los instrumentos utilizados para contrarrestar los efectos de esa crisis. Por otra parte, la necesidad de reorientar la economía hacia el mercado interno y los efectos sociales que ello produjo, crearon un marco favorable para el surgimiento de los regímenes populistas con un importante papel del Estado en la dirección de los mismos, como el régimen cardenista en México (1934-40) y el varguista en Brasil (1930-45). Para consolidar su posición en el poder, implementar esos cambios en la economía y controlar al movimiento obrero, esos regímenes, en forma similar al peronista, apelaron, ya sea a la organización desde el Estado de la clase obrera como en el caso de Brasil, o a la alianza primero y al progresivo control del Estado sobre las organizaciones obreras como en México.

Incluso en esa misma época el gobierno de F. Roosevelt en Estados Unidos apelaba a la misma estrategia. Para fortalecer la base de apoyo de su gobierno y poder enfrentar la oposición de algunos sectores monopólicos a su política dirigida a contrarrestar los efectos de la crisis internacional, Roosevelt incluyó en la Ley Nacional de Reconstrucción, la NIRA, un inciso por el que se autorizaba la organización de los trabajadores en sindicatos por industria, dando nacimiento al CIO (Congress Industrial Organization), y a un poder de negociación

a esas nuevas organizaciones mucho mayor al que tenían hasta entonces los sindicatos organizados por oficio que constituían la AFL (American Federation of Labor). El CIO se convirtió desde entonces en un importante apoyo para ese gobierno y se ahí en adelante para el partido Demócrata.

También en los regímenes fascistas de esos años fue importante el papel del Estado, asociado al capital monopolista y ejerciendo un férreo control sobre los trabajadores a través de sindicatos bajo control gubernamental, con el objetivo de consolidar la posición predominante de ese capital en la economía local sobre la base del aplastamiento de la clase obrera y del pequeño y mediano capital, y organizar también la economía de guerra con vistas al próximo conflicto.

Finalmente, aunque en sentido opuesto, también es fundamental el papel del Estado en la recientemente surgida Unión Soviética.

En los últimos años del gobierno peronista, primeros de la década de 1950, la situación en Argentina y en el exterior había sufrido cambios importantes.

Los requerimientos por elevar el nivel de explotación de la clase obrera y por un acercamiento al capital extranjero que efectuaba en el país el sector industrial que había apoyado a ese gobierno coincidían con los que corrientemente efectúan los representantes del gran capital, políticamente opuesto al peronismo. De esta forma la burguesía tendía a unificarse mientras se desarticulaba el frente peronista.

El Estado cedía a su vez terreno frente al capital privado y el mismo gobierno orientaba la política económica en favor del que había sido uno de sus principales enemigos en los primeros años del régimen, la oligarquía terrateniente, buscando alentar la producción exportable.

En el orden mundial el capitalismo se reorganizaba bajo la hegemonía de los Estados Unidos a partir de la finalización de la guerra.

El gran capital con base en ese país había iniciado una agresiva política de penetración en los mercados de otros países, inicialmente en Europa, empeñada en esos momentos en la reconstrucción de pos-guerra. Pero desde principios de los años cincuenta Latinoamérica se convierte en un objetivo importante para esos capitales.

Para facilitar esta penetración, las empresas transnacionales deben revertir las no éticas políticas establecidas a asegurar espacios para el desarrollo del capital local en los distintos países, políticas consideradas por esas empresas y por la organización que las representa, al FMI, como "discriminatorias".

Se inicia entonces una ofensiva que está culminando en el presente, cuando el capital financiero internacional está ganando incluso la batalla ideológica al lograr difundir magistralmente y como una cuestión de sentido común las ideas neoliberales-en contra del intervencionismo estatal en la economía.

En aquellos años de principios de la década de 1950 esa ofensiva se resiente en los cuatro países latinoamericanos que contaban con los regímenes que tenían apoyo de masas y políticas económicas con orientación nacionalista, Brasil, Guatemala, Argentina y México, siendo derribados los tres primeros por golpes de Estado. En el último "Se iniciaba también la afluencia de capital norteamericano y el país se abría más al exterior".<sup>1/</sup>

Pero también otros elementos pasaban en esos años en la necesidad de Estados Unidos de reforzar su influencia en los países de América Latina y en especial en Argentina, después del período de enfriamiento de las relaciones entre ambos países debido a la política de neutralidad seguida por el gobierno argentino durante la guerra, por las medidas de carácter nacionalista tomadas en los primeros años del gobierno peronista y el mantenimiento del país en el área comercial de la libra en esos años.

La estrategia de guerra fría de los Estados Unidos frente a los países socialistas y la posibilidad de una tercera guerra mundial obligaban a aquel país a asegurar su retaguardia en el continente americano, como en su momento debió hacerlo el gobierno de F. Roosevelt mediante la política del "buen vecino" ante la inminencia del estallido de la segunda guerra mundial.

En realidad, el acercamiento entre ese país y Argentina ya había comenzado a mediados del gobierno peronista cuando éste emprende el viraje hacia la derecha en <sup>su</sup> política económica.

A mediados del año 1950, este gobierno ratifica la adhesión de Argentina al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), surgido en la reunión de cancilleres de los países americanos en Río de Janeiro en 1947 y por el cual las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos quedaban sujetas a la estrategia bélica mundial de los Estados Unidos.<sup>2/</sup> La ratificación formó parte de una negociación en la que se incluía un préstamo para Argentina del Eximbank de los Estados Unidos y una mayor presión por parte del gobierno de ese país para que Perón defina su posición en política exterior debido al reciente estallido de la guerra de Corea.

Esta presión, más el agotamiento de las reservas de divisas en Argentina, que tenía una deuda considerable importante con Estados Unidos, obligaron a Perón a dejar de lado las ambigüedades definidas como la "Tercera posición" en política exterior y adoptar una posición concreta frente al enfrentamiento entre los dos bloques, con el resultado señalado.

Al mismo tiempo se emprendían negociaciones para incrementar las relaciones comerciales entre ambos países, señalando el Boletín del Departamento de Estado norteamericano que "estos pasos contribuirán a reforzar la solidaridad inter-americana que es uno de los importantes objetivos de la política exterior de los Estados Unidos".

Estos acuerdos y la intención de firmar el contrato de concesión para la explotación de petróleo con la norteamericana Standard Oil, que implicaría dejar de comprar ese producto a empresas inglesas como se venía haciendo hasta entonces, señalan un gradual apartamiento del área comercial de la libra y el estrechamiento de relaciones con el área dólar.

Todo esto implicaba una contradicción con lo que había sido el discurso peronista desde principios de su gobierno. Al tiempo que significaba un acercamiento con los que habían sido en un principio los enemigos políticos del peronismo. Esto también ocurría dentro del país con el acercamiento del gobierno a la oligarquía terrateniente. Como parte del programa de industrialización, el peronismo había impuesto en el mercado interno una relación entre los precios agropecuarios y los industriales desfavorable para los primeros, con el fin de provocar una transferencia de ingresos hacia el sector industrial y acelerar su desarrollo. Pero con la crisis de la balanza de pagos y la necesidad de aumentar las exportaciones, y ante el boicot que estaba realizando los terratenientes disminuyendo la producción, el gobierno revirtió aquella relación de precios, iniciándose una transferencia de ingresos en sentido contrario y en favor del sector agropecuario, con el objetivo de aumentar la producción.

Agregando lo señalado en el capítulo anterior acerca del progresivo apartamiento de la alianza peronista de los empresarios industriales de capital nacional que habían apoyado desde un principio a este gobierno, se observa que la evolución económica de esos años llevó a un resquebrajamiento de aquella alianza y a una redefinición de las relaciones del <sup>gobierno</sup> peronista con los distintos sectores sociales internos e inter-

reses externos.

Pero si el acercamiento con los Estados Unidos disgustaba a los sectores nacionalistas del peronismo, el rechazo del contrato con la Standard Oil por parte del Congreso y el anuncio de su nulificación en agosto de 1955 señalaban al imperialismo que el peronismo seguía siendo un obstáculo para la penetración en el mercado argentino.

El peronismo quedaba encerrado entre sus propias contradicciones y su situación se hacía insostenible.

De tal forma, si el golpe de Estado de septiembre de 1955 se muestra como una coyuntura en que se produce un cambio drástico en las relaciones de fuerza entre los diferentes sectores sociales y en la alianza política que se apodera del gobierno, en realidad esta reestructuración del cuadro político es un efecto del proceso vivido en el país en los años anteriores y constituye un intento de acomodar la estructura política a la nueva relación de fuerzas existente en el plano económico y el internacional.

#### La crisis abierta en 1955

Este cambio en las formas políticas y en la estructura del Estado traera como consecuencia una transformación importante en las formas de acción y de resolución de los conflictos entre los distintos sectores sociales.

Como se señaló más arriba, el régimen peronista había buscado contener la expresión abierta del conflicto social mediante el encuadramiento del conjunto de los sectores sociales dentro del Estado.

Con el golpe de septiembre de 1955 esta situación estalla. Las fuerzas se liberan y los enfrentamientos y contradicciones se muestran abiertamente frente al conjunto de la sociedad, agudizándose además, debido a las medidas adoptadas por el nuevo régimen militar -proscripción del peronismo, orientación de la economía en contra de los sectores populares, abandono del intervencionismo estatal en áreas clave de la economía y franca apertura de la misma hacia el exterior.

Por otra parte, el deficiente sistema de partidos, tal como pretende hacérselo funcionar a partir de ese golpe de Estado, y que será incapaz de representar al conjunto de los sectores sociales, tanto populares como de la burguesía, hará imposible llegar a formas de re-

solución de conflictos a través de negociaciones entre los representantes parlamentarios de las distintas fracciones de la burguesía y demás clases sociales, como en los países desarrollados.

Finalmente, la proscripción del peronismo a partir de 1955 y hasta 1973, puso de hecho a la <sup>mayoría de la</sup> clase obrera, identificada con ese movimiento político, fuera del que será el sistema político "legal" durante esos dieciocho años, y por lo tanto en una situación de enfrentamiento abierto con el poder, haciéndose explícita ante manifiesto paros de trabajadores la lucha de clases. Al quedar marginada del sistema político, la clase obrera verá en cada sector social o partido político integrante de este sistema a un enemigo de clase.

Por supuesto que el partido peronista es en última instancia un defensor del sistema capitalista, pero si bien el curso que sigue ~~de~~ proceso político sufre las determinaciones que vienen de la estructura socioeconómica, esas determinaciones son mediatizadas por las acciones de los hombres, que son los que en definitiva hacen la política, y esas acciones se rigen por la forma en que los hombres perciben la realidad, y es indiscutible que para la clase obrera argentina, a partir de 1945, el partido peronista era su partido y los demás eran los partidos de la burguesía. De ahí que, en cada coyuntura política crítica a que conduzcan las fuerzas actuantes en la estructura socioeconómica, la actitud de la clase obrera será la de una permanente disposición a luchar contra el poder constituido.

Además el peronismo sufrió, a partir de 1955, un cambio fundamental, sobre todo en lo que respecta al sector sindical. Si durante el gobierno peronista los sindicatos de esa orientación se formaron al calor del Estado, tras el golpe de ese año a pesar de los embates sufridos por parte de los gobiernos posteriores, los sindicatos peronistas se reconstruyeron en lucha contra el Estado, encabezados por nuevos dirigentes surgidos de las bases. Es cierto que muchos de esos nuevos dirigentes aceptarán con el tiempo integrarse a los mecanismos de cooptación implementados por algunos gobiernos posteriores, pero la constante presión de las bases obligará, incluso a estos últimos, a responder a los requerimientos básicos de los trabajadores, para poder conservar así su legitimidad como dirigentes y su papel de mediadores efectivos en el conflicto entre la clase obrera y la burguesía.

Otro hecho significativo que se produce a partir del golpe de 1955 es el de las frecuentes divisiones y enfrentamientos al interior de

en un mismo sector social, ya sea entre distintas fracciones de la burguesía como entre facciones enfrentadas dentro de las Fuerzas Armadas. En este último caso el punto culminante se alcanzará en los años de 1962-63, en que se llega al enfrentamiento armado entre los dos sectores en que se divide el Ejército, aunque no se va mucho más allá de movimientos que se resuelven principalmente por la toma de posiciones y alguna escaramuza armada.

También se producirán enfrentamientos entre las distintas líneas del sindicalismo obrero, incluso entre las que se definen como peronistas; entre los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos del peronismo; entre todos ellos, principalmente los sindicales, y la dirección que ejerceía Perón desde España; al interior de los partidos políticos, como la Unión Cívica Radical, que se dividirá en la UCR del Pueblo y la UCR Intransigente.

Es este conjunto de problemas al que hará que a partir de 1955 Argentina viva una situación de permanente inestabilidad política, con crisis recurrentes que se suman a las de carácter económico, a las re-  
alimentándose mutuamente.



Las divisiones al interior de las Fuerzas Armadas

Con el golpe de septiembre de 1930 salieron a luz las divisiones al interior de las Fuerzas Armadas, y desde aquel día inició una lucha de cinco días entre el sector golpista y el leal al gobierno.

El papel decisivo lo tuvo a la Marina, que actuó unificada en el bando golpista, mientras que el Ejército se dividió entre golpistas y leales.

Las divisiones en el Ejército argentino son notorias desde la década de 1930, fundamentalmente entre el sector conocido como "nacionalista" de derecha y el "liberal", aunque estos apelativos no se ajustan totalmente a la realidad.

El primero de esos sectores, mucho más de derecha que nacionalista, fue el que encabezó en septiembre de 1930 el golpe militar contra el presidente Hipólito Yrigoyen. La intención de los golpistas era barrer el sistema democrático liberal e imponer uno de características fascistas siguiendo el ejemplo italiano de ese momento. Pero las medidas adoptadas en lo económico distaron mucho de ser nacionalistas.

Uno de los objetivos del golpe fue precisamente evitar la promulgación por el gobierno de Yrigoyen de una ley de nacionalización del petróleo. El día siguiente al golpe iban a realizarse elecciones en dos provincias, cuyos resultados podrían haber alterado la composición del Senado, dando mayoría al oficial partido Radical, con lo que se hubiera aprobado esa ley presentada por el Ejecutivo y trabada en esa Cámara hasta ese momento luego de haber sido aprobada en Diputados. El gobierno golpista encabezado por el general Uriburu dio, por el contrario, facilidades a la Standard Oil para la explotación del petróleo argentino. El gabinete de ese gobierno fue conformado, entre otros, con representantes de los monopolios extranjeros y nacionales como la mencionada Standard Oil, Bunge y Born, y Otto Bemberg.

Uno de los principales ideólogos civiles de este sector del Ejército era el historiador Carlos Ibarguren, entre cuyas actividades figuró la de ser el primer presidente del Banco de Finanzas y Mandatos, fundado en los años veinte, cuyo directorio era un "altísimo exponente de la oligarquía criolla" y su principal actividad era la de contribuir a la realización de negociaciones por esta clase. En ese banco se forjó el equipo económico de la dictadura de Uriburu. <sup>4/</sup>

El sector liberal del Ejército y su ideología están relacionados

con la influencia y las estrechas relaciones comerciales de Gran Bretaña con la oligarquía argentina en esos años. Su liberalismo se manifestaba principalmente en el terreno económico, dado que ese régimen era el más apto para permitir la penetración inglesa en Argentina y mantener un sistema socioeconómico favorable a los intereses de la oligarquía relacionada con esa nación.

Políticamente, este sector aceptaba la existencia de un sistema democrático liberal en tanto éste no fuera lugar a una movilización popular significativa. En tal caso estaba tan dispuesto como la otra fracción del Ejército a terminar con el orden constitucional.

Este sector desplazó en 1932 al encabezado por Uriburu y se apoderó del gobierno, poniendo en la presidencia al general A. Justo, terminando con las intenciones corporativistas del primero e instalando nuevamente las formas democráticas pero instrumentando el fraude en los procesos electorarios para dar la victoria al oficialismo.

En el golpe de Estado de 1943 que terminó con el régimen conservador de la llamada "Década Infame" (1930-43) y llevó al poder a Perón, tuvieron actuación destacada militares provenientes del sector derechista, aunque en ese momento sí se llevaron adelante políticas de carácter nacionalista y tendientes a acelerar el desarrollo industrial como parte de una estrategia militar global del sector golpista y en especial de Perón, que requería lograr el autodesarrollo armamentista del país.

La persistencia de las divisiones internas aun después de ese golpe se hizo evidente el 9 de octubre de 1945, cuando el sector opuesto a Perón se levantó y lo obligó a presentar su renuncia a los cargos que ocupaba en el gobierno, deteniéndolo hasta que la movilización popular del 17 de ese mes lo devolvió a su puesto en el poder.

Durante el gobierno peronista se acentuó el adoctrinamiento sobre el Ejército, buscando su unificación ideológica e identificación con la línea política del gobierno. Sin embargo las diferencias internas subsistieron, pero resolviéndose en gran parte con la división del Ejército en sus dos principales ramas, el arma de Infantería y el de Caballería.

Estos dos sectores presentan diferencias importantes. La Infantería está más en contacto con la población civil principalmente a través del reclutamiento masivo de los jóvenes que anualmente deben cumplir con el servicio militar. Lo que permite que en esa arma se perciba

mejor la situación de la población y las carencias en las regiones del interior del país. En esta área y principalmente entre la suboficialidad, Perón encontró su apoyo más importante.

En la Caballería, la oficialidad es reclutada entre los sectores más pudientes de la sociedad y muchos de estos oficiales están relacionados estrechamente con la oligarquía terrateniente. Fue de este sector del Ejército del que surgieron los intentos golpistas contra Perón desde 1951.

Alain Bouquie señala que "Entre 1943 y 1945 (con el ascenso del peronismo) la Infantería se instala en el poder. Desde 1946 hasta 1955 todos los comandantes en jefe y los dos ministros de Guerra pertenecen a ese arma... Son los regimientos leales en 1955 y de los que surgen levantamientos después (contra la dictadura militar). Después de 1955 es depurada y cambia de signo, por lo menos en lo que respecta a la oficialidad. En la rebelión del general Menéndez de 1951, ex comandante de Caballería, aparecen algunos de los nombres más tradicionales de los grupos dominantes. Entre los arrestados o retirados (tras el fracaso del golpe) figuran: A. Lanusse, G. Martínez Muviría, A. Pío de Mía, T. Sanches de Bustamante, M. Beccar Varela, J. de Nevares, E. Rauch, R. de Alzaga, M. de Mía y J. Alsogaray, grandes nombres y pequeña nobleza militar, todo el orden ecuestre está aquí".

"A partir de 1951 la Caballería es la principal víctima de la represión al interior del Ejército, porque es el arma más sospechosa, social y políticamente. Es en sus filas que se encuentra el mayor número de oficiales apresados y destituidos".

Según el mismo autor, esa rebelión fue "fruto de la reacción nobiliaria de las grandes familias". 5/

La situación se invierte después del derrocamiento de Perón. Los oficiales destituidos por el régimen anterior son restituidos a sus cargos y de veinte generales dados de baja sólo uno es de Caballería. Tras un período de preponderancia de la Artillería, con los generales Lonardi y Osorio Arana, la Caballería conquista la dirección del Ejército. Desde octubre de 1955 hasta mayo de 1973 la Infantería y la Artillería sólo ejercen la dirección del Ejército durante treinta meses de esos dieciocho años, el resto corresponde a la Caballería.

La Marina, debido a las características del arma y de su actividad, se mantuvo a la distancia de la influencia ideológica del peronismo y al mismo tiempo más conectada con las Fuerzas Armadas de otros países como Gran Bretaña o Estados Unidos.

En esta arma se incubó el más fuerte antiperonismo. Fue el que llevó a cabo el intento golpista del 16 de junio de 1955 en que aviones de esa fuerza bombardearon la Casa de Gobierno y a la multitud reunida en sus alrededores, provocando según distintos medios de información, entre 300 y 2 000 muertos.

En septiembre de ese año fue lo que, encabezado por el almirante I. Rojas, definió la lucha en favor de los golpistas, ya que en el Ejército había superioridad en fuerzas en el bando legal, aunque la voluntad de resistir no fue grande y el mismo Perón precipitó un desahuce al delegar el poder en el Ejército en medio de las acciones.

En los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas también existían divisiones y posiciones distintas respecto a la actitud a adoptar frente al peronismo después del derrocamiento de Perón.

Ya en la preparación del golpe había dos focos principales dentro del Ejército que respondían a la diferenciación existente entre los dos sectores cuyas posiciones se manifiestan a través de las ideologías ya señaladas arriba. Uno en la proximidad de Córdoba encabezado por el gral. de artillería E. Lonardi, de ideas de derecha católica y corporativista. Otro con centro en Buenos Aires que llevaba a su frente al gral. de infantería P. E. Aramburu, del sector liberal del Ejército.

También en la Marina se hacían los preparativos, predominando en esta fuerza las concepciones económicas ultraliberales y de una "democracia para los democráticos", o sea, sin el peronismo, en el terreno político.

Ante las vacilaciones del sector liberal se lanzó el golpe desde Córdoba, sumándose en seguida la Marina y el gral. Aramburu. El nuevo régimen quedó constituido finalmente con el gral. Lonardi en la presidencia y el alce. Rojas en la vicepresidencia.

El proyecto político de Lonardi

Una vez asumido el cargo, el presidente intentó reeditar un "movimiento nacional" apoyado en las masas peronistas, sin Perón y dirigido por el Ejército. Para ello se rodeó de un cuervo de militares y asesores civiles de sus mismas concepciones ideológicas e inició negociaciones con los dirigentes sindicales peronistas que, ante el triunfo del golpe, habían llevado inmediatamente a los trabajadores a mantener la calma y concurrir normalmente a sus labores. Lo que implicaba que de ese lado también había disposición para negociar.

Entretanto la estructura político-militar del peronismo sufrió

un rápido proceso de desintegración después del golpe, al salvarle la Dirección de Perón, única forma de mantener unificados sectores que iban desde la izquierda populista y descentramiento radicalizados tras el golpe de septiembre, como el representado por el ex director J. W. Cooke, hasta los ultraradicales de actuación fundamentalmente en el área educativa durante el gobierno de Perón, en cuyas filas se encontraba gente como Ottalagano, Ivanisevich, etc.

El sector liberal del Ejército y la Marina se opusieron al proyecto de Lonardi más un esquema político de esa naturaleza, que implicaba mantener a la clase obrera dentro del Estado, le confería a este último una estructura tal que, más allá de la orientación que desde el gobierno se pretendiera dar a la economía, se presentaba como un obstáculo para llevar adelante la completa liberalización en ese área, como lo exigía el gran capital nacional y extranjero, en cuyas manos los sectores liberales de las Fuerzas Armadas pensaban poner el control de la economía.

Mantener a la clase obrera dentro del Estado significaba la existencia de un régimen que, al igual que el peronista, encontraría una base de apoyo político en las organizaciones obreras centralizadas y en manos de dirigentes adictos al gobierno. Todo implicaba para el gobierno la necesidad de una permanente negociación con las organizaciones sindicales y para éstas la posibilidad de incidir en forma directa en la toma de decisiones gubernamentales. Si bien la dirigencia sindical tiene sus intereses propios que no coinciden con los de los trabajadores, la medida en que responden o no a los requerimientos de las bases en su acción mediadora entre éstas y el gobierno depende del nivel de conciencia y combatividad que hayan alcanzado los trabajadores.

En Argentina los trabajadores habían dado repetidas muestras de su capacidad de superar a las dirigencias en casos en que éstas no atendieron sus reclamos. Por lo tanto, para mantener su legitimidad frente a las bases y conservar su utilidad frente al gobierno como mediadores y representantes efectivos de los trabajadores, las dirigencias sindicales debían mostrar un nivel elevado de respecto a aquéllos.

De esta forma, si el gobierno pretendía mantener este apoyo sindical no podría responder en la magnitud requerida a los cambios profundos que en esos momentos reclamaban la burguesía nacional y el capital extranjero, tendientes a lograr una fuerte redistribución de ingresos en su beneficio y a eliminar todas las trabas que dificultaran la entrada

de ese capital.

Por otro lado, este tipo de régimen populista con apoyo de masas implica necesariamente un Poder del Estado intervencionista orientado a asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de las clases populares y a establecer formas de regulación de la economía dirigidas en parte a asegurar ese objetivo.

El régimen que Lonardi intentaba establecer impondría, por lo tanto, desmantelar esta estructura estatal surgida con el peronismo, tal como ahora lo demandaba el gran capital.

Las dificultades que se le habían presentado a Perón cuando entendió el viraje a la derecha demostraban que la solución reclamada por el capital no vendría del cambio de un hombre sino de la totalidad del régimen político establecido por el peronismo.

La política económica

Mientras Lonardi buscaba implementar su proyecto político, la economía se orientaba en la dirección de los requerimientos del gran capital por parte de los funcionarios que fueron puestos por los militares en ese área, entre ellos Raul Prebisch y una Comisión Asesora Honoraria de Economía y Finanzas.

Los integrantes de esta Comisión eran, E. Méndez Delfino, conspícuo representante de los sectores burgueses más tradicionales y más tempranamente vinculados al capital extranjero, en esos momentos presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Kriegler Vasena, uno de los más importantes representantes en el país del capital financiero transnacional, futuro ministro de Economía en esta dictadura y en la que años después encabezará el gral. Onganía, la que se caracterizó por el fuerte proceso de desnacionalización de la economía que llevó adelante, E. Muergo, representante de la oligarquía terrateniente, L. Prati, de los grupos monopolísticos Celulosa Argentina y Fabril Financiera, R. Fraser, del grupo Alpargatas (anglo-argentino) y C. Noel del grupo del mismo nombre. 6/

El Plan Prebisch constaba de una primera parte en la que señalaba la necesidad de realizar grandes inversiones en petróleo, energía, transporte y acero y recomendaba introducir nuevas técnicas de producción en la agricultura. Para que el Estado y los sectores privados estuvieran en condiciones de encarar esas inversiones el programa incluía una segunda parte en la que recomendaba un plan de ajuste para sanear la economía, plan que coincidía con los reclamos que estaba efectuando el gran capital y con los planes de ajuste que habitual-

mente recomendaba el FMI a los países del Tercer Mundo.

El Plan "insistía en particular en la necesidad de aplicar varias políticas restrictivas dirigidas a reducir la inflación. Los incrementos salariales deberían ser estrictamente limitados... debía reducirse el déficit del Estado y restringirse la oferta de dinero cortando los gastos gubernamentales donde fuera posible y elevando la recaudación de impuestos... además recomendaba el desmantelamiento de los aparatos del Estado interventor y un retorno gradual al sistema de libre empresa. Esto debía lograrse mediante la eliminación de los controles de precios y los subsidios estatales, la gradual abolición del control de cambios y la introducción de un sistema de pagos multilateral en el comercio exterior. La producción agrícola y las exportaciones debían ser estimuladas a través de la devaluación y otros incentivos de precios".

También recomendaba la desnacionalización de la banca, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la liquidación de las empresas del Estado, la atracción del capital extranjero y el ingreso al FMI y al Banco Mundial.

El gobierno militar aplicó al pie de la letra las medidas de ajuste, que como se señaló en el capítulo anterior provocan una transferencia inmediata de ingresos desde la clase trabajadora hacia la burguesía, especialmente la agraria. Pero no se llevó adelante ninguna de las grandes inversiones recomendadas, que eran el proclamado objetivo del ajuste.

Es evidente la contradicción entre semejante programa económico y el proyecto político del genl. Lonardi. En las nuevas condiciones económicas y la nueva relación de fuerzas en la estructura socioeconómica, que surgieron al final del gobierno peronista como producto de la política de crecimiento e industrialización del país iniciada a mediados de la década de 1930, era imposible recitar la experiencia de un régimen populista de masas. La etapa populista ya estaba agotada en Argentina.

Si se tiene en cuenta que el asesoramiento de Prebisch ya lo había solicitado Perón en los últimos meses de su gobierno, se comprende que la nueva orientación de la economía a partir de 1955, si en parte es ineludida, el grado en que se lo hizo, por el cambio de gobierno, es el mismo tiempo una consecuencia lógica del proceso de crecimiento que había seguido Argentina en los años anteriores. Un país dependiente, en el cual un proceso de industrialización, también dependiente del abasteci-

amiento externo de inauspiciosos críticos, no lleva a la independencia económica sino, por el contrario, a reajustar la dependencia en nuevos términos y a crear nuevos cuellos de botella que impiden una continuidad en el proceso de crecimiento y llevan a crisis recurrentes.

Si a ello se agregan las características de coyunturas del país, sin un gran ejército industrial de reserva como lo tienen otros países latinoamericanos que en ese momento también estaban en proceso de industrialización acelerada como Brasil y México, que contribuya al descenso del nivel salarial de la clase obrera, se comprende la existencia de una lucha más exacerbada por la distribución del ingreso, que agudiza los problemas derivados de la característica cíclica de la economía, con la alternancia constante de períodos de crecimiento y crisis.

También influyó en esta situación el hecho de que, como si ocurrió por ejemplo en el caso del varguismo en Brasil, Perón en Argentina no creó los sindicatos desde cero, sino que tuvo que enfrentarse a un movimiento sindical ya constituido y en rápido ascenso en el sector industrial, en el que tenía influencia decisiva el Partido Comunista.

Existía, por lo tanto, una importante experiencia de lucha que se trasladó al movimiento peronista y que actuó como un condicionamiento importante para el mantenimiento del apoyo de los trabajadores a Perón.

La contradicción entre el plan leonardista y la nueva orientación de la economía se resolvió cuando en un golpe palaciego el sector liberal del ejército y la Marina deslazan a Leonardí de la presidencia, dos meses después de haberla asumido, y asume el cargo el gral. Aramburu.

#### La presidencia del gral. Aramburu

Inmediatamente se interrumpen las negociaciones con los dirigentes sindicales peronistas, la central obrera (COT) y los sindicatos más importantes son intervenidos, se detienen a centenares de dirigentes sindicales y políticos peronistas y se proscriben a todo aquél que haya ejercido un cargo de dirigente luego 1952 en adelante.

El rechazo del plan leonardista y la ofensiva abierta lanzada contra la clase obrera señaló la decisión de llevar un ataque a Perón contra todo vestigio de régimen populista.

El problema que se presenta entonces al nuevo gobierno y al gran capital, a quien el primero representa, es el de la conformación de un nuevo régimen político compatible con la nueva orientación de la economía y con la correspondiente reestructuración del Estado.

Una dictadura militar con el sólo apoyo del gran capital e impensable en esos momentos de enfrentamiento abierto con la clase obrera. A



las masas sólo puede enfrentárselas oponiéndoles las masas. Por lo tanto, para enfrentar a las masas obreras populistas se necesitaba el apoyo de las masas de clase media antipopulistas. Para ganarse este apoyo y el de los partidos que representan a esta clase, fundó entonces el Radical, los Militares que en ese momento se adueñaron del gobierno debieron hacerlo con el compromiso de volver al país al régimen constitucional democrático liberal.

El régimen demoliberal respondía, teóricamente, a la necesidad de reestructuración política y económica tal como lo reclamaba el gran capital, debido a la forma de relación entre la clase obrera, o las clases populares en general, y el Estado que se establece en este tipo de régimen, diferente a la existente en los regímenes populistas.

En el régimen democrático liberal esa relación, en lo que respecta a la forma de participación política de las mayorías, se establece fundamentalmente mediante el apoyo a los partidos políticos a través del voto, sin que existan formas de comunicación directa que le permitan al partido en el gobierno utilizar ese apoyo como un instrumento efectivo de presión política para balancear la presión que sobre el gobierno ejercen los sectores de la burguesía, como sí puede hacerse en los regímenes populistas de masas a través de la movilización popular.

Esta forma de relación, que implica poner a las clases populares fuera del Estado, conduce a que en ésta sean los intereses económicos más poderosos los que adquieren un peso preponderante. La autonomía relativa del Estado frente a esos intereses se reduce entonces significativamente con respecto a la existente en los regímenes populistas, restándole de esta forma al partido en el gobierno capacidad para implementar, desde un Estado que en realidad no controla, medidas de regulación de la economía en favor de las clases populares.

Con tal régimen de gobierno la fracción más fuerte de la burguesía lograría, por lo tanto, desamarrar la base de apoyo social a un Estado recientemente orientado en su beneficio. Desde este punto de vista, la política de redemocratización del país a partir de 1955, mantenimiento proscrito al populismo, será parte de la estrategia del gran capital en su lucha contra la clase obrera. De ahí que el régimen demoliberal no haya alcanzado legitimidad entre la clase obrera en esos años.

Los dieciocho años de predominación del peronismo, hasta 1973, hicieron que los gobiernos "democráticos" que se alternaron con los dictatoriales durante esos años obtuvieran el consenso del conjunto de las clases populares en Argentina.

El problema de la integración de la clase obrera a formas de participación política en un régimen de gobierno estable fue la cuestión más importante, a nivel político, durante esos años.

La dificultad surgía de la situación contradictoria que representaba la necesidad de dar cauces de participación política a la clase obrera en un momento en que la política económica era dirigida en contra de esa clase.

La clase obrera no había dado sus votos a los otros partidos como esperaba la burguesía después de 1955, por lo tanto la legalización del partido peronista llevaría a una votación masiva en su favor. Al ver nuevamente a su partido en el gobierno, la clase obrera se sentiría alentada a demandar un retorno a las políticas tradicionales del peronismo, lo que haría imposible que este partido, aunque sus dirigentes lo quisieran, gobernara de acuerdo a los intereses de la fracción más poderosa: la burguesía. Así ocurrió a partir de la muerte de Perón en 1974, cuando su esposa ocupa la presidencia y el gobierno peronista adopta una posición abiertamente de derecha y en favor del capital monopolístico. La movilización popular de rechazo alcanzó tales características que hizo imposible al gobierno llevar adelante esa orientación.

Pero los problemas de inestabilidad política no surgirán en estos años únicamente de la contradicción entre la burguesía y la clase obrera. Lo que caracteriza el período comprendido entre el derrocamiento del peronismo en 1955 y el acceso de la "Revolución Argentina" (la dictadura de Onganía) en 1966 es el desarrollo y profundización de una crisis de hegemonía en el seno de las clases dominantes. En lugar de existir una clara e indiscutida dirección del conjunto o parte de una clase o fracción, lo que predomina son los enfrentamientos internos. Se produce entonces un equilibrio inestable de fuerzas que progresivamente debilita el conjunto frente al potencial avance del enemigo principal: la clase obrera". 8/

Las contradicciones secundarias tendrán entonces una importancia fundamental en este período, a partir de la lucha entre fracciones de la burguesía por alcanzar la hegemonía dentro del bloque burgués, y estarán estrechamente relacionadas con la lucha que surge de la con-

tradición fundamental entre la clase obrera y el conjunto de la burguesía. En varias ocasiones, una fracción de la burguesía olerará y buscará el apoyo de la movilización popular en su lucha contra otra fracción burguesa.

## Evolución de la economía desde 1955

Las recomendaciones del Plan Prebisch presentado a fines de 1955 al gobierno militar eran una combinación de la política desarrollista centralina con los planes de ajuste económico fondomonetaristas.

Aunque existió la intención de aplicar el programa de grandes inversiones en los sectores básicos de la economía a través del Plan Verrier confeccionado por el ministro de Economía del mismo nombre, fueron las medidas de ajuste las únicas que finalmente se concretaron, y el Plan Verrier terminó convertido, de un proyecto a largo plazo para transformar la economía, en un "programa de emergencia que, a lo sumo, aspiraba a evitar que, desde la perspectiva de los intereses de los sectores más concentrados de la burguesía, la situación económica se deteriorara aún más".<sup>9/</sup>

Después del golpe de Estado habían comenzado las tratativas para incorporar al país al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En agosto de 1956 se materializó el ingreso.

Este paso era necesario para llevar adelante la nueva orientación de la economía apoyada en las inversiones de capital externo ya que el control de la economía que efectúa fundamentalmente el Fondo es una garantía para esos capitales. Los dos puntos básicos en que corrientemente se centran los planes económicos impuestos a los países del Tercer Mundo tienden a asegurar las condiciones de rentabilidad para las inversiones de capital extranjero. El primero de ellos, lograr el equilibrio de la balanza de pagos, asegura la disponibilidad de divisas para que las empresas transnacionales ubicadas en el mercado interno de estos países puedan remitir sus utilidades a sus casas matrices en el exterior. El segundo, el control de la inflación, crea las condiciones de estabilidad necesarias para las grandes inversiones que realizan esas empresas. Y en general, como ya se señaló anteriormente, los planes de ajuste llevan a recesiones económicas que castigan a la pequeña y mediana empresa de capital nacional y favorecen el progresivo control de la economía por el capital monopolístico.

Además los estatutos del Fondo obligan a los países miembros a eliminar toda trabas a los pagos por transacciones corrientes al exterior, entre los cuales se encuentran los remeses por utilidades, regalías (pagos efectuados por utilización de tecnología adquirida), e intereses efectuados por las empresas transnacionales.

Esta obligación es parte de la más general por la que los mismos miembros deben decretar la libertad del mercado de cambios.

Deben, por otra parte, eliminarse las regulaciones del Estado sobre la economía, limitándose éstas a las de carácter ortodoxamente keynesiano como la política fiscal y la monetaria.

Inmediatamente el gobierno militar establece un "mercado verdaderamente libre para algunas mercancías y para las transferencias financieras". La banca es desnacionalizada y en el Banco Central se crea un Consejo Consultivo con representantes de la actividad privada. El control del comercio exterior fue devuelto a las compañías que lo manejaban en forma oligopólica antes del gobierno peronista.

Se aplica una devaluación del 150 % y que se acerca al 400 % en el mercado libre al subir el valor del dólar de 7 a 16 y 33 pesos respectivamente.

Las divisiones en el gobierno militar

Las características de este programa económico despertó la oposición de sectores que habían apoyado el golpe de septiembre y por otra parte era incompatible con las pretensiones de la dictadura de restablecer un régimen democrático con apoyo de los sectores mayoritarios a través del vuelco de los votos peronistas a los partidos permitidos.

La fuerte movilización popular encabezada por una nueva camada de dirigentes sindicales peronistas surgidos en la lucha por la recuperación de los sindicatos impidió, además, reducir los salarios en la medida en que pretendía hacerle la conducción económica gubernamental.

La actitud a adoptar frente al peronismo y a la movilización de la clase obrera también contribuyeron al resquebrajamiento de la coalición antiperonista.

En lo que respecta a la política económica "Los capítulos iniciales del plan Verrier -una serie de medidas que apuntaban a contrarrestar la demanda global, la apertura irrestricta al capital extranjero y la congelación de los salarios- alienaron a buena parte de las fuerzas políticas y sociales que se habían alineado frente a los 'débordes' (movilización obrera) de fines de 1956. Por un lado, un amplio sector de la burguesía urbana estuvo en contra de la liberalización total del mercado cambiario y de las restricciones crediticias; por el otro, el grueso de los partidos políticos que apoyaba al Gobierno Provisional

se cruzó a las medidas que inevitablemente reducirían los ingresos reales de los sectores populares. Sin embargo, lo que realmente estuvo en juego en marzo de 1957 era una premisa implícita del Plan Verrier: su puesta en práctica efectiva como plan de estabilización (y no como simple paquete de medidas de emergencia destinado a evitar la cesación de pagos externa y el colapso de las finanzas públicas) exigía programar en base a un horizonte temporal que se extendiera mucho más allá del lapso marcado por la promesa del gobierno de pronta restauración de la democracia. En otras palabras, la condición principal para la implementación del Plan Verrier era la suspensión por tiempo indefinido de las prometidas elecciones y el establecimiento de una dictadura militar que, reconociéndose como tal, dispusiera de los varios años necesarios para liberalizar efectivamente la economía. La incertidumbre que resultaría de una confirmación de la realización de las elecciones, aun cuando se pronosticara un triunfo de los partidos vinculados al Gobierno Provisional, eliminar una de las condiciones necesarias para el éxito del plan de estabilización: el convencimiento de los estratos superiores de las burguesías urbana y agraria de que las políticas se mantendrían a pesar de las resistencias que seguramente despertarían". <sup>10/</sup>

En este párrafo de M. Cavarozzi quedan definidas las contradicciones que marcarán los próximos años de la historia argentina, hasta desembocar en la dictadura de 1976-83 en que, las drásticas políticas aplicadas en todos los aspectos de la vida social, volverán a transformar sustancialmente el cuadro político en el país como ocurrió en 1955.

Por un lado, la oposición de la clase obrera a la orientación que se pretende dar a la economía será constante desde 1955 y, dadas las características señaladas de la nueva situación política creadas tras el golpe, en que la lucha de clases se muestra abiertamente, la lucha económica de la clase obrera adquiere un inevitable carácter político.

Pero también dentro de la burguesía se acentúan las contradicciones. Los sectores empresariales medianos y pequeños de capital nacional comienzan a ver en peligro sus posibilidades de supervivencia ante la política de liberalización y ajuste que lleva a acentuar la concentración del capital en favor de los sectores monopólicos extranjero y nacional asociado a aquél. También grandes empresarios nacionales como los dirigentes de la CSE, interesados en un desarrollo integral del país como la base para su propio crecimiento, se opondrán al retorno al proyecto liberal del gran capital repletado tras la caída del peronismo.

Los partidos políticos tampoco podrán aceptar en su totalidad las medidas impulsadas por la nueva política económica, ya sea debido a su necesidad de mantener su clientela electoral entre los sectores populares como por la vinculación ya establecida anteriormente de las dirigencias de esos partidos con representantes del capital medio nacional.

Frente a estas fuerzas se alinea las integrantes del sector "liberal" de la burguesía, los grandes empresarios rurales y urbanos del capital mono u oligopólico extranjero y nacional asociado.

La nueva situación política surgida tras el golpe también contribuyó en este caso a clarificar las contradicciones interburguesas.

Así como la estructura del régimen peronista estaba orientada en la dirección de buscar la convergencia política entre la clase obrera y sus explotadores inmediatos, la burguesía industrial, también en lo que respecta a las diferencias interburguesas contribuía a su ocultamiento. Al disolver las centrales empresarias que agrupaban a los representantes del capital monopolístico; UTA, CREA, Cámara Argentina de Comercio y Bolsa de Comercio, e integrar a estos sectores a la CSE, incluso en puestos importantes, las diferencias con los representantes del capital nacional que apoyaba el proyecto peronista comorizados entre otros por el presidente de la CSE, J.E. Gelbard, se resolvían mediante negociaciones de cúpula dentro de esa entidad.

Tras el golpe de 1955 la CSE fue disuelta y se reconstituyeron las centrales patronales liberales que desde entonces adoptarán una línea política conjunta y en 1958 se agruparán en la Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres, ACIEL, para luchar contra "todo propósito de planificación económica y empresaria". Oponiéndose al "autoritarismo (peronista) destructor de nuestro modo de pensar occidental y cristiano" esgrime su "fe democrática y vocación de libertad, rechaza todo dirigismo estatal que anula; quiere una economía libre, creadora y progresista. Es bien conocida su acción en favor de la libre iniciativa, del imperio del derecho y de la justicia. ACIEL no permitirá que nuestra bandera azul y blanca se tiña de otro color".<sup>11/</sup>

Es el sector de la burguesía que, junto con otro de las Fuerzas Armadas, asimila el peronismo al comunismo y se declara respetuoso del derecho y la justicia establecidos por la Constitución liberal de 1853 con el fin de ampliar su base social de apoyo en su lucha por desmantelar todo vestigio del Estado intervencionista derivado del régimen anterior y arresar con aspectos fundamentales de la legisla-

ción laboral establecida también durante el anterior gobierno peronista. Exige la derogación de la ley de Asociaciones Profesionales que reglamenta lo referido a las organizaciones sindicales, señalando especialmente su oposición a los puntos de la misma en que se establece la existencia de una central sindical única, la CGT, un sindicato único por cada sector de la actividad económica y la afiliación obligatoria de los trabajadores. También demanda la reglamentación del derecho de huelga y la modificación de la ley sobre despidos.

Entretanto los empresarios de capital nacional interesados en reconstituir la CGE organizan el Movimiento de Recuperación de las Entidades Empresarias Argentinas y varios congresos empresariales en el interior del país en los que se reclama la reorganización de aquella entidad para "confirmar un módulo de expresión que condense el pensamiento económico-empresarial nacional" y que sirva como instrumento de presión política sobre el gobierno.

Este sector del empresariado es dirigido cada vez en mayor medida por grandes empresarios de capital nacional y de la región de Buenos Aires. Sin embargo estos últimos no pueden competir, en igualdad de condiciones, con el capital monopólico transnacional y nacional asociado, y menos aun cuando el gobierno se vuelca decididamente en favor de este último, por lo que la posibilidad de asegurar su desarrollo está sujeta a la existencia de un gobierno que promueva el desarrollo integral de la economía del país asegurando espacios para el capital nacional. En esto coinciden con el conjunto del pequeño y mediano empresariado de capital nacional y el ubicado en el interior del país. De tal forma, aquellos empresarios, que retomarán la dirección de la CGE una vez reconstituida, se transforma en el portavoz del conjunto del empresariado nacional, con lo que obtienen una base de apoyo amplia con la que oponerse al capital monopólico y a sus representantes en el gobierno.

De ahí el carácter de las medidas que el empresariado nacional reclama al gobierno, fundamentalmente en lo que se refiere a la necesidad de la intervención y regulación de la economía por parte del Estado en favor del capital nacional, ya que la igualdad abstracta proclamada por la Constitución e invocada por el gran capital crea las condiciones para que se imponga el mayor poder de este último.

En agosto de 1957 reclaman la "formulación clara y definitiva de un programa orgánico de estímulo y protección industrial", "que el



Estado retenga la plena dirección de la política crediticia" tomando "en consideración los sectores con prioridad, la pequeña y mediana industria y el interior del país", "el mantenimiento del Banco de Crédito Industrial", "el rechazo de ~~reclamaciones~~ ~~extranjeras~~ en competencia con industrias argentinas ya instaladas", "impedir la fuga de capitales argentinos" y que "Al efecto de cubrir las necesidades de equipos y maquinarias, (la política económica nacional) debe orientarse al establecimiento de un sano equilibrio entre las inversiones del capital extranjero y la obtención de créditos a largo plazo con lo que se evitará la gravitación de las remesas y servicios de aquellas inversiones sobre el equilibrio de la balanza de pagos".

Pero el tipo de desarrollo nacional integral requerido por este sector de la burguesía de capital nacional también tiene puntos de convergencia con las necesidades de la clase obrera, fundamentalmente en lo que se refiere a los reclamos de estos empresarios por desarrollar "un mercado interno de creciente poder adquisitivo, lo que permitiría consablar una eficiente estructura industrial basada en adecuadas economías de escala" y mantener "la plena ocupación como objetivo del país concretada en una fórmula gráfica: no deben pararse las máquinas". Coincidencias que estuvieron en la base de la alianza que apoyó al peronismo.

Las consecuencias políticas del tipo de reclamos emitidos por la CGE o las FAA en nombre del pequeño y mediano capital nacional en el plano económico son opuestas a las consecuencias que se derivan de la necesidad del gran capital por aplicar su plan de ajuste liberal.

Si, como señala Cavaretti, este último sólo podría aplicarse a toda su magnitud bajo una dictadura militar abierta, el programa de la burguesía nacional para derrotar o imponerse sobre el del gran capital requiere de un estado de movilización interna y del apoyo de la masa del pequeño y mediano empresariado de capital nacional y de la clase obrera. Una situación de tales características es más viable en un gobierno salido de las urnas y dirigido por un partido político.

Por lo tanto, si la posición del gran capital y de las organizaciones que lo representan es generalmente golpista, los sectores de la burguesía nacional que más adelante se reorganizarán en la CGE suelen ser más afines a la preservación del sistema constitucional de gobierno y a un entendimiento con las organizaciones sindicales de la clase obrera.

En adelante en este trabajo se hará mención, con la expresión "bur-

cuasi nacional" a ese sector del empresariado de capital nacional interesado en, y necesitado de, un desarrollo integral de la economía nacional, con las implicancias sociales y políticas mencionadas.

Se lo diferenciará así de la burguesía del gran capital compuesta por las empresas mono u oligopólicas de capital extranjero y también de capital nacional pero estrechamente asociado al exterior y acorde con su proyecto de "país chico" con un desarrollo limitado y dirigido a una minoría de la sociedad, de acuerdo a las necesidades y estrategias que en cada momento establezca el imperialismo. Con consecuencias sociales y políticas opuestas a las del programa de la burguesía nacional.

Por lo tanto no será n elementos de carácter únicamente económico los que se utilizarán para definir a estos dos sectores de la burguesía, ya que dentro de la burguesía nacional se encuentran pequeños, medianos y también grandes empresarios, mientras que el sector monopolico también lo integran empresarios nacionales. Será el proyecto global de país que ambos pretenden imponer, tanto en el plano económico como en el social y político, lo que establezca la diferencia entre ambos sectores burgueses.

Las connotaciones políticas y sociales del programa de la burguesía nacional se aprecian en declaraciones como la siguiente, emanada de la Asamblea realizada por ese sector en agosto de 1958: "Es necesario afirmar que el desarrollo de la economía nacional no será posible sin la decidida y total colaboración de las fuerzas del trabajo. Por ello se considera indispensable que dicho plan asegure a los obreros una justa participación en la distribución de la riqueza que su aplicación determine. Para ello correspondería: 1) Orientar la política económico-social a efectos de aumentar constantemente los niveles de vida obrero y la seguridad social, asegurado un estado de plena ocupación en coincidencia con un alto nivel de productividad obrera y tecnológica, y una política inmigratoria acorde a las necesidades del desarrollo económico nacional. 2) Fomentar la armonía de las vinculaciones entre empresarios y trabajadores en la relación directa de las organizaciones nacionales empresarias y del trabajo, sin intervención del Estado, salvo los casos excepcionales de arbitraje".<sup>12/</sup> Llegando en 1962 a firmarse un Pacto Social entre la CGE y la COT en el que se promueve la creación de un Consejo Económico-Social "compuesto por representantes de los sectores obrero, empresario y científico y técnico, para actuar de

asesores o consultores de la labor gubernamental, en el orden económico y social, tal como ocurre en las principales naciones de Europa".

En el órgano de prensa de la burguesía nacional se señalan los perjuicios que a este sector le ocasiona la política económica promovida por la burguesía del gran capital, dejando traslucir al mismo tiempo el carácter diferente de las relaciones entre la clase obrera y la burguesía que resultan de la aplicación del programa económico de uno u otro sector de esta última clase. En un artículo expresa: "Revive ACIUL la cerril acción patronal de otros tiempos, en los que la propiedad era un derecho a usar y abusar, y al comercio un tráfico regido por la dura necesidad que lo mismo podía arruinar a empresarios por falta de demanda en las crisis cíclicas, que arruinar al obrero al aparecer la desocupación".

El proyecto propuesto por la burguesía nacional significaba revivir el aplicado por el gobierno peronista, aunque remarcando la necesidad de concretar las inversiones en los sectores básicos de la economía.

Pero en la última etapa de ese gobierno ya se había manifestado el agotamiento de esa política y la imposibilidad de avanzar en un proceso de industrialización nacional manteniendo las estructuras de propiedad tradicional que obligaban a mantener la dependencia del exterior en materia financiera, lo que llevaba a que cuanto más se avanzara por ese camino, más se acentuaban las contradicciones internas.

En las mismas declaraciones periodísticas y resoluciones de las asambleas efectuadas por el empresariado nacional a partir de 1955 aparece esta situación contradictoria, pues entre las medidas que reclama del gobierno para asegurar su supervivencia y crecimiento, aparecen otras que a largo plazo contradicen a las primeras al contribuir a consolidar el poder del capital monopolístico en el país.

Así, mientras exige la intervención y planificación de los aspectos básicos de la economía por parte del Estado, al mismo tiempo reclama una política de paulatina privatización de sectores de énter, conduciendo a "la gradual transformación de las empresas estatales en empresas argentinas mixtas", lo que en definitiva debilita al Estado frente al capital monopolístico, disminuyendo su capacidad para intervenir en la economía en favor del capital nacional cuando esta intervención es contraria a los intereses monopolísticos.

Si, por otra parte, exige que las inversiones de capital extranjero

no compitan con las industrias argentinas y instaladas, excepto sin embargo y reclamen aumentar este tipo de inversiones, las que deberán regirse por las mismas leyes y disposiciones vigentes para los capitales argentinos".

Finalmente, en lo que respecta a la necesidad de un acercamiento con la clase obrera para obtener apoyo político para imponer su programa de desarrollo, vuelven a surgir los aspectos contradictorios que aparecieron al final del gobierno peronista, cuando este sector de la burguesía comenzaba a reclamar mayores niveles de explotación de la clase obrera para mejorar las condiciones de la acumulación del capital. También ahora insistirá en la necesidad de poner límites a las exigencias de los trabajadores, señalando que sus conquistas se deben mantener pero "sin sacrificio de la riqueza nacional, de la plena ocupación y del bienestar general". Vide también "la supresión definitiva del alcance retroactivo de convenios (colectivos de trabajo)" y "la derogación de disposiciones compulsivas (de los mismos)".

Todo esto confirma el hecho de que, como ya se observaba desde principios de la década de 1950, la continuación del desarrollo nacional conservando cierta autonomía respecto del capital extranjero, es ya inviable mientras no se realice una transformación profunda de las estructuras tradicionales de la propiedad en el país, algo que la burguesía nacional no pareciera realizar, entanto se pronuncie, utilizando sus mismas palabras, en las que coincidía con la fracción monopolística del capital, porque el país sigue perteneciendo a "Occidente... nuestro modo de vida". La contradicción fundamental, capital-trabajo, seguía siendo prioritaria también para la burguesía nacional, sobre las secundarias que le enfrentan con la fracción monopolística.

Desde 1955 hasta la dictadura de 1976-83 estos dos proyectos, el liberal de la burguesía monopolística y el de la burguesía nacional lucharán por imponerse, aplicándose alternativamente uno y otro. El liberal no pueda sostenerse por tener que enfrentar el rechazo del conjunto de la sociedad, debiéndolo aplicarse mediante dictaduras militares. Los nombres que aparecieron en el régimen militar que derrocó a Perón, al frente de la economía, Krieger Vasena en la dirección del ministerio correspondiente, A. Alsogaray en el de Industria, R. Alemán como consejero financiero en Londres y, comenzando su carrera pública, J.A. Martínez de Hoz como ministro de Economía en la provincia de Salta, reaparecerán en las sucesivas dictaduras que regirán al país en adelante.

Las aplicaciones del programa de la burguesía nacional también serán efímeras, fundamentalmente porque las políticas expansivas que lo acompañan, dirigidas a acelerar el crecimiento, terminan en crisis de la balanza de pagos debido al aumento de las importaciones de insumos industriales, por lo que tales períodos desembocan en planes de ajuste que llevan a recesiones y a la quiebra de pequeños y medianos empresarios de capital nacional, acelerando el proceso de concentración del capital en favor de los empresarios monopolísticos.

Por otra parte, al ser gobiernos constitucionales los que tienen en vigencia este programa, la movilización de la clase obrera que en ellos tiene lugar, buscando elevar los niveles salariales, alentada por la fase de crecimiento, trae como consecuencia la interrupción del gobierno por la acción golpista de las Fuerzas Armadas respaldadas por la burguesía monopolística.

Será con la dictadura impuesta en 1976 que el capital monopolístico llevará un ataque a fondo no sólo contra la clase obrera sino contra los principales representantes del proyecto nacional de la burguesía, imponiendo el predominio del capital monopolístico y cambiando la relación de fuerzas en el plano económico y en el político al romper el equilibrio de los veinte años anteriores.

Las diferentes tendencias en el "Gobierno Provisional"

Las diferentes posiciones respecto a la política económica y, fundamentalmente, respecto a la actitud a adoptar frente al peronismo dividió a las Fuerzas Armadas en tres tendencias.

El sector más duramente antiperonista, coincidente con las organizaciones de la burguesía monopolística, estaba compuesto por la Marina y una fracción del Ejército dirigida por el gral. Ossorio Arana y que se va generalizando en la infantería. La depuración de la oficialidad de esta fuerza después del golpe de septiembre puso a su frente a los oficiales más reaccionarios.

Este sector de las Fuerzas Armadas sostiene las concepciones liberales en economía sustentadas por la burguesía monopolística y también apoya su pretensión de llevar adelante una completa reestructuración de las organizaciones y legislación sindical, oponiéndose a llamar a elecciones para elegir nuevo gobierno hasta que no se hayan concretado esas medidas.

Otro sector está conformado por las facciones "nacionalistas" de

la Aeronáutica y el Ejército. En este último está conducido por oficiales provenientes del leonardismo, como el cncl. Reimundes o el gral. Solanas Pacheco. Otros oficiales de esta tendencia fueron pasados a retiro en la purga de diciembre de 1955 cuando se desplazó a Lonardi de la presidencia.

Los oficiales de este sector mantienen su predisposición a negociar con el peronismo y apoyarán el acuerdo que Frondizi realice con Perón en vista de las elecciones que tendrán lugar en febrero de 1956.

Se oponen, por otra parte, a la política económica liberal de los Ministros Verrier y E. Vasena.

Finalmente, el gral. Aramburu y los oficiales que lo apoyan, principalmente los golpistas de 1955 y del arma de caballería, quedan en una posición intermedia entre las dos facciones anteriores.

Manteniendo un antiperonismo frontal y renuente a cualquier tipo de negociación con éste, se oponen, sin embargo, al reclamo del sector más duro de las Fuerzas Armadas de postergar las elecciones hasta no haber desmantelado las organizaciones y la legislación obrera peronista.

Aunque coincide con aquél en su posición liberal en economía y está vinculado, como ya se señaló, a familias de la oligarquía, hay conciencia en esta fracción de los problemas que le causa a la institución militar su permanencia en el ejercicio del gobierno, fundamentalmente debido a las fracturas internas que ello provoca, y ve por lo tanto la necesidad del llamado a elecciones.

En agosto de 1957 el gral. Aramburu expresó que "...en algunos casos los mones, ha habido problemas de disciplina en la Fuerzas Armadas que exigieron soluciones a través de los reglamentos... La revolución devora a sus propios hombres y cuando una revolución perdura no solamente devora a sus hombres, sino también a las naciones. Es así que hemos fijado nuestra fecha de entrega del poder, en contra de la opinión de quienes ven exagerada nuestra permanencia o insistían que deberíamos retenerlo mucho más tiempo... Deseamos hacer presente que entregaremos el poder a quien sea libremente elegido (sic) aunque íntimamente no coincidamos con la solución; nuestro remedio sería peor que el mismo mal si optásemos por soluciones personales por encima de lo que decide la ciudadanía".<sup>13</sup> Esto significaba que se aceptaría el triunfo incluso de Frondizi, líder del sector Intransigente de la Unión Cívica Radical, que renegaba del antiperonismo del gobierno militar y que recibiría los votos peronistas en las próximas elecciones.

La reconstitución del sindicalismo peronista

Tras el golpe que derrocó al gobierno de Perón, el presidente Lonardi inició negociaciones con los dirigentes sindicales peronistas, los que mostraron su disposición al entendimiento y a aplicar una política de contención de las bases.

Con el desplazamiento del gral. Lonardi y la asunción de la presidencia por el gral. Aramburu se cancelaron las posibilidades de entendimiento. La CGT y los principales sindicatos fueron intervenidos y sus dirigentes proscribidos.

Las dirigencias de algunos gremios se entregan, o en algunos casos son tomadas por la fuerza, a corrientes antiperonistas, radicales, socialistas, anarcuistas y otros independientes, que toman en conjunto la denominación de "democráticos". La intención del gobierno es crear un sindicalismo "pluralista".

Esta intención al igual que la de establecer un régimen político democrático liberal señalan las principales contradicciones de este período y de los años posteriores: pretender que la clase obrera abandone su filiación peronista y dé su consenso a un sistema político y sindical liberal al estilo de los países desarrollados, cuando al mismo tiempo se intentará solucionar los problemas económicos causados por el subdesarrollo y la dependencia mediante la intensificación de la explotación de esa clase.

Pero la dictadura militar estaba, al proscribir a los dirigentes peronistas, eliminando o una dirigencia surgida en gran parte en los años posteriores a 1951, cuando Perón afirma su control sobre los sindicatos imponiendo dirigentes dispuestos a adoptar una actitud oficialista y de contención de las bases.

Con la proscripción de estos dirigentes en 1955, la lucha de los trabajadores peronistas por recuperar los sindicatos lleva al surgimiento de una nueva camada de dirigentes salidos de las bases y que ascienden a través de la lucha contra el Estado, en un proceso inverso al de sus antecesoros.

Por supuesto que muchos de estos nuevos dirigentes estuvieron dispuestos a negociar con el gobierno, pero eso lo hicieron cuando hubo la misma disposición del otro lado, como ocurrirá con el gobierno de Frondózi. Fue la posición intransigente adoptada por la dictadura la que puso a la clase obrera en situación de choque frontal contra el gobierno y el Estado, desarrollándose una lucha en el plano político

y sindical en la que el gobierno salió derrotado en ambos frentes. En el político debido a la victoria en las elecciones de febrero de 1958 de Frondizi tras recibir los votos peronistas con el compromiso de devolver la plena legalidad al movimiento peronista. En el frente sindical el derrote se manifestó en la recuperación de los sindicatos por los nuevos dirigentes peronistas y por la conformación de la que sería el instrumento político del sindicalismo peronista, las 62 Organizaciones.

Este enfrentamiento, por otra parte, le dio al peronismo un aspecto de combatividad que hasta entonces, como movimiento desarrollado al calor del Estado, no tenía, y que conservaría, y acrecentaría, desde entonces.



CAPITULO 4: Los fracasos de la "democratización"

El primero de mayo de 1958 asume la presidencia A. Frondizi por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI).

Este partido y la unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) surgieron como producto de la escisión de la UCR después del golpe contra el gobierno peronista y como producto, precisamente, de los diferentes criterios en cuanto a la actitud a adoptar frente al peronismo proscripto por el régimen militar golpista.

Ya dentro de la UCR existían diversas corrientes. El sector derechista se agrupaba en el unionismo, una corriente más progresista era la Sabattinista, asentada en la provincia de Córdoba, y la corriente mayoritaria constituía el Movimiento de Intransigencia y Renovación, a la que pertenecían los dos principales líderes del partido, R. Balbín y A. Frondizi.

Ambos dirigentes tenían, sin embargo, posiciones políticas divergentes. Aunque uno y otro habían mantenido una actitud opositora frente al gobierno peronista, Balbín era conocido por un antiperonismo cerrado de tendencia derechista, mientras que la trayectoria de Frondizi había sido hasta entonces la de un hombre con ideas de izquierda y antiimperialista, siendo reconocido su importante libro "Petróleo y política" en el que defendía el derecho de la Nación a controlar y explotar ese recurso natural.

R. Balbín estaba relacionado, por otra parte, con terratenientes de la provincia de Buenos Aires a través de su estudio de abogado ubicado en la capital de esa provincia, La Plata, y que se ocupaba de llevar los asuntos jurídicos de ese sector económico.

Luego del golpe de 1955, mientras Balbín defendía el mantenimiento de la total proscripción del peronismo, Frondizi comenzó a adoptar una posición proclive a un acercamiento con ese movimiento, reconociendo la necesidad de permitir la participación política de las amplias masas que lo apoyaban.

Para las elecciones de 1958 la UCRI presentó una plataforma electoral cuyos dos pilares se definían con los términos de "integración" y "desarrollo". Por el primero se hacía referencia a la intención de ese partido de, en caso de acceder al gobierno, integrar al peronismo a la participación legal en la actividad política. Detrás de ello se encontraba también la intención de Frondizi de crear un nuevo Movimiento Nacional dirigido por él y apoyado por las masas peronistas.

La política de "desarrollo" se apoyaba en el llamado "Programa de Avellaneda" surgido en un congreso partidario realizado en esa ciudad lindera con la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, en 1947, en el que se elaboró un programa partidario de gobierno de carácter reformista y nacionalista.

Antes de las elecciones, el que sería principal asesor de Frondizi y considerado como la eminencia gris de su futuro gobierno, R. Frigerio, de conocidas simpatías hacia el peronismo, viajó a la República Dominicana donde se encontraba exiliado Perón y llegó a un acuerdo por el cual los peronistas recibirían la orden de votar por Frondizi, a cambio de lo cual, si éste llegaba a la presidencia, volvería a la legalidad al peronismo, concediendo además una amnistía para todos los dirigentes de ese movimiento que se encontraban encarcelados e inhibidos de toda acción política.

En las elecciones de 1957 para Asamblea Constituyente -convocada por el régimen militar para derogar la Constitución peronista de 1949 y volver a la que había regido hasta ese entonces, la redactada en 1853- la UCRP, la UCRI y los votos en blanco de los peronistas habían sumado cerca de dos millones cada uno. En las elecciones de febrero de 1958, debido a ese acuerdo, los votos peronistas por Frondizi se sumaron a los que éste obtuvo de los sectores medios radicales que se habían volcado por su partido y los de sectores de izquierda e intelectuales, totalizando cerca de cuatro millones de votos y batiendo abrumadoramente a la UCRP que había presentado a Balbín como candidato.

Una vez en el gobierno, Frondizi pudo observar que las condiciones en que se encontraba la economía no eran de ninguna manera favorables para la aplicación de un programa reformista que no se apoyara en cambios profundos de la estructura económica para sustentarlo. Ese tipo de programas limitados, como el aplicado por el peronismo, sólo es viable en momentos de auge económico.

El gobierno militar anterior había dejado a la economía del país en condiciones mucho peores a las que había encontrado en 1955. El Banco Central se había quedado sin reservas debido al déficit de la balanza de pagos con el exterior. Esto se debía en gran parte al uso que hizo ese gobierno del plan económico elaborado por R. Frébsch, aplicando al pie de la letra todas las medidas concernientes a la liberalización de la economía pero ninguna de las que recomendaba inversiones en sectores clave de la economía. Por

otra parte, la convulsionada situación política que se vivió en 1956 y 1957 desalentaban la realización de grandes inversiones.

Como ya se señaló, la situación al asumir la presidencia Frondizi era completamente distinta a la existente a fines de la segunda guerra mundial, tanto en el país como internacionalmente.

De aquí que la política de "desarrollo" nacionalista propuesta se transformó en la del "desarrollismo" que surgía en ese momento en varios países de Latinoamérica bajo la presión del capital norteamericano, que impulsaba el crecimiento económico en base a las inversiones de ese capital en los sectores de la industria de base<sup>+</sup> y de producción de bienes de consumo durable (automotores, artefactos para el hogar, etc.).

Con respecto a la política de "integración" del peronismo a la legalidad y la amnistía prometida, se cumplió con esta última y se permitió la participación del peronismo bajo nuevas siglas partidarias en las subsiguientes elecciones para gobernadores y legisladores, pero el Partido Peronista no fue legalizado durante este gobierno. También se dio fin a la intervención en la CGT y ésta fue devuelta a una dirigencia sindical en la que predominaba el peronismo.

En general, en este gobierno comienzan a delinearse las tendencias económicas y políticas que regirán la evolución de la sociedad argentina hasta el golpe de Estado de 1976, a partir del cual, la dictadura instalada introducirá fuertes cambios que transformarán radicalmente las características de esa sociedad, agravando los problemas de subdesarrollo y dependencia.

## La evolución de la economía

Responsando a las facilidades otorgadas por el gobierno, a partir de 1953 aumenta la entrada de inversiones y créditos de capital externo, como se observa en el cuadro 1.

Del total de autorizaciones de inversiones externas entre los años 1953 y 1963, los mayores porcentajes correspondieron a la industria química con 31.97 %, a la fabricación de automóviles y camionetas con 19.15 %, y a metalurgia liviana con 14.63 %.

Más de la mitad de las inversiones estaban relacionadas con la industria automotriz, que se convirtió en uno de los pilares de la nueva etapa de crecimiento.

Si bien estas inversiones dan un impulso al sector industrial del país, al mismo tiempo crean una situación crítica en las cuentas externas. Como puede verse en el mismo cuadro, en la columna de servicios de la cuenta corriente, que incluye las remesas al exterior en concepto de utilidades, regalías e intereses que resultan de las inversiones externas, estos servicios comienzan a hacerse deficitarios precisamente en 1953, aumentando los saldos negativos de ahí en adelante.

Como puede ejemplificarse en la industria fabricante de automotores en el cuadro 2, en el mismo quinquenio en que se efectúa el mayor volumen de inversiones, 1953/54, las remesas por regalías y utilidades enviadas al exterior superan el valor del capital ingresado, situación que se agrava en los años posteriores al disminuir las inversiones y aumentar las remesas.

La situación de la balanza de pagos se agrava aun más por las importaciones de partes e insumos que realizan las empresas que entran con las inversiones externas. También en el cuadro 2 se observa que sólo la industria automotriz importó esos elementos por un valor de 520.4 millones de dólares en los años 1953/54, utilizando para ello divisas entregadas por el Banco Central de Argentina.

De tal forma, en la crisis de principios de la década de 1950 se debió en gran parte al abrogamiento de las cuentas externas por las necesidades de importaciones de insumos industriales para llevar adelante el proceso de industrialización, en esta nueva etapa de crecimiento operado fundamentalmente en el ingreso de empresas transnacionales, el problema de las importaciones se agrega el de la salida de capitales enviados al exterior por esas compañías en concepto de utilidades y re-

CUADRO 1

	cuentas corrientes		cuentas de	préstamos	inversión
	de balance		capital	privados	extranjera
	comercial	servicios			directa
1961	- 310.6	99.6	14.6		2.4
1962	- 501.7	109.6	9.5		4.0
1963	306.5	49.5	10.3		4.2
1964	47.6	38.6	14.9		1.4
1965	- 244.0	5.2	31.5		3.3
1966	- 133.8	54.7	201.2		62.6
1967	- 335.6	35.1	61.2		72.9
1968	- 233.7	- 17.4	- 12.2		120.1
1969	16.0	- 2.3	54.7		234.9
1970	- 170.1	- 27.3	530.9	191.4	332.0
1971	- 498.3	- 76.7	389.9	245.6	- 16.2
1972	- 140.5	- 120.2	217.0	124.6	71.6
1973	334.3	- 152.6	20.4	- 178.0	77.0
1974	330.6	- 236.4	26.5	- 77.2	27.0
1975	234	- 70	- 186	- 184	45
1976	469	- 209	- 62	- 179	40
1977	369	- 185	- 93	- 42	- 7
1978	199	- 214	- 15	6	- 6
1979	36	- 255	132	133	- 11

Fuente: Balance of Payments Yearbook, FMI, varios números.

CUADRO 2

PRESENCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL BALANCE DE PAGOS (1959-1975) (millones de dólares)

	1959/64	1965/70	1971/75	1959/64	1965/70	1971/75
	Total			Industria automotriz		
<b>Mercancías</b>						
Exportaciones	7 035.9	9 298.7	14 311.3	2.3	43.2	401.4
Importaciones	7 107.8	7 854.2	14 276.7	520.4	379.8	638.8
<b>Regalías</b>		318.9	335.4		52.7	55.5
<b>Utilidades</b>	221.1	465.9	236.0	108.8	203.3	0.5
<b>Intereses</b>	219.2	684.3	1 512.2	...	...	150.0
<b>Inversión directa</b>	458.7	102.4	41.0	106.0	72.5	25.4

FUENTES: Banco Central para el total y estimaciones propias para la industria automotriz (véase el cuadro 30). Regalías y utilidades incluyen en el total a las efectivamente giradas, en la industria automotriz las utilidades son devengadas pero netas de suscripción de acciones. Inversión directa incluye en el total a las radicaciones de capital sin pago explícito (a partir de 1966 sólo bajo la forma de mercancías), en la industria automotriz a las autorizaciones conocidas.

galías y por los intereses de los préstamos de capital externo.

En Estados Unidos se considera que "el período de recuperación de la salida de dólares por inversiones de carácter industrial en el exterior es en promedio de dos años y medio". A partir de ahí las entradas significan ganancia neta para ese país. "Entre 1950 y 1966, las corporaciones y los ciudadanos privados ingresaron al país (Estados Unidos) 59 000 millones de dólares en exceso sobre el total de envíos de dólares al exterior por el sector privado". Por lo tanto, si a través de los pagos por la deuda externa hoy se hace claramente visible que los países del Tercer Mundo subsidian el desarrollo de los países centrales, esta situación no es nueva, aunque antes quedara más oculta.

Si durante el gobierno de Frondizi esta necesidad de divisas es solventada mediante la entrada de préstamos externos a corto y largo plazo debido al apoyo con que contaba el gobierno en los centros financieros internacionales, a partir de 1963, en parte debido a la inestabilidad política creada tras el golpe militar que derroca a Frondizi en marzo de 1962, se interrumpen esos préstamos y las autorizaciones superan a las entradas. El endeudamiento externo había ascendido desde 700 millones de dólares en 1955 hasta 3 700 en 1962.

Para afrontar tal situación debió revertirse el crónico déficit de la balanza comercial -importaciones y exportaciones- argentina, la que a partir de 1963 se torna supravitaria.

Para lograr ese objetivo se aplicó, por un lado, una drástica reducción de las importaciones, que cayeron el 25% en 1963 respecto al año anterior, de 1 336.5 a 980.7 millones de dólares.

Dado que las importaciones en Argentina son, principalmente de insumos industriales, esta caída afectó fuertemente la producción en ese sector de la economía.

Por otra parte se impulsaron las exportaciones, fundamentalmente de productos agropecuarios. Ante el estancamiento de los volúmenes de la producción de esos productos, un aumento de las exportaciones sólo puede surgir del mayor consumo interno.

Para ello, el gobierno que sucedió a Frondizi aplicó un plan de ajuste económico basado en una fuerte devaluación que trajo como consecuencia un encarecimiento de los productos alimenticios de origen agropecuario y un agravamiento de la crisis industrial al elevar el costo de los insumos importados y disminuir la demanda de productos de

ese origen el encarecerse los clientes.

La consecuencia de todo esto fue el surgimiento de una profunda crisis económica que ya a fines de 1952 había llevado la producción industrial a un índice de 74 frente al nivel 100 a fines del año anterior, bajando a 53.4 en bienes durables. Fueron despedidos más de 32 000 obreros textiles y 50 000 metalúrgicos, y entre 1958 y 1963 el empleo industrial total cayó en términos absolutos en 200 000 personas. 3/

La crisis industrial y los despidos contribuyeron a su vez a disminuir aun más el consumo interno y a reducir los saldos exportables de la producción agropecuaria. De un nivel 100 en 1961, el consumo privado interno bajó a 92.3 en 1962 y a 85.8 en 1963. 4/

Este es el mecanismo mediante el cual se resuelve la crisis de la balanza de pagos en que desembocan los períodos de rápido crecimiento manteniendo este modelo de desarrollo apoyado en la dependencia del capital extranjero y dejando intacta la estructura tradicional de la propiedad en el país.

Los sectores más afectados por estas recesiones son, además de las clasestrabajadoras-obrera y media baja, los que componen el pequeño y mediano empresariado de capital nacional y también los grandes empresarios nacionales con menor vinculación y acceso al crédito externo que les permitiría sortear el difícil momento, como si pueden hacerlo los empresarios monopólicos de capital extranjero o nacional especializado a él.

De esta forma, las empresas transnacionales que son introducidas en el mercado interno para impulsar el desarrollo, encuentran en estas épocas de estancamiento el medio para acentuar su control sobre las diferentes ramas de la producción, eliminando la competencia de empresarios nacionales menores.

Para impedir que este modelo de desarrollo apoyado en el capital externo, el gobierno de Frondizi se veía obligado a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya sea para tener acceso a los créditos de esa institución como para obtener su aprobación sobre el programa económico que se aplicaría, ya que el visto bueno del FMI era un aval frente al capital extranjero que se pretendía atraer.

El primer crédito de esta naturaleza a Argentina tuvo lugar en 1957 por 75 millones de dólares. Como este primer crédito es el equivalente en dólares a la cuota que cada país paga en moneda local, no implica condiciones nuevas, lo que sí ocurre con los créditos que son solicita-

des posteriormente.

Ante el requerimiento del gobierno llega la primera misión de reconocimiento del Fondo al país en junio de 1958. La segunda, en noviembre de ese año tras las recomendaciones que inspirarán el Plan de Estabilidad y Desarrollo que anunciará el gobierno en diciembre. Plan destinado a solucionar los problemas de balanza de pagos que encontró Frondizi al asumir el gobierno en mayo de ese año y a obtener el primer crédito de contingencia (Stand by) del Fondo. La renegociación de estos créditos al final de cada año serán la ocasión para futuras misiones en 1959, 1960 y 1961.

El Plan de Estabilidad se basaba en medidas fuertemente recesivas, entre ellas, eliminar el déficit fiscal cortando gastos corrientes y de capital, reduciendo en 15 % los trabajadores del Estado y sus niveles salariales, aplicar una severa política crediticia tanto en el sector público como en el privado, suprimir todos los subsidios a la producción y el consumo y eliminar todo control de precios, establecer un mercado único libre de cambios, buscar asistencia financiera en el exterior.<sup>5/</sup>

Esto implicaba un duro golpe al empresariado de capital nacional y al conjunto de los sectores populares. La clase obrera respondió con una fuerte movilización. Para contenerla el gobierno aplicó una serie de medidas represivas englobadas bajo lo que se llamó el Plan Comintes (de conciencia interna del Estado).

La política recesiva y la represión produjeron una severa caída en los salarios de los trabajadores que al el anterior gobierno militar había podido imponer, llegó al 27 % en el año de 1959.

Los mecanismos utilizados para solucionar la crisis de balanza de pagos en que terminó la expansión de los años 1960 y 61 y estas recomendaciones del FMI orientadas en el mismo sentido señalan los efectos sociales del Modelo de Desarrollo dependiente y sustentado en el capital extranjero.

Este lleva al aumento de la concentración del capital en manos de las empresas transnacionales, agudizando los problemas de dependencia.

Con respecto a las empresas del pequeño y mediano capital nacional, en el momento de realización de las inversiones extranjeras y la consiguiente expansión de la producción, aquellas participan del crecimiento general aunque debiéndose adaptar a la nueva situación creada por el tipo de inversiones efectuado por el capital externo. Muchas de esas empresas nacionales deben asociarse con las nuevas empresas



transnacionales instaladas y trabajar en forma subsidiaria para ellas.

Pero en los momentos de crisis son las principales afectadas, acentuándose la tendencia a ser absorbidas por las grandes empresas o en otros casos a caer en quiebra.

En el mercado interno se produce un empobrecimiento de los sectores populares mayoritarios, concentrándose el nuevo tipo de producción en los sectores de ingresos altos y medios.

Esta contracción y concentración del poder adquisitivo del mercado interno es coherente con el nuevo modelo económico.

Si la etapa de crecimiento durante el régimen populista se apoyó en la expansión del mercado interno de consumo popular, esta nueva fase, por el tipo de producción en que se apoya, depende de la expansión de un sector del mercado de ingresos medios. Esto se alcanza a través de una mayor explotación de la clase obrera, aumentando la acumulación en manos de la burguesía, de forma tal que una parte de esa acumulación pueda ser distribuida entre sectores medios privilegiados con el fin de ensanchar el mercado limitado a que va dirigida la nueva producción.

Un programa económico de este tipo sólo puede llevarse a cabo por gobiernos dictatoriales o elegidos en las urnas pero decididos a aplicar medidas represivas como el Plan Conintes de Frondizi. En el momento en que se llegue a un gobierno democrático políticamente más liberal, la movilización de los trabajadores será inmediata para recuperar los niveles salariales perdidos en los años anteriores.

Deesta forma, cada paso que desde entonces da Argentina en su desarrollo económico lleva, detrás del crecimiento observable en los números que miden los volúmenes de producción, a una agudización de las contradicciones sociales. Lo que en parte explica el dilema de un país en proceso de rápida industrialización y con una economía crecientemente integrada que repentinamente llega a un estallido social a fines de los años sesenta y a una subsiguiente represión estatal que conducen a una situación de fuerte decadencia.

La oposición al gobierno

La oposición a Frondizi no provenía únicamente de los trabajadores, también las organizaciones del gran-capital mantuvieron una actitud general contraria, fundamentalmente, al manejo político que hizo Frondizi de la cuestión peronista y sindical.

Ya en los primeros meses de gobierno, y como reacción inmediata ante la restitución de los bienes a la CGE que habían sido confiscados por el anterior régimen militar, aquellas organizaciones: UIA, SRA, CAC, Bolsa de Buenos Aires, se unifican para llevar adelante una política común de presión contra el gobierno, conformando la organización Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (ACIEL).

Aunque la política industrialista en favor del gran capital que aplicará el gobierno provocará diferencias al interior de esa organización entre la posición de la SRA, defensora de las tradicionales posturas de la oligarquía terrateniente, y la UIA.

Ambas agrupaciones empresariales coincidían en su oposición a la política de "integración" del peronismo aplicada por Frondizi, especialmente en el terreno sindical, donde el presidente buscaba terminar con la situación de enfrentamiento sindicatos-Estado prevaleciente durante el anterior régimen <sup>militar</sup> e integrar nuevamente las organizaciones obreras al Estado como en el gobierno peronista, con el objetivo de que la burocracia sindical peronista, mediante una combinación de concesiones, y de represión para quien no se sometiera, se transformara en una base de apoyo para el gobierno.

Al mismo tiempo, esto haría más manejable por parte del gobierno las acciones de protesta obreras. Durante el régimen de la "Revolución Libertadora" las protestas de las bases obreras por mejoras salariales coincidían con las presiones de la dirigencia sindical por recuperar los sindicatos intervenidos por el gobierno. Una política de acercamiento por parte de Frondizi hacia la dirigencia permitiría terminar con aquella coincidencia, desvinculando las acciones de las bases de la política de la dirigencia comprometida en la negociación con el gobierno.

Es así que durante la presidencia de Frondizi se sientan las bases para la consolidación de una burocracia sindical que desde entonces se mantendrá en contacto con los sucesivos gobiernos, convirtiéndose en parte integrante del sistema de dominación como lo había

sido durante el gobierno peronista, pero ahora con un grado mayor de autonomía frente al Estado que en aquel gobierno, dado que ya no estaba Perón para imponer la línea a seguir por los sindicatos y también por el apoyo que, a pesar de su política de acercamiento con el gobierno, seguíanteniendo de la mayoría de la clase los dirigentes sindicales desido a su declamada fe peronista.

Por el contrario, ACIEL siguió haciendo reclamos al gobierno, hasta último momento, por la "derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, por sus vicios totalitarios...Reglamentación del derecho de huelga, cuyo ejercicio abusivo ocasiona ingentes daños a la Nación y perturba la paz social...(y la) revisión del sistema provisional".

Sin embargo, las divergencias entre la SRA y la UIA surgían en torno a la política económica del gobierno.

Si bien, como ya se señaló, el sector más poderoso de la burguesía está constituido por un grupo de empresarios con intereses diversificados hacia el conjunto de las actividades económicas, industrial, financiera, comercial y terrateniente, y que integran las organizaciones empresariales de todos esos sectores, sin embargo, cada una de esas organizaciones -SRA, UIA, CAC, etc.-, debe expresar los intereses específicos del sector económico a que pertenecen, de acuerdo a los requerimientos del conjunto de sus asociados cuyos intereses se concentran en una sola actividad económica.

Así, la SRA, aunque se encuentran en ella terratenientes con inversiones en el sector industrial, financiero o comercial, seguía sosteniendo la tradicional postura de la oligarquía terrateniente en cuanto a que "Nadie duda que el campo es la gran fábrica que tiene el país".

Dado el clima re reacción antiperonista que reinaba en el país desde 1955, las posiciones de la SRA eran determinantes en la línea política de ACIEL. De hecho, la frase citada arriba acerca del carácter agrario de la economía argentina aparece en una declaración de esta agrupación empresarial.

C. Florit, integrante del gobierno frondizista, señala la reticencia con que los sectores terratenientes tradicionales veían su política industrializadora: "La intelligentsia tradicional se apercibió de que la enorme capacidad de compromiso del gobierno de Frondizi no llegaría, con ser tan grande, a permitir que la oligarquía mantuviera su prestigio político, social y económico sobre la base de la persistencia de la estructura agroimportadora tradicional".

Esta posición debía acarrear diferencias con los intereses de la UIA en el plano económico, y en un momento surgió al interior de esta entidad una corriente que se mostró proclive a un acercamiento con la CGE y a apoyar al gobierno.

La posición de ACIEL siguió siendo, sin embargo, de oposición al gobierno, dada la importancia fundamental que tenía entonces el problema político y sindical y la línea seguida en ese terreno por el gobierno.

Dentro de las Fuerzas Armadas, el sector más fuertemente antiperonista del Ejército y la Marina se dedicarán a una permanente conspiración contra el gobierno, en cuya política de alianza con el peronismo verán una claudicación y una traición hacia la "Revolución Libertadora", hasta derribarlo mediante un nuevo golpe en marzo de 1962.

Este grupo de militares "gorilas" coincidía también con los sectores terratenientes más atrasados en su oposición a la política de industrialización del gobierno, señalando que llevaría a la proletarización del campesinado y por lo tanto a su politización.

Dado que este sector militar consideraba al peronismo como la antesala del comunismo, el conjunto de la política de gobierno de Frondizi era visto entonces como el camino que llevaría a ese régimen.

La posición de Estados Unidos frente al gobierno de Frondizi

Durante el gobierno de Frondizi tuvo lugar el triunfo de la revolución cubana y surgió el programa de la administración Kennedy de la Alianza para el Progreso, que tenía por objetivo impulsar el desarrollo en Latinoamérica para eliminar los problemas más graves de pobreza y evitar así el estallido de nuevas situaciones revolucionarias.

Este programa llega a proponer la necesidad de realizar una reforma agraria en el continente para eliminar uno de los principales obstáculos al desarrollo. También promueve una reforma fiscal para terminar con la habitual evasión al pago de impuestos por parte del empresario latinoamericano.

Estas medidas atacaban intereses muy arraigados en muchos países de Latinoamérica y fueron resistidas por las oligarquías tradicionales de la región.

Desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado norteamericano se apoya entonces al programa desarrollista de Frondizi, incluso su política de alianza con el peronismo para acceder al gobierno y aplicarlo.

La alianza con los sectores populistas por parte de los políticos promotores del desarrollismo ya había tenido lugar en Brasil cuando, poco tiempo antes que Frondizi, J. Kubitschek al frente del Partido Social Demócrata, representativo de los sectores más modernos de la burguesía industrial y agraria del centro-sud brasileño llegó al gobierno con el apoyo del populista Partido de los Trabajadores Brasileño dirigido por J. Goulart y aplicó una política de desarrollo que en gran parte se apoyó en inversiones de capital extranjero, con lo que desde entonces en ese país "El elemento central del patrón de acumulación reside en el liderazgo del sector industrial productor de bienes de consumo durable y, más específicamente, en la industria automovilística que, como el resto del sector, es controlada por empresas de capital extranjero".<sup>2/</sup>

Pero en el Pentágono la posición era de rechazo a las alianzas de los gobernantes latinoamericanos con los sectores populistas, oponiéndose por lo tanto a la política de la administración Kennedy de apoyar esos acuerdos y promover el desarrollo como forma de afianzar la "seguridad" en el continente. Por el contrario, los militares norteamericanos promovían, para evitar el surgimiento de situaciones revolucionarias, aplicar una política de endurecimiento de la represión, coincidiendo con el punto de vista de los militares gorilas argentinos.

También los monopolios del complejo militar industrial estadounidense se oponían a la Alianza para el Progreso, ya que "para los monopolios (y sus aliados naturales, los ambiciosos hombres del Pentágono) cada dólar de los contribuyentes norteamericanos que se destina a las naciones subdesarrolladas se pierde para los planes de la industria bélica. La Alianza del presidente Kennedy, pues, es obstruida por todos los medios posibles. En este mismo punto se produce el tácito acuerdo con las oligarquías nativas de América Latina, a quienes perturba la idea de un continente semiindustrializado con dólares norteamericanos, pues saben que el cambio de la estructura económica engendra modificaciones sociales y políticas que concluyen con la pérdida del poder por la antigua clase dominante".

Cuando la conspiración golpista contra Frondizi encabezada por los militares gorilas y la oligarquía tomaba cuerpo, desde la Casa Blanca se emitieron declaraciones dirigidas a los conspiradores insinuando que "si destituyen ustedes a Frondizi no habrá dólares. Frondizi pudo sostenerse algo más, hasta que vía Pentágono, el legislador Stuart Symington declaró que si los militares tomaban el poder, los Estados Unidos tendrían que seguir debatiendo con ellos los problemas comunes, tales como los militares, económicos y demás. La inferencia era: señores militares, no se preocupen por lo que diga Kennedy, con ustedes el golpe que de todos modos habrá dólares".

La consolidación del "peronismo"

Al asumir el gobierno, Frondizi impulsó una política de negociación con los dirigentes sindicales peronistas. El presidente ofrecía su apoyo a esta dirigencia a cambio de que ella adoptara una actitud "responsable", de contención de las bases.

El gobierno decreta una amnistía para los políticos y sindicalistas peronistas que desde el gobierno militar anterior estaban proscritos. Restituyó la personería jurídica a los principales gremios de indiscutible liderazgo peronista, la Asociación Obrera Textil (AOT), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de la Carne, y Sanidad. Es derogado el decreto que prohibía las actividades peronistas y, finalmente, se aprueba la nueva Ley de Asociaciones Profesionales, similar a la que había regido durante el gobierno peronista y tendiente a asegurar el control centralizado de los sindicatos por parte de los dirigentes peronistas, evitando el surgimiento de dirigencias alternativas más radicalizadas.

Al mismo tiempo los dirigentes peronistas consolidan su control sobre las 62 Organizaciones, expulsando a los dirigentes comunistas de la dirección.

Sin embargo las relaciones gobierno-sindicatos comienzan a hacerse tirantes hacia fines de 1955 cuando el gobierno orienta la política económica de acuerdo a las recomendaciones de las misiones del FMI que comienzan a llegar al país, y el conflicto estalla abiertamente tras la aplicación del Plan de Estabilidad y Desarrollo confeccionado en base a esas recomendaciones.

Tras la aplicación de ese Plan, la reacción obrera y la declaración por parte del gobierno del estado de sitio incluido en el Plan Combates, cientos de dirigentes y obreros son arrestados y se da participación en la represión a las Fuerzas Armadas. Las 62 declaran la guerra al gobierno y lanzan los paros generales, uno por 48 horas seguido de otro por tiempo indeterminado. El gobierno allana entonces los principales gremios peronistas y quiebra intencionalmente la UOM, la AOT y Carne. También son intervenidos los tres sindicatos con dirigencia comunista, la Unión Obrera de la Construcción (UCC), el sindicato de la Madera y el de Químicos. Los principales dirigentes sindicales del peronismo, Ventura (UOM), Cardozo (Carne), Alonso (AOT) y A. Gómez (Sanidad) son detenidos.

Las medidas económicas impuestas para llevar a cabo el programa desinflatista obligan al gobierno a tomar una posición respecto al tema de

calismo, acorde a los requerimientos de la burguesía monopólica. Uno de sus principales representantes, Méndez Delfino había expresado meses antes que "...la solución no puede lograrse sólo con medidas económicas. La economía está tan vinculada a la cuestión social que aquélla no podrá lograr estabilidad mientras siga jugada por la presión de las fuerzas sociales que interfieren tan seriamente el proceso económico".

Ante la ola represiva disuelta, la dirigencia peronista levanta el paro por tiempo indeterminado y busca una conciliación con el gobierno. Es a partir de entonces que se produce un giro fundamental en la estrategia de los dirigentes del sindicalismo peronista. Hasta este momento y hasta 1955 la lucha por la recuperación del control de los sindicatos intervenidos por la dictadura de Aramburu había sido llevada paralelamente con la lucha de las bases por reivindicaciones salariales.

Las medidas represivas adoptadas por Frondizi provocarán la primera quiebra de la lucha salarial de los trabajadores desde 1955. Como ya se señaló, en 1959 hubo una fuerte caída de los salarios, preparando el terreno requerido por el capital extranjero para entrar al país. Los dirigentes peronistas retornan, sin embargo, al diálogo con el gobierno buscando retomar el control de los sindicatos intervenidos, pero ahora a través de una política de negociación desvinculada de la suerte de los salarios de los trabajadores. Se consolida así una política sindical centrada en los intereses burocráticos de la dirigencia, conocida en Argentina como "Vandorismo", cuyo lema será "golpear y negociar", llegando incluso al enfrentamiento con el propio Perón, que se opone a esa política negociadora temiendo que los sindicatos peronistas, a través de esa dirigencia, terminen siendo integrados al "Movimiento Nacional" que pretendía organizar y dirigir Frondizi.

Sin embargo el carácter de la política económica aplicada hacia totalmente inviable esa pretensión del presidente. Como señala Cavarozzi: "La crisis económica expandió el espectro de políticas que el Estado dispuso para hacer frente a huelgas y paros. Como señalaba el ministro de Trabajo... los trabajadores se encuentran confrontados con un 'estado de necesidad' que amenaza su subsistencia y en el que la apelación a los mecanismos de mercado resultó un arma menos costosa y tan eficaz como la aplicación de medidas represivas".<sup>11/</sup>

Sin llegar a la integración que buscaba Frondizi, las negociaciones con los sindicatos siguieron su curso y permitieron a estos últimos



conservar sus puestos en las direcciones de los sindicatos, llegándose a una situación en la que "La defensa exitosa de las posiciones ocupadas por el peronismo dentro del campo gremial coincidió con el arrasamiento de las trincheras defensivas del nivel del salario que los trabajadores habían levantado y mantenido durante los tres años anteriores".

El gobierno contribuye a este parcial divorcio entre las prácticas de los dirigentes gremiales y las acciones de sus bases obreras al acompañar la política económica antipopular con una mayor flexibilidad frente a los dirigentes peronistas que se prestan al diálogo y la concertación con el gobierno.

En los cuadros político partidarios del peronismo también se fortalece la tendencia a la negociación. El dirigente de tendencia más radical, J.W. Cooke es desplazado de la dirección política. En una carta a Perón de febrero de 1959 señala, previendo el futuro, que "...si (el partido justicialista) cae en malas manos tendrá mucho mayor poder destructivo contra nosotros que el que podría tener, en el mejor de los casos, contra nuestros enemigos". "...el partido justicialista actuará como franco del Movimiento y en lugar de ser un instrumento de la lucha contra la oligarquía será una parte del engranaje de la oligarquía". "En cada provincia hay un grupo (en el PC) que quiere ser incluido entre los 'buenos' que no darán mucho trabajo al gobierno. Lamentablemente, ese grupo es el que maneja, en estos momentos, la conducción en cada una de las provincias y se prepara a una elección a realizarse mientras la gente de combate está presa o prófuga".<sup>12/</sup>

En la dirigencia sindical peronista comienzan a delinearse tres posturas frente al gobierno pero que actúan en forma conjunta. La que tiene el peso preponderante es la dirigida por Vandor, a su izquierda se ubican los "duros" encabezados por A. Olmos y a su derecha al "integracionismo". Vandor agita la presencia de los "duros" para amenazar al gobierno y valorizar su posición negociadora y utiliza a los "integracionistas" como puente para negociar con el Estado.

Por otra parte, negociar con el sindicalismo también es una necesidad del gobierno para encontrar un punto en que apoyarse y resistir los golpes que desde la derecha -los militares rorilas y la oligarquía- recibe el gobierno.

El fraccionalismo en las Fuerzas Armadas

Desde el comienzo de la presidencia de Frondizi el sector gorila del Ejército adoptó una postura francamente golpista, contando con el apoyo de la oligarquía, de dirigentes de la UCR del Pueblo y, más adelante, de la Marina, sumándose a ellos la influencia del Pentágono.

Del sector nacionalista del Ejército provino el principal apoyo para el nuevo gobierno, los ex leonardistas Solanas Pacheco y Frimandes fueron nombrados ministro y subsecretario de Guerra respectivamente.

El sector liberal derivado del aramburismo, si bien no apoyaba oficialmente al gobierno, se oponía a la posición golpista de los gorilas, buscando con ello, como se señaló arriba, evitar las fracturas internas que producía en las Fuerzas Armadas el ejercicio directo del poder. Esta posición respecto del gobierno le valió a este sector del Ejército el apelativo de "Legalista".

Los gorilas seguían efectuando los mismos reclamos de los años anteriores, liquidación definitiva del peronismo, desmantelamiento de la CTA y los sindicatos peronistas, derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, etc.

El sector nacionalista, conocido entonces como "organicista", aspiraba a tutelar un movimiento sindical 'unido y con sentido de patriotismo' en el que reservaban un papel central a un peronismo convenientemente domesticado". De esta forma pensaba evitar que los trabajadores quedaran "a merced de la incertidumbre". Atribuía, por otra parte, un rol fundamental a las Fuerzas Armadas en la solución de los problemas nacionales.

Las medidas económicas de carácter neoliberal impuestas y la rearsión aplicada para sofocar la movilización popular de rechazo a las mismas, dando participación a las Fuerzas Armadas en los actos represivos, restó apoyo popular al gobierno, el cual quedó cada vez más sometido a la presión del sector duro de los militares.

A mediados de 1959 los gorilas se sublevaron contra el gobierno y logran el desplazamiento de Solanas Pacheco y Frimandes, con lo que el sector "organicista" pierde los principales apoyos dentro del gobierno.

Los "legalistas" se reclutaban principalmente entre la oficialidad de caballería y su principal baluarte era la guarnición de Campo de Mayo, cercana a la Capital Federal. Habían participado activamente en

el intento golpista de 1951 contra Perón, quedando arrestados muchos de ellos hasta la caída de ese gobierno, lo que les impidió tener un papel preponderante en el golpe de septiembre de 1955. Apoyaron luego al Gral. Aramburu y a su decisión de entregar el gobierno a Frondizi.

En este grupo de militares se fue conformando una tendencia desarrollista tecnocrática, lo que implicaba un grado de afinidad con la política económica de Frondizi.

La necesidad de mantener un clima de estabilidad política y la intención de terminar con el fraccionalismo al interior de las Fuerzas Armadas, determinaron que este sector militar apoyara la continuidad del gobierno frondizista, buscando evitar el involucramiento directo en el ejercicio del poder por parte de los militares.

Sin embargo, estos oficiales atribuían un papel fundamental a las Fuerzas Armadas en la vida del país. Uno de ellos dirá que "es el rol del Ejército, en particular, participar en la vida nacional funcionando como una fuerza activa en el desarrollo social y económico de Argentina. El Ejército será capaz de cumplir esta función por medio de varias inversiones y responsabilidades que ya había asumido en el sector económico. Usando de la influencia que él tiene por su posición de 'pivote' de la economía, el Ejército estará en posición de ayudar a delinear el futuro de Argentina en una forma legítima y constructiva, de acuerdo a los adherentes de esta nueva visión... Es tan ilegítima la intervención arbitraria de las Fuerzas Armadas en la política, como permanecer en un estrecho y estéril profesionalismo".

Algunos de éstos militares tuvieron cargos importantes en el gobierno de Frondizi, y uno de los más importantes de este sector era el gral. J. Alsogaray, hermano del que fuera ministro de Economía, Alvaro Alsogaray, uno de los principales representantes del capital extranjero en el país.

La participación de los militares en la economía del país es importante, a través de los establecimientos fabriles que posee cada una de las Fuerzas y de las sociedades mixtas en que éstas participan junto a empresarios civiles.

El Ejército, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, produce no sólo material bélico sino también componentes metálicos y químicos indispensables para la economía argentina, además de dedicarse a la investigación, la prospección minera y la formación de personal calificado que en ocasiones proporciona a la industria civil.

También la Marina posee grandes astilleros y la Fuerza Aérea diseña y construye aviones de combate.

Según algunos autores, la carrera militar se asemeja cada vez más a una carrera de empresario, y los oficiales conviven con empresarios civiles no sólo a través de la constitución de empresas mixtas sino también en los centros civiles de capacitación empresarial. "Así, entre los miembros de la comisión directiva del Instituto de formación de cuadros superiores (IDEA), se encuentran al lado de los representantes de Shell, IBM y Duperial, el subdirector de la Escuela Nacional de Guerra y el subdirectos de la DGF<sup>13</sup>".

También tienen participación en el manejo del importante sector público de la economía argentina.

El sector "legalista" del Ejército es el que comienza a introducir la "doctrina de seguridad nacional" elaborada en los Estados Unidos, en las Fuerzas Armadas argentinas. Consolidándose así las teorías del "enemigo interno" y las "fronteras ideológicas", por medio de las cuales, además de la custodia de las fronteras geográficas con los países vecinos, las Fuerzas Armadas se atribuyen la función de represión interna contra todos aquéllos cuyas ideas cuestionan el sistema socio-económico vigente en el país.

Anteriormente, las técnicas de lucha "antisubversiva" habían sido tomadas de los instructores del Pentágono y los franceses que las habían utilizado en sus guerras coloniales en Argelia e Indochina. Pero la "doctrina de seguridad nacional", dado el carácter social global con que encara la intervención de las Fuerzas Armadas en esa lucha, le proporciona a los militares un cuerpo doctrinario de mayores alcances, que le sirve de base para un proyecto de poder para ser aplicado en caso de tomar el gobierno.

Este proyecto puede englobar las intenciones industrialistas de los militares mediante la llamada "doctrina Mc Namara", según la cual, y así la toman los militares argentinos en ese momento, el desarrollo económico permitirá eliminar los bolsones de pobreza que son el germen de la subversión.

El golpe contra Frondizi

Hasta principios de 1962 el gobierno había logrado sortear la presión en su contra del sector gorila de los militares. Se dice que éstos efectuaron 32 "planteos" al gobierno a lo largo de su gestión.

Sin embargo los resultados de las elecciones de marzo de 1958 para elegir gobernadores en catorce provincias y renovar parte de la Cámara de Diputados.

El gobierno permitió la participación del peronismo aunque bajo otras siglas partidarias.

Aparte del compromiso que Frondizi había establecido con el peronismo antes de las elecciones que lo llevaron a la presidencia, la participación de ese movimiento en las nuevas elecciones había sido analizada por el gobierno y se había llegado a la conclusión de que sus resultados lo beneficiarían.

Por una parte, la política económica gubernamental hacía previsible que que la UCRI perdiera gran parte de los votos que había obtenido en febrero de 1958. De no presentarse el peronismo en las elecciones, parte de esos votos se dirigirían hacia el único partido importante de oposición en algunas provincias, entre ellas la importante de Buenos Aires, la UCRP, los ex correligionarios y ahora acérrimos de la UCRI. En la situación difícil <sup>en</sup> que se encontraba esta última en el ejercicio del gobierno, un triunfo de la UCRP hubiera significado un golpe prácticamente definitivo para Frondizi, más aun teniendo en cuenta las buenas relaciones de sectores de ese partido con los militares gorilas.

Pero al mismo tiempo, el gobierno especulaba con que, dadas las divisiones internas existentes en el peronismo, podría presionarse a los sectores más comprometidos en negociaciones con la UCRI y lograr que estos llevaran al peronismo a presentar más de una lista en cada provincia con la finalidad de dividir los votos peronistas y acrecentar las posibilidades del partido gobernante.

Esto ya había sucedido en las elecciones de unos meses antes en la provincia de Santa Fe, donde la división de las fuerzas peronistas permitió el triunfo de los candidatos oficiales por un estrecho margen.

La conducción nacional, política y sindical del peronismo, que ya hacía su propio juego cada vez más independiente de las directivas de Perón, fue acusada por sus militantes de sabotear la campaña electoral del partido además de provocar la división.

Pero esta vez Perón logró evitar las acciones divisionistas y el peronismo obtuvo la victoria en diez de las catorce provincias, entre ellas la de Buenos Aires.

\_\_\_ Inmediatamente las Fuerzas Armadas exigieron al gobierno la intervención de esas provincias para evitar la asunción de los nuevos gobernadores peronistas.

El problema se tornó insoluble para el gobierno. Rechazar esa exigencia, sólo podía hacérselo apelando al apoyo popular en contra de la presión militar, algo impensable después de la política antipopular que había seguido el gobierno a lo largo de su gestión. Aceptarla significaba acabar con todo viso de legitimidad del gobierno frente al pueblo y quedar a merced de las presiones golpistas del sector gorila de los militares.

Frondizi optó por el segundo camino y decretó la intervención federal en cinco de las diez provincias, incluyendo Buenos Aires, el nudo del conflicto.

Los sectores más duros de los militares aprovecharon entonces la situación de total desprestigio en que caía el presidente para impulsar un golpe de Estado. Los "legalistas" se oponían al golpe pero también se pronunciaron por la renuncia de Frondizi y reemplazarlo siguiendo las normas constitucionales para el caso de acefalía.

Finalmente se impuso esta línea y, ante la negativa de Frondizi a presentar su renuncia, fue arrestado por los militares y, al estar vacante en ese momento el cargo de vicepresidente, tomó la presidencia el presidente de la Cámara de Senadores, J.M. Guido.

Con respecto a los intereses que estaban detrás del golpe, se señaló entonces que "El golpe de los generales tuvo, sin duda, instigadores relativamente lúcidos y beneficiarios concretos. La mano del Pentágono, dedicada en todo el hemisferio a obstruir la Alianza para el Progreso; la experta delincuencia financiera de Pinedo (tradicional representante de la oligarquía terrateniente) y sus amigos; el interés británico para conservar un pie en la Argentina invadida por los yanquis; la glotonería de los ganaderos".<sup>14/</sup>

Las características del derrocamiento de Frondizi muestran un aspecto fundamental de la crisis política argentina.

En este país se señala habitualmente la incapacidad de las fracciones más fuertes de la burguesía, las del gran capital, para formar un partido con apoyo de masas que le permita acceder al gobierno por la vía constitucional, por lo que tienen que apelar

a golpes de Estado conducidos por los militares para hacerlo, ya que los grandes partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical y el Peronista, dada la propia dinámica electoral de la que dependen para llegar al gobierno, no estaban dispuestos a aplicar las políticas extremas exigidas por el gran capital.

La llegada de Frondizi al gobierno mostró por primera vez la posibilidad de que la burguesía industrial monopólica nacional y extranjera conformaran ese partido de masas que representara sus intereses en un gobierno democrático.

Como pudo verse más arriba, ese gobierno aplicó al pie de la letra todos los requerimientos en materia económica hechos por el gran capital y su representante internacional, el FMI.

Sin embargo, si bien esa política provocó una pérdida importante del apoyo popular que ese partido había obtenido en las elecciones que lo llevaron al gobierno, su caída no se debió a una insurrección popular sino, fundamentalmente, a las sacudidas que recibió desde "arriba".

Por un lado, de los sectores más retrógrados de la oligarquía terrateniente que querían conservar al país con una economía típica de fines del siglo pasado, de los sectores más antiperonistas de las Fuerzas Armadas, y, finalmente, las presiones señaladas del Pentágono destinadas a hacer fracasar la política del gobierno Kennedy.

Pero incluso, la oposición al gobierno provino de la organización empresarial ACIEL, donde junto a la SRA se encontraba la UIA, cuyos integrantes se beneficiaban con la política económica del gobierno y algunos de los cuales fueron ubicados por el gobierno en las Comisiones que manejaban la política relacionada con sus intereses.

La oposición de este sector empresario era producto, y demostraba, la ignorancia política y la actitud reaccionaria extremas de la clase dirigente argentina -especialmente de los representantes del gran capital- que contribuyó a derribar un gobierno que, dispuesto a aplicar el programa económico de esos sectores, buscaba un acercamiento con la dirigencia sindical peronista, repudiada por el gran capital, y que sin embargo, dadas sus características y su ideología peronista, era la más indicada para establecer canales orgánicos de control y negociación con la clase obrera dentro de los parámetros del sistema capitalista.

Pero si no se llegó a una insurrección popular durante ese gobierno, no a pesar de la política aplicada -aunque sí hubo una fuerte movilización por demandas económicas y en contra de ese programa, reprimida por el gobierno-, y de hecho no podía producirse tal insurrección ya que no existía entonces ninguna dirigencia política de la clase obrera capaz de llevarla hacia una movilización por cambios sustanciales y mucho menos hacia un camino revolucionario, algo de lo que los representantes del gran capital eran concientes, entonces hay que preguntarse por qué estos últimos mantienen esa oposición frontal e inflexible frente a todo lo que tuviera que ver con el peronismo.

Dada la evolución de la sociedad argentina hasta ese momento, se puede observar que la única alternativa con posibilidades reales de aplicación frente a la política del gran capital era el programa del capital medio nacional expresado en la CGE y apoyado por las declaraciones de la C3P, consistente en una política económica expansiva con crecimiento de la producción y el consumo. Política que favorece a los sectores del gran capital pero también al pequeño y mediano empresariado nacional, frenando el proceso de concentración del capital en manos de los grandes empresarios mono u oligopólicos.

Además, de acuerdo a cómo fue aplicado durante el gobierno de Perón, este programa implica una total liberalización de la economía tal como lo exigen los representantes del gran capital, e implica una importante intervención del Estado en la economía, fundamentalmente en sectores clave como el financiero a través del control de los depósitos bancarios por el Banco Central, y el exportador, quitándole a las empresas oligopólicas que actúan en él, el control de las divisas generadas por esa actividad, con la correspondiente cuota de poder económico y de presión política que ello implica.

A las características económicas de este programa hay que agregar sus efectos sociales. El crecimiento general de la economía implica un aumento del empleo y con ello de la autoconfianza de la clase obrera, alentando la movilización popular y el nivel de sus demandas, llevando de esta forma a la situación de "ascenso social de las masas" señalada en la cita de L. Jauretche de la página .

Se puede decir que este es el "programa máximo" de la burguesía nacional argentina, pero que también lo es para su clase obrera desde que el peronismo barrió con las ideologías de izquierda que lentamente estaban creciendo en esa clase en los años anteriores a 1943 y que podían llevarla hacia posiciones de confrontación con el sistema.



Desde el gobierno peronista en adelante, la inestabilidad y los enfrentamientos políticos en Argentina parecen girar fundamentalmente alrededor de la aplicación de uno u otro de estos dos programas económicos, y <sup>de</sup> sus implicancias sociales, el programa con tintes nacionalistas y reformistas que genéricamente podría denominarse de la CGE-CGT, y el programa del gran capital, y ninguno de estos dos sectores aceptó la aplicación del programa oponente sin tratar de derribar al gobierno que lo aplicara.

De tal manera, el profundo temor y rechazo del gran capital hacia el movimiento peronista parece surgir del hecho de que, si bien éste no es de ninguna manera revolucionario, permite la convergencia de la movilización de las masas trabajadoras con la presión de la masa del pequeño y mediano empresariado nacional por la aplicación del programa económico de estos sectores. Agregándose a ellos la presión de los partidos políticos y de los sectores medios que los apoyan, dada la mayor afinidad que este programa tiene con gobiernos democráticos. Mientras que el programa del gran capital sólo beneficia a una minoría de la sociedad y es más afín a situaciones autoritarias.

Si se tiene en cuenta cómo se resolvió finalmente este enfrentamiento, durante la dictadura videlista de 1976-83, en que no sólo fue aplastada la clase obrera sino también una gran parte del pequeño y mediano empresariado nacional, consolidándose en forma espectacular a partir de entonces el poder del gran capital, y si se tienen en cuenta los efectos sociales que están sufriendo los sectores populares argentinos después de esa victoria del gran capital, se comprende cuáles eran los objetivos últimos de esta minoría y por qué su inflexibilidad ante el populismo peronista y su necesidad de aplastarlo brutalmente, lo que al mismo tiempo permitió aplastar el incipiente surgimiento de sectores en las clases obrera y media, principalmente juveniles, que ya planteaban posiciones contra el sistema capitalista.

## El gobierno de Guido

Durante este gobierno culminaron los enfrentamientos internos en las Fuerzas Armadas, llegándose a la confrontación armada en dos oportunidades.

La falta de sustento real en la sociedad de este gobierno llevó a que en gran parte éste actuara como una fachada constitucional que encubría la lucha por el poder desarrollada entre los distintas fracciones de las Fuerzas Armadas y los sectores sociales que cada una representaba, reflejando, por ejemplo en la composición de los distintos gabinetes ministeriales que se sucedieron, las etapas por las que pasó este enfrentamiento.

Esta misma característica del gobierno acentuó la tendencia de los distintos sectores de la sociedad argentina a actuar abiertamente, apelando a los recursos de presión que cada uno de ellos posee, para reclamar del Estado medidas en su beneficio. Así lo hicieron las dos fracciones de las Fuerzas Armadas, los "legalistas" y los "gorilas", conocidos como "Azules" y "Colorados" durante sus enfrentamientos; las centrales empresariales, ACIEL y CGE, los partidos políticos y los sindicatos. Aunque en el caso de estos últimos, su capacidad de movilización fue limitada debido a la profunda recesión económica que se vivió durante este gobierno, desatada al aplicar las recetas de la ortodoxia económica liberal para "sanear" la economía, principalmente la deficitaria balanza de pagos que había dejado la política económica de Frondizi.

Dado que el problema de la sucesión presidencial a la caída de Frondizi se resolvió de acuerdo al plan de los militares legalistas, y la permanencia en el gabinete de ministroa del anterior gobierno, los militares gorilas comenzaron a acentuar la presión sobre el gobierno de Guido y, ante el retroceso de éste frente a esas presiones, se produjo la renuncia del gabinete y su reemplazo por otro en que predominaban los hombres cercanos a los gorilas. De los ocho ministros, seis eran socios desde hacía más de quince años del Jockey Club, donde se reúnen los más importantes exponentes de la tradicional oligarquía argentina.

El avance de los gorilas aumentaba el peligro de un golpe de Estado, con la toma del gobierno nuevamente por los militares y la persistencia del fraccionamiento al interior de sus filas.

Ante nuevas presiones sobre el gobierno del sector gorila y cuando nuevamente cedía ante ellas el presidente Guido, los legalistas decidieron movilizarse y enfrentar a sus oponentes.

Las acciones se prolongaron desde el 18 al 23 de septiembre de 1962, dedicadas fundamentalmente a la movilización y toma de posiciones, no llegando los enfrentamientos a adquirir gran magnitud e imponiéndose finalmente la superioridad en fuerzas de los legalistas -"Azules".

Los militares gorilas -"Colorados"- fueron entonces removidos de sus puestos de dirección en el gobierno y las Fuerzas Armadas, llevándose a cabo en estas últimas una purga en la que fueron separados de los cuadros un total de 140 oficiales, arrestándose a 13 generales y 85 oficiales superiores. El jefe de los Azules, gral. Onganía se convirtió en el comandante en jefe del Ejército.

El último intento de los Colorados por recuperar posiciones se produjo el 2 de abril de 1963 con el levantamiento de la Marina apoyada por oficiales gorilas retirados del Ejército y la Fuerza Aérea,

El movimiento fue nuevamente sofocado por los Azules, consolidándose su supremacía dentro de las Fuerzas Armadas.

Según un análisis de la situación en que quedan las Fuerzas Armadas en ese momento, sus líneas internas son: 1) Los Azules-Azules, todos los coroneles y cuatro generales; 2) Un grupo liberal-legalista alrededor de los generales J. Alsogaray y A. Lanusse, dos hombres muy influyentes en el Ejército y que tienen antenas políticas de primer orden; 3) Una masa importante de oficiales (420) de rango medio (comandantes y teniente-coroneles) que, sin ser colorados, han rehusado reprimir a sus camaradas y consideran ante todo la unidad del Ejército; 4) Una línea nacionalista en sentido amplio que va desde los lonardistas hasta un cierto progresismo encarnado en el gral. Rosas; 5) Una quinta línea encarnada en el gral. Onganía. <sup>15/</sup>

Las tres fuerzas predominantes del campo político

Paralelamente y en relación con el enfrentamiento militar, se van conformando durante este período las tres fuerzas predominantes en el campo político.

Dos de ellas son las ya mencionadas anteriormente alrededor de los programas económicos del gran capital y de la CGE-CGT.

El nivel a que llegaron las diferencias entre la CGE y ACIEL durante los enfrentamientos entre Azules y Colorados, y dado el apoyo a las posiciones golpistas de los Colorados por parte de ACIEL, se hizo público a través de una fuerte declaración de la CGE en la que señalaba que "Las reacciones de repudio contra el golpismo, que volvió a poner a las fuerzas armadas al borde de la guerra civil, han sido generales, tanto que hasta los sectores fabriles han debido registrar públicamente su protesta. Sólo callan los esperanzados en una victoria que se malogró. En la ocasión menester es interpretar esta actitud de ACIEL a través de su posición interamericana. Beligerante, por tanto. Su estrategia, según sus hechos, podría concretarse a lo siguiente: o el Estado argentino hace lo que conviene a los intereses internacionales sostenidos por los dirigentes de ACIEL, o ACIEL se coloca frente al Estado, reclamando vía libre para cuanto imponga el FMI. De lo contrario, airada desaprobación da ACIEL, en defensa de los derechos, casi divinos, de la libre empresa. En cambio, si la imposición exterior perjudica al país, ACIEL se contrae. Calla. Lo mismo ocurre si, por imposición del FMI, no se pueden emitir los pesos que necesita el desenvolvimiento económico, provocando una carestía usuraria del crédito mercantil, que encarece el costo de producir y, por tanto, los precios para el consumo. Esa carestía de costos, al elevar los precios, baja los niveles de vida, provocando el alza de las retribuciones y, con ello las huelgas que tanto desorden público ocasionan. Calla también si un comando, más o menos accidental, desaloja a otro comando, con subsidiario desalojo de algún presidente de la Nación. Lonardi antes, Frondizi ahora. Calla cuando se anulan mandatos de la soberanía popular, en los cuales está el signo distintivo de la democracia representativa, proclamada por el interamericanismo como ineludible condición basamental".

La transcripción de esta extensa cita se efectuó por condensarse en ella de manera precisa las implicaciones sociales y políticas de

tiene para el conjunto de la sociedad la aplicación del programa económico del gran capital o el de la burguesía nacional que reúne el apoyo de los sectores sociales mayoritarios.

A través del acercamiento entre las instituciones que representan a estos sectores se conforma la fuerza política que canaliza la corriente social mayoritaria que se opone al golpeismo y reclama "la vuelta a la normalidad institucional".

La CGE y la CGT llegan a un acuerdo público por el que se firma un Pacto Social y se prevé la futura constitución de un Consejo Económico-Social.

En la CGT se organizan Jornadas Económicas en las que exponen empresarios y economistas de tendencia nacionalista reformista que pertenecen a la CGE y de reconocida trayectoria en el país, como A. Ferrer, H. Giberti, C. Emerito González, A. Caffiero, G. Di Tella y A. Gómez Morales.

Con respecto a la CGT, sin embargo, hay que señalar que si bien esta posición adoptada públicamente y en sus declaraciones es coherente con su ideología y su tradición peronista, sus principales dirigentes comienzan en ese tiempo a distanciarse de esa posición. La dirección que ejercen en los sindicatos nacionales los pone en contacto con las grandes empresas líderes en las diferentes ramas industriales, lo que los lleva progresivamente a adoptar las posiciones del gran capital y distanciarse del <sup>programa</sup> reformista. Aunque la tendencia de estos dirigentes es a actuar cada vez más en forma independiente de las directivas de Perón, todavía no tienen la capacidad de imponer esta nueva línea abierta y explícitamente a la CGT como institución, dado el peso que todavía conserva su línea tradicional.

La CGE realiza también una convocatoria ante los partidos políticos para presentarles las "Bases para un plan económico-social", a la que responden la UCRP, la UCRI, el Peronismo y la mayoría de los restantes partidos.

Entre tanto, comienza a conformarse una tercera fuerza política alrededor del programa "desarrollista". Participan en ella políticos cercanos al frondizismo, oficiales militares legalistas industrialistas, asesores civiles economistas, sociólogos y politólogos, representantes del capital monopolístico y algunos dirigentes sindicales peronistas.

Estos sectores tratan de conformar un "Frente Nacional y Popular", de carácter similar al intentado por Frondizi, para llegar al gobier-

no en las próximas elecciones presidenciales programadas para el 7 de julio de 1963.

Pero el camino electoral se vio interrumpido para esta fuerza. Aunque los Azules se habían impuesto finalmente a los Colorados, los primeros, como se vio, no eran una fuerza homogénea, existiendo distintas corrientes en su interior. En el manejo de la situación política nacional se impuso la línea más dura que, además de oponerse al retorno del peronismo al poder como la mayoría de los Azules, también se opuso a su integración al sistema político aun bajo la forma de un Frente como el que había llevado a Frondizi a la presidencia.

Desde el ministerio del interior, controlado por esa línea dura, se desató una persecución contra dirigentes peronistas y frondizistas, difundándose un comunicado en el que se hacía referencia a "un grupo llamado frigerista, por el nombre de su jefe visible Rogelio Frigerio (el principal asesor de Frondizi)...grupo de gente que comparte una posición marxista-leninista insurreccional de tipo latinoamericana...grupo que se infiltró en los medios económicos aprovechando circunstancias anormales que conoció el país y de los cuales es en parte la causa (y que) ha obtenido un inmenso poder." 17/

Esta declaración, que después de lo que había sido el gobierno de Frondizi una vez que éste se doblegó ante las presiones del gran capital, aparece como totalmente fuera de lugar, se explica, en parte, por las características del gral. Rauch, quien dirigía ese ministerio y declaraba en esos momentos haber descubierto un complot "judío-capitalista-marxista-leninista", expresión típicamente nazi y que deja ver el carácter de algunos componentes del sector "legalista" de las Fuerzas Armadas, al que se acercaba la ideología corporativista de su principal dirigente, el gral. Onganía que encabezaría la próxima dictadura militar a partir de junio de 1966.

Al Frente Nacional y Popular se le impidió entonces presentar candidatos de origen peronista, y ante nuevas trabas impuestas por el gobierno, Perón y Frondizi optaron por ordenar a sus seguidores votar en blanco, con lo que triunfó en las elecciones el único partido de importancia que participaba, la UCRP, con el 21% de los votos emitidos.

La cuestión del peronismo quedaba así sin resolverse. El golpe contra Frondizi y las trabas puestas al nuevo Frente en las elecciones demostraban la imposibilidad de integrarlo a la legalidad. Pero la derrota de los militares gorilas mostraba también la inviabilidad de una solución basada exclusivamente en la fuerza.

El gobierno radical de J. Illia

La política económica y la posición del empresariado

La UCRP había adelantado en su campaña electoral las dos principales medidas económicas que tomaría en caso de asumir el gobierno, anular los contratos firmados por Frondizi con las compañías petroleras extranjeras y cortar relaciones con el FMI.

De este forma quedarían eliminados los pilares fundamentales de la política desarrollista iniciada en aquel gobierno, lo que atraería sobre el nuevo gobierno la oposición de los intereses internos y externos que habían impulsado aquella política.

Pero la implementación de algunas medidas de carácter intervencionista en la economía por parte del Estado provocarían la oposición también de la burguesía monopolística agrupada en ACIPL.

La UIA, integrante de ACIPL, recibió al nuevo presidente con una declaración en la que lo conminaba a seguir la política requerida por esa entidad, acompañando esto con una velada amenaza: "El partido honrado con su elección ha logrado una parte del gobierno, pero no todo el poder. No es mayoría legislativa. No ha triunfado en todas las provincias. No gravita ni decide en la magistratura oficial y no detenta los comandos militares... Creemos, Dr. Illia, que Ud. prestará servicios excepcionales al país con sólo lograr los siguientes objetivos: a) Obtener balances de pagos favorables en el exterior; b) Hacer que el Banco Central cumpla su misión específica ajustando los medios de pago internos al volumen real de los negocios y resistiendo la espiral inflacionista; c) Reduciendo el déficit fiscal y también las cargas impositivas para capitalizar el país".<sup>18/</sup>

En otras palabras, se exigía, obtener mayores saldos exportables que, según ya se señaló, sólo provienen de reducciones en el consumo interno; y aplicar políticas monetaria y fiscal restrictivas. Reclamos de carácter opuesto a los efectuados por la CGD en las declaraciones ya mencionadas.

El gobierno aplicó una política expansiva, opuesta a los reclamos de la UIA y de todos los sectores monopolísticos que reclaman constante estas políticas recesivas tendientes a lograr supervivencia en la balan-

za de pagos.

La política expansiva favoreció el desarrollo del conjunto del empresariado nacional, interrumpiendo momentáneamente la tendencia a la concentración del capital y monopolización de los mercados en manos de los sectores más poderosos.

Ayudado por el aumento de las reservas derivado del superávit comercial con el exterior en 1963 debido a la recesión de ese año, más una buena cosecha en 1964, el gobierno logra un crecimiento del producto interno del 8.1% y 8.6% en 1964 y 1965. ~~El gobierno logra~~ solamente volver a poner en marcha la capacidad productiva que había quedado ociosa en la crisis de 1962/63.

La producción industrial creció de un índice 100 en 1963 a uno de 113.7 en 1964 y 126.7 en 1965. <sup>19/</sup>

Al mismo tiempo se aplican medidas intervencionistas y de regulación de la economía.

Se crea el Consejo Nacional de Abastecimiento y el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ambos dando participación a la CGT, se congelan las tarifas públicas, se fijan precios máximos para los productos de primera necesidad, se reglamentan las operaciones con divisas, el Estado interviene en las exportaciones de cereales, dirigiendo parte de ellas a la URSS y China.

Estas medidas acentúan aun más las protestas de los sectores monopolísticos. La ERA las declara "totalitarias" y ACOIEL declara "fuera de la ley y anticonstitucional la intervención del Estado en la economía". "La oposición de los medios patronales toma el camino de la desobediencia civil. Los industriales sabotean el plan de recuperación económica y se niegan a pagar impuestos y cotizaciones sociales".

En 1964 ya se produce una escasez de divisas a pesar de las importantes exportaciones. Los terratenientes se rehusan a cambiarlas en un mercado en el que el Estado actúa como intermediario, exigiendo volver al libremercado absoluto.

Desde el exterior también se sabotea al gobierno. Las inversiones de capital, que durante el período de Frondizi eran de 100 a 120 millones de dólares por año en promedio, bajan a 34.6 y 33.8 millones en 1964 y 1965. La revista Business Week, de predicamento entre los medios económicos internacionales, comenta que "El problema básico de la Argentina es debido a la constante intervención del gobierno en la economía... Este patrón de conducta fue establecido por el dicta-



por Juan Perón, parcialmente revertido por Frondizi, pero ahora solidado con una fuerza por Illia". Agregando que Illia "se atomizó a los nuevos posibles inversores... Uno de los primeros actos de Illia al tomar el gobierno fue anular los contratos bajo los cuales compañías estadounidenses y de otros países extranjeros habían estado produciendo petróleo para el monopolio estatal, YPF... En lo que respecta a la importación, el balance es ayudado por las ventas efectuadas por los organismos gubernamentales de la gran cosecha de trigo a China roja y otros países a altos precios". (Business Week, 2-V-64, p.54).

Las características del crecimiento económico en Argentina y el boicot realizado por estos sectores condujeron a que en la última parte de este gobierno -antes de ser derrocado por el golpe militar del 25 de junio de 1966- se llegara a un abogo financiero que obligó al ministro de Economía J.C. Pugliese a dirigirse al director general del FMI pidiendo un préstamo por 30 millones de dólares. En la nota enviada "se destaca con absoluta claridad el acomodamiento de toda la política económica de la República del Plata a los intereses de los inversores e importadores extranjeros".<sup>20/</sup>

### La política de los sindicatos

Durante los primeros meses del gobierno de Illia no se produjeron enfrentamientos importantes con la CGT, en parte debido a las medidas económicas aplicadas por el equipo económico gubernamental.

Pero a mediados de 1964 comienza una etapa de fuerte movilización de los trabajadores.

El gobierno pretendía en ese momento poner un tope del 15% a los aumentos salariales que tendrían lugar con la renegociación de los contratos colectivos.

La CGT aplicó una nueva etapa del Plan de Lucha consistente en la toma de establecimientos por los trabajadores. En mayo de ese año se hablaba de 11 000 establecimientos tomados con la participación en las movilizaciones de cuatro millones de trabajadores.

Aunque había también otras causas que impulsaban a los dirigentes sindicales peronistas a intensificar la movilización obrera.

Ante la proscripción política del peronismo desde 1955, la burocracia sindical peronista, impedida de tener acceso al Estado a través

del sistema electoral, se comprometió, con Vandor a la cabeza, en la alianza desarrollista organizada por el frondist-frigerismo, mediante lo cual volvió a ser parte de la alianza gobernante como lo había sido durante el gobierno peronista, contando incluso durante el gobierno frondizista con un mayor grado de autonomía.

Tras el golpe que derrocó a Frondizi en marzo de 1962, esta estrategia quiso ser reeditada mediante la participación en el Frente Nacional y Popular con el que se buscó llevar a la alianza desarrollista nuevamente al poder en las elecciones del 7 de julio de 1963.

El triunfo de la UCRP en estas elecciones mostraron que el camino electoral al poder estaba bloqueado. Por otra parte, las trabas puestas por los militares anules al Frente antes de las elecciones señalaban que este sector militar, ahora dominante en las Fuerzas Armadas y en el que también se había conformado una tendencia desarrollista, no pensaba llevar a cabo el proyecto desarrollista a través de un gobierno elegido con participación de las mesas.

Por lo tanto, durante el gobierno de Illia, en el que el proyecto desarrollista apoyado en las inversiones de capital extranjero había quedado interrumpido, todo se orientaba a reimplantar tal proyecto pero a través de un gobierno autoritario conducido por las Fuerzas Armadas.

La burocracia vandorista, que con el gobierno de Illia quedaba al margen del poder, especulaba con el hecho de que la necesidad de las Fuerzas Armadas de obtener apoyo para su futuro gobierno las obligaría a negociar con los dirigentes sindicales del peronismo que se prestasen a dar este apoyo.

Es por ello que durante todo el gobierno de Illia se mantuvieron contactos entre estos dirigentes y los militares en vistas al nuevo régimen que se implantaría.

Por otra parte, esta política de los dirigentes vandoristas que quitaría al movimiento peronista de las manos de Perón, llevó al enfrentamiento abierto entre éste y Vandor. Utilizar una estrategia electoral para llevar al peronismo al poder fortalecía la posición de Perón frente a la de Vandor, pues tal estrategia ponía en primer plano a la estructura político partidaria del peronismo, en la que el liderazgo de Perón era innegable. Pero anulada la política electoral, cobraba preeminencia el aparato sindical del movimiento peronista, en el que prevalecía el liderazgo de Vandor.

Por todo esto, el camino al poder del vandorismo ya estaba deci-

dillo, apoyar a los militares en su nuevo ascenso al gobierno a través de un golpe de Estado.

El diálogo entre sindicalistas y militares se hizo público a mediados de marzo de 1966 cuando altos oficiales y numerosos líderes peronistas concurren a la cena en el sindicato de Luz y Fuerza en Honor del genl. J. Leal, líder de la expedición militar a la Antártida. Representando al comandante en jefe del Ejército estaba el genl. Jausse, uno de los militares más antiperonistas, que había pasado cuatro años encarcelado durante el gobierno de Perón. Su presencia en esta reunión señalaba una nueva fase en las relaciones entre militares y sindicatos. <sup>21/</sup>

Para preparar el terreno para el golpe había que crear en la opinión pública la idea de ineficacia y de la necesidad de terminar con el gobierno de Illia. A ello contribuía una movilización que había llegado a ser incontrolable para ese gobierno.

La preparación del golpe de Estado

En la preparación del clima necesario en la opinión pública para el golpe también tuvo especial importancia la utilización de los medios de comunicación. "Es el caso, en particular, de la prensa frentista (por el Frente Nacional y Popular), de los medios de información frondistas y de ciertos órganos ligados a los medios patronales tradicionales. Dos semanarios de gran tirada, creados por un periodista de gran talento cercano a Frigerio, juegan en particular un papel eminente a este respecto. "Primera Plana", nacido sobre los fondos bautismales aportados por los militares Azules después de su victoria de septiembre de 1962, inaugura una fórmula atrayente de revista de información general a la americana, inédita en Argentina. De donde su audiencia muy amplia entre las nuevas clases medias, los cuadros (sectores dirigentes) y los medios de negocios. Este semanario recibe una abundante publicidad de grandes sociedades nacionales y extranjeras (más del 20 % de la superficie, lo que es nuevo en Argentina). Sus artículos promueven un ideal de eficiencia y de dinamismo económico donde el desarrollismo frondizista se encarna en el mito adulador del manager y del ejecutivo. Su línea política es azul, por lo tanto militarista. Después de algunas vicisitudes debidas a una lucha cerrada alrededor de la propiedad del título, Primera Plana, cuyo editorrialista es N. Gronsona ex-subsecretario del Interior y colaborador de Rodolfo Martínez bajo Guido, se especializa en 1965 en la propaganda.

nutchista y la exaltación de la eficacia militar. "Confirmado", creado en mayo de 1965 por el fundador de Primera Plana y según la misma fórmula, tiene por subdirector un teniente coronel que viene de los directorios de la Fiat-Argentina y por columnista a Rodolfo Martínez y Alvaro Alsogaray. Un solo objeto: el golpe." <sup>22/</sup>

Los artículos publicados versan a menudo sobre la ineficacia del gobierno, desacreditan el sistema parlamentario y a los partidos políticos.

El editorialista de Confirmado, el neo-falangista M. Montemayor publica un artículo el 30 de diciembre de 1965 con una foto del comandante en jefe del Ejército, gral. Onganía, en el que afirma que "El país está maduro para la gran solución nacional". El comodoro Güiraldes había, el 26 de agosto, "anunciado una revolución: es decir un derrocamiento del gobierno al servicio de un gran objetivo nacional: poner el país en marcha...". Un artículo del 23 de diciembre de 1965 adelanta la fecha del golpe: el 1º de julio. Erró por tres días.

También en los centros de formación de cuadros empresarios, como la ya mencionada IDPA, fundada por un grupo de grandes empresas en su mayoría extranjeras, en la que se reúnen sus ejecutivos con militares que incursionan en la actividad económica, contribuyen a difundir esa nueva ideología desarrollista y eficientista. Además, la formación "cívico-político-comunitaria" (algo que será muy escuchado durante la dictadura de Onganía) de los administradores de empresa ocupa un lugar importante en los programas. Los contactos e intercambios con los jefes del Ejército se efectúan en forma seguida e institucionalmente.

"La escuela de cuadros de la CFT, puesta en las manos de la extrema derecha nacional católica, es el tercer pilar del 'cambio'. Ella forma sindicalistas 'nacionales' hostiles a las reivindicaciones de clase." <sup>23/</sup>

Y mientras los dirigentes peronistas completan en los sindicatos con los militares Azules, los antiperonistas extremos, recordando a la "Revolución Libertadora" llaman también al golpe de Estado. Contra la posibilidad de una victoria peronista en las elecciones parlamentarias y para gobernadorés que debían realizarse en 1967, ellos consideraban "necesaria una revolución en la cual se unieran todos los argentinos que aspiraran a la grandeza nacional".

Finalmente, el 23 de junio de 1966, sin enfrentar ningún tipo de oposición popular, una compañía de gases de la policía desalojó al presidente Illia de la Casa Rosada.

CAPITULO 5: La dictadura de 1966-1973

El golpe de Estado del 23 de junio de 1966 fue un nuevo intento autoritario por terminar con la situación de crisis que se vivía en Argentina desde 1955. Crisis política acompañada por constantes fluctuaciones en la economía, con caídas de la producción, de la inversión y alzas inflacionarias incontroladas, llegándose a profundas recesiones como la de los años 1962-63.

Desde el derrocamiento del gobierno peronista, las clases dominantes se mostraban incapaces de institucionalizar su dirección sobre el resto de la sociedad.

Por un lado, se hacía necesario reinstaurar el sistema democrático de gobierno para legitimar esa dominación, pero al mismo tiempo, aquellas clases impedían la participación del peronismo en los sucesivos intentos de redemocratización, no porque este movimiento tuviera un programa revolucionario, sino porque su participación en las contiendas electorales y su probable victoria abrían las puertas a la movilización de masas encabezada por la clase obrera.

La cuestión fundamental era el temor de las clases gobernantes ante la posibilidad del ingreso de los sectores populares al primer plano de las decisiones políticas, lo que implicaría un cogobierno efectivo con la masa popular.

El fantasma contra el cual se levantaba el sector más reaccionario civil-militar era el de una enorme masa popular en alianza activa con una intelectualidad apoderada de las universidades estatales, las que, según ese sector, habían caído en manos del "comunismo".

Por otra parte, el proceso de industrialización y de ampliación del sector terciario que tuvo lugar desde fines de los años cincuenta, con instalación de grandes empresas y nuevos centros de desarrollo industrial en el interior del país, generaron un nuevo proletariado cuyas demandas, superiores a las de la etapa populista, se sumaban a la más generalizada por recuperar los niveles salariales, en descenso fundamentalmente a partir de 1959.

Este conjunto de elementos implicaba una alteración del nuevo orden social que los sectores dominantes instalados en el poder buscaban imponer al país desde 1955, acompañado por la aplicación definitiva del programa económico del gran capital.

Si bien la manipulación del peronismo era el obstáculo para la de-

finitiva institucionalización y legitimación de la dominación del nuevo bloque en el poder desde 1955, aun con esta salvedad, los momentos en que se instauraron los gobiernos de Frondizi e Illia presentaron una importante ventaja para el régimen. La participación de los partidos Radicales, UCRI y UCRP, en tales momentos permitió la participación y la integración de las clases medias en la "legalidad" vigente, quedando la clase obrera -marginada de dicha "legalidad"- aislada de potenciales aliados como por ejemplo los sectores de más bajos ingresos de la clase media, que en esas oportunidades daban sus votos a aquellos partidos.

Por el contrario, al poner término a esos gobiernos, implantándose regímenes de facto, las clases medias y todos los partidos quedaban en las mismas condiciones de marginación de la legalidad en que se encontraba el peronismo, de forma tal que una amplia mayoría de la sociedad quedaba en oposición al régimen constituido por la alianza de los nuevos sectores dominantes y las Fuerzas Armadas, siendo en tales situaciones este último el que quedaba aislado del resto de la sociedad, mientras que a la clase obrera se le presentaba la oportunidad de converger con otros sectores sociales en la oposición a tales gobiernos, como ocurrirá manifiestamente a partir de 1969 con las movilizaciones en contra de la dictadura encabezada por el gral. Onganía.

La proscripción del peronismo no era el único problema de representación en el sistema político que regía desde 1955. Los partidos Radicales en que se apoyaron los intentos de redemocratización efectuados entre aquel año y 1966 tampoco fueron capaces de constituirse en los representantes orgánicos de los nuevos sectores dominantes que controlaban el poder desde 1955, la oligarquía terrateniente, los sectores agroexportadores y, en forma creciente, el gran capital extranjero y nacional asociado, en los sectores industrial y financiero.

El intento de Frondizi con la UCRI en este sentido fue impedido, entre otras cosas, como ya se vio, por las diferencias y la desorganización existente entre esos mismos sectores dominantes.

En realidad, la incapacidad de las clases dominantes argentinas por organizar formas de representatividad política dentro del sistema democrático partidario, que les permitiera acceder al gobierno por los mecanismos constitucionales sin necesidad de apelar a golpes de Estado vehiculizados por las Fuerzas Armadas, es crónica desde que

el sistema democrático se abrió a la participación de los sectores populares a partir de principios de siglo, con el radicalismo yrigoyenista en 1916 y el peronismo en 1945.

Esto no significa que estos dos movimientos políticos de masas postularan proyectos que atentaran contra la dominación burguesa en Argentina, pero implicaban reajustes a nivel económico y fundamentalmente político en las relaciones entre las clases dominantes y subordinadas que las primeras nunca estuvieron dispuestas a aceptar y los dirigentes de las segundas -radicales y peronistas- tampoco estuvieron dispuestos a defender, como podían haberlo hecho con amplias posibilidades de éxito en los momentos críticos de los golpes de Estado de 1930 y 1955.

A esta crisis crónica de representación de las clases dominantes dentro del sistema democrático se sumó a partir de la fase de industrialización sustitutiva de importaciones el cambio ocurrido dentro del bloque burgués entre las distintos sectores que lo componen, con el crecimiento del poder económico del sector industrial en detrimento del agrario y, a partir de fines de la década de 1950, el reforzamiento del capital extranjero en ese sector, que se convierte en el más dinámico en cuanto al crecimiento del producto interno y la incorporación de tecnología.

La incipiente apertura al capital extranjero en la fase final del gobierno peronista podría haber convertido a este partido en una vía legitimada por el consenso popular para este tipo de modernización de la economía argentina. Pero, como ya se señaló, la movilización de masa que implicaba ese gobierno era un obstáculo que se oponía a las reformas necesarias para impulsar ese desarrollo dependiente, tal como eran requeridas por el gran capital nacional y extranjero.

Las dificultades que implicaba el mantenimiento de una estructura socioeconómica apoyada en una industrialización dependiente de todo tipo de abastecimientos desde el exterior y en una estructura de propiedad de la tierra predominantemente latifundaria -con la importante cuota de poder económico y político que ello implicaba para la oligarquía terrateniente retardataria-, pusieron a la burguesía <sup>en 1955</sup> en la opción entre, someter su expansión a los límites y la negociación que necesariamente implicaba un gobierno que tenía su principal apoyo en la clase obrera, o impulsar con la rapidez y profundidad que reclamaban sus intereses inmediatos la desestructuración del reformismo económi-

co del peronismo, lo que sólo podía llevarse a cabo arrasando con la legalidad e imponiendo un régimen dictatorial.

Al optar por este último camino quedó cortada la posibilidad de profundizar el desarrollo capitalista dependiente del país por la vía de la legalidad política.

El gobierno de Frondizi fue un intento por continuar el desarrollo dependiente retomando las formas constitucionales a medida que el peronismo fuera incorporándose gradualmente a la legalidad.

Como ya se vio en el capítulo anterior, este gobierno aplicó el programa económico del gran capital y las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional al pie de la letra aunque para ello haya tenido que remover a su inicial equipo de gobierno que apoyaba el programa reformista invocado en la campaña electoral por la UCRI, y reemplazarlo por reconocidos representantes del capital monopólico nacional y extranjero, recurriendo además a un nivel de represión generalizada sobre la clase trabajadora pocas veces visto hasta entonces en el país.

A pesar de ello los sectores más reaccionarios de las clases dominantes y las Fuerzas Armadas siguieron viendo con desconfianza la política de integración del peronismo, aunque ésta fuera dirigida principalmente hacia la participación en el sistema político de la dirigencia burocrática política y sindical de ese movimiento mientras se reprimía a sus propias bases-, hasta que terminaron derrocando al gobierno.

En el siguiente intento por "redemocratizar" el país, con las elecciones de julio de 1963, el único partido de importancia cuyo participación fue permitida por los militares fue la UCRP, que representa fundamentalmente a sectores medios y del mediano y pequeño empresariado nacional rural y urbano.

De tal manera, la proscripción del peronismo y los conflictos entre sectores de la burguesía señalaban la incapacidad del sistema de partidos, tal como las Fuerzas Armadas pretendían hacerlo funcionar entre 1955 y 1966, para representar a los sectores fundamentales de la sociedad argentina, la clase obrera, y la fracción que se consolida como la más poderosa dentro del bloque burgués.

Verán, por lo tanto, organizaciones de carácter corporativo las que se conviertan en los verdaderos representantes políticos de esos dos sectores sociales, para la clase obrera los sindicatos peronico-



das, y para el gran capital industrial y financiero las Fuerzas Armadas y las organizaciones empresariales.

Entre tanto, desde el derrocamiento de Frondizi, continuaba conformándose la alianza de sectores estructurada alrededor del proyecto "desarrollista", en la que convergían el capital monopólico industrial extranjero y nacional asociado, el "establishment" de tecnócratas que lo representan en los cargos gubernamentales, un sector de las Fuerzas Armadas y otro de la burocracia sindical, a través de la que se busca el apoyo de la clase obrera a este proyecto.

El derrocamiento de Frondizi había rostrado a esa alianza "desarrollista" la imposibilidad de mantenerse en el gobierno a través de los mecanismos democrático partidarios, quedando como único camino al poder el golpe de Estado.

El gabinete ministerial que tomó la dirección del gobierno de Guido después del triunfo de los militares "Azules" representaba los intereses de esa alianza y fue un esbozo de la que se hará cargo de la economía durante la dictadura que se instala en el gobierno con el genl. Onganía a la cabeza en 1966.

A. Rouquié señala las "interesantes continuidades (que) se dibujan desde Frondizi hasta Onganía a través del gabinete "azul" de Guido".

Si todavía el gobierno de Frondizi había buscado, junto a la promoción del capital industrial, formas de concertación con la oligarquía ganadera y sectores de la burguesía del pequeño y mediano capital nacional, durante la dictadura de Onganía, el equipo económico, representante del gran capital industrial y financiero transnacional llevará un ataque contra esos dos sectores de la burguesía, imponiendo políticas económicas que implicaron una importante transferencia de ingresos desde el sector terrateniente hacia la burguesía industrial monopólica y aceleraron la concentración del capital en detrimento del pequeño y mediano capital nacional empresario.

Los objetivos políticos de la dictadura.

Los permanentes fracasos en los intentos por reimplantar el sistema democrático, la incapacidad de los partidos cuyo funcionamiento era permitido, para absorber a la masa peronista y representar a las diversas fracciones de la burguesía, y la tendencia de la movilización popular a desbordar el sistema partidario cuando se le permitía al peronismo participar en elecciones legislativas o para elegir gobernadores provinciales, llevaron a que la dictadura implantada con el golpe del 23 de junio de 1966 propusiera como su principal objetivo en el terreno político implementar una reestructuración definitiva de las formas de representación y participación, terminando con el sistema de partidos e imponiendo otro basado en formas de representación corporativista.

Al apoderarse del gobierno, la dictadura plantea la necesidad de terminar con la "lucha política estéril" que implicaba el sistema partidario y sus giras fundamentalmente alrededor del enfrentamiento peronismo-anti-peronismo.

El equipo político de la dictadura buscaba ocultar el hecho fundamental que se escondía tras ese enfrentamiento, la lucha de clases, y lo presentaba como una situación artificial provocada por divergencias de carácter puramente ideológico sin fundamento en la estructura real del país y que podía ser resuelto a partir de la toma de control por parte de las fuerzas armadas de un Estado considerado "neutro" con respecto al conflicto social y que, puesto por encima de los diferentes sectores de la sociedad civil y no perturbado por los enfrentamientos entre los partidos políticos, sería capaz de dar un impulso al desarrollo económico argentino -manteniendo momentáneamente "congelada" la actividad política. La mayor abundancia de bienes que tal desarrollo generaría más las nuevas formas de representación corporativa que eliminarían esa "lucha estéril" entre partidos, permitiría reducir el nivel del enfrentamiento entre los distintos sectores de la sociedad una vez que se reapiera el "tiempo político".

Uno de los mecanismos para llegar a este objetivo era lograr la "despolitización" de la sociedad argentina, entendiendo por esto la finalización del enfrentamiento peronismo-anti-peronismo.

En realidad esta justificación del golpe basada en la necesidad de despolitización y desideologización de la sociedad argentina no era

más que la cobertura ideológica de un acentuamiento de la política represiva del régimen antipolicial que detentaba el poder desde 1955, destinada a crear las condiciones de "orden" requeridas por el capital transnacional para efectuar inversiones en el país y dar un impulso al desarrollo dependiente de la economía.

Amplios sectores de la dirigencia oficial del peronismo, sindical y partidaria, apoyaron el golpe de junio. Dada la proscripción que pesaba sobre el peronismo desde once años atrás, tales dirigentes suponían que con el golpe y la proscripción de todos los partidos políticos, el peronismo no sólo quedaba en igualdad de condiciones con las restantes fuerzas partidarias sino que, por ser la única fuerza de masas organizada, fundamentalmente en los sindicatos, estos se convertirían en un interlocutor imprescindible para el nuevo gobierno. De esta forma obtendrían una vía de acceso al Estado, lo que los ubicaría en una posición superior a la de las demás fuerzas políticas.

Por otra parte, esto coincidía con el propósito del equipo político de Onganía de organizar representaciones corporativas de los distintos sectores de la sociedad y darlos un lugar al interior del Estado, siempre que estuvieran dispuestas a acatar las directivas emanadas del gobierno.

El apoyo de la dirigencia sindical era necesario, además, como una forma de compromiso que neutralizara en lo posible la acción de masas en contra de la dictadura, y al mismo tiempo se convertiría en un contrapeso que evitaría que el equipo gobernante quedara sometido a la presión exclusiva del gran capital y de los cuadros de las fuerzas armadas, de forma tal que el gobierno -el sector que ocupaba los cargos "políticos" del mismo, ya que los del área económica fueron entregados a representantes directos del gran capital- aumentaría su autonomía relativa respecto de esos intereses y con ello su margen de maniobra para concretar sus objetivos políticos. Las discrepancias entre el sector "político" y el "económico" del gobierno con respecto a la política que debía aplicarse en la cuestión sindical surgirán rápidamente y se mantendrán durante toda la gestión de Onganía.

Algunos elementos del discurso ideológico con que la dictadura se presenta ante la sociedad tienen eco en algunas características de la ideología peronista, que son comunes, en general, a los restantes populismos, como la existencia de un Estado "neutro" frente al conflicto social y capaz de promover el desarrollo y el bienestar del con-

junto de la sociedad. Otro elemento era el antiliberalismo, característico de los movimientos populistas, en tanto movimientos de masas que enarbolan reivindicaciones de carácter nacionalista y antioligárquico y promueven formas de intervencionismo estatal en la economía para orientar y promover el desarrollo industrial.

Sin embargo el <sup>orden</sup> liberalismo practicado por la dictadura sería de carácter exclusivamente político, con el objetivo de crear el "orden" represivo necesario para aplicar en el terreno económico el más abierto liberalismo en perjuicio de los sectores populares y del capital nacional no monopolístico.

Al considerar el apoyo de dirigentes peronistas a la dictadura en un primer momento y la asimilación que pretendieron hacer del discurso dictatorial con la ideología peronista, hay que tener en cuenta las características de esa dirigencia. En el sector sindical ya fue señalada la tendencia creciente, principalmente en el sector vanderista, a concertar con el régimen a partir del gobierno de Frondizi, pasando incluso por encima de las directivas de Perón. En lo que respecta a los dirigentes del sector político partidario, si bien Perón adoptó en este terreno inmediatamente después de su derrocamiento una línea dura, con el tiempo fue virando hacia posiciones más conciliadoras y ubicando en los puestos de dirigencia política a hombres que se mostraran aceptables para el régimen, produciéndose una derechización creciente en los niveles superiores de la dirigencia. Esto se mantuvo hasta que el estallido social de 1969 y el avance popular obligó a Perón a volver a adoptar una línea más combativa que acompañara la efervescencia de las masas.

Los sectores más combativos del movimiento, desde un principio caracterizaron a esa dirigencia conciliadora, sindical y política, como parte del régimen antipopular que regía el país desde 1955, atribuyéndole el papel de intermediario para introducir al interior del movimiento peronista la ideología de ese régimen, como se manifestó claramente respecto al "desarrollismo" propugnado por un sector de este último.

Las fuerzas armadas en el momento del golpe

En los años previos al golpe de junio las fuerzas armadas en Argentina habían pasado por profundas modificaciones provocadas por cuestiones de orden interno e internacional.

A partir del golpe de 1955 contra el gobierno peronista, la implantación de un régimen de exclusión basado en la proscripción política de los sectores populares peronistas puso a los militares en el centro de la política argentina, ya que eran estos los encargados de mantener ese orden excluyente.

Las fuerzas armadas se atribuyen entonces el papel de custodias de "la forma republicana de vida contra cualquier extremismo o totalitarismo" como definían al peronismo y a los sectores de izquierda. Esta exclusión no implicaba, según ellas, un atentado contra esa forma republicana pues su consigna era "democracia para los democráticos", entre los que no entraban los peronistas y los marxistas.

Este papel central en la esfera política estrechó los contactos entre los militares y otros sectores sociales como los partidos políticos no peronistas y grupos de intereses económicos, con lo que las diferencias entre esos sectores comenzaron a repercutir al interior de la institución armada, en la que diferentes facciones pasaron a representar los intereses, a veces enfrentados, de aquellos sectores.

Esta situación resultaba en numerosos patchs internos, en la destrucción de los patrones verticales de autoridad y en el truncamiento de la carrera de numerosos oficiales.

La culminación de este proceso tuvo lugar con los enfrentamientos armados entre los Azules y Colorados en 1962 y 1963. La victoria de los primeros condujo a un proceso de reversión de la anterior situación.

En la facción de los Azules se había hecho conciencia los efectos negativos que provocaban sobre la situación de la organización militar y sobre sus propias carreras, la intensa politización, y la fraccionización que resultaba de ello, de los oficiales. Por lo tanto, luego de tomar el control sobre la totalidad de la institución y de las burocracias de los principales oficiales colorados, la fracción victoriosa condujo a un repliegue hacia los cuarteles y los "deberes específicos" de los militares. Ese "legalismo" de los azules fue, por tanto, producto de preocupaciones organizacionales internas y no de convicciones democráticas, como creyeron en ese momento algunos sectores

civiles.

Comienza entonces a producirse una serie de importantes cambios organizacionales conducidos por el gral. Onganía, ex jefe de los azules y nombrado comandante en jefe del Ejército luego de haber derrotado a la facción oponente.

El objetivo es consolidar la "profesionalización" de las fuerzas armadas a partir del restablecimiento de patrones de autoridad más ajustados a las líneas verticales de comando, aumento de la cohesión interna, autoidentificación corporativa, perfeccionamiento de la capacidad técnica y organizativa para el manejo de medios de violencia abundantemente superiores a los disponibles en la población civil, estudio de tecnología moderna y de "problemas sociales contemporáneos". En 1964 se firmó un Programa de Asistencia Militar con los Estados Unidos, que fue parte importante en el esfuerzo por modernizar los armamentos y adecuarlos al tipo de combate previsto por las nuevas líneas estratégicas que entre tanto se estaban imponiendo en las fuerzas armadas argentinas y del resto de Latinoamérica, derivadas de la doctrina de "Seguridad Nacional" promovida desde los Estados Unidos a partir del triunfo de la revolución en Cuba en 1959 y su repercusión en el continente con la intensificación de los movimientos populares y la organización de guerrillas. Al mismo tiempo, como respuesta a estos mismos hechos, la administración Kennedy lanzaba la Alianza para el Progreso ya comentada anteriormente.

Cambió también el tipo de contactos que los militares tenían con otros sectores de la sociedad, abandonándose los anteriormente frecuentes con sectores políticos tradicionales y acentuándose los llevados a cabo con "tecnócratas" y civiles "apolíticos" dirigentes de otras organizaciones: empresariales, sindicales, Iglesia, etc., comenzándose a constituir el núcleo de la coalición que llevó a cabo el golpe de Estado de 1966. También como contraste con el período anterior, los contactos con civiles durante el período "legalista" tendieron a ser definidos dentro del marco de una relación en la que cada militar que mantenía estos contactos lo hacía como parte del conjunto de las fuerzas armadas, en tanto organización y de acuerdo con líneas jerárquicas de mando, recibiendo la información "técnica" que, sobre una amplia gama de problemas sociales era brindada por esos contactos.

Como puede observarse, junto con estos cambios organizacionales se produjo otro cambio fundamental en lo que respecta a las mencionadas "funciones específicas" de las fuerzas armadas derivado de la consoli-

dación en su interior de la "Doctrina de Seguridad Nacional".

Desde la finalización de la segunda guerra mundial, cuando la fundamental hipótesis de conflicto bélico a nivel internacional gira en torno de la estrategia de carácter bélico, político y económico de "guerra fría" establecida por los Estados Unidos, este país busca involucrar a los ejércitos latinoamericanos en dicha estrategia, para lo que se hacía necesario evitar estallidos de conflictos dentro del continente entre países vecinos, estableciéndose a tal efecto la serie de acuerdos entre los ejércitos latinoamericanos tendientes a la solución negociada de posibles conflictos de este tipo y al mismo tiempo a asegurar el involucramiento de estos ejércitos en los casos de intervención de las fuerzas estadounidenses en países de la región cuando el conflicto surgiera a partir de la lucha de movimientos nacionales de liberación, caracterizados como punta de lanza del comunismo, el oponente en la estrategia de "guerra fría", dentro del continente americano.

De tal forma, dado que ya no habría conflictos con países vecinos y que en caso de enfrentamiento contra el bloque comunista los ejércitos latinoamericanos no tienen capacidad para intervenir en forma directa en el mismo, lo que quedaría en manos de las fuerzas estadounidenses, debían abandonarse las hipótesis de conflicto con fuerzas externas y abocarse a participar de la "guerra fría" combatiendo al enemigo, el "comunismo", infiltrado dentro de las propias fronteras, es decir, los movimientos políticos internos que se opusieran al régimen capitalista dependiente.

El principal medio por el que los Estados Unidos introduce esta línea estratégica en los ejércitos latinoamericanos y de una gran mayoría de los restantes países del Tercer Mundo, es el establecimiento de los Programas de Asistencia Militar. "A partir de 1952, el gobierno de los Estados Unidos puso en ejecución un programa de asistencia militar en América Latina, en base a acuerdos bilaterales, mediante los cuales proporcionaba equipo y servicios de defensa a los países receptores, los que además de asumir los compromisos a que se refiere el reciente convenio con nuestro país (de 1964), se obligaban a 'facilitar la producción y transferencia...de...materiales estratégicos requeridos por los Estados Unidos' y a cooperar con dicho país limitando su comercio con el bloque comunista". Los "compromisos" mencionados entre las partes firmantes de los acuerdos consisten en que "una de ellas, los Estados Unidos, es única suministradora de equipo:

y servicios de defensa, como depositario que otorga el uso de los mismos bajo condiciones, que tiene derecho al control continuado de dicho uso y a que ese equipo y servicios le sean devueltos. La otra parte, nuestro país, es receptor de equipos y servicios, como depositario que por ende tendrá tan solo la detentación de los mismos, sin derecho a usarlos sino con el destino que fija el convenio (que es fijado por una ley estadounidense), que debe permitir el control -por ciudadanos de la otra parte- del uso que dé a esos equipos y servicios, que debe cargar con los gastos que demande la atención de quienes hagan tal control, que debe mantenerlos asegurándoles el más alto grado de protección y que debe devolverlos a la otra parte".<sup>4</sup>

Dentro del período 1952-1955 se concretaron acuerdos de ese carácter con: Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Haití y Guatemala".

En Argentina el acuerdo recién se estableció con el gobierno Radical de Illia en 1954.

Los "misiones asesoras" que acompañan la firma de estos acuerdos tienen por finalidad explícita la de entrenar a los ejércitos recientes del equipo militar en su manejo, "no menos de 33 naciones reciben continuo entrenamiento a pesar de la ausencia de ayuda en forma de equipamiento". Esto ocurre porque en realidad el objetivo central de estos acuerdos no es la provisión de equipos, estando las "misiones asesoras" subordinadas al entrenamiento para su utilización. Por el contrario, con estas misiones el punto central de los acuerdos PAM, y su finalidad es tomar contacto directo con la oficialidad de los ejércitos de los países del Tercer Mundo con propósitos de adoctrinamiento político tendiente a lograr: "1) desarrollar la propensión a solicitar y/o aceptar sugerencias políticas (norteamericanas, 2) estructurar una definición de interés nacional que excluya el no alineamiento (en política internacional), 3) inculcar una ideología del desarrollo que refuerce los subsidios y la hospitalidad a las corporaciones transnacionales". Además de fomentar la "hostilidad al ejercicio de la autodeterminación nacional cuando implica igualitarismo social, el cierre a la salida de los excedentes económicos de las corporaciones extranjeras o una política exterior 'independiente' (no alineada)". Por lo tanto "La mayoría de los asuntos relacionados con el entrenamiento de los PAM son de naturaleza política y económica antes que estrictamente militar". "La mayoría de los miembros del Congreso As-



ricano que han otorgado y asignado fondos han aceptado o abiertamente aprobado la expansión de las corporaciones como un objetivo de los MAP".

Como declaró el secretario de Defensa estadounidense R. Mac Namara frente al Congreso de ese país: "He dicho antes y pienso que merece ser repetido, que con toda probabilidad el mayor beneficio de retorno por cualquier porción de nuestra <sup>inversión en</sup> asistencia militar -dólar por dólar- proviene del entrenamiento de selectos oficiales por especialistas en escuelas e instalaciones de los Estados Unidos. Estos estudiantes son seleccionados; ellos son los futuros líderes de sus naciones. Es de inestimable valor para los Estados Unidos tener la asistencia de estos hombres. Consecuentemente, el entrenamiento apropiado ha sido fuertemente reforzado..."

Y más concretamente se señala "el objetivo de usar a los militares (locales) para subvertir a semejantes gobiernos civiles (los llamados 'comunistas', 'radicales' o 'nacionalistas')". Con respecto a la utilización de estos términos, el calificativo de "comunista" se aplica a cualquier régimen que "adopte una o más de las siguientes políticas que el Departamento de Estado encuentre desagradable, nacionalización de industrias privadas, particularmente corporaciones de propiedad extranjera, reforma agraria radical, políticas comerciales autárquicas, aceptación de ayuda soviética o china, insistencia en seguir una política exterior antiamericana o no alineada, entre otras". Regímenes radicales o de izquierda son considerados los que efectúen: "1) nacionalizaciones de empresas económicamente lucrativas; 2) reformas sociales igualitarias; 3) tolerancia ante partidos marxistas o radicales que movilicen los sectores de clases bajas; 4) adopción de política exterior no alineada o militantemente neutralista".

Hasta la década de 1960 habían sido entrenados cerca de 350 000 militares por parte de los Estados Unidos, el 80 % pertenecientes al Tercer Mundo, 150 000 de Asia Oriental, 50 000 de América Latina y el mismo número de Cercano Oriente y <sup>el</sup> Sur de Asia.

Otro de los elementos centrales de este adoctrinamiento es la promoción de la "modernización" de los países receptores, pero ésta debe estar caracterizada por: "1) una alta prioridad a la protección de la propiedad empresarial nacional y extranjera en las áreas rentables; 2) un rechazo de facto a redistribuir la riqueza existente en favor de los trabajadores obreros y sectores campesinos; 3) oposición a la

propiedad y control públicos de empresas cuando generosos privilegios impositivos y otros subsidios inducirían a inversores extranjeros a asumir la responsabilidad de su manejo; 4) supresión del comunismo; 5) una política exterior prooccidental de facto cuando la anterior era independiente o no alineada".

Esta "modernización" es considerada necesaria, por otra parte, ya que según la "doctrina de seguridad nacional" la "subversión" florece en un medio "socioeconómicamente subdesarrollado". Uno de los ideólogos militares argentinos que sustenta esta asociación entre seguridad y desarrollo escribió en un artículo titulado "Fuerzas Armadas y subversión interior" que "el desarrollo como factor esencial de la seguridad nacional constituye un aspecto básico de nuestra doctrina militar", "el desarrollo es la esencia misma de la seguridad nacional".

Esta relación otorga a las fuerzas armadas una base sobre la que se define su "misión" respecto a la Nación en su conjunto, dado que según un documento de la Escuela Superior de Guerra- la seguridad nacional "reclama, por sobre todo, su cabal comprensión y una compleja armonización con el desarrollo, que es su factor fundamental, al que sirve y del cual se sirve. Por ello la seguridad nacional en su sentido más profundo, no es un concepto puramente militar, tiene un alcance mucho más amplio que se parte de la política nacional, puesto que se vincula con todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad y, por ende, de los intereses vitales de la Nación Argentina".

Esta es la sustentación ideológica que permite a las fuerzas armadas en 1966 -complementada, paradójicamente, con el proceso de "profesionalización" que consolida la unificación interna-, encarar la toma del gobierno con un proyecto de poder a largo plazo y con objetivos concretos, en nombre de la institución en su conjunto, desenvolviéndose a la manera de una operación militar previamente diseñada y ejecutada ordenadamente siguiendo las directrices emanadas de la cadena de mandos.

"La ideología de la 'seguridad nacional' rindió a estos oficiales el crucial servicio de proveer un patrón de interpretación para numerosos problemas sociales, de reforzar su sentido de pertenencia a una organización a la que adjudicaban un papel de plena dominación política y de racionalizar el intento de establecer esa dominación".

Como pudo observarse entonces, la profesionalización de las fuerzas armadas no resuelve el eterno problema del militarismo. Todo lo que puede elevar el punto crítico por la probabilidad de un golpe de

Estado que, en caso de alcanzarse y darse tal golpe, éste será mucho más profundo y apuntado a establecer una dominación mucho más completa. Durante el período de "politicación" anterior a este reordenamiento, los golpes tenían objetivos puramente inmediatos, para entregar el gobierno con relativa rapidez a los partidos políticos no peronistas.

La nueva estrategia de las fuerzas armadas de impulsar el desarrollo como medio para asegurar la "seguridad nacional" las ponía en coincidencia con la alianza "desarrollista", la que al mismo tiempo veía en las fuerzas armadas el camino hacia el poder.

El acercamiento entre ambos sectores se consolidó a espaldas del gobierno de Illia y desembocó en el golpe de junio de 1966.

Esta coincidencia entre desarrollistas y fuerzas armadas no es casual, ya que detrás del proyecto desarrollista y de la línea estratégica que el Pentágono impone a los militares está el capital monopolístico norteamericano.

El personal del gobierno de Onganía

Los integrantes del equipo político de la dictadura fueron reclutados entre sectores de la derecha <sup>corporativista</sup> llamada "nacionalista", a los que el gral. Onganía se había vinculado, entre otras formas, a partir de los "Cursillos de cristiandad", consistentes en formas de convivencia en las que participaban elementos dirigentes de la sociedad argentina, empresarios, políticos, oficiales de las fuerzas armadas, etc. y en los que recibían adoctrinamiento político y religioso por parte de los sectores más reaccionarios de la Iglesia.

"El origen de los 'Cursillos de Cristiandad' debe buscarse en Francia, donde alcanzaron indudable influencia entre los militares sobre todo durante los conflictos coloniales de Indochina y Argelia". El grupo que los lleva adelante en ese país es conocido con el nombre de La Cité Catholique y difunde sus ideas a través de la revista Verbe.

Este grupo estuvo vinculado con la creación, desarrollo y actuación de la OAS, la organización terrorista formada por militares franceses para reprimir el movimiento de liberación en Argelia, y que fue encabezada por el gral. Raúl Salan que estuvo a punto de tomar el poder en Francia y dio origen a una guerra civil en pequeña escala tras el levantamiento contra De Gaulle con el argumento de que éste llevaba a Francia hacia el comunismo, a quien "entregaba" Argelia.

La ideología de este grupo fue trasladada a la Argentina por el coronel J. Guevara y los generales E. Señorans (director de la Secretaría de Informaciones del Estado, SIDE), L. Imaz (futuro ministro del Interior de Onganía), Conesa, cnel. Alsina, y otros.

El cnel. Guevara traducía la revista "Verbe" al castellano y también lo hizo con el manual de anticomunismo "Le marxisme leninisme" de Jean Gussset, un católico "integralista" que reunió sus pensamientos en el régimen de Vichy -la zona "libre" de Francia consentida por los nazis durante la ocupación- y los editó bajo la protección del mariscal Petain, quien ejercía el gobierno en esa zona. La traducción de Guevara lleva un prólogo aprobatorio del Cardenal Primado y Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Caggiano. Jean Gussset es considerado el principal fundador y mentor de la ideología sustentada por Cité Catholique.

Otro de los centros de donde se reclutó gran parte del personal político del gobierno fue el Ateneo de la República, agrupación de

políticas e intelectuales de derecha, algunos vinculados al capital monopolístico nacional y extranjero.

De allí salieron el primer ministro del Interior de la dictadura, C. Borda; el secretario de Gobierno, M. Díaz Colodrero; el subsecretario del Interior, E. Pueyrredón; el subsecretario de Gobierno, F. Pearson; el ministro de Relaciones Exteriores, N. Costa Méndez; el subsecretario de esa cartera, J. Mazzinghi; el secretario de Promoción y Asistencia de la Comunidad, R. Puigó; el secretario de Seguridad Social, S. Madrano; el presidente del Banco Central, F. Real; el embajador en Brasil, M. Amado -uno de los fundadores del grupo y ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del gral. Lonardi-; H. Obligado, vocal de la Dirección Nacional de Migraciones; M. Etcheopar, director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación; R. Moca, embajador en la OEA; G.T. Etcheopar, subsecretario de Cultura; M. Serrano, delegado ante el GATT.

En el equipo económico del gobierno también se encontraban relaciones de este tipo. El ministro de Economía, N. Salimei era asistente a los "curules", representante de capitales eclesiásticos y daba empleo en sus empresas a los generales Señorans y Conessa.

Sin embargo otras razones más concretas pasaron en la conformación de este sector del gobierno, "Los empresarios se han repartido los puestos del Estado y dirigen la economía argentina -según escribió J. Cooke refiriéndose a la dictadura- Alsogaray y su 'socio' aceitero Salimei -también ligado a la exportación de granos, a sociedades de ahorro y préstamo, al Banco de Boulogne, a negocios de pavimentación, de transporte, etc.- son los ejes de la política económica, y han ubicado a sus allegados comerciales, industriales y financieros. Frigerio mete los que puede. El consorcio eléctrico mundial SOFINA, famoso por las exacciones que perpetró a través de la CADE (principal compañía eléctrica del país, privada), ha ubicado a sus hombres en posiciones clave de la política energética: Goselli (recomendado también por el abigeo del Sindicato de Luz y Fuerza, Taccone), es integrante de La ERA, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, colaborador de Pinado y Frondizide de la Secretaría de Energía y Combustibles; Pogorara, administrador de Agua y Energía; el ingeniero antiq, director de la CADE y representante del pulpo eléctrico en el gobierno de la Banda Infame, etc.; Costa Méndez, vin-

... y intendidos azucareros, lo mismo que Raggio, secretario de Agricultura y miembro de la SRA, ex subsecretario del ministro de Trabajo, Martínez de Hoz, a su vez uno de los "cuatro grandes" que dirigen la organización de la oligarquía azucarera. José M. Saravia (h), ex subsecretario del Interior, tal como bajo Aramburu lo fuera su padre, jefe del estudio que atiende los intereses del grupo Bemberg. A.C. Sanguinetti, administrador de YPF, gerente de TANET, de CATSA, hombre del trust metalúrgico ligado a monopolios europeos; Brunella, de YPF, uno de los propagandistas de los contratos petrolíferos, gerente de la metalúrgica Austral, presidente de la Cámara de Productores de Metales y dirigente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos; Galimberti, secretario de Industria, fabricante de calderas y ligado a los consorcios yanquis. ACINBAR, socio de la Republic Steel, tiene entre sus puntales al subsecretario de Energía, Ingeniero Thihaud, director además de ACINPER, de la Compañía Sudamericana WRELINGER, de la Compañía de Quebracho FORMOSA, de CATYA, del Banco Francés. No vale la pena seguir dando ejemplos. El empresariado nacional y extranjero, industrial, rural y financiero controla el Estado argentino. Desde allí, lógicamente, prepone la 'tregua' y la 'paz social': han conquistado todo lo que les interesa".<sup>11/</sup>

Sin embargo, el ministro de Economía, Solimel, uno de los propietarios de uno de los mayores grupos empresariales del país, de capital nacional y vinculado al mercado interno, SASNERU, no estaba dispuesto a llevar adelante una política incondicional en favor del gran capital transnacional. Esta recién se llevó a cabo tras el cambio de ministro ocurrido a fines de 1966, cuando el cargo es ocupado por un representante directo del capital financiero transnacional, A. Krieger Vasera

La discrepancia sindical frente a la dictadura

La ceremonia en que el gral. Onganía y demás integrantes del gobierno asumieron sus cargos contó con la presencia de los principales dirigentes sindicales. Al mismo tiempo la CGT y los dos sectores en que se habían dividido las "62 Organizaciones", el vandorista ("Leales") y el alonsista ("De Pie junto a Perón"), emitían declaraciones de apoyo al golpe.

Pero las buenas relaciones entre gobierno y sindicatos duraron poco tiempo, salvo en el caso de los gremios que fueron conocidos como "participacionistas", principalmente el de la Construcción y el de Luz y Fuerza, dirigidos por M. Coria y J.J. Taccone respectivamente, que prestaron un apoyo incondicional a la dictadura, por lo menos hasta 1969 en que se produjo el estallido social de repudio generalizado al régimen.

Tras la asunción del poder, el nuevo gobierno inició una política de "racionalización" del Estado tendiente a reducir el déficit fiscal principalmente mediante el despido masivo de empleados públicos. El ataque más fuerte se llevó contra los trabajadores portuarios, petroleros (YPF) y ferroviarios.

Los sindicatos agredidos respondieron con paros y movilizaciones y la CGT declaró un paro general para el 1º de diciembre de 1966.

En tal situación comenzaron a surgir desavenencias dentro del gobierno y entre éste y las organizaciones que agrupan al empresariado del gran capital, ACIEL, UIA, SPA, Bolsa de Comercio, etc.

Si bien el gobierno respondió con medidas represivas a las protestas de los sindicatos agredidos, no emprendió el plan de ataque a fondo contra las estructuras sindicales que desde 1955 venían exigiendo esas organizaciones de la burguesía, consistente en la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, eliminando la central única de trabajadores (CGT), los sindicatos únicos por rama de actividad económica, la afiliación obligatoria y los aportes compulsivos, todo ello con el propósito evidente de atomizar al sindicalismo argentino.

Onganía, por el contrario, insistía en sus propósitos de mantener y consolidar la unificación sindical en la CGT intentando al mismo tiempo que su dirección padera a los dirigentes participacionistas, buscando asegurar el control desde el Estado de un movimiento obrero unificado tras dirigentes dispuestos a colaborar con el régimen, con

to que, por otra parte, Onganía se aseguraría una nueva base en que apoyar su ejercicio del poder, evitando quedar sometido exclusivamente a la presión del gran capital y de los cuadros de las fuerzas armadas.

Es así que a fines de ese año comienzan a aparecer las críticas en contra del "corporativismo" del gobierno, aparecidas en la prensa que representa los intereses del gran capital y en declaraciones de las organizaciones empresariales. Se habla también de inquietud en el interior de las fuerzas armadas y en la posibilidad de un nuevo golpe que destituya a Onganía.

A esto se sumaba la falta de una orientación decidida en el área económica destinada a promover los intereses del gran capital.

Finalizando el año, Onganía debió ceder ante las presiones y removió del gabinete a los principales blancos de las críticas, el "corporativista" ministro del Interior Martínez Paz y al de Economía, Salimei, nombrando en su lugar a G. Borda y A. Krieger Vasena respectivamente.

En el Ejército se sustituyó al comandante en jefe gral. Pistarini por el gral. J. Alsogaray, hermano del ex capitán A. Alsogaray, uno de los principales representantes del capital extranjero en el país.

Desde entonces la política hacia la clase obrera se endureció aún más. A principios de 1967 la CGP había declarado un Plan de Lucha en contra del gobierno, mediante el que se ejecutaría una serie de medidas de protesta que iban desde paros y movilizaciones hasta culminar en un paro general para los días 21 y 22 de marzo. El gobierno respondió reuniendo al Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) el cual declaró que la central obrera estaba incurriendo en "técnicas subversivas" que afectaban la "seguridad nacional" y que estaba influenciada por "grupos comunistas", por lo que "interrumpida toda clase de diálogo" con el gobierno, éste se aprestaba a recurrir a las medidas represivas que fueran necesarias para impedir la protesta obrera.

Fueron congelados por el gobierno los fondos de varios sindicatos. Se anunció que todo trabajador estatal que adhiera a los paros sería despedido sin indemnización, produciéndose masivas cesantías. Se advirtió a los sindicatos que la persistencia en su actitud llevaría a la cancelación o retiro de su personería gremial, lo cual implicaba, entre otras cosas, la remoción de sus dirigentes y la privación del principal recurso <sup>económico</sup> de los sindicatos, los fondos provenientes de



las retenciones que los empleadores debían efectuar sobre el salario de los trabajadores. Esto se aplicó a los sindicatos de trabajadores textiles, metalúrgicos, azucareros, químicos y de teléfonos. Si a estas sanciones se agregan las intervenciones que se habían dispuesto en 1966 contra otros sindicatos (portuarios, prensa, tabaco, forestales, pescado, vendedores de diarios, radiotelegrafistas y varios estatales), los sindicatos sancionados tenían unos 950 000 afiliados y comprendían aproximadamente un 45% de los obreros y empleados sindicalizados en la Argentina, y a muy buena parte de los sindicatos más ricos y poderosos en la conducción de la CGT.

El 4 de marzo se dictó la "Ley de defensa civil" que "para satisfacer los fines de seguridad nacional" permitía al gobierno poner bajo jurisdicción militar a civiles, entre ellos a huelguistas, que quedaban entonces sujetos a la disciplina y penalidades del fuero militar por desobediencia y desertión (del lugar de trabajo).

El secretario general de la CGT, J. Prado, de Luz y Fuerza, suspendió entonces las medidas subsiguientes del Plan de Acción y llamó a reunión del Comité Central Confederado, en la que, con la oposición de varios gremios, entre ellos algunos de los sancionados, y con la abstención de la mayoría de los vanderistas, se decidió levantar los paros del 21 y 22 de marzo y las demás medidas del Plan de Acción.

Esta derrota de la CGT llevó a un repliegue del movimiento obrero que se mantuvo por un año, hasta marzo de 1968 en que reanuda la movilización.

El momentáneo retroceso de los trabajadores le permitió a la dictadura los logros comunes a este tipo de regimenes en sus períodos de "éxito" económico, mejoraron las cuentas nacionales -alza del producto bruto interno, de la inversión, descenso de la inflación-, todo ello apoyado en la derrota y caída del salario obrero.

La política económica de la dictadura

El nuevo ministro de Economía, K. Vasena es asesor y miembro del directorio de grandes empresas, incluso filiales de transnacionales y está estrechamente conectado con banqueros extranjeros y altos directivos de organismos financieros internacionales. Años después sería nombrado vicepresidente para América Latina del Banco Mundial.

La política económica que llevó a cabo desde el gobierno estuvo dirigida a consolidar la hegemonía de la fracción del capital monopólico industrial nacional y extranjero asociados sobre las restantes fracciones burguesas, fundamentalmente la terrateniente no diversificada.

No bien fue designado, viajó a los Estados Unidos, donde el Comité Interamericano para la Alianza para el Progreso comunicó su aprobación de los planes -que no eran todavía públicamente conocidos en la Argentina- expuestos por él.

Entre las principales medidas adoptadas en su programa figuraban: a) una devaluación de casi el 40 % de la moneda nacional; b) la compensación de esa devaluación mediante un impuesto a los tenedores de divisas y retenciones a la exportación de productos agropecuarios que implicaba que el valor del dólar para estas operaciones continuaba siendo el anterior a la devaluación, con lo que se evitaría trasladar sus efectos al mercado interno por el encarecimiento de los productos alimenticios exportables. Al mismo tiempo el producto de la devaluación y las retenciones derivaba hacia el Estado los excedentes obtenidos en las exportaciones, los cuales serían utilizados en la construcción de infraestructura de servicios para atraer inversiones de capital extranjero; c) la disminución de gravámenes para la importación; d) la liberalización del mercado de cambios; e) diversas medidas orientadas al saneamiento del gasto público; f) la suspensión de las convenciones colectivas de trabajo y el otorgamiento a los trabajadores del sector privado y público de un aumento promedio del 15 % que debía mantenerse congelado por casi dos años; g) la terminación del régimen de prórroga automática y congelamiento de los arrendamientos rurales; h) la celebración de un "acuerdo voluntario de precios" con 55 "empresas industriales líderes", por el que se comprometían a congelar sus precios por seis meses y a su vez se hacían acuerdos a ventajas especiales para el acceso al crédito bancario y

a las compras estatales; la desgravación impositiva para la compra de maquinaria agraria e industrial. Medidas que fueron recibidas con amplias declaraciones de apoyo del gran capital a través de sus organizaciones, aunque la burguesía terrateniente pampeana comienza a hacer oír sus quejas por la novedad de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, a lo que se agregará más adelante la intención del gobierno de instrumentar un impuesto a la renta potencial de la tierra, según el cual se gravaría cada propiedad de acuerdo al cálculo que se hiciera de su capacidad productiva, sea ésta explotada o no, con lo que se castigaría a los terratenientes improductivos.

Con los ingresos derivados de las retenciones a la exportación, el Estado inicia una serie de obras de infraestructura, diques para riego, producción de energía hidroeléctrica, obras viales, etc., con el objeto de crear condiciones favorables para el establecimiento de inversiones en el sector industrial. La intención de la dictadura era reforzar el sector productor de bienes de capital e intermedios para abastecer al ya desarrollado sector productor de bienes de consumo.

De esta forma el Estado se convierte en el principal impulsor de la economía, participando con una proporción importante en las inversiones.

El capital extranjero comienza a aumentar sus inversiones en 1967, aunque no en la magnitud esperada, y por otra parte, a diferencia del tipo de inversiones realizadas durante el gobierno de Frondizi, que implicaron el surgimiento de nuevos establecimientos industriales, en esta nueva ola de inversiones los capitales extranjeros se invierten en la compra de empresas ya existentes de capital nacional, tanto del sector industrial como del financiero, por lo que el efecto es aumentar la desnacionalización de la economía argentina sin que se expanda la capacidad productiva.

El ministro K. Vasena adopta una política económica que se apoya en el ataque a la inflación por el lado de los costos y no, como tradicionalmente se lo hacía en Argentina, por el de la demanda, provocándose crisis recesivas para detenerla cuando el proceso inflacionario se agudizaba acompañando las crisis de balanza de pagos y de las cuentas del Estado que surgían en cada período expansivo de la economía, como ya se señaló al tratar los problemas del funcionamiento cíclico de la economía argentina.

Uno de los efectos de esas políticas recesivas era el de provocar

a través de las devaluaciones con que se daba comienzo a la recesión, una transferencia de ingresos desde el sector urbano hacia la burguesía terrateniente. Pero las intenciones de la presente dictadura eran inversas en este sentido, buscando, por el contrario, efectuar una transferencia de ingresos en sentido contrario para consolidar la hegemonía de la gran burguesía industrial dentro del bloque burgués en detrimento de la fracción agraria no diversificada.

Por lo tanto, el ataque a la inflación fue planteado ahora desde otra perspectiva, atribuyéndose su causa a un problema de costos y no de "exceso" de demanda, por lo que la solución no sería una nueva recesión sino la estabilización de costos de factores: salarios, tarifas de servicios públicos, tipo de cambio (mantenido estable por un largo período luego de la inicial devaluación al asumir K. Vasena), precios de los alimentos básicos (cuyo aumento fue evitado al producirse la devaluación, mediante las retenciones a las exportaciones agropecuarias), precios industriales de productos consumidos por otras industrias (insumos).

Todo ello fue acompañado por una política monetaria y crediticia expansiva que permitió que el producto creciera en forma importante a partir de 1967, al mismo tiempo que se logró reducir la inflación.

Sin embargo este crecimiento de la producción tuvo una orientación francamente antipopular. De hecho la reducción de los salarios reales fue uno de los mecanismos aplicados para reducir la inflación.

Los sectores de la producción que impulsaron esta fase ascendente fueron, por una parte, la ya mencionada construcción de obras de infraestructura, destinada a facilitar la actividad privada industrial y apoyada en la inversión pública, y en lo que respecta a la producción para consumo privado, los sectores que más crecieron fueron el metalmeccánico (automotores) y la construcción de viviendas privadas, lo que señala que eran los sectores sociales de ingresos altos y medio-altos los beneficiados por la política económica.

Otra vía para reducir la inflación fue el saneamiento de las cuentas estatales, que fue rápidamente logrado fundamentalmente a través del despido masivo y reducción de los salarios de los empleados públicos, con lo que se afectó fuertemente a la clase media baja, con mayor intensidad aun que a la obrera.

Esto no hacía más que seguir la pauta de constitución del nuevo mercado de consumo relacionado con la fase industrial de producción de bienes de consumo durable que se venía desarrollando hasta enton-

y que, como se señaló en el capítulo anterior, implicaba una reasignación del mercado de consumo, expandiéndose el sector de ingresos medio-altos sobre la base de la construcción de los bajos y medio-bajos, como puede verse en los cuadros siguientes:

JORNALES INDUSTRIALES EN PESOS CONSTANTES,  
INDICE 1956 = 1959 SEGUN VARIAS FUENTES

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Journal industrial medio anual, muestra del ex Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)</i>	<i>Journal industrial medio por hora, muestra INDEC</i>	<i>Journal industrial medio, datos del IECIA</i>	<i>Journal mínimo de obreros, promedio ponderado del salario del polo blanco, construcción tipo y el polo blanco</i>
1956	100,0	100,0	100,0	100,0
1957	99,7	99,1	98,1	98,5
1958	94,4	93,2	90,3	91,0
1959	94,4	93,8	90,3	98,5

FUENTES: Columnas (1) y (2), calculado de Instituto Nacional de Estadística y Censos, *Boletín Estadístico Trimestral*, varios números. Columna (3), calculado de planillas internas no publicadas del Banco Central de la República Argentina. Columna (4), calculado de Ministerio de Economía y Trabajo y Ministerio de Hacienda, *Indicadores económicos*, varios números, y Juan Carlos de Pablo, "Políticas de estabilización para una economía inflacionaria en crecimiento", *Desarrollo Económico*, nº 32, julio-diciembre 1973, pp. 571-597.

Nota: Datos deflacionados por el índice de costo de vida de la ciudad de Buenos Aires.

JORNALES DE OTROS TRABAJADORES NO INDUSTRIALES EN  
VALORES CONSTANTES, INDICE 1956 = 1959

	(1)	(2)	(3)
	<i>Journal mínimo del obrero de la construcción</i>	<i>Journal mínimo del obrero de minas y canteras</i>	<i>Journal mínimo de trabajadores agropecuarios</i>
1956	100,0	100,0	100,0
1957	100,0	104,7	101,6
1958	92,8	92,0	92,2
1959	91,7	92,7	92,6

FUENTES: Planillas internas no publicadas del ex Consejo Nacional de Decretos.

Nota: Datos deflacionados por el índice de costo de vida de la ciudad de Buenos Aires.

Aunque debe señalarse que la recuperación observable en 1963 se debió a aumentos salariales dispuestos en el segundo semestre de 1962, cuando el ex jefe de Gabinete Juan José de Pablo, asesorando al Ministerio de Economía, fue autorizado a hacer pases al punto de información mensual (salarios mínimos de construcción, columna 1 del cuadro 17.10) muestran un descenso en el primer semestre de 1963 respecto del nivel de los años anteriores.

SUELDOS DE ALGUNOS SECTORES MEDIOS ALTOS, EN VALORES CONSTANTES, (INDICE 1966=100)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Sueldo básico del empleado de menor jerarquía en el gobierno central</i>	<i>Sueldo básico del maestro de escuela primaria</i>	<i>Sueldo básico de docente de enseñanza de secundaria</i>	<i>Sueldo básico del empleado bancario de menor jerarquía</i>	<i>Sueldo básico del conductor de vehículos públicos de tramo corto</i>	<i>Sueldo básico del empleado del personal técnico de la industria</i>	<i>Sueldo básico del empleado de menor jerarquía en el sector privado</i>
1965	107,0	109,5	130,1	130,9	100,5	100,0
1967	124,5	129,8	151,1	152,4	102,9	101,1
1968	141,4	146,6	166,7	167,5	105,6	102,2
1969	155,5	159,0	188,7	191,7	109,5	103,7

FUENTE: Columna (1), planillas internas no publicadas de la Secretaría de Hacienda. Columnas (2-6), planillas internas no publicadas del ex Consejo Nacional de Incentivos y Muestreo (ex Secretaría, según las publicaciones "Trabajo y Política de salarios y salidas, varios números. Columna (7), Centro de inversión científica, Administración Pública, Instituto T. D. T. de la Torre, Buenos Aires, 1971, "Determinación de objetivos y asignación de recursos en el I. D. T. A." un artículo en "ID".

NOTA: (1) Datos de Hacienda por el Índice de costo de vida de la ciudad de Buenos Aires. (2) "Sueldo básico" es el de empleado de menor jerarquía en el sector privado por estadísticas post-secundarias complementarias.

SUELDOS DE ALGUNOS SECTORES MEDIOS ALTOS, INDICE 1966=100,0

	<i>Ministro y subsecretario del gobierno nacional</i>	<i>Jefe de departamento o coordinador general del gobierno central (nivel del de la administración pública central)</i>
1966	100,0	100,0
1967	162,5	96,5
1968	199,9	129,5
1969	175,8	176,3

FUENTE: Calculado sobre datos no publicados de la Secretaría de Hacienda a los que he tenido acceso por gentileza de William Smith.

NOTA: Datos deflacionados por el índice de costo de vida de la Ciudad Federal.

PRINCIPALES DATOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, INDICES 1966=100,0, A VALORES CONSTANTES

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Total Ingresos</i>	<i>Total egresos</i>	<i>Egresos corrientes</i>	<i>Egresos de Capital</i>	<i>Déficit</i>	<i>Porcentaje del déficit sobre el total de egresos</i>	<i>Porcentaje del déficit sobre el producto bruto interno</i>
1965	99,3	83,4	80,7	84,2	62,7	1,1
1966	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	5,0
1967	124,8	104,9	95,1	153,0	57,9	1,7
1968	134,7	102,4	93,9	165,3	26,5	6,7
1969	141,5	108,5	97,9	170,1	23,9	1,8

FUENTE: Computado de Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda, Informe económico, varios números; Ministerio de Hacienda, Boletín Mensual, varios números, y Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Tesoro, planillas de trabajo no publicadas sobre ejecución del presupuesto del Gobierno Nacional.

NOTA: Datos deflacionados por el índice de precios mayoristas nacionales.

La política económica que favorece la concentración del capital, la desnacionalización del aparato productivo y reduce el poder adquisitivo de los sectores populares que componen el sector mayoritario del mercado interno, afectó también al empresariado de capital nacional.

El sector urbano de esta burguesía nacional está compuesto fundamentalmente por dos grupos de empresarios, uno abarca al del pequeño y mediano capital que compone la amplia mayoría del sector, estrechamente dependiente del mercado interno consumidor de bienes salario, y con poca o nula vinculación directa con el capital transnacional, aunque en muchos casos relacionado en forma subordinada con las filiales de las empresas extranjeras que operan en el país. El otro grupo está integrado por un número menor de grandes empresarios de capital nacional, más vinculado a empresas transnacionales <sup>(ETs)</sup> pero manteniendo ciertas contradicciones con ellas. En primer lugar, porque estos empresarios nacionales son conscientes de que su desarrollo es correlativo al desarrollo integral de la economía nacional y de tecnologías propias, a diferencia de las formas de crecimiento impulsadas por las filiales de las ETs, que se rigen, no por las necesidades del país, sino por las estrategias que a nivel internacional diseñan sus casas matrices, no siempre coincidentes con los intereses nacionales. Además de esto, estos empresarios nacionales deben evitar que el avance incontrolado del capital extranjero dentro del país ahogue sus posibilidades de crecimiento.

Dado el mayor poder del capital transnacional, sólo recurriendo a medidas de protección impuestas desde el Estado pueden estos empresarios asegurarse un lugar en la actividad productiva y mejores condiciones para negociar con el capital extranjero.

Entre estos grandes empresarios nacionales se encuentran los dirigentes de la CSE por momentos en que desde el Estado se adoptan políticas de apertura incondicional al capital extranjero, se ponen a la cabeza de las reivindicaciones del conjunto del empresariado nacional agrupado en esa central, exigiendo que el gobierno adopte una política económica que contemple los intereses del capital nacional.

El conjunto de los sectores afectados por la política económica de la dictadura va conformando un frente opositor en el que convergen, la clase obrera, los sectores más débiles de la clase media, la burguesía nacional urbana agrupada en la CSE, la burguesía agraria pequeña y media agrupada en la Federación Agraria Argentina (FAA), las burguesías

Como, por otra parte, es la mayoría del empresariado nacional la más perjudicada por las políticas económicas recessivas y la que depende en mayor grado de la capacidad adquisitiva del mercado interno de bienes salario, las quejas de la CGE incluyen reclamos por mantener la plena ocupación (política económica expansiva) y alzas salariales (reforzamiento del mercado interno).

De esta forma coinciden con los tradicionales reclamos de la CGT, produciéndose entonces una convergencia entre ambas centrales, que se unen en la publicación de documentos conjuntos, buscando reformar así el poder de reclamo de cada una, en contra de la política gubernamental, exigiendo la adopción de una política "nacional y popular".

Esto comienza a ocurrir durante la gestión de Onganía, sumándose además a las quejas los restantes sectores perjudicados por su política gubernamental: los sectores menores agresivos de la clase media (fundamentalmente empleados públicos organizados en los sindicatos que serán la base de la combativa CGT de los Argentinos que surgirá en marzo de 1968), la burguesía agraria pequeña y mediana (organizada en la Federación Agraria Argentina, FAA), las burguesías regionales (del interior del país), e incluso la gran burguesía terrateniente, al declarar que la medida con que la amenaza Onganía, el impuesto a la renta potencial de la tierra, es parte de un "proyecto colectivista".

Se conformará así un frente opositor que será capaz de derribar a la alianza en el poder, compuesta por los sectores más fuertes de la sociedad, las fuerzas armadas y el gran capital monopolístico industrial y financiero extranjero y nacional asociado.

Con respecto a la organización que representa a la burguesía nacional, la CGE, hay que señalar la política pendular que muestra desde su constitución durante el gobierno peronista.

En aquel momento, dada la política de fomento al desarrollo industrial de ese gobierno, la CGE se convierte en parte de la alianza gobernante, junto, entre otros, a la CTT.

En los últimos años del mismo gobierno, la crisis económica y el agotamiento del modelo de desarrollo populista, llevan a esa organización a reclamar un elevamiento de la explotación de la clase obrera y un acercamiento al capital extranjero con el objetivo de poder renovar el equipo industrial, adquiriendo nueva maquinaria con tecnología incorporada más avanzada que permita sustituir trabajo por capital y aumentar los niveles de productividad acentuando así el nivel de explotación de la mano de obra obrera.



De esta forma, la CGP abandona la alianza gobernante y adopta una actitud pasiva frente al golpe de 1955 que derroca al gobierno peronista.

Sin embargo, a partir de ese año, en los momentos en que los gobiernos que se suceden adoptan políticas económicas abiertamente liberales y en favor del gran capital vinculado al exterior y de la fracción terrateniente, todos representados por ACIL, la CGP volverá a acercarse a la CGP para exigir rectificaciones al gobierno, como ocurre durante la presidencia de Onganía.

Esta situación también se observa con respecto a la fracción industrial del gran capital nacional y extranjero representado por la dirigencia de la UIA, en cuanto a sus relaciones con la fracción terrateniente. Como señala O. Landi: "Frente a (<sup>recurrentes</sup> las crisis de confianza de bancos en que desemboca cada fase de crecimiento), las capas altas de la burguesía industrial tendieron a pactar con la burguesía agro-exportadora -principal proveedora de divisas- en programas de devaluación y estabilización. Una vez mejorada la situación externa, y cuando la caída de la masa de ganancias -a raíz de la contracción del mercado interno- comenzó a descompensar la inicial elevación de la cuota de ganancias -impulsada por la caída del salario real-, esas capas altas de la burguesía industrial se inclinaban, receptivas, hacia las presiones de las capas menores del empresariado y del sector asalariado. Esta heterogénea convergencia se orientaba, entonces, hacia la reactivación del mercado interno; con ello se daba impulso a un nuevo tramo expansivo. Y el abandonado sector agro-exportador daba su aporte a la expansión urbana con una parte de su sólida renta diferencial de la tierra, que le era extraída compulsivamente a través del tipo de cambios oficial, la contención del precio interno de los alimentos -bienes salario por excelencia-, la creación de impuestos especiales, etc.

"De modo que aquellos sectores de la burguesía industrial completaban una suerte de movimiento pendular entre dos pactos económicos coyunturales. Mercad a ellos siempre obtenía ventajas inmediatas, pero al costo de no poder constituirse políticamente como un sujeto claramente diferenciado.

"Para algunos grupos empresariales este movimiento no consistía sólo en un penduleo entre dos interlocutores con los que establecían diferentes pactos económicos, (el sector agroexportador y las capas menores del empresariado urbano). Por sus inversiones simultáneas

en el campo, la industria, el comercio y las finanzas, comportaba también el desplazamiento de su centro de acumulación de un sector económico a otro, según lo aconsejaban las diferentes coyunturas".

Esta constante reestructuración de las alianzas entre distintas fracciones de la burguesía indica, por un lado, el carácter cíclico que adquiere la acumulación del capital, concentrándose alternativamente en unas u otras de esas fracciones de acuerdo a la evolución coyuntural de la economía. Tensión dentro del terreno económico manifiesta la capacidad limitada de cada fracción para generar los excedentes necesarios como para impulsar el desarrollo por sus propios medios, haciéndose necesaria entonces la transferencia de ingresos de un sector económico a otro.

Pero esto repercute en la situación política, dado que la reestructuración de esas alianzas acentúa la inestabilidad vivida en el país en esos años, por un lado, al debilitar o desestructurar a la alianza que en determinado momento se encuentra al frente del gobierno, o fortalecer, por otro lado, a la alianza opositora que busca sustituir a la anterior.

De esta forma se produce lo que algunos autores denominan "empate hegemónico" entre las distintas fracciones de la burguesía, por el cual ninguna de ellas es capaz de apropiarse definitivamente de la hegemonía dentro del bloque burgués y sobre el conjunto de la sociedad.

Esta característica de la situación política argentina se ve acentuada por las particularidades de las formas organizativas e ideológicas de la clase obrera: fuerte capacidad de presión por reivindicaciones inmediatas económicas pero -ante el predominio de la ideología y las dirigencias burocráticas peronistas proburguesas- falta de una organización, estrategia o ideología que definan un proyecto de poder que busque la destrucción del sistema capitalista. Como señala J.W. Cooke con respecto a esta clase: "Por nuestras virtudes hemos podido impedir las contradicciones internas de los sectores gobernantes, impedir muchos de sus abusos, evitar la institucionalización del despojo y el semicolonaje. Por nuestras carencias no hemos logrado impedir que el régimen siga manteniendo intacta la superioridad en fuerza material que le permite subsistir, oscilando entre la dictadura desnuda y la dictadura encubierta tras las formas rituales de la democracia minoritaria. A su anarquía e incoherencia

hemos opuesto nuestras propias insidiasiones, nuestra investigación teórica y operativa. Con lo que, en cierta manera, la tendencia al "empate hegemónico" también se verifica en las relaciones entre la clase trabajadora y el conjunto de la burguesía.

Al mismo tiempo, el carácter proburgués de la dirigencia peronista hace potable para el conjunto del mediano empresariado nacional organizado en la CTE, buscar una alianza con la CGT y reformar así la capacidad de presión y finalmente derribar a los gobiernos representantes del gran capital.

En estas recomposiciones de las alianzas políticas hay que considerar también los cambios de posición de otros sectores sociales como las fuerzas armadas y la Iglesia.

Así ocurrió en 1955 con el cambio de posición de la CGE, de la Iglesia, que había apoyado el ascenso del peronismo al gobierno para pasar luego decididamente a la oposición, y el Ejército, donde se refuerza el sector opositor mientras que el sector que apoyaba a Perón adopta una actitud pasiva frente al golpe que lo derrocó.

Con la dictadura implantada en 1955, los partidos antiperonistas que la apoyaron en un principio, al ver que la política económica liberal en favor del gran capital y francamente antipopular dificultaba la posibilidad de absorber y ganar para ellos al electorado peronista, adoptan una actitud de oposición a la dictadura y exigen acelerar el llamado a elecciones para instalar nuevo gobierno.

Durante la presidencia de Frondizi, la clase obrera peronista cuyos votos le habían dado la victoria pasan a la oposición, aue el incumplimiento por parte de Frondizi de las promesas electorales, iniciando una ola de protestas que contribuyó a su caída.

Los militares "azules", que habían sostenido las elecciones de 1963 que llevaron a A. Illia a la presidencia al frente de la UCRP, fueron precisamente los que terminaron derrocando a ese gobierno en junio de 1966.

Finalmente, la gran coalición que apoyó este golpe de Estado comienza a disgregarse, con el paso de varios de sus integrantes -el sindicalismo vandorista, la burguesía nacional, sectores políticos e intelectuales nacionalistas- y la burguesía ganadera a la oposición que provocará la caída de Onganía a mediados de 1970.

Las diferencias al interior del régimen

En marzo de 1968 se llevó a cabo el Congreso Normalizador <sup>de la CGT</sup> destinado a elegir autoridades dada la situación de acefalia en que había quedado la central obrera tras la renuncia de la dirigencia con ocasión de la derrota de marzo del año anterior.

Como secretario general fue elegido el obrero gráfico R. Ongaro, de la izquierda peronista, opositor de plano al régimen y a cualquier tipo de negociación con el mismo. Los dirigentes del sector vanderista y los "participacionistas" no aceptaron esa elección y se retiraron del congreso para reunirse en otro local y elegir otra dirigencia, fracturándose así la CGT. La dirigencia combativa, encabezada por Ongaro conformó la CGT de los Argentinos (CGT-A), mientras que los que se retiraron del congreso se organizaron en la CGT de Azopardo, por la calle donde se situaba su sede.

La CGT-A rápidamente se ganó el apoyo de sindicatos del interior del país, donde la clase obrera estaba adoptando una actitud de enfrentamiento al régimen más abierta que en Buenos Aires. En esta última, los sindicatos más importantes que <sup>integraban</sup> agrupaban a obreros y empleados del Estado y empresas públicas, afectados por la política de "racionalización" en este área encarada por la dictadura: ferroviarios, telefónicos y empleados de la administración pública. Del sector privado, el más importante por el número de afiliados era el sindicato gráfico, pequeño en comparación de los grandes sindicatos industriales, agrupados principalmente en la corriente vanderista.

La conformación de la CGT-A da un nuevo impulso a la Lucha contra la dictadura, principalmente en el interior del país, e incluso obliga a los dirigentes vanderistas a adoptar una posición más firme frente a aquélla para no quedar desubicados ante sus bases dado el ejemplo de combatividad de la CGT-A.

El ascenso popular contribuyó a profundizar las diferencias que ya existían al interior del régimen entre el sector liberal que manejaba la política económica en representación del gran capital y el sector corporativista, que incluía al propio Onganía, y que detentaba los cargos "políticos" de la dictadura.

Los corporativistas insistían en que el mecanismo para reducir la oposición era acelerar el proceso de unificación sindical bajo la dirigencia de los "participacionistas", con lo que el movimiento obrero quedaría bajo la tutela del Estado, aunque los hechos demostraban que

se estaba bastante lejos de lograr ese objetivo, sobre todo porque el sector vanderista no estaba dispuesto a entrar en un acuerdo abierto con el régimen, pues mientras éste siguiera apoyando la política económica antipopular manejada por los liberales tal acuerdo significaría un abrazo mortal para esa dirigencia sindical.

Las organizaciones corporativas del gran capital y sus representantes dentro del gobierno reconocaban temerosamente esa política de unificación sindical, aun bajo una dirigencia claudicante sometida al Estado, y pretendía aprovechar el período dictatorial para llevar adelante una "reestructuración definitiva" de la legislación sindical que concretara los reclamos que venía realizando desde años atrás, tendientes a atomizar el movimiento sindical a través de la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales.

Las diferencias se agravan cuando los corporativistas, para facilitar la cooptación de los dirigentes sindicales, declaran que, llevado a cabo con éxito el "tiempo económico" ("saneamiento" de la economía y crecimiento de la producción bajo la gestión de F. Vasena), había llegado el momento de dar lugar al "tiempo social", que implicaba llevar adelante cierta redistribución de ingresos en favor de los sectores populares y concretar los mecanismos de organización corporativa no sólo de la clase obrera sino también de las organizaciones empresariales. Incluso se llegó a hablar de la falta de "sensibilidad social y nacional" del ministro de Economía y de la necesidad de su reemplazo por un equipo más cercano a los corporativistas y más alejado del gran capital. Según G. O'Donnell, "No sólo en mis entrevistas posteriores (a los hechos) sino también en conversaciones con paternalistas (corporativistas) colocados en las más altas posiciones gubernamentales durante el período aquí analizado, estas intenciones me fueron expresadas sin rodeos. No eran, por cierto, un secreto para cualquiera medianamente informado".

Por el contrario, para la gran burguesía el "tiempo social" y los esfuerzos por "organizar" a los sindicatos amenazaban arruinar lo logrado por la política económica en momentos en que esa burguesía, gracias a esos logros y a los apoyos militares con que contaba -entre ellos el del comandante en jefe del Ejército, gral. J. Alsogaray-, sentía al alcance de la mano el logro de su propio programa máximo: mantener la comprésión de los salarios, disolver la CGE, instaurar la "libertad" de contratación (estas dos medidas como consecuencia de la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales), y continuar el

"saneamiento" fiscal mediante, sobre todo, la privatización de empresas estatales rentables e, incluso, la liquidación del sistema provisional (de jubilaciones y Obras Sociales de los sindicatos).

¿Por qué, entonces, como a fines de 1966 -con la destitución del ministro de Economía Salimei y su sustitución por K. Vasena- pero en condiciones diferentes ahora gracias al "orden" logrado y los éxitos de la política económica, no pensar en la sustitución de Onganía por un jefe militar que hiciera más compatible la cumbre del aparato estatal con la gran burguesía y que, de paso, consolidara en beneficio de los liberales la situación militar, dado que al interior de las fuerzas armadas también existía el enfrentamiento entre corporativistas y liberales?

Entre tanto salían a la luz pública las diferencias a través de declaraciones del "equipo político", de enfrentamientos entre éste y el comandante del Ejército, en especial uno que involucró al secretario de Difusión y Turismo de la Presidencia de la Nación, que el gral. Alsogaray aprovechó para declarar públicamente que la política económica que se seguía no era cuestión de preferencias personales sino el "programa de la Revolución Argentina" según lo formalizaban los documentos de la Junta Revolucionaria (de los comandantes en jefe de las tres Fuerzas).

Surgieron entonces algunas veleidades nacionalistas de los corporativistas, como la reserva por el gobierno del nuevo sistema de comunicaciones internacionales vía satélite al que aspiraba la ITT, en contra de la posición del equipo económico y del comandante en jefe del Ejército, y el lanzamiento de un plan de reequipamiento militar exclusivamente con proveedores europeos y apuntado a mediano plazo a la fabricación local de parte de esos equipos.

Había, además, notorias "incomunicaciones" entre el equipo económico y la presidencia.

Finalmente en agosto de 1968 Onganía destituyó a los comandantes en jefe de las tres fuerzas, entre ellos al gral. J. Alsogaray, reemplazándolo por el gral. A. Lanusse.

El gral. Alsogaray hizo entonces críticas públicas al personalismo y autoritarismo del gral. Onganía y a la falta de concepciones democráticas del equipo político del gobierno. Las reivindicaciones democráticas serán utilizadas desde entonces por los liberales para desacreditar al proyecto corporativista de Onganía, aunque cada vez éstos hagan alusión a la democracia realista que ésta no debe

ser restituida en forma apresurada sino hasta que la Revolución Argentina haya cumplido con sus objetivos, es decir, el programa máximo ya mencionado de los liberales, fundamentalmente la desestructuración del movimiento obrero, punto central de las diferencias entre corporativistas y liberales.

La prensa representante del gran capital comienza a hablar también del "autoritarismo" del gobierno.

Otro problema aumenta las tensiones entre Onganía y los cuadros de las fuerzas armadas. Mientras el proyecto corporativista no se concretara, el presidente pensaba seguir utilizando como principal instrumento para tratar con quienes no se avinieran a concertar con el gobierno, la represión directa, en la que se involucraba a las fuerzas armadas. El permanente enfrentamiento de éstas con la amplia mayoría del pueblo acentuó su rechazo por la política presidencial, al tiempo que daba más argumentos al sector liberal de los militares para criticar el autoritarismo del presidente y su equipo político.

Por otra parte, se hacía cada vez más evidente para los sectores políticamente más lúcidos de la oficialidad, entre ellos el nuevo comandante en jefe del Ejército, que la situación social y la convergencia de cada vez más sectores en la oposición llevaban a un estallido de imprevisibles consecuencias.

CAPITULO 6

El resurgimiento de la lucha popular

La conformación de la CGT-A a principios de 1968 dio un impulso a la oposición de obreros y empleados a la dictadura. Conjuntamente con ello se acentuaba la movilización de sectores de clase media como el estudiantado universitario y el también organizado en esos momentos "Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo" que señalaba el proceso de radicalización de sectores de la Iglesia. En diciembre de ese año estos sacerdotes realizaron huelgas de hambre en Reconquista, capital de la provincia del Chaco, tradicionalmente pobre y una de las economías regionales -anoyada principalmente en el cultivo minifundista del algodón- más afectadas por la política económica de la dictadura. También lo hicieron en Buenos Aires, formando piquetes frente a la Casa de Gobierno en protesta por la política económica y sus consecuencias sociales. Desde entonces participaron en numerosos actos similares y en conflictos con varios obispos. Tuvo influencia en los sectores juveniles de la izquierda peronista, en sectores sindicales desgajados del participacionismo y el vanguardismo y en diversos sectores medios.

Con respecto al estudiantado universitario, el enfrentamiento con la dictadura venía desde que ésta se había implantado. Una de las primeras medidas dictatoriales fue el ataque a las Universidades, como parte de su política de "despolitización" a garrotazos. Fueron echados todos los profesores que se manifestaron como progresistas o simplemente democráticos, imponiéndose un ambiente represivo y oscurantista.

En Buenos Aires, alumnos y profesores tomaron las instalaciones de algunas Facultades para impedir los cambios a que obligaba el gobierno y fueron desalojados a golpes por la Guardia de Infantería en la denominada "noche de los bastones largos".

A principios de 1969 se tomaron medidas que afectaban económicamente a los estudiantes de la Universidad del Nordeste,

En las manifestaciones de protesta la policía asesinó al estudiante Juan José Cabral.

Inmediatamente se levantó la protesta del estudiantado universitario de todo el país, extendiéndose las movilizaciones, en las que caen más estudiantes obreros, en ciudades como Rosario, Córdoba, La Plata, Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires.

A diferencia de Corrientes, estas ciudades tenían un importante desarrollo industrial con presencia de grandes empresas y por lo tanto



con enfrentamiento directo del gran capital con la clase obrera, que comienza a converger con la lucha estudiantil, principalmente en las ciudades de Rosario y Córdoba.

La tensión obrera se encontraba en aumento desde marzo de 1969 cuando, en lugar de llevarse a cabo la prometida negociación de los Convenios Colectivos para reajustar los salarios después de dos años de haber permanecido congelados, el gobierno dio un aumento general por decreto del 8%, que no alcanzaba a compensar los aumentos de precios del período de congelamiento salarial.

En el interior del país los empresarios se opusieron a la eliminación de las "quintas semanales" dispuesta por el gobierno, según las cuales, por una disposición tomada por el gobierno peronista para promover la industrialización fuera de Buenos Aires, las empresas radicadas en el interior podían reducir en determinados porcentajes los salarios de sus trabajadores.

Para compensar esta medida, la dictadura había eliminado el "sábado inglés", también en el interior del país, mediante el cual los trabajadores habían logrado reducir la jornada laboral de los sábados a medio día sin reducción de los salarios. Esta disposición si fue aplicada de inmediato por los empresarios.

En momentos en que se producían las movilizaciones estudiantiles, los trabajadores de Rosario y Córdoba inician una serie de paros y marchas. Todo ello culmina con la huelga nacional decretada por la CGT-A, y que debió ser secundada por la CGT de Azopardo debido a la presión de las bases, para los días 29 y 30 de mayo.

Las regionales cordobesas de ambas CGT decidieron que el paro sería "activo", con movilización de los trabajadores, por lo cual la medida daría comienzo a las 12 horas del mediodía del 29, para permitir que los trabajadores se reunieran por la mañana en sus lugares de trabajo y desde allí marcharan en manifestación hacia el centro de la ciudad.

Los estudiantes se sumaron a la movilización obrera, la que contó además con el apoyo y la participación activa del conjunto de la población cordobesa, produciéndose lo que será conocido como el "Cordobazo".

La movilización superó la acción policial y se apoderó del control de la ciudad por varias horas hasta que se produjo la intervención del ejército, ante el cual, careciendo el pueblo de medios para hacerle frente, se replegó, quedando la ciudad en manos de los milita-

A partir de entonces los alzamientos urbanos con la toma de control de las ciudades por parte de la población se extendieron por todo el país, con la excepción de Buenos Aires.

En general, durante todo este período contrastó el nivel de gran combatividad demostrado por los trabajadores del interior del país, enfrentando a las patronales, el gobierno y la dirigencia sindical burocrática, con la mayor pasividad de los obreros de Buenos Aires.

En esto incluyeron las características de la clase obrera de origen reciente en los nuevos polos de desarrollo industrial surgidos muchos de ellos en la fase de crecimiento ya comentada que tiene lugar en los años cincuenta. Esto es así principalmente en la ciudad de Córdoba y en Villa Constitución, zona industrial vecina a la ciudad de Rosario.

Por otra parte, la lejanía de Buenos Aires permitía una dependencia menos estrecha de la burocracia sindical nacional, favoreciendo la constitución de sindicatos y direcciones obreras combativas.

A pesar de ello, la presión en contra de la dictadura era tal que también en Buenos Aires llegó a decretarse un paro activo con movilización para octubre de 1969 que tendría características similares al de Córdoba, pero ante las amenazas de represión por parte del gobierno la CGT de Azopardo levantó la medida y se prestó al diálogo con la dictadura. La CGT-A ya no podía presionar en ese momento a la otra central obrera como lo había hecho en mayo, pues estaba en proceso de disolución debido, por un lado, a la represión a que la sometió el gobierno a partir del "Cordobazo", y por otro, a las propias carencias de su dirección, características de los sectores progresistas del peronismo, consistentes en una falta de una política clara y en seguir sometándose a la dirección política oportunista de Perón. Fue éste el que condenó a la CGT-A a la desaparición al ordenar la reunificación de ambas centrales obreras, con lo que importantes sindicatos de la CGT-A comenzaron a pasarse a Azopardo.

El caso de Córdoba puede ser observado como un ejemplo de los polos de desarrollo industrial en el interior del país y de acelerada conformación de un núcleo de clase obrera con características diferentes a las de Buenos Aires en ciertos aspectos.

Si bien desde 1927 existía en esta ciudad la Fábrica Militar de Aviones, es a principios de la década de 1950, con la segunda presidencia de Perón, que tiene lugar un acelerado desarrollo de industrias modernas.

En 1951 se crea la Fábrica de Motores y Automotores y al año siguiente se fusiona con la Fábrica Militar de Aviones conformándose las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME).

En un proyecto conjunto con esta empresa se establece en 1954 la italiana FIAT, cuyos trabajadores tuvieron un papel importante en el "Cordobazo" de 1969 y en el de 1971.

En esa misma época se establecieron también la automotriz norteamericana Kaiser.

De esta forma, si las industrias dinámicas absorbían el 43.2 % de la mano de obra industrial en 1946, en 1953 ese porcentaje será del 63.4. Alcanzando en 1961 al 74.7 %.

El crecimiento de la ocupación industrial total en la ciudad fue del 168.1 % entre 1846 y 1961, siendo las empresas automotrices las que tienen el papel preponderante.

Este tipo de empresas ocupa una alta proporción de trabajadores de media o alta calificación. Si se considera el total de empresas de capital extranjero que intervienen en la industria del transporte en el año 1970, por 3 935 peones y obreros no calificados emplean 15 364 obreros especializados y 8 088 calificados. Por otra parte, el 35 % de los trabajadores de estas empresas en Córdoba eran estudiantes de la universidad de esa ciudad, existiendo en general un contacto estrecho entre el estudiantado universitario y la clase obrera cordobesa, algo que sucede también en Rosario y la vecina Villa Constitución pero no en Buenos Aires, lo que en las dos primeras ciudades contribuye a la politización de los trabajadores y a la organización de acciones conjuntas.

En la ciudad de Córdoba la CGT regional también se había dividido en CGT-A y CGT de Azopardo, respondiendo a las respectivas centrales nacionales ubicadas en Buenos Aires, de acuerdo a la central a que pertenecieran los sindicatos nacionales de que formaban parte las filiales sindicales de Córdoba.

Sin embargo la regional cordobesa de la CGT de Azopardo había adoptado una línea combativa contra el régimen, fundamentalmente a partir del peso que dentro de ella tenía el sindicato de trabajadores de la industria automotriz dirigido por Elpidio Torres, enfrentado a la dictadura y por lo tanto también a la dirigencia nacional de ese sindicato. La regional cordobesa del sindicato de Luz y Fuerza -uno de los principales integrantes del "participacionismo" en Buenos Aires- se había separado de lo central bonaerense y bajo la dirección de Agustín Tesco se había integrado a la CGT-A.

En las plantas de la FIAT habían surgido además sindicatos "por empresa" de carácter clasista, reivindicando, por lo tanto, una línea

política que promovió los verdaderos intereses de la clase obrera, buscando impedir que ésta siguiera a remolque de dirigencias burguesas como ocurría con el peronismo.

Fue esta efervescencia social la que obligó a la dirigencia vandorista de la CGT de Azopardo en Buenos Aires - que si bien buscaba no quedar abiertamente comprometida con la dictadura, adoptaba una actitud conciliadora frente a ella para no interrumpir los canales de negociación - a plegarse al paro de los días 29 y 30 de mayo, el que incluso fue acatado por las bases de los sindicatos participacionistas, pasando por encima de sus dirigencias.

También Perón se vio obligado a adoptar una posición más firme frente al régimen, volcando su apoyo a los sectores juveniles y más radicalizados del peronismo, aunque al mismo tiempo escribía el libro "La Hora de los Pueblos", el cual, tras ese sugestivo título era un mensaje claramente dirigido a la burguesía argentina en el que alertaba sobre el inevitable estallido social a que llevaba la brutal y ciega política de Onganía, y en el que se proponía a sí mismo como el único factor de equilibrio que podría desde el gobierno contener la situación. En él escribía que "lo que está faltando al país es paz, confianza y trabajo. Sin paz no será posible una convivencia y sin ella no habrá confianza, por eso la solución política justa es previa a cualquier otra solución... Las soluciones políticas, económicas y sociales no pueden llegar sino por el camino de la paz y la confianza, pero ambas no pueden llegar precedidas por la injusticia y el terror. Esto deben comprenderlo, en especial los dirigentes, porque un político puede carecer de todo menos de imaginación y sensibilidad".

El término "confianza" tiene un claro contenido de clase y es el permanentemente utilizado por la burguesía para referirse al clima de "orden" necesario para asegurar las inversiones de capital. En Argentina no faltaba "trabajo" sino una mejor remuneración por el mismo. Y si Perón hablaba a la juventud peronista de la necesidad de una revolución, no sería a través de la "paz" que ésta sería realizada.

La dualidad discursiva de Perón pronto se trasladaría a un terreno más concreto, la guerra entre la izquierda y la derecha del peronismo, con la aparición de las bandas paramilitares de secuestradores organizadas conjuntamente por la derecha peronista y las fuerzas armadas.

Perón era consciente del aspecto ideológico de la crisis argentina y del peligro que significaba para el sistema socioeconómico vigente, escribiendo que "lo que está en juego es el patriotismo moral y material

de todos los argentinos". "Se puede perdonar cuanto se ha destruido en el orden material pero, como argentinos, no podemos perdonar el intento de destruir el alma nacional". "La crisis moral de los argentinos es el peor azote de la situación actual. Estos doce años de distorsión de los verdaderos poderes del Estado han tenido la virtud de destruir una comunidad que se encaminaba a la unidad nacional por los caminos de la justicia social, la independencia económica y la soberanía nacional".

Sin embargo, aunque Perón se presentaba como la solución política inmediata, y así lo comprendió un sector de las fuerzas armadas, la solución al problema económico que delineaba en ese mismo libro consistía en un retorno a 1945, algo imposible dadas las nuevas características de la economía argentina y de los sectores predominantes de la burguesía. Así señalaba que "El problema de la economía popular, maltrata por los abusos y desatinos que se han venido cometiendo, se ha transformado en causa y efecto del mal estado social-político, así como la crisis de consumo ha sido causa y efecto de la caída de la economía nacional, porque los cuatro factores económicos (producción, transformación, distribución y consumo) deben mantener un equilibrio indispensable. Cuando se congelaron los salarios y liberaron los precios, provocando una inflación desenfreada, quitaron sistemáticamente el poder adquisitivo a la masa popular y con ello comenzaron a crear el desequilibrio que había de ser fatal a unos y a otros. Mataron la gallina de los huevos de oro, porque al arruinar la economía popular se arruinaron todos los que de una manera directa o indirecta dependían de ella, creando además una perturbación social que había de trabajar en contra de todas las soluciones que no fueran restituir el poder adquisitivo injustamente suprimido".

Agregando además que "Se ha descapitalizado al país porque se lo ha saqueado desde adentro y de afuera; un solo casino queda para capitalizarlo: cerrar los puertos de la descapitalización y trabajar para capitalizarlo nuevamente".

La economía apoyada en el consumo popular fue la que se desarrolló durante la primera etapa de sustitución de importaciones de bienes de consumo que abarcó la primera presidencia de Perón, pero como ya se señaló, la siguiente etapa de producción de bienes de consumo durables (automotores, artículos para el hogar, etc.) que comienza a fines de los 50, está dirigida a un mercado de consumo conformado

por sectores de ingresos altos y medio altos, mercado que se busca expandir, entre otras formas, mediante la reducción de los salarios obreros para abaratar el costo de producción de ese tipo de bienes.

El funcionamiento de la economía a partir de la década de 1960 ya no se apoya, por lo tanto, en los mecanismos populistas de expansión del mercado de consumo de las clases populares.

Prender volver a ese tipo de economía populista implica un ataque a las grandes empresas extranjeras productoras de bienes de consumo durables e insumos utilizados en su fabricación, pues una política de redistribución de ingresos en favor de la clase obrera alteraría las bases de funcionamiento de la economía en que se apoyan esas empresas. De la misma forma que se verían perjudicadas por el "cierre de las puertar de la descapitalización" que implica poner límites a las remisiones de sus dividendos.

Por lo tanto el programa económico de Perón aparece atacando a los sectores que ya son hegemónicos en la economía argentina, mientras que la burguesía nacional en la que debería apoyarse tal programa, no tiene la fortaleza ni la capacidad política suficientes para impulsarlo.

Mientras que la política económica populista del primer gobierno de Perón favoreció -dada la particular coyuntura nacional e internacional de ese momento- a ambos polos de la lucha de clases, la clase obrera y la burguesía industrial. En la nueva situación ya no sirve a ninguno. Mientras se presenta como un ataque al sector más dinámico de la burguesía industrial mono u oligopólica, tampoco tiene los apoyos políticos suficientes como en la década de 1940 para imponerse y asegurar una efectiva redistribución en favor de los sectores populares.

Por otra parte, en el propio Perón estaba dispuesto a encarar a fondo una política semejante en favor del capital nacional y de los trabajadores, como puede inferirse del contenido de las frases citadas anteriormente respecto a las características de la crisis argentina y los mecanismos para solucionarla.

La duplicidad de su discurso político con respecto a esta situación se dejó ver cuando afirmó que "Liberación es la palabra de orden en la actualidad. Nosotros debemos liberarnos de las fuerzas de ocupación que hacen posible la explotación y dominación imperialista".

Asegurando que "Las soluciones parten de un mismo punto: la paci-

ficación, sin la cual no podrá realizarse ninguna de ellas. La pacificación tiene un origen que es a la vez su punto de partida: el desarme de la agresión, seguido de un diálogo realizado con la grandeza indispensable para que sea constructivo y calificado como un desprendimiento suficiente como para que las soluciones puedan buscar el bien común. Nada se podrá intentar por otro camino en forma que la Patria tenga algo que agradecernos."

Mientras que el llamado a la liberación queda como una abstracción ya que Perón nunca definió ni envió a sus seguidores un programa con medidas concretas de organización y acción tendientes a llevarla a la práctica, la apelación a la pacificación y al desarme de la agresión sí tienen un sentido más concreto e inmediato en la situación que vivía el país en esos momentos, poner fin a la creciente lucha de clases que se desarrollaba y a las nuevas formas de organización, acción y conciencia popular que ella implicaba y que hacían temer a Perón por "la Patria que marcha peligrosamente hacia el abismo", abismo que no era otro que el desercamiento de la lucha popular abierta que, entonces sí, podría desembocar en la verdadera liberación, tanto del imperialismo como de la explotación de clases. ya que una es inseparable de la otra, aunque Perón insista siempre en la primera olvidándose de la segunda.

Nuevas formas de acción y organización social

El hecho fundamental de este período es la característica que adquiere la lucha popular y que tiene relación con el alerta dado por Perón acerca de la "crisis del patriotismo moral" y del peligro en que se encuentra la "unidad nacional". Es el grado de politización y el contenido de clase que surgen en la lucha popular en general y de la clase obrera en particular.

Si bien había reivindicaciones de carácter económico en las movilizaciones, como los ya señalados, la protesta iba más allá de ello. En el caso de Córdoba, precisamente los sindicatos clasistas se organizan en las grandes empresas automotrices que pagaban salarios más altos en relación a otros sectores obreros.

En un comentario atribuido al ministro K. Vasena después del "Cordobazo", éste habría dicho: ¿Cómo atribuir a la política económica del gobierno nacional los sucesos de mayo si sus protagonistas son los obreros mejor pagados del país?. "Desde su visión de tecnócrata Krieger Vasena podía creer legítimamente lo que ahora confirman las estadísticas: que los años 1969 y 1970 fueron, en términos relativos, buenos desde la perspectiva del salario real y la ocupación. Señalan Guerchunoff y Blach: 'No da la impresión de que los levantamientos populares de 1969 y 1970 -al margen de la influencia de aspectos económicos parciales- hayan sido rebeliones contra el hambre'. Era fundamentalmente rebeliones contra el despotismo de la nueva organización del trabajo en las empresas y contra el autoritarismo en la sociedad. En lo que se refiere a la situación de los salarios reales la evidencia desponible muestra que tras una etapa inicial de leve descenso, la tendencia se invirtió (ver cuadros anteriores)".

Hay varios elementos que contribuyen a la politización de la lucha, en primer lugar el carácter de facto del gobierno que pone en la ilegalidad a toda forma de expresión y organización de todos los sectores populares, junto a los peronistas excluidos desde hacía once años.

Esto pone al Estado y al régimen en posición de enfrentamiento frontal con esos sectores, saliendo a luz la dominación de clase, que puede ser asumida por la clase obrera a la explotación de clase, contrariamente al ocultamiento de la dominación <sup>burguesa</sup> que permiten las formas políticas democráticas, que disocian además la cuestión gubernamental de dominación de la explotación económica.

A esta coincidencia de los sectores populares -obreros, clase media baja asalariada, campesinado pobre- se agrega la de sectores pequeños burgueses y algunos de la burguesía nacional. Es esta confluencia



cia de sectores a que lleva la estructura dependiente del país y su correlativo régimen político excluyente los que politizan la lucha.

Sin embargo este tipo de coalición opositora cuyos reclamos suelen referirse a la apertura de un régimen democrático, nacional y popular, y que en el caso de la clase obrera se expresan en la ideología del peronismo, impiden a esta clase visualizar sus concretos intereses de clase y un proyecto propio de poder, sometiénola a una dirigencia sindical y política que era parte del régimen burgués y que si era excluida de ese régimen era porque el carácter pasivo y la cohesión de las bases peronistas eran capaces de desbordar a esa dirigencia.

Es esta limitación la que comienza a ser superada en estos años.

Desde el sector obrero tiene una importancia fundamental en la posibilidad de superar esa limitación la lucha -además de la llevada contra el régimen en general- que se entabla contra la dirigencia burocrática sindical aliada al régimen y a la burguesía.

La "progresiva identificación (de la burocracia sindical) con la política del gobierno militar en un contexto de violenta represión económica y política contribuye enormemente a desnudar el significado de la dominación de clase. Esto es así porque pone en relación directa la política represiva del gobierno militar con el papel asumido en la lucha cotidiana, en cada fábrica, por la burocracia sindical: la defensa de los intereses del capital. Por esta vía concreta y cotidiana, la burocracia sintetiza la relación que existe entre la explotación capitalista y la dominación. Esta síntesis que expresa la existencia de la burocracia sindical explica que la lucha de las bases por desplazarla se transforme paulatinamente en el eslabón que politiza la lucha económica día a día. En estas circunstancias, enfrentar a la burocracia que trata esta lucha significa enfrentar al agente del capital dentro de la fábrica. Además significa enfrentar la estrategia política de las clases dominantes: integrar la burocracia al sistema, como fuerza política que exprese los intereses de la patronal en el seno del movimiento obrero, con el único fin de concretar la desmovilización política y económica de la clase obrera."

Esta lucha antiburocrática traduce el deterioro de esa función de los sindicatos, que junto con el deterioro de la función de los partidos políticos y del sistema semidemocrático que se quiso imponer desde 1955, función que consiste en ocultar la dominación de clase, señalan que la burguesía se queda sin armas ideológicas para llevar a cabo la explotación y dominación de clase por medios consensuales. La lucha de clases es desde entonces abierta en Argentina.

Esta politización y creciente conciencia de clase de la lucha obrera, que ya venía creciendo desde 1955, tenía sin embargo otra limitación, la falta de organizaciones políticas que expresaran y llevaran adelante esa nueva conciencia y las formas de lucha correspondiente. Y esta carencia también comienza a suplirse en esos años.

"En la medida en que la nueva etapa de acumulación del capital agudiza el desarrollo de la contradicción principal (capital-trabajo), y esto se da en un contexto en el cual se desarrollan las condiciones superestructurales necesarias (crisis de las instituciones de dominación) para el cuestionamiento de la dominación burguesa, se generan las condiciones generales necesarias para que los intereses estratégicos de la clase obrera (el socialismo) se expresen políticamente en la coyuntura".

Aunque impliquen todavía una forma de organización "pre-política", los sindicatos clasistas son un paso adelante en este sentido, sobre todo por la ruptura que significan con la ideología de conciliación de clases y de "unidad nacional" que implica el peronismo.

Surgen además, provenientes de la izquierda y del peronismo, las organizaciones de lucha armada, que en un contexto de ascenso de la lucha obrera se convierten en una alternativa para expresar los intereses de esta clase, y ponen a la orden del día la necesidad de construir un partido revolucionario.

Por otra parte, dentro del movimiento peronista adquieren, en esa coyuntura, un papel preponderante los sectores más radicalizados, a los que se suma una nueva camada de militantes provenientes de la clase media. El propio Perón, ante el incontenible ascenso popular y la inminente caída de la dictadura vuelca su apoyo al ala izquierda del movimiento como una medida táctica en lo inmediato que acelerará la descomposición del régimen y la posibilidad de su retorno, aunque por supuesto no interrumpe el contacto con los sectores de derecha, continuando así su tradicional juego a dos puntas.

El ascenso de la izquierda peronista fue más notorio aun debido al cuestionamiento de la burocracia sindical por parte de las bases obreras. Ante la proscripción de los cuadros políticos del peronismo, los sindicatos habían adquirido el papel de representantes políticos <sup>de ese movimiento</sup> en las negociaciones con las restantes fuerzas actuantes en el cuadro político argentino. Por la orientación <sup>con</sup> que esta dirigencia ejercía ese papel, se había convertido en un pilar fun-

fundamental de la derecha peronista, como volvería a serlo en el posterior gobierno de ese partido a partir de 1973. Pero en la presente coyuntura y durante todo el proceso posterior que llevará nuevamente al peronismo al gobierno la burocracia sindical debió dar un paso al costado, quedando como reserva, agazapada en la retaguardia hasta que la derecha iniciara el contragolpe.

En general, el ascenso de la lucha obrera y popular provocará que, si la inclusión en el peronismo de los dos polos de la lucha de clases -la burguesía y la clase obrera- sirvió en un principio para conciliar los intereses de la clase obrera y de un sector de la burguesía, ahora esta característica del peronismo hará que el movimiento estalle desde adentro, reflejando en su interior la creciente lucha de clases que se estaba llevando a cabo en la sociedad argentina.

Si los nuevos cuadros políticos que expresan los intereses estratégicos de la clase obrera estaban <sup>en</sup> un proceso de organización incipiente, su peso en esa coyuntura se amplificaba debido a que al mismo tiempo estaban en crisis los cuadros políticos de la burguesía, los constitucionales desde hacía una década <sup>y media</sup> y ahora también los que conformaban la dictadura.

El ejercicio de la dominación se hacía cada vez más difícil para las fracciones burguesas representadas por el gobierno militar en ese momento, más aun dada la confluencia de diversos sectores en la oposición. "No se podía gobernar con todo el país en contra."

En un momento de ascenso de la lucha de la clase obrera, la posición de enfrentamiento al régimen que estaban adoptando sectores de la pequeña burguesía e incluso de la burguesía nacional adquiría una significación fundamental.

Es en estos sectores que -frente a la exclusión de la clase obrera peronista- el Estado y el régimen burgués buscaban <sup>desde 1955</sup> apoyo de masas para el ejercicio de su dominación, quedando aislada la clase obrera en la oposición. Pero en una situación como la que se daba en esos momentos, en que vastos sectores medios y del pequeño y mediano empresariado de capital nacional se veían perjudicados, la falta de canales institucionales para expresarse hacía que tales sectores vieran a la lucha popular como el medio para desembarazarse de la dictadura. De tal manera, dejaban de ser una base de apoyo social y político para la dominación burguesa, concluyendo así su papel de mediadores entre el bloque dominante y la clase obrera. Esta última salía así de su aislamiento, al converger con aquellos sectores en su opo-

sición al régimen y era éste el que caía en el aislamiento político del resto de la sociedad.

Si las contradicciones entre sectores burgueses son corrientes y suelen tener un papel secundario frente a la lucha entre capital y trabajo, en una situación como la que vivía Argentina, de permanente y abierto enfrentamiento entre estos últimos, tales contradicciones secundarias se entrecruzaban con la fundamental, capital-trabajo, acentuando la inestabilidad política y llevando a la caída de gobiernos. Más aun en el período ahora considerado, en que a la incipiente expresión de los intereses estratégicos de la clase obrera como fuerza política se sumaba una crisis general de legitimidad de la dominación burguesa.

En tal situación, la posición de esos sectores burgueses se tornaba decisivo para que las clases dominantes pudieran resolver o no en el corto plazo la crisis política desatada, ya que el apoyo o la oposición de los mismos al régimen se tornaba en el elemento fundamental para atenuar o incentivar el desarrollo de la contradicción fundamental.

Por lo tanto, para la alianza en el poder, era imprescindible neutralizar el proceso de radicalización de los sectores medios para impedir su acercamiento a la clase obrera, y posteriormente se debía ganar su apoyo, así como el de los sectores del capital nacional ahora también en la oposición, y concretar de esa forma nuevamente el aislamiento político de la clase obrera.

Dado el carácter irreversible de la nueva estrategia de acumulación del capital, que seguiría perjudicando económicamente a esos sectores, la solución debería buscarse a través de la restitución de la legitimidad de la dominación, volver a intentar "institucionalizar al país".

No serán directamente los sectores del gran capital los que se orienten por esa solución. Su visión cortoplacista limitada a sus intereses inmediatos los impulsaba a exigir la continuación de la dictadura acentuando la represión.

Fueron quienes actuaban como el partido político de esos sectores burgueses, las fuerzas armadas y en especial el comandante en jefe del Ejército, el genl. Lanusse, quienes se decidieron a tomar distancia de los reclamos inmediatistas de las fracciones dominantes de la burguesía y emprendieron la búsqueda de una salida para la dictadura.

Así como en 1965, tras los enfrentamientos armados internos surgidos en las fuerzas armadas a consecuencia de su intervención en los asuntos gubernamentales que las sometía a las presiones directas de los distintos sectores sociales, éstas iniciaron un repliegue hacia los cuarteles para recomponer la reunificación de los cuadros y consolidar la nueva línea estratégica de la "defensa de seguridad nacional", entregando el gobierno a los civiles, UCRP, a cuyas espaldas se fue tejiendo la alianza que volvería a tomar el poder con el golpe de 1966, nuevamente la situación social explosiva creada por la dictadura de Onganía repercutió al interior de las fuerzas armadas amenazando con el fraccionamiento, obligando a un nuevo repliegue y a la entrega una vez más del gobierno a los partidos políticos, con el fin de lograr la conformidad de sectores de la <sup>medios</sup> sociedad civil con la nueva situación democrática y apartarlos de la lucha contra el régimen junto a la clase obrera.

Esto creará una situación de consenso hacia el régimen de dominación burguesa, el cual, cubierto por la legalidad democrática, llevará adelante las formas ilegales de represión sobre el movimiento popular, apareciendo disociado, de esta forma, un gobierno "popular" de las acciones represivas del Estado encubiertas mediante la acción de bandas paramilitares sin formas externas que las identifiquen como brazo armado del Estado.

Una vez que el consenso de amplios sectores sociales con la democracia permitió aislar a los sectores más radicales y facilitó su represión con el método señalado, las fuerzas armadas volverán a tomar el poder, en 1976 con la dictadura presidida por el gral. Videla, extendiendo entonces la represión a todo el cuerpo social para eliminar todo atisbo de disidencia con el sistema de dominación.

De esta misma forma operaron las burguesías italiana y alemana en los años de entreguerras. La represión inicial contra el movimiento popular y la eliminación de los sectores más radicalizados fue llevada a cabo, bajo la fachada de regímenes democráticos, por bandas paramilitares organizadas por las fuerzas armadas y el capital. Tras la eliminación de los focos de resistencia más fuertes y la derrota del movimiento popular, subieron al poder los regímenes fascistas para concluir y generalizar la tarea represiva.

Consecuencias económicas del "Cordobazo".

Además de las consecuencias políticas de la creciente movi-  
lización social, el levantamiento de la ciudad de Córdoba provocó cam-  
bios importantes en el curso de la economía que afectaron una de las  
bases del plan económico de la dictadura, como eran las inversiones  
de capital externo, produciéndose "un profundo sacudimiento de la con-  
fianza de la burguesía".

"1) Luego de un saldo positivo neto de capital externo a corto pla-  
zo de 263 millones de dólares EE.UU. en 1967 y de 150 millones en 1968,  
el año 1969 parecía prometer que esos saldos positivos continuarían  
-el primer trimestre de ese año cerró con un saldo positivo de 69 millo-  
nes. Sin embargo, inmediatamente después del Cordobazo hubo una rápida  
salida de capital externo a corto plazo, que determinó que el segundo  
trimestre de 1969 cerrara con un saldo negativo de 44 millones. Los  
resultados del tercer y cuarto trimestre de ese año también fueron ne-  
gativos, 66 y 37 millones respectivamente, por lo que esta cuenta ce-  
rró 1969 con un saldo negativo de 57 millones de dólares EE.UU.. Con  
posterioridad el ministro de Economía Carlos Moyano Llerena (que reem-  
plazó a F. Vacuna cuando el gral. Gagliardi dolió su cargo del gabinete  
ministerial, junto con el ministro del Interior, como consecuencia  
también del Cordobazo) estimó, más realísticamente que los datos oficia-  
les que uso aquí, que la salida neta de capitales provocada por el  
Cordobazo se aproximó a 1 000 millones de dólares estadounidenses.

2) Sugiriendo agudas dudas acerca de la futura estabilidad del peso,  
la oferta de divisas en el mercado oficial de cambios por parte de  
las firmas exportadoras, a pesar de haber aumentado las exportaciones,  
disminuyó en 112 millones de dólares EE.UU. en 1969 respecto del año  
anterior. 3) La demanda por dólares billete en aquel mercado aumentó  
en 34 % respecto de 1968. 4) Las mismas expectativas súbitamente ne-  
gativas indujeron, además de otras filtraciones no registradas en  
los datos oficiales, un aumento, de otra manera inexplicable, de las  
remesas al exterior por concepto de servicios reales, que en 1969 lle-  
garon a 320 millones de dólares EE.UU. cuando en 1968 habían sido de  
sólo 116. 5) El mismo mecanismo parece haber motivado un gran aumento  
de las remesas al exterior por concepto, según las cuentas de balance  
de pagos, de "servicios financieros y otros movimientos de capital no  
determinados", que pasaron de 587 millones de dólares en 1968 a 845

millones en 1969, con el sugestivo detalle de que estos cambios y los señalados en los puntos anteriores ocurrieron con posterioridad al Cordobazo, en tanto los primeros meses de 1969 habían mostrado una tendencia similar a la de 1968. 6) Como consecuencia de todo esto, luego de haber alcanzado en abril de 1969 el punto más alto del período (694 millones de dólares) las reservas netas del Banco Central al fin de mayo habían bajado a 665 millones, en junio a 605 millones y al fin de 1969 eran de 446 millones. 7) Las negativas expectativas suscitadas por el Cordobazo también aparecieron en el mercado a término de divisas, donde la demanda, a pesar de que el gobierno subió la prima del dólar futuro significativamente por encima de la inflación corriente en octubre de 1969, forzó al Banco Central a comprometer en venta a futuro 115 millones de dólares. 8) Respecto de los ingresos de capital externo a largo plazo, 1969 cerró con un saldo positivo de 52 millones de dólares. Esto puede parecer un escaso cambio respecto de 1968 (cuando el saldo fue de 56 millones) y un progreso respecto de 1967 (32 millones) y del año compartido por los radicales y el equipo de Salimei (sólo 2.5 millones). Pero prácticamente todos los ingresos de capital externo a largo plazo de 1969 correspondieron a operaciones terminadas o concertadas antes del Cordobazo. ...después del Cordobazo, varios FIIs que estaban negociando inversiones directas retiraron sus solicitudes y otras endurecieron notablemente su posición con el resultado de que, por una u otra causa, la mayor parte de las inversiones que estaban en trámite no llegó a concretarse, a la vez que fueron pocas e insignificantes las que se propusieron a partir de entonces. Esto, presuponiendo que la tendencia creciente insinuada por los datos anteriores al Cordobazo a partir de 1967 hubiera de otra manera continuado, hace evidente que aquel episodio y sus secuelas interrumpieron abruptamente las operaciones a largo plazo del capital transnacional en Argentina".

A los efectos sobre el balance de pagos con el exterior provocados por esta fuga de capitales se agregan los causados por el aumento de las importaciones de insumos industriales debido a la expansión de la economía que tenía lugar desde 1967. Nuevamente un ciclo expansivo terminaba en una crisis del sector externo. Las importaciones, que en 1967 alcanzaron los 1 095.5 millones de dólares, en 1969 llegarán a 1 576.1 millones, con lo que, como puede verse en el cuadro 1 del capítulo anterior, el superávit comercial cayó entre esos años de 369 millones de dólares a 35 millones. En 1971 las importaciones subirán

1 Compra a largo plazo con un precio prefijado e invariable.

a 1 569.4 millones de dólares, produciéndose un déficit comercial de 129.1 millones de dólares.

Como el tipo de inversiones de capital extranjero no se dirigió en general a aumentar la capacidad productiva. Para fines de 1969 la industria productora de bienes intermedios -metálica básica, química y petroquímica- trabajaba al máximo de su capacidad, por lo que continuar la expansión implicaba aumentar las importaciones de esos bienes.

A costa de este deterioro del balance de pagos, se buscó mantener el ritmo de actividad y fue nuevamente el Estado su principal impulsor, dada la creciente reticencia del sector privado a invertir después de la creciente movilización social. Al asumir el nuevo ministro de Economía en junio de 1969 practicó una nueva devaluación con un aumento en las retenciones para volver a derivar los mayores ingresos hacia el Estado.

Pero si en 1967 el acuerdo con los principales empresarios monopolísticos había permitido estabilizar los precios, sobre la base del congelamiento salarial y del tipo de cambio, ahora el sector privado comienza a retirar el apoyo al gobierno. La inflación vuelve a subir.

La situación política lleva a que "La gran burguesía que actúa en el país, los capitales imperialistas, los terratenientes y las grandes empresas nacionales, busquen la forma de darle el empujón a Onganía antes de que su torpeza provocara una hecatombe para el conjunto del sistema": No porque estos sectores busquen la inmediata democratización del país, sino, terminar con los irrealizables proyectos políticos de Onganía.

Incluso los Estados Unidos comenzaron a percibir que este general "más que un bien podía traer un perjuicio a los verdaderos intereses norteamericanos... El golpe de 1970 que desalojó a Onganía contó con todo el calor del Departamento de Estado y del Pentágono, en el mejor de los casos, o probablemente con su complicidad activa".

Es precisamente en junio de ese año, tras la conmoción que provoca en las fuerzas armadas el secuestro y ejecución del gral. Aramburu por la organización armada peronista el 29 de mayo, aniversario del Cordobazo y que en además el "día del Ejército" en Argentina, que la Junta de Comandantes en Jefe de las fuerzas armadas exige la renuncia de Onganía y lo reemplaza por un desconocido general que en esos momentos se encontraba en Washington como representante de las fuerzas armadas argentinas en la Junta Interamericana de Defensa.



El gobierno Lavignston-Pérez

El cargo que había ejercido el nuevo presidente, el gral. Lavignston, en el exterior lo había puesto en contacto con militares de otros países del continente. Ya así que éste asumió la presidencia intentando resolver el problema político aplicando las recetas del modelo dictatorial brasileño, tanto en el campo económico como en el político.

En el primero, ante el aislamiento en que se encontraba la dictadura argentina, dará un espacio dentro de la alianza gobernante a los grandes empresarios de la burguesía nacional, poniendo la dirección en manos de dirigentes de la CGE, con el objeto de aumentar la base de apoyo social del régimen tal como lo estaba haciendo la dictadura del país vecino.

En el plano político intentará, manteniendo la proscripción de los partidos tradicionales, conformar dos nuevas fuerzas políticas, una oficialista y otra que haría las veces de oposición, tal como ocurría en Brasil con el PLS y el MDB.

Dos economistas conocidos como de tendencia nacionalista, Aldo Ferrer y Horacio Hiberti, integrantes de la CGE, fueron nombrados ministro de Economía el primero y director del Banco Nación el segundo. El presidente de esa central, <sup>empresaria</sup> I. ~~Rezzio~~, fue designado vicepresidente del Banco Central, y otros integrantes de la misma nombrados en cargos públicos fueron, D. Graiver como subsecretario de Bienestar Social, G. Paigón director del Banco Hipotecario, J.S. Tántara director del Banco Nación, J. Bilmenis gobernador de La Rioja.

Se habló entonces de un proceso de "argentinización" de la economía a través de la orientación del poder de compra del Estado y del crédito financiero en favor del capital nacional.

Sin embargo, a pesar de la espectacularidad de los anuncios acerca de la nueva orientación de la economía y de que algunos grandes empresarios de la CGE se beneficiaron con medidas gubernamentales, según indica quien fuera designado en ese momento como secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), el gral. Cuglielmini, activo promotor de la industrialización del país con orientación nacionalista, aunque vinculando ese desarrollo a la cuestión de la "seguridad nacional", los cambios en la cúpula de la dirección económica no implicaron una verdadera y profunda transformación de la política llevada hasta entonces por la dictadura. Así, indica que "después del Corchazo llegan a la conducción económica los que llamo 'instrumen-

tos indirectos'. Se repite ahora (bajo la presidencia de Levingston) con un jefe de equipo distinto. Para profundizar un poco este análisis bastará seguir el itinerario burocrático de los hombres de los segundos y terceros niveles. Bajo cualquier timonel aparecen nombres que se repiten hoy, como asesores o secretarios, que actuaron en 1969-1970 o que constituyen el grupo estable de un conocido instituto que ha recibido ingente apoyo financiero de organismos de los Estados Unidos". "Si el poder está realmente en manos de sectores nacionales (las élites, la clase media, el sector intelectual, el empresariado industrial y el rural), se puede negociar con grupos foráneos. Pero si quienes tramitan son los agentes de esos capitales, las tratativas están condenadas al fracaso o a la acentuación de la dependencia". "Para los intereses internacionales cualquier política es buena, siempre que quede paralizado el dispositivo productivo autónomo, porque entonces por cualquier motivo pueden avanzar construyendo las estructuras que le son propicias".

A los cinco meses de su nombramiento, este general presentará su renuncia, tras reiterados choques con la conducción económica del Ministerio correspondiente. El COMADE tenía facultades únicamente asesoras y no ejecutivas, por lo que los hombres nombrados a su frente y los planes de desarrollo que diseñó en esos momentos, de carácter nacionalista, no implicaron que la conducción de la economía desde el Ministerio coincidiera con ellos.

Pero como ejemplo de los beneficios sustanciales que recibieron algunos grandes empresarios de la CGE puede citarse el caso de la empresa Aluar, propiedad de J. Gelbard. "En enero de 1970 se llama a concurso público para la construcción y explotación de una planta destinada a producir aluminio. Se presentan las siguientes firmas: Pralsa SA; Kaiser Aluminium y Chemical Corporation; Compagnie Pechiney SA; Alcan Aluminium LPB; Aluar Aluminio Argentino Saic; Consorcio Empresario Argentino SA. Por decreto 206/71 se declara desierto el concurso y se autoriza al Ministerio de Defensa a contratar directamente con la firma Aluar. Las conversaciones culminan con la firma del contrato en agosto de 1971".

También el vicepresidente de la CGE, J. Broner, gran empresario de la industria de autopartes del sector automotriz, obtuvo del gobierno la promulgación del "Régimen de Reconversión de la Industria Automotriz", que fue resistido por las empresas terminales (las transnacionales fabricantes del producto final).

La nueva reglamentación promovía la utilización de tecnología nacional y la "argentinización" de la producción de autopartes, imponiendo "listas positivas" que reglamentaban específicamente el tipo de autopartes que podían importar las empresas terminales. Incluía también, por primera vez, a las empresas autopartistas en el régimen privilegiado para incentivar las exportaciones y estableció un control de la actividad por parte del Estado a través de la Comisión Asesora de la Industria Automotriz con representación igualitaria de terminales y proveedores de autopartes.

En el terreno político, la visión del nuevo presidente no difiere sustancialmente de la de su predecesor, indicando que "la concreción de los objetivos económico-sociales de la Revolución Argentina representará sin duda la pérdida masiva de posibilidades para la vieja política y la desaparición de aquellos dirigentes responsables de las sistemáticas crisis políticas argentinas".

Nuevamente el conflicto social es visto no como producto de la inconformidad y movilización de las masas populares sino como producto de enfrentamientos estériles entre ideologías y dirigentes.

La burguesía argentina y sus representantes políticos vuelven a presentar las cosas al revés, sin ver que son precisamente esos dirigentes que ella se empeña en proscribir -como ocurre con la dirigencia oficial del peronismo, política y sindical- los más aptos y los que siempre cumplieron la función de contener la movilización popular.

Con esto la burguesía argentina, especialmente las fracciones del gran capital, manifiestan una vez más sus características, un brutal rescionarismo y una extrema torpeza política. Aunque hay que tener en cuenta

los diversos problemas que dificultan la consolidación de un sistema político estable. Por un lado, abrir las vías legales de participación al peronismo puede acarrear una movilización popular que termine desbordando a la propia dirigencia burguesa del movimiento peronista. Además de ello, las divergencias entre las diversas fracciones burguesas por intereses económicos inmediatos repercuten en diferentes posiciones políticas que impiden que la burguesía en conjunto adopte una estrategia unificada con respecto al movimiento popular, como quedó de manifiesto durante los gobiernos de Frondizi y Onganía. Finalmente, la estructura socioeconómica del país, con una estructura de la

propiedad de la tierra latifundista en el sector ganadero, de vital importancia por ser el que proporciona las divisas necesarias para el desarrollo de una industria dependiente de los abastecimientos desde el exterior y mal integrada, estrechan los márgenes económicos para la posibilidad de consolidar un sistema político democrático

que permita instaurar formas parlamentarias de negociación entre los diversos sectores de la burguesía a través de su representación por los distintos partidos políticos, y que al mismo tiempo obtenga el consenso de las mayorías de la sociedad argentina.

De todo esto se puede concluir que es la presencia de una clase obrera con niveles de conciencia y combatividad elevados, en un cuadro socioeconómico caracterizado por estructuras <sup>que</sup> acentúan la tendencia al estancamiento y que refuerzan la dependencia del exterior, lo que se convierte en una combinación explosiva y sólo gobernable a través del terror directo impuesto por dictaduras o por el recuerdo del terror de dictaduras pasadas como ocurre hoy en Latinoamérica con las nuevas democracias que suceden a las dictaduras de las décadas pasadas.

Estas características de la sociedad argentina, con fuertes divergencias entre sectores burgueses y con una clase obrera y demás sectores populares capaces de expresar sus reclamos en formas contundentes, repercuten también en el Estado. Si durante los períodos dictatoriales, éste parece ser un Estado fuerte, en realidad es un Estado desbordado en todo momento por los reclamos de los diferentes sectores de la sociedad civil. Se puede decir que otra de las características que se acentúan en Argentina después de 1955 es la inexistencia de un Estado con un nivel elevado de entidad y consistencia propias.

El punto culminante en este sentido será cuando en el período final de la dictadura que ahora se está tratando, ante las continuas y divergentes presiones de la sociedad civil, la Junta de Comandantes en Jefe adoptará la solución de suprimir el Ministerio de Economía y Trabajo, quedando solamente las Secretarías de las distintas áreas de la actividad económica que componían aquél Ministerio, y que fueron entregadas a los representantes de los sectores privados con intereses en esas áreas. Así "El Banco Central iba a entregar al establishment financiero; Industria, a un equipo proteccionista favorable a la expansión de las manufacturas; Trabajo, a figuras

permeables a los reclamos de la CGE; Agricultura, a un portavoz auténtico de los productores rurales...".

"...esta posición coincidía con la idea de Lanusse de apaciguar a todo el mundo parcelando el aparato estatal, entregándolo -en una especie de 'cooperativismo al revés'- a 'sectores representativos'". El Estado se disolvía y era repartido entre los diversos sectores de la sociedad civil, reduciéndose cada vez más a su núcleo último, las fuerzas armadas.

"El contraste con la tónica centralizadora que había existido desde 1966 no podía ser más fuerte ni más sugerente del profundo cambio que se había producido. Ahora, revirtiendo el orden de prioridades dado desde 1966, lo fundamental era la política y la conducción de la economía debía estar subordinada a la 'solución' que se buscaba por aquel lado. El Estado se desintegraba institucionalmente, acercándose a, y abriéndose hacia, la sociedad, queriendo ser -en otro contraste con lo que se había buscado hacia tan poco- un sensible registro de sus demandas y un dispensador de beneficios orientados a facilitar una salida que incluso tenía que tener en cuenta las demandas del sector popular en cuya exclusión se había basado el 'Estado burocrático autoritario'".

Volviendo al presidente Levingston, éste, de acuerdo a su visión de la situación política anuncia que la solución será encontrar "una fórmula que neutralice la atomización política y facilite el encauzamiento de la opinión en grandes y nuevas fuerzas partidarias que convivan en el marco de una democracia estable y eficiente". La construcción, por lo tanto, de los dos nuevos partidos ya comentada.

Pero mientras el gral Levingston hacía estas declaraciones, el gral. Lanusse hacía pública la divergencia de la cúpula del Ejército con las intenciones de la presidencia, anunciando una vía de salida opuesta a la pretendida por esta última, al declarar que "el gobierno surtido de los hechos del 6 de junio de 1970 (reemplazo de Onganía por Levingston), de acuerdo con la decisión de la Junta de comandantes en jefe, se ha abierto al diálogo fecundo con todas las corrientes de opinión alentando la reactivación de la vida política y la formación o renovación de grandes movimientos cívicos". En "todas las corrientes de opinión" y la "renovación de grandes movimientos cívicos" quedaba incluido implícitamente el peronismo.

Más tarde, cuando Lanusse asume la presidencia del país tras la remoción de Levingston como consecuencia de un segundo Cordobazo, aquél hará aun más explícito su programa de "salida" política a la

crisis. Entonces la Junta de comandantes en jefe justificará al derrocamiento de Levingston por la necesidad de "asegurar el logro del objetivo fundamental de la Revolución y crear así condiciones indispensables para el pleno restablecimiento de las instituciones democráticas en un clima de libertad, progreso y justicia. Ese objetivo sólo lo alcanzaremos si estrechamente unidos, ciudadanos y fuerzas armadas, galvanizamos nuestros esfuerzos en la gran empresa nacional que reclama la dignidad de los argentinos. Por ese motivo, convocamos a todo el pueblo argentino sin limitaciones ni exclusiones a participar activamente en la tarea de encontrar y concretar la solución de los problemas del país, a través de un acuerdo amplio y generoso que supere la antinomia del pasado e inicie una nueva etapa promisoría de la historia de la República".

Los objetivos y la prioridad de la "Revolución <sup>Argentino</sup>" pasaron entonces a ser los de encontrar una fórmula para conciliar intereses y reducir el conflicto social. La cuestión económica, prioritaria en 1966 queda ahora relegada a un segundo plano. Y la conducción de las fuerzas armadas con como primer paso inevitable para alcanzar esos objetivos, abandonar el gobierno y redemocratizar el país, ya sin exclusiones. Si en 1966 el conflicto interburgués y la intención de consolidar la hegemonía de la fracción industrial y financiera del gran capital por encima del sector agrario y de la burguesía nacional, fue uno de los elementos determinantes en la ejecución del golpe de Estado, ahora ese conflicto interburgués terminó incentivando una lucha de clases cada vez más abierta y poniendo en peligro la totalidad del sistema de dominación capitalista en el país.

La necesidad de ampliar la base de consenso para ese sistema es la que obliga a la democratización sin exclusiones.

Lanusse asume la presidencia, entonces, con el único objetivo de lograr una retirada, lo más ordenada posible, de los militares a los cuarteles.

Organización de la oposición

Durante la presidencia del gral. Levingston y mientras éste proclamaba sus proyectos de reorganización política de la dictadura, los partidos políticos en la oposición llegan a un acuerdo que se hace público a través de un documento en el que se critica "la desorganización de la economía, la falta de representatividad política de los que ejercen el mando de la República y la falta de fe en la ciudadanía".

Los partidos firmantes son el peronismo, el radicalismo del Pueblo, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista Argentino y el Partido Conservador Popular. Se produce así un hecho novedoso e importante en la escena política argentina, la coincidencia en una alianza partidaria entre el peronismo y el radicalismo.

El programa de este acuerdo interpartidario, denominado "La Hora del Pueblo", es el de la burguesía nacional, el reiteradamente expresado por la CGE y los documentos conjuntos CGE-CSE. "Esto no es casual. El radicalismo del Pueblo ha representado tradicionalmente a importantes sectores de la clase media (empresaria y profesional) rural y urbana. Por otra parte nadie desconoce que los cuadros políticos del Juicialismo (Peronismo) que manejan la coincidencia de La Hora del Pueblo pertenecen a esos mismos sectores, que integran el Movimiento Peronista en inferioridad numérica pero no ideológica".

Son los clásicos reclamos de estos sectores por un desarrollo económico que preservando las bases de la explotación de clase, asegure un lugar para el capital nacional, ampliando el mercado interno a través de aumentos salariales, asegurando la plena ocupación a través de políticas expansivas que favorezcan al conjunto del empresario y desacceleren el proceso de concentración del capital en manos de la gran burguesía extranjera y nacional asociada. Propone además la adopción de medidas nacionalistas como reservar la expansión del mercado de hidrocarburos para YPF, con los que las transnacionales Shell y Esso (Standard Oil) verían congelada su participación en él pero podrían seguir operando; limitar las actividades de los bancos y compañías financieras, que podrían seguir operando con controles. Algunas de estas limitaciones ya habían sido implementadas por el programa de "argentinización" de A. Ferrer y Levingston, por ejemplo la prohibición de abrir nuevas sucursales a los bancos extranjeros o la exigencia de que un cierto porcentaje de la cartera sea destinado a préstamos para las empresas nacionales, y sus autores lo

pueden ignorar el fracaso de las mismas que son hurtadas de mil maneras por las empresas extranjeras.

La propuesta de nacionalización de los depósitos bancarios, y no de la banca, implica que los bancos privados seguirían operando pero que sus depósitos serían tomados en nombre del Banco Central, quien determinaría la orientación de los créditos concedidos por esos bancos.

Se crearía además un registro donde deberían inscribirse los ciudadanos argentinos que actúen como representantes de empresas extranjeras.

Comprendo también la promulgación de una ley de radicación de capitales extranjeros tendiente a orientarlos de acuerdo con las prioridades fijadas en el plan de desarrollo.

A continuación de estas medidas de carácter general y básico, el programa enumera una serie de medidas de carácter sectorial, o sea en materia de política tecnológica, agropecuaria, industrial, presupuestaria, crediticia, impositiva y social, para terminar refiriéndose a la necesidad de consolidar un sector económico público que actúe de palanca transformadora del cambio y del desarrollo integral de la Nación.

Finalmente aconseja la creación de un Consejo Económico Social con representación del Estado, los trabajadores y las centrales empresarias, para definir las líneas de la política económica.

Este programa, que pudo ser aplicado en la coyuntura particular, nacional e internacional, de la época en que gobernó el peronismo, en el momento en que lo presenta La Hora del Pueblo, dada la nueva estructura de la economía argentina y el poder económico y político alcanzado por el gran capital extranjero y nacional asociado, es imposible que rinda los frutos esperados al no implicar un ataque a fondo contra ese capital. Como indica G. Duejo; "El extraordinariamente avanzado grado de extranjerización y monopolización de la estructura productiva, con sus sólidas radicaciones políticas y culturales sobre el Estado y todo el cuerpo de la sociedad, hacen que la pretensión de crear mecanismos de compensación como el Estado Promotor o los Consejos Económicos Sociales tropiece contra una sólida muralla de poder que en coyunturas políticas de corto plazo pueden ser horadadas parcialmente, pero que sin medidas de fondo, que la destruyen por la base, conserva intacta su capacidad de reac-



ción, para recuperar íntegramente el control del aparato estatal luego de los repliegues momentáneos.

"El programa de La Hora del Pueblo deja intactas las columnas vertebrales del capitalismo monopolista dependiente".<sup>21/</sup>

Frente al irrealismo del programa económico, la verdadera importancia de este acuerdo interpartidario y la coincidencia con otros sectores como la CGE y la CFE, se da en el terreno político e ideológico.

En tal sentido vale citar a J.C. Portentiero cuando, ante una nueva reafirmación de esta convergencia, señala que: "En noviembre de 1972 la Confederación General Económica y la Confederación General del Trabajo firman un pacto de coincidencias para la aplicación de un programa económico social. Días después, peronistas, radicales y virtualmente la totalidad de los partidos políticos, lo hacen suyo en una reunión conjunta bautizada como 'Asamblea de la Civilidad'. Las plataformas votadas por el 80 % del electorado en marzo de 1973 (al concluir el proceso de transición a la democracia iniciado bajo Lanusse) estaban básicamente inspiradas por esa ideología, verdadero 'sentido común' de la mayoría de los argentinos".<sup>22/</sup>

Es esta convergencia la que permite formar la amplia coalición opositora a la dictadura y a su política económica en favor del gran capital. La llamada "alianza defensiva" por G. O'Donnell, dado que no tiene la capacidad para estructurar un proyecto de poder realista, pero que, sin embargo, tiene la capacidad política de veto suficiente para derribar al programa que abiertamente en favor del gran capital seguía la dictadura. Alianza que se recompone en cada situación parecida, como la que se presentó durante el gobierno de Saracho, exigiendo la vuelta a la democracia.

Es esta capacidad de veto de esta alianza la que permitirá a las fracciones burguesas de capital nacional expresadas en la CGE enfrentar con éxito a la fracción más poderosa, la del gran capital industrial y financiero, interrumpiendo la aplicación de la política económica en su exclusivo beneficio como la implementada por la dictadura de Onganía. De esta forma impedía la consolidación definitiva de la hegemonía de esa fracción de la burguesía sobre las restantes fracciones del bloque burgués y sobre la sociedad en su conjunto. Sin poder tampoco las fracciones burguesas de capital nacional consolidar un programa económico dada la inviabilidad del mismo ya comentado.

A esto hay que agregar las disensiones dentro de la burguesía del gran capital entre la fracción agraria y la industrial, puestas de manifiesto cuando la primera apoyó el golpe contra Frondizi, cuyo gobierno impulsaba la expansión de la segunda, y nuevamente durante la gestión de Onganía cuando el sector agrario se opuso a la política de transferencia de ingresos hacia la fracción industrial, pasando a la oposición a ese gobierno.

De esta forma se llega a lo que varios autores definen como una de las características de la situación política argentina en esos años, la de un "espate hegemónico", por el cual ninguna fracción de la burguesía podía consolidar un programa económico en su beneficio, en forma estable y a largo plazo en el país.

Esto derivará a su vez en una crisis de hegemonía, definida por la "incapacidad de un sector que deviene predominante en la economía para proyectar sobre la sociedad un Orden Político que lo exprese legítimamente y lo reproduzca". En el caso concreto de Argentina en este período era la incapacidad del sector burgués que se había vuelto predominante en la economía a partir del gobierno de Frondizi, el del gran capital industrial extranjero y nacional asociados, el que no conseguía asentar ese predominio económico en un régimen político sólido que lo representara y a su vez obtuviera el consenso del conjunto social presentándose ante el mismo como el promotor de los intereses de la totalidad de la Nación, como podría haberlo hecho el peronismo de seguir en el gobierno mientras realizaba el viraje hacia el capital extranjero.

La fracción agraria del gran capital y la llamada "alianza defensiva" derribaron una y otra vez los gobiernos que aplicaron el programa del gran capital industrial.

Estos enfrentamientos interburgueses se entrecruzaban con el enfrentamiento fundamental entre el conjunto de la burguesía y la clase obrera, reforzándose mutuamente y acentuando la inestabilidad política.

Terminar con esta situación será uno de los objetivos de la posterior dictadura, instalada en 1976 con el gral. Videla en la presidencia, buscando impedir definitivamente la reedición de la "alianza defensiva" a través del fuerte ataque llevado contra los dos pilares de la misma, la clase obrera y la burguesía nacional que se expresan a través de la CBE. Se intentará así imponer, también en forma definitiva, el predominio de la fracción de la burguesía del gran capital frente al conjunto de la sociedad y frente a

Las restantes fracciones de la burguesía dentro del bloque dominante, en otra coincidencia con los fascismos europeos citados anteriormente.

Será el "éxito" logrado en esta operación lo que permitirá que a partir de esa dictadura la economía siga un curso autónomo bajo la hegemonía del gran capital más allá de las intenciones del gobierno que deba encargarse de mantener el "orden", por lo que se hará posible para esa fracción burguesa retornar a un gobierno democrático ya prácticamente impotente para afectarla en sus intereses imponiendo políticas populares o simplemente en favor de las fracciones de la burguesía del capital medio nacional, por la dificultad para torcer el nuevo curso de la economía y por el debilitamiento de la clase obrera y la burguesía nacional, en quienes debería apoyarse para poder aplicar políticas económicas alternativas. La democracia se convierte entonces en la legitimación de la nueva hegemonía del gran capital industrial y financiero extranjero y nacional asociados.

Otro elemento importante de carácter político ideológico de La Hora del Pueblo en la coyuntura en que surgió fue que al integrar al peronismo en esa plataforma reformista, garantizaba ante los sectores dominantes el papel burgués de ese movimiento y neutralizaba el carácter revolucionario que querían darle los sectores más radicalizados.

La situación de "empate hegemónico" mencionada suele presentarse frecuentemente en diversos países y en muchos casos se resuelve a través de negociaciones interparlamentarias. En Argentina la combinación de esta pugna interburguesa con la tensión existente entre el conjunto de la burguesía y la clase obrera, y los efectos que la forma de resolución aquella pugna tienen sobre la relación burguesía-proletariado, -especialmente la oposición frontal de los sectores más reaccionarios de la oligarquía a aceptar la aplicación del programa económico de la burguesía nacional expresada en la CCE y la consiguiente movilización social que éste implica, de acuerdo a lo señalado en la página -, acentuó la tendencia a que este empate fuera resuelto mediante cuarte-  
lazos.

### La "salida" Lanusse-Perón

Tras un segundo alzamiento popular en la ciudad de Córdoba en marzo de 1972 y ante las divergencias entre el presidente Levingston y la "salida" a la dictadura propugnada por el comandante en jefe del Ejército, la Junta de comandantes destituye al presidente, asumiendo el cargo el gral. Lanusse, que mantuvo al mismo tiempo la jefatura del Ejército. El objetivo de su gobierno será encontrar una vía de salida a la dictadura. La cuestión política es lo prioritario.

El mismo Lanusse expresará que "sin estabilidad política no será factible el logro de ninguna estabilidad económica". Y el logro de la estabilidad política implicaba ampliar el consenso social para la dominación de clase mediante la redemocratización del país. Con lo que se buscaba aislar y aislar el movimiento obrero, destruir sus fuerzas políticas, neutralizar la radicalización de la pequeña burguesía, capas asalariadas y fracciones pequeñas de la burguesía en general y ganar su apoyo.

Para ello era necesario convocar a los partidos políticos, en especial a los dos más importantes, el peronismo y el radicalismo, y a los sectores sociales que también reclamaban la salida democrática, la CDT y la CGV. Pero también la dirección de las fuerzas armadas en el gobierno deben apoyarse en esos sectores ante el rechazo de la gran burguesía a la salida democrática.

En una crítica abierta de la UIA a la nueva política de la dictadura declara que "la política de marzo del 67 (el programa de K. Vasena) fue destruida sin que nada se haya colocado en su lugar. En vez de perfeccionar, completar y profundizar la línea económica mencionada, se prefirió su suplantación no por otra concepción coherente en sus fundamentos sino sencillamente por la aplicación de criterios demagógicos y agresivos en las cuestiones económicas y sociales". Agregando que los problemas "arrastran con la indecisa actitud para resolver los problemas surgidos como consecuencia de los sucesos de Córdoba y Rosario. A esto le siguió la inestabilidad en los equipos de gobierno, la inestabilidad política posterior y finalmente la casi completa subordinación del poder a criterios tenidos de irracionalismo económico fruto de la demagogia y de actitudes seudonacionalistas".

El gobierno busca entonces llegar a un acuerdo con los partidos en lo que sería el Gran Acuerdo Nacional, por el cual aquéllos dabe-

rían una serie de garantías a las fuerzas armadas para su actuación en el proceso de redemocratización y en su acción de gobierno en caso de resultar electos en las futuras elecciones.

Esas garantías serían: primero, aceptar el control sobre el futuro gobierno por parte de las fracciones más poderosas de las clases dominantes en lo que respecta a la forma en que se utilizarán los resortes del Estado que influyen en la orientación del proceso económico y de la acumulación del capital, y los que se relacionan con la dominación; segundo, la participación de las fuerzas armadas en

Si este Acuerdo nunca llegó a concretarse <sup>del futuro gobierno</sup> bajo ese nombre, existió en cierta forma a través de La Hora del Pueblo. En efecto, Lanusse nombra como ministro político (del Interior) de su gobierno para instrumentar el GAN a A. Mor Roig, dirigente del partido Radical, ex presidente del Senado durante la presidencia de Illia y "alma mater" de La Hora del Pueblo. Por otra parte, otro hombre importante en la definición de las características del programa de esta última, A. Ferrer seguirá siendo por un tiempo ministro de Economía de Lanusse. "La presencia de Aldo Ferrer y Arturo Mor Roig en los Ministerios de Economía e Interior es la presencia de La Hora del Pueblo en el gobierno".

Si La Hora del Pueblo no aseguraba todas las garantías exigidas por el gobierno militar para la posterior entrega del gobierno a los civiles, por lo menos aseguraba, en tanto fuera capaz de mantener el control de la situación, que el proceso de redemocratización no derivaría en situaciones de radicalización que hicieran temer por la estructura de dominación de clase de la sociedad argentina.

Esta estrategia de democratización servida por el gobierno militar y de integración del peronismo a ese proceso después de años de proscripción se debía, además de a la necesidad de lograr el consenso de la clase obrera hacia el sistema de dominación, a la aparición del sector radicalizado dentro de ese movimiento político. De continuar la proscripción política y la falta de canales de expresión para las bases peronistas, se acentuaba la posibilidad de que éstas se orientaran hacia el proceso de radicalización del movimiento como única alternativa para manifestar su rechazo a la situación del momento.

El mismo Lanusse dirá que "sería beneficioso para el país y para el futuro político de la República que el partido justicialista no se pulverice, no se fragmente, sino que, por el contrario se incorpore a la vida institucional".

Frente al rechazo a su política por los sectores del gran capital, el presidente señala que "el tramo que el país empieza a transitar requiere de los sectores en común una fórmula mínima -también común- que facilite el avance social, económico y político. De lo contrario se correrá el riesgo de que todo se venga abajo incluso para quienes consideran -amparados por una eventual holgura económica- que pueden capear el temporal porque creen estar a cubierto de todo riesgo... (el gobierno) tampoco cree en las soluciones impuestas unilateralmente y al margen del interés y bienestar comunitario por quienes -accidentalmente o no- tienen en sus manos cierto tipo de poder económico... ha llegado la hora de que todos demos la cara a los problemas, de que los abordemos en colaboración para hallar la solución que no sea la de un sector sino la del país. Nadie puede ni debe pretender resolver por sí solo las graves cuestiones a las que estamos abocados. La solución será de todos, para todos, o no habrá solución. Si cada uno tira para su lado ése será el mejor modo de estrangular a la Nación. Pero desde ya afirmo que las fuerzas armadas no van a permitirlo".

Ante la inminencia del fin de la dictadura y del <sup>probable</sup> triunfo del peronismo en las próximas elecciones, se produce finalmente un reacomodo entre las distintas fracciones del gran capital. Mientras las restantes fracciones que componen ACIEL mantienen su oposición a la salida democrática, la fracción industrial, la UIA, abandona esa confederación empresaria y adopta un discurso de apoyo a la política del gobierno y a la democratización del país.

Esta central industrial emite entonces declaraciones inusuales en comparación con la línea que seguía dentro de ACIEL. Así declarará que "quien siga mirando a su empresa como un bien particular, sustraído de las responsabilidades sociales, quien siga imaginando que la propiedad privada es la fuente de todos los beneficios sin ningún gravamen o contrapartida, quien no vea en su actividad empresaria otro norte que su lucro personal, está fuera de lugar en la Argentina contemporánea".

Con respecto a este cambio de posición política afirma que "la pujanza y vitalidad de nuestra institución se ha puesto de manifiesto en trascendentes decisiones políticas en la conducción empresaria como la separación de ACIEL, una participación cada vez más solidaria con las entidades industriales del interior y una permanente y realista actualización de nuestra posición institucional frente a

las situaciones cambiantes que han caracterizado la vida política, económica y social del país, durante los últimos años".

Entre las causas que explican este cambio pueden citarse las siguientes: 1) se estaban produciendo graves disenciones internas en la UIA, con el abandono de la entidad por parte de centrales del interior del país y de Cámaras de algunas ramas industriales; 2) el sector industrial es el que tiene más estrecho contacto con la clase obrera y por lo tanto frente a los cambios que se avecinaban con la vuelta a la democracia era necesario cambiar de actitud política para mantener relaciones fluidas con esa clase; 3) es también el sector industrial el que sufre directamente los efectos de los paros y movilización obrera y, en ese período, las acciones de la guerrilla.

Otro sector social en el que la política del gobierno debe enfrentar oposiciones es en el interior de las propias fuerzas armadas.

Se producen algunos levantamientos en regimientos de distintos puntos del país, alentados por los nacionalistas o corporativistas, en contra de la entrega del poder "antes de cumplir los objetivos de la Revolución Argentina". La dirección de las fuerzas armadas logra aplastar esos levantamientos y varios oficiales son pasados a retiro.

Finalmente, es determinante en el curso que sigue este proceso político la actitud de Perón frente a los condicionamientos que pretenden imponer las fuerzas armadas.

Perón y Lanusse coinciden en las características políticas de la crisis argentina en esos momentos y en la necesidad de hallar la solución a través de la institucionalización de las relaciones de dominación, estableciendo una estructura política estable por medio de la cual reordenar las relaciones entre las clases sociales y entre las distintas fracciones de cada clase, y entre todas ellas y el Estado.

Para ello había que apelar a las dos instancias fundamentales del sistema democrático que canalizan esas relaciones, los partidos políticos, revitalizándolos, y los sindicatos, corrigiendo la situación crítica en que se encontraban debido al cuestionamiento de sus dirigentes por las bases obreras y de empleados. Buscándose al mismo tiempo fórmulas de concertación corporativa como el "Acuerdo Social" entre empresarios y sindicatos logrado por Lanusse y el "Pacto Social" de similares características que se firmará bajo el futuro gobierno peronista.

La apertura de estos canales democráticos permitirían expresarse a los distintos sectores de las clases propietarias, muchos de ellos descontentos con la política dictatorial, y al mismo tiempo ampliarían el consenso entre los sectores de las clases populares que se pensaban representados por los partidos y los sindicatos. Restando fuerza, además, a los canales ilegales, violentos, a los que en forma creciente estaba apelando la sociedad dada la obturación de los democráticos tradicionales proscritos por la dictadura. La política no podía eliminarse por decreto como había pretendido Onganía, en todo caso lo que se lograba con las proscripciones era desviarla de los canales ~~convencionales~~.

Lanusse había entendido bien esta situación, afirmando que, frente a los "éxitos" económicos durante la gestión de Onganía, "no se había podido, o no se había sabido hacer política... todos los responsables -Onganía y yo, entre otros- no supimos ver que la política existía y que nada sería más peligroso que la soberbia de considerarla inexistente". Lo mismo señalaba Perón en una conferencia de prensa en septiembre de 1972 al indicar que "Los señores de las dictaduras militares anteriores hablaron de la posibilidad de parar la política y que siguiera lo económico. ¡Eso es un disparate! Es como si en el cuerpo humano a un individuo anémico le para la circulación para resolverle el problema de la anemia. Lo más probable es que muera muy pronto".

Esto es lo que decidió a Lanusse a convocar a los partidos políticos, eliminando su proscripción al asumir la presidencia, incluyendo al peronismo, para recrear el sistema democrático. También era consciente el nuevo presidente de la dictadura del aislamiento en que ésta había caído y en la necesidad de ampliar las bases sociales de apoyo del Estado, aislando a su vez a los sectores más radicalizados de las clases populares. En sus propias palabras, había que "unir a los adversarios y aislar a los enemigos", agregando que "si se prescinde de toda participación concreta durante las épocas de calma, se carece de aliados civiles concretos en las instancias críticas".

Va Lanusse había planteado la alternativa de un acuerdo nacional, de un gobierno de unidad nacional con los peronistas, en 1962 a las fuerzas armadas, poco antes de los enfrentamientos entre "azules" y "colorados", por supuesto que sin éxito.



En política exterior, el gral. Lanusse también adoptó una línea diferente a la llevada hasta entonces por la dictadura.

Buscó un acercamiento con gobiernos progresistas latinoamericanos como el de Velasco Alvarado en Perú y el de Salvador Allende en Chile.

Mientras este último era acosado desde el exterior a través del boicót dirigido por el imperialismo norteamericano y de la dictadura del gral. Bánzar Suarez en Bolivia, por medio de la cual actuaba también la dictadura brasileña, Lanusse no se plegó a esas acciones, al punto que en 1971 visitó Chile para entrevistarse con Allende, quien le otorgó la máxima condecoración de ese país, la Orden al Mérito Bernardo O'Higgins.

Si esto aparecía como una posición más flexible ante el clima político general de ascenso popular que todavía se vivía en aquellos años en América Latina, también encuentra una explicación en el carácter de las relaciones entre Argentina y su vecino Brasil.

Estos dos países se vieron tradicionalmente como adversarios respecto a la influencia que cada uno pretendía ejercer sobre el resto de la región.

Una de las metas de la política exterior argentina desde fines del siglo pasado había sido la de estrechar relaciones con los países que limitan con Brasil y así crear un cerco a su alrededor. Pero a principios de la década de 1970 era Brasil el que estaba realizando con éxito una estrategia similar con respecto a Argentina.

La influencia de la dictadura brasileña se había acentuado en 1971 en Bolivia y Uruguay debido al golpe de Estado en la primera y a la conformación del gobierno cívico militar en el segundo, de manera tal que Argentina quedaba rodeada por una serie de regímenes derechistas aliados entre sí. Si en Chile se instalaba otra dictadura afín a aquéllas, se cerraría el cerco.

La permanencia del gobierno de Allende evitaba, por lo tanto, consumir esa estrategia de los militares brasileños, que además de sus connotaciones geopolíticas se relacionaba también con la explotación de los recursos naturales de esos países limítrofes, en la que Brasil ya tomó claramente la delantera sobre Argentina.

### La estrategia de Perón

La llamada de los militares a Perón como el único capaz de contener la marea popular y el posterior ascenso del peronismo al gobierno el

de mayo de 1973, volvió nuevamente a Perón -como en los años 40- en la tarea de reorganizar el poder del Estado. Aquella vez debió hacerlo para solucionar la crisis política abierta en la década de 1950, y el mecanismo utilizado fue la incorporación masiva a la política de la clase obrera encuadrada desde el Estado, lo que confirió a éste una sólida base de apoyo y amplió su margen de maniobra al fortalecer su autonomía respecto a las clases dominantes, en especial del sector agrario, y al imperialismo. Evitando, al mismo tiempo, que el núcleo de la clase obrera "vieja" de ese entonces, fuertemente politicizado, se convirtiera en el foco de irradiación de la conciencia proletaria hacia los nuevos contingentes obreros provenientes del interior del país hacia las principales ciudades industriales.

En 1973, nuevamente el mecanismo será incorporar a la clase obrera a las formas democráticas, legales, de participación, evitando que los sectores radicalizados se conviertan en la vanguardia del conjunto de la clase, sectores que deberían ser aislados y obligados a abandonar la lucha armada y demás acciones en contra del sistema de dominación capitalista.

En este sentido hay que observar que si el latiguillo del peronismo es el conjunto de mejoras económicas que dio a las clases populares, su principal función siempre fue político-ideológica, atenuar la lucha de clases a través de la aplicación de planes reformistas en lo económico, aunque los resultados no hayan sido siempre los esperados por Perón en el campo político.

Otra coincidencia entre Perón y Lanusse se dio en el terreno económico. Con motivo del Acuerdo Social entre empresarios y sindicatos firmados bajo la presidencia de Lanusse, la CGT y la CGE elaboraron un programa económico que fue presentado al gobierno. Al mes siguiente éste lo calificó como positivo y le reconoció el carácter de instrumento para modificar la política económica en curso -Lanusse también era consciente de la necesidad de aplicar cierto reformismo económico teñido de nacionalismo para calmar la situación política-. "En los hechos, la reestructuración económica que Lanusse emprendiese a partir de esa respuesta quedaba tácitamente avalada".

En octubre de 1972 Perón envió a la Junta de comandantes un decálogo denominado "Bases mínimas para el acuerdo de reconstrucción nacional" de tono extremadamente moderado, en el que acepta la participación de las fuerzas armadas en el futuro gobierno democrático "en

el gabinete nacional, en el sistema nacional de planeamiento y en la tarea de reconstrucción nacional". "En la práctica, el documento implicaba la aceptación tácita del programa conjunto de la CGP y la CGB, o sea del pacto social firmado en agosto de ese año por las dos entidades y al que Larusse no tardó en dar su visto bueno".

El hecho de que Perón aceptara la participación de las fuerzas armadas en su futuro gobierno se debe a su concepción del Estado, pero no implicaba que aceptara ejercer un gobierno condicionado en el que su poder estuviera limitado.

Para ello, durante las negociaciones previas a las elecciones con la dictadura siguió apelando a la estrategia utilizada durante todo el período de su exilio, manejarse frente al gobierno de turno a través de dos vías, una conciliadora y otra combativa, acentuando la importancia de una sobre la otra según las circunstancias del momento.

La vía conciliadora -expresada en la dirigencia política oficial del movimiento y en la sindical- permitía mantener una presencia visible y aceptable para el régimen gubernamental, mediante la cual encerrar negociaciones con los distintos sectores sociales a través de una especie de "parlamentarismo negro" existente desde 1955.

El sector combativo tenía la finalidad de mantener una constante presión sobre el régimen y controlar al sector conciliador para evitar que éste llegue a acuerdos definitivos con aquél por sobre las directivas de Perón y hacer sentir así su permanente "presencia" en la situación política del país.

Así, mientras mantenía las negociaciones con los militares durante este proceso de redemocratización, acentuaba la presión alentando a los sectores radicalizados del movimiento.

En efecto, Larusse, mientras negociaba con el peronismo buscaba disminuir el peso de Perón, alentando las iniciativas autónomas de los dirigentes políticos y sindicales del movimiento. A la tradición que en este sentido tenían los burócratas sindicales se sumaba la predisposición creciente de los dirigentes políticos peronistas, ante la inminencia del proceso electoral y las pretensas ofrecidas por el gobierno militar. El propio delegado personal de Perón en el país, J. Paladino estaba cayendo en la misma posición.

Para que el proceso no se le escapara de las manos, Perón debía consolidar su autoridad dentro del movimiento y para ello reforzar la presencia de los sectores más radicalizados, sobre los que tenía

un mayor predicamento, por sobre los burócratas sindicales y políticos. A la Juventud Peronista, unificada bajo la dirección de R. Galimberti le dio estatus legal dentro del movimiento al convertirla en la cuarta rama del mismo, sumada a las dos políticas, la masculina y la femenina, y la sindical. Galimberti pasó así a integrar el Consejo Superior del Justicialismo, máxima instancia de dirección en el país del movimiento. En esas circunstancias Galimberti hacía declaraciones a la prensa en las que afirmaba que "el poder político nace de la boca de los fusiles".

Paladino fue destituido y reemplazado por H. J. Cámpora, reconocido por acatar las directivas de Perón y que tenía el apoyo de los sectores juveniles radicalizados.

Como secretario general del movimiento fue nombrado J.M. Abal Medina, hermano del máximo dirigente de la guerrilla peronista, "Montoneros".

Finalmente, ante una maniobra del gobierno para impedir la candidatura de Perón para las próximas elecciones, éste designa como candidato a presidente a Cámpora, ante las reticencias de los sindicalistas y el entusiasmo de la juventud.

Ante la posibilidad de que los militares veten la candidatura de Cámpora, Perón amenazaba con nombres aun más radicales, afirmando que "Cámpora les cuesta; pero Licastro les cuesta mucho más. Licastro es la juventud, y ya medio le tienen miedo a la juventud... No, no lo van a proscribir a Cámpora".

Entre los pocos sindicalistas nominados en las listas de diputados nacionales del justicialismo figuraron aquellos que habían criticado duramente a la dirección cegetista por su blandura ante el gobierno.

Este ajuste de cuentas con los sindicalistas iba más allá del esperado desquite de Perón por las constantes violaciones a sus directivas durante su exilio. La burocracia sindical es la instancia mediadora fundamental en la relación burguesía-clase obrera, y por lo tanto el instrumento esencial para el control de esta clase por parte de la burguesía y del Estado. Para asegurarse ese control durante el futuro gobierno peronista, su líder debía poner fin al deterioro en que había caído esa burocracia ante el fuerte cuestionamiento de las bases por su proclividad a negociar con la dictadura.

Para ello, Perón debía poner a esos dirigentes "en su lugar".

sometiéndolos nuevamente a sus directivas, de forma tal que las bases obreras volvieran a subordinarse a ellos, al verlos como una prolongación del mandato emanado de Perón, en quien las bases del peronismo todavía confiaban.

Esta radicalización destinada a asegurar su control sobre el movimiento y a anular las pretensiones de los militares de condicionar al futuro gobierno peronista no implicaba, sin embargo, una ruptura definitiva entre Perón y el gobierno militar. La realidad "la disposición que manifestaban los hombres del frente (Frente Justicialista de Liberación Nacional, alianza de partidos con los que el peronismo concurrió a las elecciones) para allanar el camino a las elecciones y disipar los temores militares contrastaba con la fogosidad de sus declaraciones públicas".

El 11 de marzo de 1973 tuvieron lugar finalmente las elecciones. El Frente Justicialista, FREJULI, obtuvo el 49.59 % de los votos. Estaba integrado por, además del Partido Peronista, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) dirigido por el ex presidente A. Frondizi, el Partido Conservador Popular dirigido por Vicente Solano Lima y de peso insignificante en el cuadro político argentino, y otros partidos menores.

La Unión Cívica Radical, que presentó a R. Balbín como candidato a presidente obtuvo el 21.30 % de los votos. La Alianza Popular Federalista encabezada por el ex capitán Francisco Manrique, que como ministro de Bienestar Social durante la dictadura había aplicado una política demagógica frente a los jubilados buscando futuro apoyo electoral, obtuvo el 14 %. La centroizquierdista Alianza Popular Revolucionaria formada por los partidos Intransigente de Oscar Alende, ex UCRI, Revolucionario Cristiano y Comunista, obtuvo el 7.43 %.

A partir de entonces Perón revierte su táctica de radicalización y comienza el giro hacia la derecha. La primera medida significativa en este sentido fue la destitución de Galimberti. "El relevo de Galimberti era la primera luz roja que se encendía en el camino ascendente de la juventud peronista. Esta señal de peligro preludeaba los enfrentamientos entre el líder y las aspiraciones más radicales de la juventud. Perón frenaba la ola de violencia que sacudía a la sociedad llamando a la prudencia y a la serenidad a los trabajadores y advirtiéndoles a los 'confundidos' que su opción era la de una salida legal".

A partir de la toma de posesión del gobierno por parte del FREJULI

el 25 de mayo, la contradicción política que aparecía como la principal en esos años, el enfrentamiento entre la sociedad civil y los militares, y que sobredeterminaba a la contradicción fundamental capital-trabajo, cede su lugar a la contradicción que se desarrollará dentro del peronismo entre sus diferentes tendencias, encuadrándose desde entonces la lucha de clases como una pugna entre fracciones internas de ese movimiento.

Esta lucha interna demostraba, por otra parte, que la base del conflicto social en Argentina no era entre peronistas y antiperonistas.

## capítulo 7: El tercer gobierno peronista

El 25 de mayo de 1973 asume la presidencia Héctor J. Cámpora al frente del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación Nacional) con Vicente Solano Lima, del Partido Conservador Popular que integraba ese Frente, en la vicepresidencia.

La tarea fundamental del nuevo gobierno era la de restituir la legitimidad y la dominación capitalista en Argentina, reconstituir el poder del Estado y poner término a la crisis institucional que en los últimos años de la dictadura precedente se había extendido a todos los ámbitos sociales y que se manifestaba en la incapacidad de los aparatos de dominación política e ideológica -partidos, sindicatos, Fuerzas Armadas, Iglesia, Universidad- de seguir cumpliendo normalmente esa función de dominación.

El propio gobierno dictatorial había entrado en un proceso de desintegración progresiva a partir de mediados de 1969 con las movilizaciones populares que suceden al Cordobazo y el acentuamiento de las contradicciones entre distintas fracciones de la burguesía.

Además de las manifestaciones políticas de tal situación, ésta se hacía patente también en la creciente desorganización de la economía, con descensos en la producción y un fuerte incremento de la inflación, <sup>1</sup> que en Argentina es un indicador no sólo del aumento de los precios sino también de la incapacidad del gobierno de turno por ejercer el poder en forma efectiva.

Al interior de las Fuerzas Armadas se observaba la presencia de tres líneas diferentes con respecto a la forma de encarar la crisis política y económica. Un sector "nacionalista" <sup>de derecha</sup> -según se lo definió anteriormente- que apoyaba la continuidad del gral. Onganía y sus intenciones corporativistas. Una fracción liberal -económicamente, y en este momento también políticamente- expresada en el Comandante en Jefe del Ejército Lanusse, que buscaba descomprimir la situación llamando a elecciones para elegir nuevo gobierno y obtener la conformidad de las masas mayoritariamente democráticas y aislar a los sectores de vanguardia que buscaban un cambio de sistema. Otra fracción ultraliberal en lo económico que, si bien había apoyado el derrocamiento de Onganía, se oponía a una salida democrática "apresurada" como la propuesta por la jefatura del Ejército, reclamando que antes se llevara a cabo una "reestructuración a fondo" de la legislación

laboral de acuerdo a la constante pródica de las organizaciones del empresariado del gran capital en el sentido de fraccionar al movimiento obrero.

También existía un sector numéricamente importante que se mantenía al margen de los problemas políticos y que sólo se interesaba por los intereses profesionales de la corporación militar y su situación individual.

Los partidos políticos, cuya proscripción fue levantada al asumir la presidencia el gral. Lanusse, y los sindicatos nacionales dirigidos por la burocracia vandorista se veían totalmente desbordados por la masiva movilización popular y eran incapaces de contenerla.

En las Universidades, la política represiva de Onganía, sumada a la situación general que vivía el país, llevó a una fuerte politización del estudiantado y a su participación en movilizaciones conjuntas con la clase obrera, sobre todo en el interior del país.

En la tradicionalmente conservadora Iglesia argentina surgió un sector en la línea de la teología de la Liberación preocupado por los problemas concretos de los sectores más desprotegidos de la población, conformando el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que comenzaba a obtener apoyo en sectores de la jerarquía oficial de esa institución. Acertando que un análisis concreto de la realidad del país sólo podía llevarse a cabo en base a la teoría social marxista, este Movimiento pone término en el país a la separación entre marxismo y cristianismo. Esta novedad ideológica en Argentina en ese momento se suma a la que es producto de la radicalización de sectores del peronismo, que pone término también a la tradicional actinomia marxismo-nacionalismo prevaleciente hasta entonces en el país.



## El proyecto político peronista

El peronismo llegaba al gobierno con las intenciones de poner fin a esa crisis general institucional de dominación reeditando -aunque con algunas innovaciones, más aparentes que reales- su antiguo programa que giraba en torno a la "comunidad organizada" en el que cada sector de la sociedad -burguesía, trabajadores, Fuerzas Armadas, sindicatos, etc.- tenían un lugar asignado, quedando todos bajo la subordinación política de Perón a través del Movimiento Peronista, que sigue siendo definido por su líder en forma totalizadora: "Nosotros no somos un partido político, que tiende normalmente a la sectorización, nosotros somos un movimiento nacional que, por el contrario, tiende hacia la universalización".

El consenso social se lo busca a través de las consignas reformistas, antiimperialistas, nacionalistas y populistas que definen los contenidos del programa económico propuesto, de carácter similar al delineado por los acuerdos multipartidarios concertados en los últimos momentos del período dictatorial y que según lo señalado en el capítulo anterior expresaba el sentido común tradicional de la mayoría de los argentinos. <sup>al principio</sup> aunque en los años setenta este sentido común había sufrido grandes cambios.

En general, si las características del peronismo de posguerra fueron un producto de las condiciones nacionales e internacionales que se vivían en aquel momento, más que de las ideas de Perón, ese proyecto político, social y económico pudo implementarse con relativo éxito en tanto se mantuvieran esas condiciones. A principios de la década de 1970 éstas eran totalmente distintas y hacían imposible la aplicación de un programa reformista en un momento que tendía a la polarización social y sólo dejaba como alternativas viables el avance hacia el socialismo o la continuación del capitalismo crecientemente concentrador, antipopular y autoritario que predominaba en el país en esos momentos.

El elemento central del programa del nuevo gobierno fue el denominado "Pacto Social" firmado por el gobierno, la CGT y la CSE, y complementado con el "Acta de Política Concertada con el Agro" firmada con la participación de la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropocuararia (Coninagro) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), con la excepción de la entidad que a-

grupos a un núcleo de terratenientes porteños, la Confederación de Agradiaciones Parales de Buenos Aires y la Farga (CARBAP).

Con la posterior unificación de la CJE y la UJA, la mayoría del empresariado quedaba incluido en los acuerdos con el gobierno.

Tras el aspecto económico de estos acuerdos se encontraba la necesidad del gobierno de obtener la conformidad de cada sector productivo, y por tanto de cada fracción de la burguesía, así como la de la clase obrera y demás sectores trabajadores, con la función que se les otorgaba y con la cuota correspondiente en la distribución del ingreso y, para los sectores burgueses, en la acumulación de capital.

Esto se hacía imprescindible para sacar a la economía del desorden en que la había dejado la dictadura, para poder reimpulsar el crecimiento y obtener la satisfacción de las necesidades mínimas reclamadas por las clases trabajadoras y atenuar así los niveles de disconformidad social generalizados que permitían a los sectores de vanguardia de la clase obrera ponerse a la cabeza de masas más amplias de aquellas clases.

En definitiva, el objetivo fundamental para el gobierno era asegurarse la capacidad de ejercer el poder en forma consensual y aislar a los sectores más radicalizados.

Junto a este contenido político de los acuerdos existía también una intención de carácter ideológico impulsada a través de los mismos, y era la de difundir en el conjunto de la sociedad que el conflicto social era básicamente solucionable mediante la concertación, la conciliación de clases.

Si los objetivos políticos del gobierno serían buscados a través de la mediatización de estos acuerdos "económicos", de la misma manera actuarían los grupos <sup>del gran capital</sup> "opositores" al gobierno, atacándolo generalmente no mediante críticas directas -dado el consenso que en un primer momento éste logró en las mayorías-, sino a través del boicot al programa económico.

Como se señaló, la sociedad con que se encontró Perón a principios de la década de 1970 era muy diferente a la sociedad en que había actuado a principios de los años cuarenta.

En lo que se refiere al capital mono u oligonómico, éste se hallaba en condiciones de boicotear el programa tíbiamente reformista del nuevo gobierno, dada la posición de preeminencia que había adquirido des de fines de los años cincuenta, que le permitía con-

trolar los sectores más dinámicos de la economía.

Esta evolución económica repercutió de varias maneras en el conjunto de la sociedad argentina. Por un lado, a partir de las características de la nueva economía ya señaladas en capítulos anteriores, dirigida principalmente a un mercado de consumo interno compuesto por los sectores de ingresos altos y medio altos y por empresas consumidoras de productos intermedios elaborados por otras empresas, se produjo un descenso en el poder adquisitivo de la clase obrera y una liberalización de la economía de acuerdo a las pautas impuestas por el FMI como condición para obtener su aval para las inversiones de capital extranjero sobre el que se apoya el crecimiento económico.

Pero al mismo tiempo las grandes empresas que se instalan, sobre todo en la rama de la industria automotor, crean las condiciones para la aparición de grandes agrupaciones de trabajadores en un único centro de trabajo. Trabajadores en gran parte especializados, entre cuyas demandas adquieren un peso fundamental las relacionadas con las condiciones de trabajo dentro de la empresa. El tratamiento de este tipo de demandas cae casi generalmente a los grandes sindicatos nacionales que tradicionalmente se ocupan de las cuestiones salariales y asistenciales. De aquí que estos sindicatos ya no responden a las necesidades de esta nueva clase obrera, la que debe recurrir, por lo tanto, a nuevas formas de organización y acción, más centradas en el interior de la propia empresa y más directas, sin pasar tanto por la mediación de los grandes sindicatos nacionales.

Esto fue acompañado desde fines de la década de 1960 por la radicalización política de vastos sectores sociales como producto del autoritarismo dictatorial y del cierre de los canales democrático-constitucionales de expresión popular.

Surge entonces un núcleo de la clase obrera de carácter más contestatario frente a la patronal, el Estado y la dirigencia sindical burocrática. La crisis social generalizada permite que este núcleo, junto a sectores estudiantiles y dirigentes políticos de izquierda, todos ellos demandando cambios profundos en la sociedad, se pongan a la cabeza del amplio movimiento social que demanda el fin de la dictadura y el retorno a la democracia. Creándose las condiciones que precedieron a todos los cambios revolucionarios hacia el socialismo, en los cuales una minoría de vanguardia con un proyecto socialista fue capaz de dirigir y entrelazarse con un movimiento social mayoritario democrático que reclamaba el fin de regímenes opre-

vivos. Aunque en este caso en Argentina, la formulación clara y concreta de los objetivos, la estrategia y la organización política que llevarían al socialismo eran aun incipientes, y en esto pesaban los quince años anteriores -a partir de 1955- en que los sectores políticos de izquierda, dentro y fuera del peronismo, habían sido incapaces de crear un partido político que expresara los reales intereses de la clase obrera permitiéndole a ésta superar las formas de lucha limitadas en que la mantenía la corrupta dirigencia peronista, que era parte del propio régimen burgués.

Los intentos en ese sentido de J. V. Cooke, dirigidos a realizar un análisis concreto de la ideología y las características de clase del peronismo que permitieran entender las limitaciones que ponían al desarrollo de la lucha de la clase obrera, en lugar de recurrir a las categorías morales de "traidores" y "leales" para explicar el comportamiento de la dirigencia peronista, no tuvieron eco. Esto, dentro del peronismo, y en lo que respecta a la izquierda tradicional argentina, fuera de ese movimiento, se mantuvo permanentemente alejada de las masas trabajadoras.

De ahí que tras esos quince años de lucha, los sectores mayoritarios de la clase obrera seguían depositando su confianza para la solución de sus problemas en el peronismo burgués peronista y ante la explosión social generalizada de fines de los sesenta, a las dirigencias de izquierda sólo le quedaron dos caminos. A la no peronista, el foquismo guerrillero del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), y a la peronista la necesidad de actuar desde dentro de ese movimiento aun cuando éste adoptara una política -luego de llegar al gobierno en las elecciones de marzo de 1976- de corte fascista. Esta necesidad impidió efectuar una crítica clara de la política que estaba llevando a cabo el gobierno peronista y el propio Perón que permitiera a la clase obrera ver con claridad la situación.

Es por esto que al llegar el golpe de marzo de 1976 que puso fin a tres años de gobierno peronista instaurando una nueva dictadura militar, la clase obrera se encontraba ideológica, política y materialmente desahogada y a la defensiva, pero esto no era el producto de una batalla que se hubiera entablado y perdido contra la burguesía, sino de la confusión en que dejaron a los sectores mayoritarios de la clase obrera las características equívocas de la política y la ideología peronistas.

La situación en los sindicatos y las Fuerzas Armadas

Por otra parte, <sup>también</sup> las nuevas características del movimiento sindical <sup>requieren</sup> reeditar en 1973 el gobierno peronista con las características que éste había tenido en los años cuarenta y cincuenta.

Un gobierno como el peronista con un programa económico que implicaba ciertas reformas que ponían límites a la expansión del capital oligopólico nacional y extranjero y que por lo tanto no podía apoyarse en los sectores más fuertes de la burguesía, necesitaba encontrar ese apoyo político en otros sectores. Estos habían sido <sup>entre 1945 y 1955</sup> la fracción peronista de las Fuerzas Armadas y la clase obrera organizada, solida y unificada pero subordinada al gobierno a través de una dirigencia sindical controlada y sometida a aquél.

A principios de los años setenta, tal unificación y control del movimiento obrero era imposible dada la existencia de los nuevos sindicatos "clasistas" o combativos, que no aceptaban el sometimiento a la burocracia sindical y cuyos dirigentes impulsaban proyectos políticos que iban más allá del reformismo peronista.

Pero al mismo tiempo, por el lado de la burocracia sindical, también era imposible reeditar la situación anterior. Si las declaraciones de la CGE tradicionalmente hacían referencia a la necesidad de apoyar el desarrollo del capital nacional y existían vinculaciones entre esta central obrera y la CGE, los principales dirigentes de la línea vandorista, principalmente del gremio metalúrgico, se habían ido vinculando con las grandes empresas de sus sectores industriales respectivos, muchas de ellas de capital extranjero. Es así que varios autores coinciden en identificar a estos dirigentes en esta época como representantes del gran capital extranjero. Este hecho fue confirmado por las reticencias con que reaccionaron frente al programa económico reformista y la concertación con la CGE que llevó a cabo el gobierno peronista en 1973. U. Dueño señala al respecto que "Esta alianza (CGE-CGE) siempre fue buscada por iniciativa de la CGE y no de la CTE, cuya burocracia sindical está mucho más vinculada con las grandes empresas monopolistas de la Unión Industrial Argentina, desde José Alonso a José Mucci (secretario general de la CTE). Alonso estaba vinculado a Bunge y Born y la UIA, y siempre sabotó los acercamientos de la CGE; a Mucci el acercamiento le fue impuesto por el genl. Perón y la declaración conjunta que se obtuvo no pasa de las generalidades sin implicar ninguna acción común concreta (en 1971)".

También J. Di Tella, que fue funcionario del ministerio de Economía durante este gobierno señala, ante el apoyo dado al capital nacional "esto respondía a los intereses del la CSE, pero no a los de los sindicatos, que a pesar de su retórica permanecieron básicamente reticentes en este punto y no ofrecieron resistencia cuando esta política fue revertida".

En las Fuerzas Armadas la situación también era muy diferente a la prevaleciente en la época de los primeros gobiernos peronistas. En aquel momento, el embargo impuesto por los Estados Unidos a la provisión de armamento a Argentina dada su política de neutralidad durante la segunda guerra mundial y las simpatías hacia el Eje demostradas por el sector peronista del Ejército, hizo evidente la necesidad de industrializar al país con la finalidad de lograr el autoabastecimiento en materia armamentista.

A ello se agregaba el tipo de estrategia militar a seguir en un conflicto bélico en esos momentos, apoyada en la movilización general del tipo "la nación en armas", lo que iba de acuerdo con la necesidad de un pueblo con buenas condiciones de vida y concustanciado con las Fuerzas Armadas.

En la nueva situación, la ideología y estrategia de conflicto de las Fuerzas Armadas son las derivadas de la "Doctrina de Seguridad Nacional" según la cual el objetivo es el "enemigo interno", el "comunismo infiltrado" en los sectores populares, por lo que una estrategia bélica apoyada en una movilización social masiva se torna peligrosa pues ahí puede encontrarse el enemigo. Si a esto se agregan las nuevas tecnologías aplicadas a los armamentos más modernos, se deriva entonces un tipo de estrategia militar basada en unas Fuerzas Armadas altamente capacitadas y lo más aisladas posible e "Incontaminadas" por el resto de la sociedad.

Con estos nuevos esquemas, los militares no podían ver más que con reticencia a un gobierno que se apoyara en la movilización de masas, y sólo lo aceptaba como una circunstancia obligada a que se había llegado ante la necesidad de replegarse a los cuarteles para solucionar allí el problema de las divisiones internas que se habían suscitado como consecuencia de su ejercicio directo del gobierno durante la anterior dictadura, y para evitar, además, el estallido social incontrolable a que llevase el gobierno del Gral. Onganía.

Finalmente, un problema fundamental que dificultaría la acción del nuevo gobierno era la división interna del movimiento peronista.

## El contexto exterior

Al asumir el gobierno el peronismo todavía se vivía en Latinoamérica el clima de ascenso de la lucha de masas de los años sesenta, aunque ya se evidenciaban los primeros signos del reflujó.

El proceso de polarización social producido a partir de los años cincuenta con el agotamiento del crecimiento acompañado de cierta redistribución del ingreso y mayor participación popular, conjuntamente con la arremetida del capital financiero transnacional en el sector productivo interno de los países latinoamericanos, y sumado a ello, el ejemplo de la triunfante Revolución Cubana, culminaron en la movilización popular generalizada en la región en los años sesenta.

Participando la sociedad argentina de tal situación general, el programa reformista del peronismo que apoyaba el crecimiento del capital nacional sobre la base de un amplio apoyo social asentado en la conciliación de clases quedaba fuera de contexto y ya era anacrónico. A lo sumo podía retrasar la lucha en que estaba empeñado el gran capital extranjero y nacional asociado a él, en Argentina como en el resto de Latinoamérica, por redefinir las condiciones de crecimiento económico y las correspondientes relaciones entre las clases, consolidando su hegemonía económica y política.

Al asumir el gobierno el peronismo a principios de 1973 se encontraba, además del ascenso de la lucha popular y la guerrilla peronista de los Montoneros y del marxista Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, con el gobierno de Salvador Allende al frente de la Unidad Popular en Chile, el ascenso del Frente Amplio de orientación marxista y la guerrilla de los Tupamaros en Uruguay, la movilización de masas que acompañaba al gobierno del sector nacionalista y reformista de las Fuerzas Armadas peruanas encabezado por el gral. Velasco Alvarado.

Este último caso era particularmente preocupante para los sectores dominantes latinoamericanos y del imperialismo dado que esta tendencia surgida en el principal instrumento de dominación sobre los pueblos latinoamericanos aparecía también en otros países, como Panamá con el gobierno del gral. Torrijos y la efímera experiencia del gral. Juan José Torres en Bolivia.

Al mismo tiempo, la atención mundial se centraba en el empantanamiento de las fuerzas norteamericanas y el avance de las fuerzas populares en Vietnam.

Contradicciones de los objetivos económicos

El programa económico del Frente constaba de dos aspectos, una serie de reformas estructurales a largo plazo--más adelante enumeradas en el Plan Trienal de Reconstrucción para la Liberación Nacional. 1974-1977- y medidas coyunturales a ser aplicadas en lo inmediato para reordenar la economía.

En el primer caso, se reeditaron dos medidas de los primeros gobiernos peronistas que permitieron ampliar el control del Estado sobre el sector financiero, la nacionalización de los depósitos bancarios y la intervención estatal en el comercio exterior. Por la primera, los bancos privados continuaban operando como tales pero recibiendo los depósitos y otorgando los créditos por cuenta del Banco Central, con lo que éste tendría un control directo de los montos y la orientación del crédito dirigido al sector productivo. Con la segunda medida, el Estado se encargaba de la venta al exterior de la producción agrícola luego de adquirirla a los productores, quedándose con la diferencia que antes aceparaban los oligopolios privados exportadores y obteniendo un mayor control de las divisas que entraban al país por este concepto.

Según informes de la CEPAL el volumen de la exportación de granos que el Estado absorbió de las compañías privadas fue, entre 1974 y 1976, de 52.8% para el trigo, 62 % para el maíz, y 25 % para el sorgo. Aunque por la envergadura de las operaciones y la falta de una estructura estatal adecuada en lo inmediato se siguió recurriendo a los servicios de las compañías privadas que continuaron así participando de dicha actividad.

Para el sector rural se preparó un proyecto de Ley Agraria que llegaba a permitir expropiaciones de tierras improductivas pero que nunca fue aprobado por el Congreso de la República.

Se implementó un impuesto a la "renta potencial" de la tierra, que gravaría cada propiedad de acuerdo a la evaluación que se hiciera de su capacidad productiva, castigando de esta forma a los propietarios que no las pusieran en actividad. Sin embargo el proceso de evaluación a ser levantado en un catastro se demoró y el impuesto nunca tuvo aplicación efectiva. Las quejas de la burguesía agropecuaria durante este gobierno estuvieron relacionadas más con el descenso relativo de los precios de la producción de su sector respecto de los industriales que con la política impositiva gubernamental.



En el sector industrial se dio prioridad en el otorgamiento del crédito a las empresas de capital nacional, limitándose el acceso al mismo en el mercado financiero interno a las empresas transnacionales.

Se dictó una ley de inversiones extranjeras inspirada en la Resolución 24 del Acuerdo de Cartagena firmado por los países del Pacto Andino y que implicaba una renegociación de la dependencia que pretendía evitar el peligro de una excesiva participación del capital extranjero en el desarrollo del país que pone los centros de decisión en el exterior y se guía por pautas diferentes al interés nacional.

Por esta ley se prohibían las inversiones extranjeras en determinadas áreas estratégicas, se aumentaba la gravación impositiva a las empresas de ese origen y se limitaba la remisión de ganancias a un 12 % del capital invertido, cifra que en realidad representaba un margen bastante amplio y que suele ser del 8 % en la legislación de los países desarrollados, como lo fue también en la primera ley de inversiones extranjeras del peronismo dictada en 1955.

Si durante este gobierno no hubo inversiones extranjeras de significación fue más por el clima de inestabilidad política que se vivía y por ser un gobierno no controlado directamente por la burguesía. La reticencia general del sector privado a realizar inversiones productivas debió ser compensada por las inversiones del sector público que, al igual que durante la anterior dictadura se convirtió en el principal impulsor de la economía, aunque como se verá, esta política pública aplicada durante un gobierno democrático llevó a dificultades insalvables que no surgieron en la dictadura.

Las políticas en contra del capital extranjero no significaron un ataque a fondo que permitiera desplazar a las empresas transnacionales del lugar de preeminencia que habían alcanzado para entonces en la economía argentina, llegándose así a la situación en que pretendía impulsarse el desarrollo mientras se ponía trabas a las empresas que encabezan la mayoría de las ramas del sector productivo.

Se promovieron, por otra parte, las exportaciones de productos industriales mediante beneficios cambiarios e impositivos, dirigidas en gran proporción a países del área socialista. Esta medida, proclamada como muestra del antiamperialismo del gobierno benefició

a las empresas de capital norteamericano y europeo instaladas en el país que producían el material de transporte y los vehículos que fueron el principal producto de esas exportaciones.

Si bien las exportaciones a los países socialistas aumentaron del 3 % del total en 1972 al 16 % en 1975, pasando de 59 a 476 millones de dólares en ese período y la Unión Soviética se convirtió en uno de los principales socios comerciales del país, esta situación se mantuvo en la posterior dictadura encabezada por el general Videla.

Como parte de una reforma fiscal se obligó a los tenedores de acciones a declararlas para conocer su nacionalidad y para gravarlos de acuerdo a los dividendos otorgados por tales acciones, agregando esta imposición a la ya existente aplicada a los beneficios obtenidos por las sociedades anónimas que era pagada por esas sociedades sin necesidad de identificar a sus propietarios.

Esta medida de carácter redistributivo fue acompañada por otra de sentido inverso, que eliminaba el impuesto a las actividades lucrativas sustituyéndolo por el Impuesto al Valor Agregado que recae en los consumidores. El objetivo de ambas era aumentar los ingresos del estado.

Se creó la Corporación Nacional de Empresas del Estado para darle una dirección mejor organizada a las mismas, pero <sup>en</sup> su dirección se incluyó a empresarios vinculados a la UTA y al Instituto IDEA cuyas ya se mencionaron en capítulos anteriores, ambos representantes de los intereses del gran capital extranjero y nacional asociado.

En cuanto a las medidas de aplicación inmediata, se decretó un congelamiento de precios y salarios, luego de elevar un 20 % los salarios mínimos y en menor proporción los superiores. Este aumento compensaba los aumentos del costo de vida del año anterior, llevando el nivel salarial al existente en 1971, lo que significaba institucionalizar la pérdida de poder adquisitivo verificada en los anteriores dieciocho años de regímenes antipopulares.

Al mismo tiempo se aplicó una política monetaria expansiva, incrementándose el crédito al sector privado y el gasto fiscal en inversión y en aumento de salarios a los trabajadores del Estado, cuyo número aumentó, además, en un 25 % entre 1973 y 1975, gastos atendidos a través de la emisión monetaria.

De tal forma, mientras no se tocaba ninguna de las causas estructurales que alimentan la inflación,

se aplicaban políticas expansivas que, luego del impulso inicial a la economía a través de la puesta en actividad de la capacidad ociosa y una vez alcanzado el límite de tal capacidad, tenían fuertes tendencias inflacionarias. Pretendiendo contener la inflación mediante el decreto de congelamiento de precios y salarios.

El gobierno se proponía evitar el estallido de esta contradicción mediante el aumento de la inversión productiva y por lo tanto de la oferta de bienes. Sin embargo las inversiones del sector privado, debido a la situación política que vivía el país, cayeron del 14.1 % del PBI en 1973 al 8.5 % en 1975. Por lo tanto era el Estado el que debía realizar la inversión necesaria, la que, en efecto, aumentó desde el 7.7 % del PBI al 11.5 % en el mismo lapso. El problema fundamental, entonces, del programa económico era el de la obtención por parte del Estado de los recursos para aliventar esa inversión.

Durante la anterior dictadura, en que el Estado también fue el principal impulsor de la economía, los recursos fueron obtenidos de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y de la reducción salarial de los empleados públicos y el despido masivo de una parte de ellos.

Esta última medida era irrealizable durante un gobierno que se considerara "popular", y de hecho se actuó en forma inversa según se indicó más arriba.

Al sector agropecuario no se le aplicó ninguna medida equivalente a las retenciones impuestas por el ministro Kriger Vasena durante la dictadura de Onganía. En este sentido, la "oligarquía" terrateniente recibió un mejor trato durante el gobierno peronista que durante el anterior dictatorial hasta la asunción del gral. Lanusse a la presidencia.

Tampoco se podía gravar al sector industrial, ya que éste era, en los planes del gobierno, el que debía desarrollarse prioritariamente.

Por lo tanto debió recurrirse para solventar los mayores gastos del Estado a la emisión monetaria, aumentando el déficit fiscal de 2.43 % del PBI en 1972 al 5.43 % en 1973 y llegando al 11.71 % en 1975. Aumentando al mismo tiempo la deuda pública externa desde 3 089 millones de dólares en 1972 a 5 295 en 1975.

Durante los primeros meses de gestión el gobierno contó con la ventaja de una buena situación del sector externo debido a la mejo-

ra en los términos de intercambio del comercio argentino con el exterior, que de un nivel 100 en 1970 ascendió a 127 en el cuarto trimestre de 1972, lo que permitió que la cuenta comercial con el exterior presentara un superávit de 1.031 millones de dólares en 1973 mientras que el año anterior solo lo había sido de 37 millones.

Sin embargo con la crisis del petróleo surgida en 1973 y el consiguiente aumento en los precios de los productos industriales exportados por los países desarrollados que siguió al aumento del energético, productos que un país dependiente como Argentina debe importar para mantener en funcionamiento su economía, los términos de intercambio para el país cayeron en un 50 %. Llegando a un nivel de 65 en el segundo trimestre de 1974. De un superávit comercial cercano a los 400 millones de dólares en la primera mitad de 1974 se pasó a un déficit de 300 millones en la segunda mitad del mismo.

Las reservas del Banco Central que en el segundo trimestre de 1974 habían llegado a 1.972.3 millones de dólares, cayeron a 1.057.6 millones en el primer trimestre de 1975 y a 529.5 en el segundo trimestre de ese año.

El aumento de los precios de los insumos industriales importados aceleró la presión inflacionaria que del 8 % en la segunda mitad de 1973, subió al 40 % en el año siguiente.<sup>41</sup>

En tales circunstancias se hacía necesario volver a aplicar un programa de ajuste, por lo que se reemplazó al ministro de economía J.R. Gelbard por el mismo que había dirigido el ajuste en el anterior gobierno peronista en 1953, A. Gomez Morales.

La inviabilidad del programa económico se veía además acentuada por la situación política y la presión de las clases trabajadoras por incrementos salariales a través de acciones que escapaban al control de la burocracia sindical, apoyada por Perón para poner freno a tales demandas.

Junto a esta movilización obrera, acentuando la contradicción fundamental capital-trabajo, se producirá una intensificación de las contradicciones secundarias entre fracciones de la burguesía al crearse nuevamente la situación de falta de correspondencia entre la fracción que integraba el gobierno y a la que se le entregó el manejo de la política económica -los dirigentes de la CGE de la burguesía de capital nacional-, y la fracción que detenta la hegemonía económica dentro del bloque burgués, la del gran capital extranjero y nacional asociado a aquél, que boicoteará el programa del gobierno.

Los 40 días de C mpora

El nuevo gobierno, atendiendo a los reclamos populares hab a expresado su intenci n de otorgar una <sup>ley de</sup> amnistia para los presos pol ticos, pero siguiendo los canales legales que implicaban la discusi n y aprobaci n del Congreso y el estudio de cada caso antes de serle otorgado el beneficio.

El sector <sup>movilizado a raz  de la asunci n de C mpora</sup> no estaba dispuesto a esperar la finalizaci n de esos tr mites y sus previsibles resultados. La misma noche del 25 de mayo en que asumi  el gobierno una multitudinaria manifestaci n se dirigi  a las c rceles en que se encontraban los detenidos pol ticos y las rode . Mientras tanto los detenidos se amotinaron en el interior, quedando el personal de guardia encerrado entre ambos movimientos no le qued n m s que acceder y abrir las puertas a los detenidos que fueron aclamados por la multitud.

Al d a siguiente el Congreso reuni o aprobaba la Ley de Amnistia.

Este hecho con que se inaugura el gobierno marca la t nica de la situaci n pol tica. Es el pueblo el que tiene la iniciativa y el gobierno el que debe responder a la misma y someterse a la voluntad popular. Las intenciones de Per n, y menos aun de la derecha peronista no iban, por supuesto, en ese sentido, comenzando desde ese primer momento las presiones para lograr la renuncia de C mpora y la postulaci n de Per n en nuevas elecciones.

Los <sup>primeros</sup> d as del gobierno de C mpora, que lleg  al mismo apoyado por los sectores radicales del peronismo, fueron acompa ados por la constante movilizaci n popular y fueron los  nicos en mucho tiempo inmediatamente anterior y posterior en que aqu ella no se vio acosada por la represi n ni por las provocaciones de las bandas de derecha. La situaci n cambi  con el arribo desde Espa a de Per n al pa s el 20 de junio.

Ese d a la derecha peronista, encargada de la "seguridad" en la recepci n popular a Per n en las cercan as del aeropuerto internacional de Ezeiza, organiz  lo que fue conocido como la "masacre de Ezeiza", en la que hombres con armas de guerra apostados en el palco desde el que Per n hablar a a la multitud atacaron a las columnas de la Juventud Peronista provocando centenares de muertos y heridos.

Los sectores de derecha formaban parte del propio gobierno camporista, organizados principalmente alrededor de la burocracia sindi-

col y del grupo de J. López Rega.

Este último se había convertido en el secretario personal de Perón en España, ejerciendo gran influencia sobre él y su esposa María E. Martínez, "Isabel". Ex cabo de la policía argentina -durante el gobierno peronista se lo hizo saltar todo el escalafón para otorgarle el grado más alto, comisario general- vinculado a los servicios represivos y a la CIA, involucrado en acciones delictivas, relacionado con sectas espiritistas, sería uno de los organizadores de las bandas parapoliciales para reprimir al movimiento popular durante la presidencia de Perón.

En el gobierno de Cárdena lo fue concedido en Ministerio de Bienestar Social, organismo desde el cual organizó las acciones represivas ilegales y cuya dirección conservó hasta julio de 1975 en que una serie de movilizaciones en su contra lo obligó a dejar el país.

El Ministerio de Trabajo fue otorgado a un representante del principal sindicato de la burocracia sindical, el metalúrgico R. Otero.

En otros casos, mientras se postulaba como candidatos a gobernadores provinciales ó hombres apoyados por la izquierda peronista, la candidatura a la vicegubernación era ocupada por integrantes de la derecha. Así por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en que el gobernador O. Bidoglio ascendió al cargo acompañado por el ex tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), V. Calabró.

Estos sectores de derecha, con la anuencia de Perón, comenzaron una campaña en contra del presidente Cárdena y de los sectores más progresistas de su gobierno -ministros de Relaciones Exteriores, del Interior, de Educación, el Rector de la Universidad de Buenos Aires, R. Puiggrós-, con el objeto de obtener su renuncia y convocar a nuevas elecciones en las que se presentaría la candidatura de Perón a la presidencia de la Nación.

Con la llegada de Perón al país estas presiones se multiplicaron y tras sendas reuniones de aquí con los jefes de las Fuerzas Armadas y la dirigencia sindical, Cárdena presenta su renuncia el 13 de julio de 1975. Junto con él salen los hombres más progresistas del gobierno y la derecha comienza a consolidarse escalando posiciones.

Mientras se organizan las próximas elecciones asume la presidencia interinamente el presidente de la Cámara de Diputados P. Lestari, hermano de López Rega. Comienzan inmediatamente los atentados y asesinatos contra dirigentes y militantes de los grupos populares, además de abogados defensores de presos políticos, periodistas, y dirigentes sindicales opuestos a la burocracia vendicista.

## La presidencia de Perón

El comienzo de la presidencia de Perón <sup>el 12 de octubre de 1973</sup> está marcado por la promulgación de una serie de leyes represivas dirigidas a frenar la movilización popular.

La primera de ellas es la nueva Ley de Asociaciones Profesionales referida a las organizaciones sindicales. Su objetivo es reforzar el control que los sindicatos nacionales dirigidos por la burocracia vandorista ejerce sobre las filiales locales en las que en los últimos años se acentuó el surgimiento de dirigencias combativas y opositoras a la burocracia centralizada en Buenos Aires.

De esta forma Perón recompensaba el apoyo de esa burocracia para enfrentar a la izquierda del movimiento.

Le siguió una ley de reforma del Código Penal dirigida no sólo contra las actividades políticas opositoras al gobierno, a las que se impondrían penas más graves aun que las existentes durante la dictadura anterior, sino también contra las dirigencias sindicales contestatarias que no se sometieran a las directivas de la burocracia vandorista.

La tercera fue la Ley Universitaria, destinada a impedir la organización y expresión de los estudiantes y que fue criticada por la Juventud Universitaria Peronista, corriente mayoritaria en los claustros, y las restantes corrientes de izquierda.

Se comienza también a desplazar a los gobernadores provinciales cercanos a los sectores de la izquierda peronista.

En Buenos Aires el gobernador Bidegain es presionado por Perón para que renuncie y es reemplazado por el vicegobernador, el sindicalista V. Calabró.

En la provincia de Córdoba se produce una sublevación de la policía con apoyo de sectores políticos de derecha de dentro y fuera del peronismo, aunque esa división es cada vez menos consistente. El gobernador y vice, ambos de tendencia progresista, son encarcelados por los sublevados. Perón avala los hechos y nombra en su reemplazo un interventor federal que inicia una política represiva en la provincia.

A estos casos siguen los de las provincias de Mendoza, Salta, Santa Cruz y Tucumán.

Rodolfo Puiggrós es sustituido como Rector de la Universidad de Buenos Aires por el ex vicepresidente V. Solano Lima. ✓

El nombramiento de Puiggrós como rector de esa Universidad fue producto del reparto de las distintas esferas de gobierno entre los diferentes sectores del peronismo al asumir la presidencia Cámpora, correspondiéndole la Universidad a la izquierda peronista.

En 1973 se organizó la Juventud Universitaria Peronista (JUP), que hizo su debut en los comicios estudiantiles de ese año en la Universidad Nacional de Buenos Aires obteniendo el 44 % de los votos y nueve de los trece centros estudiantiles de las Facultades en disputa.

Este resultado significó un cambio pronunciado respecto a los que tradicionalmente se observaban en esa Universidad, en que predominaban el Movimiento de Orientación Reformista y Franja Morada, dirigidos respectivamente por el Partido Comunista y el sector de Renovación y Cambio encabezado por Raul Alfonsín de la Unión Cívica Radical.

En los comicios de 1972 el MOR obtuvo el 55.5 % de los votos, siendo segunda Franja Morada, aunque hay que señalar el alto grado de abstencionismo en ese comicio, en que sólo votó el 20 % del padrón, mientras que en 1973 lo hizo el 50-%.

Fue determinante en los resultados de este último año la medida adoptada por las nuevas autoridades concediendo ingreso irrestricto y sin examen de admisión. Si esto trajo perjuicios en el orden académico, la situación política era lo prioritario en ese momento y la izquierda peronista debía fortalecer sus bases en ésta como en las demás esferas de la sociedad. En 1973 se creó también la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) para aglutinar a los trabajadores que luchaban contra la burocracia sindical, apoyo fundamental de la derecha peronista.

El conjunto de las organizaciones de la izquierda peronista era conocido como la Tendencia Revolucionaria y la amplitud del apoyo popular con que contaba quedó de manifiesto en la marcha realizada en apoyo a la candidatura de Perón para nuevos comicios presidenciales realizada el 31 de agosto de 1973. El paso de las columnas movilizadas por la CGT se prolongó por 165 minutos, de acuerdo a las crónicas de la prensa, y el del contingente de la Tendencia por 162. Pero la CGT se venía preparando desde hacía un mes para la marcha, se decía que había gastado en los preparativos 300 000 dólares y contaba con cientos de micros para recoger a los trabajadores en las puertas de las fábricas, mientras que la tendencia carecía de esos recursos, y había decidido participar en la marcha y movilizar a los 150 000 adherentes que lo hicieron, sólo tres días antes.



Durante la presidencia de Perón, que se prolongó por nueve meses hasta su muerte el 14 de julio de 1974, continuó la represión iniciada tras la caída de Cámpora. La movilización popular fue erradicada de las calles y si bien el gobierno utilizó como justificación para su política represiva las acciones de la guerrilla, su preocupación y objetivo principal no son esos hechos violentos aislados sino la resistencia de la clase obrera frente a la burocracia sindical incapaz de controlarla.

Los trabajadores buscaban traducir su triunfo en las urnas en conquistas efectivas en sus condiciones de trabajo. Se incrementaron por ello, a partir del 25 de mayo de 1973, las acciones directas al interior de las empresas en reclamo, fundamentalmente, de un mayor control por parte de los trabajadores del proceso de trabajo y mejores condiciones en que éste debe ser ejecutado, enfrentando así a la patronal y sorteando los obstáculos que el Pacto Social buscaba imponer a este tipo de enfrentamiento a través del congelamiento de los salarios y por lo tanto de la negociación salarial. Pero al mismo tiempo la lucha se daba por la elección de nuevos delegados y comisiones internas de fábrica realmente representativos de los intereses de los trabajadores y no entregados a la patronal y a la dirigencia burocrática. Era por lo tanto con esta última el enfrentamiento en este tipo de lucha.

Según un estudio realizado por un grupo de analistas sociales argentinos patrocinados por el Latin American Studies Association de los Estados Unidos, la acción represiva montada por el Estado se componía de

1. Grupos civiles armados con armas que sólo pueden provenir -sea cual fuere la vía- de reparticiones militares o fábricas que no pueden vender más que a reparticiones militares (escopetas Itaka granadas de gas, pistolas calibre 11.25, etc.);
2. Sindicatos oficialistas y sus dirigentes;
3. Fuerzas de seguridad del Estado, nacionales o provinciales;
4. El Estado mismo cuando actúa como poder administrador y declara ilegal una huelga que surge de la base y amenaza con desbordar las estructuras sindicales.

"En cuanto a las víctimas podrían reunirse en los grupos siguientes:

1. Sindicatos "combativos" como los de Luz y Fuerza, Mecánicos Automotores y Talleres Afines (Omata) y Transporte Automotor de la

provincia de Córdoba, y Federación Gráfica Bonaerense, Músicos y Periodistas de Buenos Aires, etcétera.

2. Trabajadores que han sobrepasado sus respectivas conducciones sindicales asumiendo posiciones combativas o disidentes en general, o en un conflicto o situación laboral concreta;

3. Los activistas, dirigentes o no, que proceden de núcleos obreros inscritos en tendencias políticas, como la JTP (Juventus Trabajadora Peronista), el PST (Partido Socialista de los Trabajadores), o el PC (Partido Comunista).

4. Las asambleas de trabajadores, ya sea en el sentido estricto sindical como en el de cualquier reunión de trabajadores por causa de un conflicto, huelga, manifestación, etc.

"Finalmente, los procedimientos divergen según la naturaleza del agente (represivo) y la índole de la víctima. En general los procedimientos cumplen un circuito completo que se compone de los siguientes pasos: ataque con armas de fuego, intimidación, secuestro, torturas, colocación de bombas en locales, desalojo de locales sindicales, detenciones y/o asesinatos. Complementariamente se registra la presencia de fuerzas de seguridad con el pretexto de la protección, la declaración de ilegalidad de las huelgas y la ausencia llamativa de fuerzas de seguridad en lugares en los que evidentemente debía estar o actuar.

"Conviene aclarar que dentro de los agentes represivos es posible hacer algunas distinciones más. Existen, por un lado, "organizaciones políticas" de tendencia nacionalista (de derecha), tales como el Comando de Organización (CO), el Comando de Resistencia Peronista (CRP), o la Concentración Nacional Universitaria (CNU); los llamados "matones" dependientes de esos grupos, o de algún sindicato, o aun de algún dirigente sindical importante y, finalmente, los "parapoliciales" que son agentes de los servicios de informaciones de cualquiera de las ramas de las Fuerzas de Seguridad, las cuales actúan de modo marginal a los reglamentos públicos existentes, pero con dependencia del poder oficial. Cabría agregar ciertos mentores ideológicos como la revista El Caudillo patrocinada por el Ministerio de Bienestar Social, que finaliza sus editoriales -invariablemente- con la siguiente consigna: "El mejor enemigo es el enemigo muerto".

"Si se observa bien se verá que los conflictos nacidos por cuestiones salariales son mínimos y que la patronal -empresas no sólo

capitalistas sino también del Estado- aparece como el personaje ausente, lo que, a la vez que habla de la singularidad de esta lucha de clases, pone de manifiesto que el agente principal, en franca alianza con el Estado, es la llamada "burocracia sindical".

"Las 'fuerzas de seguridad', luego de la etapa de la guerra fría mundial, han mantenido ideológica como materialmente muchos lazos de unión con los Estados Unidos. El público reconocimiento de la intervención de la CIA en Brasil, Chile y Uruguay indica que los Estados Unidos y su estrategia para Latinoamérica tienen, sin duda, mucho que ver con lo que ocurre en la Argentina. En este orden no puede dejar de señalarse que la llamada "burocracia sindical" argentina es un campo privilegiado, en el que esa política se ejerce: la CIA reconoce haber trabajado conjuntamente con la AFL-CIO (centrales obreras norteamericanas) y ciertos organismos internacionales del trabajo -hegemonizados por los Estados Unidos- para operar sobre los dirigentes y organizaciones sindicales de este país por medio de "escuelas de capacitación obrera", y un sistema de relaciones que se parece bastante a una red de espionaje sindical." 5/

Al respecto se pueden citar las palabras del presidente de uno de esos organismos internacionales, el American Institute for Free Labor Development (AIFLD) destinado a implantar para América Latina un "estilo de organización sindical" semejante a la norteamericana: "Nosotros debemos comprender que hoy la opción en la América Latina es entre democracia y comunismo. Nosotros debemos hacer entrar en nuestras cabezas que no podemos permitir que la propaganda comunista nos divida entre liberales y conservadores o entre empresarios y trabajadores." Palabras especialmente aptas para ser asimiladas por los dirigentes sindicales peronistas que concurrían a esos cursos, ya que no diferían mayormente de las que ellos mismos habían escuchado de boca del propio Perón durante su primer gobierno de diez años.

Según la publicación del NACLA: Argentina in the Hour of the Furnaces, New York, 1975, la AIFLD "es una organización sustentada económicamente en un 92 % por el gobierno de USA y por, entre otras, la Kennecott Copper Co, el First National City Bank, Mobil Oil Co, Anaconda, United Fruit, etc. mantiene un aparato sindical que cuenta con escuela propia en USA para adiestrar a sindicalistas latinoamericanos; hasta 1972 había adiestrado 190 000 en un programa que se basa en: anticomunismo, no a la lucha de clases y sí a la conci-

liación de ellas y libre empresa".

De Argentina "Para 1969 han asistido a sus cursos en USA 2 682 dirigentes de 21 sindicatos". "Para 1966, 12 hombres de los que integraban el secretariado de la CTT Vandorista estaban adiestrados en la AIFLD".

Los sectores radicales frente a la presidencia de Perón

La llegada de Perón a la presidencia ponía a los sectores de la izquierda peronista en una difícil situación. Por un lado sus dirigentes eran concientes de que la nueva situación implicaba un viraje a la derecha, pero al mismo tiempo se veían limitados en su capacidad de crítica al gobierno dada su estrategia de actuar desde adentro del peronismo para acercarse a las masas que conformaban ese movimiento -Perón había obtenido el 62 % de los votos en las elecciones de septiembre.

El interregno de Gáporra había sido en realidad una consecuencia momentánea de la estrategia política de Perón para acelerar la caída de la dictadura y retornar al país y al gobierno.

En un reportaje periodístico, haciendo alusión a esa estrategia, -que por otra parte no era más que un producto del característico comportamiento político de Perón a lo largo de toda su trayectoria- declaraba: "tengo una mano izquierda y una mano derecha y uso las dos", en lo que no podría ser denominado precisamente como una declaración de principios.

Para acelerar la descomposición del régimen dictatorial y el control del sector sindical y de la derecha política del peronismo, que se estaban extralicitando en sus negociaciones y acercamiento a ese régimen, Perón debió alentar al ala izquierda del movimiento -algo necesario, además, para acompañar y no quedarse rezagado del sentimiento masivamente radicalizado de amplios sectores populares.

Los sectores radicales y juveniles del movimiento lograron una fuerte capacidad de convocatoria popular, mientras que los despresionados dirigentes de la burocracia sindical y la cúpula política tradicional del peronismo, aun con los medios económicos con que contaban, eran incapaces de movilizar grandes contingentes.

Todo el período de radicalización que acompañó la caída de la dict-

medida hasta la llegada de Cámpora al gobierno los obligó a dar un paso al costado y multiplicar sus expresiones de adhesión a Perón, más aun a medida que se hacía inminente el retorno del peronismo al gobierno y, ante el avance popular, las Fuerzas Armadas perdían toda posibilidad, en esos momentos, de poner condicionamientos al nuevo gobierno, como habían pretendido hacerlo a través de la estrategia del Gran Acuerdo Nacional leonessista en el que estaba involucrada la derecha peronista.

Pero una vez en el gobierno, el objetivo era terminar con el estado de movilización popular generalizada y limitarla a acciones organizadas y controladas por el gobierno en los momentos que la situación política lo requiriera. Había que recurrir entonces a la "mano derecha".

Sin embargo, la intención de Perón no era desencadenar desde un primer momento una escalada represiva contra la izquierda. Otra de las características de la tradicional política peronista aplicada en los primeros gobiernos había sido la de buscar, en un primer momento, un acercamiento con todo sector social o fuerza política<sup>+</sup>, en tanto estos aceptaran los lineamientos generales, económicos y políticos, impulsados por Perón, convertirlos en nuevas bases de apoyo para su gobierno.

También ahora, la intención inicial de Perón era subordinar al sector radical como ala izquierda del movimiento, obligándola a abandonar la lucha armada y a someterse a su dirección política.

Esto era objetivamente imposible dado que, como ya se señaló, en ese momento las condiciones económicas y políticas dentro y fuera del país hacían imposible reeditar con éxito un programa reformista como el aplicado en los primeros gobiernos peronistas, y todo llevaba a una creciente polarización social.

Pero aparte de esta situación objetiva había otros elementos que dificultaban la implementación de esa estrategia. El ascenso de la lucha popular y de la guerrilla en los últimos años de la dictadura llevaron al montaje de un aparato de represión interna que no fue desarmado con la llegada del peronismo al poder y <sup>que</sup> había adquirido una dinámica propia, en el que estaban envueltos, además de los aparatos represivos del Estado, <sup>+</sup> sectores del propio peronismo, como la burocracia sindical y el grupo Lopezreguista.

El objetivo de tal aparato era acabar por la fuerza y utilizando métodos ilegales con el movimiento popular y escapaba al control del mismo Perón.

<sup>+</sup> cualquiera fuera su signo político      <sup>++</sup> y del imperialismo.

Dada la imposibilidad de aplicar con éxito el programa económico, también boicoteado por la burguesía del gran capital, y la continuación de la movilización popular, con un impulso importante en los sindicatos combativos -sumado a las acciones fequistas de la guerrilla no peronista que fueron utilizadas como pretexto por el gobierno para acentuar la represión generalizada- Perón se volcó decidida-mente hacia la derecha, legitimando cada vez más abiertamente en sus alocuciones públicas las acciones represivas.

Que los sectores radicales del peronismo y sobre todo las organizaciones armadas -Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)- tenían en claro el vuelco a la derecha que acompañaba el ascenso de Perón a la presidencia, lo demuestran dos hechos que tuvieron lugar en ese momento.

Perón había impulsado el nombramiento como Secretario General de la CGT a un dirigente sindical, J. Rucci que, si bien pertenecía a la burocracia "vanderista" acataba en mayor grado las directivas del líder del movimiento.

En el mes de septiembre, en que se produjo el triunfo electoral de Perón, en un atentado reivindicado más adelante en forma pública por los Montoneros, estos ejecutaron a Rucci, en lo que era una clara advertencia a Perón y la derecha del movimiento.

Días después, el 12 de octubre, en que Perón asume la presidencia los Montoneros y las FAR anuncian públicamente su unificación bajo el nombre común de Montoneros.

Estas organizaciones no podían continuar con la lucha armada en un gobierno que se iniciaba con la confianza y el apoyo masivo de las clases trabajadoras, ya que ello llevaría a su inmediato aislamiento. Por ello anunciaron la suspensión de esas acciones, aunque manteniendo su organización y las armas. Su máximo dirigente declaraba en esos momentos que "En la guerra hay momentos de confrontación, como los que hacen pasado, y hay momentos de tregua, en los cuales se hacen los preparativos para la próxima confrontación".

Pero si esta dirigencia veía correctamente la situación, y que Perón había vuelto al país con un objetivo a lo sumo reformista pero nunca revolucionario, su error fue no expresarlo de la misma manera y con la misma claridad ante las masas populares. La actitud de una dirigencia revolucionaria debe ser la de poner las cosas en claro frente a las masas y no participar de los errores de éstas para lograr un apoyo basado en concepciones equivocadas. Por otra parte,

no adoptar esta actitud implica una falta de confianza en la capacidad de comprensión de esas masas.

Los dirigentes de los sectores radicalizados del peronismo no lo vieron así y por temor a ofender el sentimiento peronista de la mayoría de los trabajadores sólo criticaban a funcionarios o determinadas medidas del gobierno, pero no a Perón ni, fundamentalmente, al proyecto peronista en su conjunto. Con respecto a este último expusieron en sus órganos periodísticos la teoría de la revolución en dos etapas. La primera llevaría adelante la liberación nacional y por lo tanto permitía una alianza del sector popular con la burguesía nacional en contra del imperialismo. Luego vendría la etapa de la liberación social de los trabajadores frente a la burguesía. Señalando que en ese momento se estaba en la primera etapa y que, frente a los reclamos de los trabajadores debido a la insuficiencia de las medidas gubernamentales para mejorar su situación, ésta era una etapa larga.

Cuando Perón desplazó a Càmpera de la presidencia se dijo que era para evitar la consumación de un "complot del imperialismo" y que la toma de la presidencia por Perón aceleraría la revolución, cuantaban, estos dirigentes, que la situación era exactamente la opuesta.

Más adelante, para explicar la creciente derechización de Perón se creó la teoría del "cerco", según la cual el líder había sido aislado de las masas por el entorno de Lopez Rega, lo que lo llevaba a tomar medidas equivocadas.

Estas explicaciones plagadas de errores e ingenuidades no ayudaban a aclarar las ideas de los sectores populares, aumentando, por el contrario, la confusión general ante la orientación que tomaba el gobierno y alimentando las falsas esperanzas y la confianza del pueblo en aquél.

Esta situación se revirtió más tarde en contra de la izquierda peronista cuando ésta debió romper abiertamente con él gobierno.

Las masas no estaban preparadas para eso y en su gran mayoría siguieron apoyando al gobierno, aun habiendo éste desencadenado una represión generalizada y crecientemente indiscriminada.

La insistencia en permanecer dentro del peronismo hasta último momento -que sólo se justificaba, dada la abrumadora mayoría peronista entre las clases trabajadoras, en un primer momento y manteniendo una actitud claramente crítica- también impidió a la izquierda peronista presentar un programa <sup>alternativo</sup> y claramente delineado con una estrategia que combinara las acciones militares de la guerrilla con la de las masas para la toma efectiva del poder por parte del pueblo.

En este último sentido, los Montoneros, a pesar de contar con el apoyo de la Juventud Peronista que le daba una amplia base de masas, siempre tuvo una concepción de la lucha revolucionaria en la que se privilegiaron las acciones armadas llevadas a cabo por el aparato "profesional" de la organización guerrillera, sirviéndose del apoyo de masas fundamentalmente como fuente en la que reclutar nuevos combatientes. Se llegaba así en ocasiones a situaciones en las que el pueblo se veía como el espectador de una guerra entre aparatos, el de la guerrilla contra el del Estado.

Por otra parte, la guerrilla no peronista, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), adoptó una estrategia definidamente foquista, continuando la lucha armada a lo largo de todo el gobierno peronista con el objetivo de agudizar la crisis política y llevar a un nuevo golpe de Estado tras el cual el ejercicio del gobierno por los militares sacaría a luz frente a las clases trabajadoras, como ocurrió durante la dictadura anterior, las contradicciones de clase, impulsando así la lucha popular. La estrategia de "cuanto peor, mejor".



Los sindicatos combativos

También a la dirigencia de los sindicatos combativos antiburocráticos se le planteó el problema de cómo instrumentar concretamente el camino hacia un cambio de estructuras en Argentina.

La intención de no malquistarse con los trabajadores peronistas dificultaba el planteamiento de una clara propuesta alternativa a la presentada por el gobierno de Perón. Tampoco se adelantó en la creación de estructuras político partidarias revolucionarias con vistas a ganarse el apoyo de masas en base a un programa que postulara los objetivos políticos reales de la clase obrera. En lugar de esto, los principales dirigentes de esta tendencia hablaban de un "sindicalismo de liberación".

Esta situación comenzó a crear disconformidad entre los propios militantes de esos sindicatos con respecto a la línea seguida por sus dirigentes.

Un estudio sobre el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, uno de los principales de esta tendencia, dirigido por A. Tosco, señala esta situación a través de las palabras de uno de esos militantes que había llegado a la conducción del sindicato incorporándose a su Consejo Directivo. Refiriéndose a la actitud predominante en esa conducción señala con respecto a los principales dirigentes que: "Ellos tienen una gran limitación, son sindicalistas, y entonces limitan su propio pensamiento. Todo lo político que ellos pueden razonar lo trasladan al sindicato; ven si desde el sindicato es posible hacerlo o no. Como el sindicato es un órgano reformista, tienen limitaciones concretas. 'No, más allá no podemos, porque sería político; nosotros tenemos bases peronistas, radicales, socialistas... entonces no podemos plantear esto'. Pero nosotros teníamos la obligación de ver claro en este proceso y saber que, como organización, íbamos a ser reprimidos (como lo hizo el gobierno peronista, encarcelando a su dirigencia), aunque no planteáramos las cosas políticamente. Pero, ¿cómo tener esa seguridad? Por un razonamiento político de la realidad deviene toda una actitud sindical. Entonces tenés la obligación de transmitirle esa preocupación política a tus propios compañeros.

"En cambio, ¿cuál fue la postura de Tosco para con las bases?: 'Estamos viviendo una etapa difícil, yo estoy en la clandestinidad

pero me las aguantó; no hay que hacer olas en este momento, hay que, quedarse tranquilos, no están dadas las condiciones para combatir, por lo tanto no hacemos ningún movimiento de fuerza, cada uno tiene que cuidarse'.

"Para mí fue una cosa desastrosa. Y por eso es que el día siguiente al allanamiento cuando quisimos sacar un paro, ¿dónde está el comunicado? ¿Quién lo hace?. El Consejo decía que era cosa de los delegados, los delegados no estaban preparados; ni siquiera fuimos capaces de preparar a los compañeros, 'si nosotros caemos hagamos tal cosa'. No les podíamos decir eso porque 'los íbamos a sustar'. Mirá si los íbamos a asustar... Al otro día nosotros éramos perseguidos y los delegados sacaron un paro, sin ninguna dirección...".

En esto influía la confusión y la confianza que todavía depositaban las bases en el gobierno peronista. Situación que contrastaba con la que había prevalecido durante la dictadura anterior, cuando el enfrentamiento de clases era claramente visible y el conjunto de la sociedad confluía en la movilización antidictatorial.

Otros militantes de este sindicato expresaron con claridad esta nueva situación: "No podemos separar al gremio de Luz y Fuerza de la situación política general; las bases no analizan solamente lo que le pasa al gremio sino que lo relacionan con la situación general del país, por ejemplo que no tiene sentido un paro (luego del allanamiento del sindicato por parte del gobierno), que no le ven posibilidades de acuerdo a la situación general. En mi opinión hay que reconocer las limitaciones de toda la clase en estos momentos... Yo creo que por una parte la gente que tiene más conciencia está atemorizada, sabe la represión del gobierno si se 'sale del plato' (frase repetida frecuentemente por Perón). Y los que no tienen tanta conciencia, a nivel de masa, de pueblo peronista, todavía le otorgan su confianza al gobierno; o sea que en estos momentos no es como antes, cuando sólo había represión y ningún tipo de concesión para la clase.

"Ahora tenés represión -tal vez más que antes- pero hay formalmente al menos una representación política, el Presidente, el Congreso, y un cierto tipo de estrategia que beneficia mínimamente a la clase, aunque sea con demagogia, a través de la manija (propaganda) que le dan a todos los actos del gobierno; todo eso, las nacionalizaciones, la nueva ley de contratos de trabajo (aunque nuestro Convenio ya incluye las mejoras que consagra la Ley u otras supe-

plares). El efecto propagandístico llega, aunque no se haya movido el salario y aunque si comparases con el del período de Cúmpora, estamos todavía peor."

Otro militante agrega: "Ahora ha variado la situación política, hay otras cosas en juego aparte de dar solidaridad al Consejo. Hay una política detrás de todo esto; antes el denominador común era cómo luchar contra la dictadura militar que no tenía absolutamente ninguna política para la clase. Ahora el clima social es importante; antes, la lucha estaba en el aire, ahora al revés. Antes, había un comunicado sobre los presos políticos y la gente los hacía mártires; ahora o no se sabe o no les importa porque no ven claro y se debaten entre creerle a la burocracia peronista o buscar otra salida, pero el problema es que la gente no ve otra propuesta. La izquierda no le ofrece nada concreto y aunque no cree que está tan bueno como se le prometió, se considera mejor que antes, se divide y todavía cree en lo poco que se le ofrece."

"Es fácil palparlo al hablar con el afiliado común, el tipo tiene que estar muy politizado para darse cabalmente cuenta del proceso. Claro que los militantes pueden decir que ese tipo está engañado con la política oficial, pero ¿él sabe que está engañado? El cree todavía que es lo correcto porque no tiene otra alternativa o porque no se le ha abierto la cabeza para pensar; o sea que no tiene conciencia de clase, no se siente explotado a pesar de que sabemos que está explotado..."

Con respecto a esa falta de alternativa, otro militante agrega: "Es necesario analizar toda esta situación, porque no es lo mismo la seguridad que había en el tiempo de la dictadura con la relación de fuerzas actual. La gente advierte que resulta desfavorable para la lucha, y que no existe esa tremenda confluencia de todos los sectores populares enfrentados a la dictadura."

"Pero ahora es distinto, ante el gobierno popular que ha subido ¿que teóricamente es un gobierno popular, no es cierto?— no hay otra alternativa. Hay que mirarlo desde un plano histórico. Al gobierno militar le oponíamos el gobierno popular, pero al gobierno popular tenemos que proponerle una vía de progreso al socialismo. Y ahora como no hay en realidad una vanguardia preparada para eso, hay un vacío político. Eso crea confusión y una situación sin salida. La gente piensa que esto es mejor que el gobierno militar, pero ¿qué es mejor que esto? Si hubiera una vanguardia, si los partidos que

se titulan de la clase obrera (comunistas, socialistas, trotskystas) fueran claros, seguros y dijeran 'esto no es un gobierno popular, esto es un gobierno disfrazado de popular, es un gobierno de la burguesía en alianza con el imperialismo, esta coalición burguesa tiene el sentido de dar un respiro al régimen capitalista y aplastar al movimiento obrero...' Si pudiéramos formar una vanguardia, entonces sería más fácil para el movimiento obrero tener un objetivo en este momento, pero no lo tiene.

"Ese vacío político es utilizado por este gobierno de coalición burguesa para golpear y establecer el terrorismo. Con toda esa confusión política, la masa siente entonces que no está en mejores condiciones para combatir, que hay un gran sector del movimiento obrero que tiene todavía expectativas y esperanzas en este gobierno, que otro sector no tiene propuesta y por todo eso se deja aislados y marginados a los individuos que quieren luchar. Por lo tanto la represión es selectiva y fácil. Es un momento particularmente difícil para la clase obrera del país y el grupo de Luz y Fuerza no puede escapar a esa confusión general".

De esta manera, la falta de claridad en la exposición de la situación que los dirigentes realizaban ante las bases y el no haber construido ningún tipo de organización, como reiteradamente lo reclamaban los militantes de base, para resistir los embates del gobierno, condujeron a que éste llevara adelante el desmantelamiento de todos los sindicatos combativos ante la incapacidad de las bases de oponer una firme resistencia.

El problema fundamental seguía siendo, como en el caso de las organizaciones armadas y el tenor de sus publicaciones periodísticas, presentar a los trabajadores una alternativa claramente revolucionaria basada en un análisis concreto del peronismo, del reformismo burgués de su dirigencia, que siempre terminaría colocándose de los enemigos de los trabajadores en todo momento <sup>en</sup> que la lucha de clases adquiriera un nivel crítico, y que hiciera comprender en forma definitiva a los trabajadores que sólo su acción y su organización constituyen el camino para liberarse de la explotación, debiendo abandonarse la esperanza en soluciones llegadas desde arriba por la figura paternalista de Perón.

La presidencia de Isabel Perón

Tras la muerte de Perón asumió la presidencia su señora y vicepresidente hasta entonces, Isabel, que se encontraba totalmente sometida a la influencia de J. López Rega.

El terrorismo de Estado se desencadenó entonces abiertamente, dirigido a reprimir toda actividad política opositora, violenta o no.

La organización Montoneros declaró la guerra al gobierno y reinició la lucha armada en septiembre de 1974, demostrando a lo largo del año siguiente, en que arrojaron sus acciones, el alto poder cívico y la capacidad técnica a que había llegado, aunque conservando la misma estrategia de lucha que había empleado anteriormente.

En el campo sindical, el gobierno arrasó en los primeros meses de su gestión con todos los gremios combativos, aunque ello no detuvo la movilización, por el contrario, las características antipopulares de la política económica impuesta llevaron, desde mediados de 1975, a una ola de protestas incontenible.

En el plano educativo el gobierno recurrió a viejos servidores como Ottalagano e Ivanicovich, declarados fascistas, que ocuparon los cargos de rector de la Universidad de Buenos Aires y el ministerio de Educación respectivamente.

Se promulgó una Ley de Seguridad Nacional para encarar la "lucha antisubversiva", dándole un lugar en ella -que se extendía a todos los ámbitos de la represión interna- a las Fuerzas Armadas.

En un principio el sector lopezreguista que manejaba el gobierno y la burocracia sindical coincidieron en su oposición a la política económica del ministro Weltard, provocando su renuncia. A partir de ahí, esa coincidencia finalizó y dio comienzo una lucha entre aquellos dos sectores por el poder dentro del movimiento peronista y para convertirse en el elemento determinante de las políticas gubernamentales.

El choque entre ambos adquirió niveles explosivos cuando, a mediados de 1975, el gobierno nombró como ministro de Economía a Celestino Rodríguez, del entorno lopezreguista, quien aplicó una política de "choque" fuertemente antipopular que incluyó aumentos de tarifas de los servicios públicos de entre el 100 y 200 %, una devaluación de la moneda del 100 % y una serie de medidas recesivas. Si estas políticas son aplicadas con el argumento de reducir la inflación, su resultado fue que aquélla aumentó del 74.2 % en los doce meses anteriores

al 994 \$ en los doce siguientes. Como siempre el objetivo era promover una transferencia de ingresos hacia los sectores del gran capital y aumentar la recaudación del Estado.

Según algunos autores, esta política también iba dirigida contra la burocracia sindical, buscando ponerla en una situación insostenible frente a las bases obreras y obligar a su renuncia para reemplazarla por dirigentes adictos al sector que dominaba el gobierno.

Sin embargo los resultados que éste obtuvo fueron opuestos a los esperados. La estampida inflacionaria levantó una ola de protestas y movilizaciones obreras, algunas llamadas por la burocracia pero generalmente fuera de todo control por parte de aquélla, de forma tal que "la protesta espontánea, no controlada por los sindicatos, dominaba la escena... Los obreros de una planta podían comenzar una manifestación callejera, y muy pronto los obreros de plantas vecinas se unían a la misma. En pocos minutos, miles de trabajadores marchaban por las calles de Córdoba, Mendoza, Rosario o Buenos Aires".

Las renegociaciones de los convenios de trabajo alcanzaban niveles de aumentos salariales que iban desde el 60 al 200 %. La inflación crecía tan aceleradamente que cuando los últimos gremios firmaban los acuerdos, los primeros que lo habían hecho volvían a la movilización para renegociar los suyos que ya habían sido erosionados por los aumentos de los precios.

La crisis política y económica llegó a tal nivel que el ministro de Economía debió presentar su renuncia y L. Rega debió abandonar definitivamente el país. La burocracia sindical había ganado la batalla política, y nunca como entonces se convirtió en el verdadero soporte del poder del gobierno, en lo que se conoció como "la patria matulúrgica".

Sin embargo las características de la acción política de la dirigencia sindical consistentes en formas de presión sobre el gobierno para imponer medidas favorables a ella, determinaron que no estuviera preparada para tomar el control definitivo del gobierno y consolidar así la posición ganada en la anterior batalla. Sí logró ubicar en los ministerios de Economía y Trabajo a dos hombres vinculados a la CGT, A. Cafiero y A. Ruckauf respectivamente.

Pero la puja al interior del gobierno, donde subsistía el sector loperreguista dirigido ahora a distancia, continuaron. La presidenta realizó un último intento de consolidar a ese sector en enero de 1976, echando del gobierno a los dos ministros citados y poniendo

en Economía a un sucesor de C. Rodrigo, E. Mondelli mientras en un discurso pronunciado en la CGT pedía que "no me lo silben mucho al pobre Mondelli".

En efecto, en este caso la burocracia sindical no reinició las medidas de fuerza del año anterior. La situación del gobierno era ya tan delicada, la pérdida de autoridad debido a los enfrentamientos anteriores, la oposición cada vez más abierta del sector empresarial y los rumores de golpe de Estado, que una nueva movilización de las características de la anterior terminaría ya no con el ministro de Economía sino con el gobierno completo, dando paso a una nueva dictadura.

Por las características de los hombres que en ese momento comandaban las Fuerzas Armadas, tal golpe no sería del tipo dado en 1966 por el gral. Onganía, que fue apoyado y dio un lugar a sectores de la burocracia sindical. El que ahora se avecinaba se presentaba más peligroso para esa dirigencia, por lo que su actitud frente al gobierno fue moderada buscando su permanencia en el poder.

Sin embargo la situación se hacía insostenible dadas las divisiones internas y la pérdida total de apoyo por los sectores populares, situación que fue aprovechada por el sector empresario para acentuar sus ataques, declarando repetidos ceses de actividad.

Por otra parte los militares ya habían expresado públicamente su intención de dar un golpe de Estado, anunciando incluso la fecha exacta con tres meses de anticipación. En la Nochebuena del 24 de diciembre de 1975, el comandante en jefe del Ejército, gral. Videla en un discurso público pronunciado en la provincia de Tucumán y transmitido a todo el país, dijo que las Fuerzas Armadas daban al gobierno un plazo de "90 días" para recomponer la situación, de lo contrario los militares se harían cargo del gobierno. Los 90 días se cumplieron el 24 de marzo de 1976 en que se produjo el golpe.

La ausencia de respuesta popular ante este hecho muestra el grado de desmoralización en que había caído la clase obrera y la incapacidad de las dirigencias de izquierda de movilizar a las masas.

Como claramente lo señalaron los militantes sindicales de Córdoba citados anteriormente, la confusión en que cayó gran parte de la clase obrera con respecto al gobierno peronista, impidiéndole prepararse para el momento en que llegara el previsible fin de esa experiencia, fue acompañada por un cambio fundamental en el cuadro político respecto al existente durante la anterior dictadura, lo que también facilitaría la futura acción golpista.

La nueva situación se caracteriza por el divisionismo que surge en los sectores de izquierda debido a las distintas actitudes adoptadas con respecto al gobierno peronista, mientras que durante la dictadura el objetivo común de la lucha <sup>armada</sup> había servido como elemento unificador. Por el contrario, mientras que durante el anterior régimen esta unificación de los sectores progresistas era acompañada por las divisiones entre las distintas fracciones de la burguesía, lo que fortalecía aun más al movimiento popular, con el peronismo en el gobierno, y a medida que su situación en el poder se va deteriorando, todos los sectores de la burguesía se unifican en su contra y a favor de un golpe de Estado, mientras los sectores progresistas se dividen.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el movimiento de "Sacerdotes para el Tercer Mundo". Desde su formación, durante la dictadura, existieron en su interior diferentes tendencias, algunas más cercanas al peronismo y otras más claramente marxistas, sin embargo el enemigo común en aquel momento mantenía al movimiento cohesionado. Durante el gobierno peronista las diferencias alcanzaron tal nivel respecto a la actitud a adoptar frente al mismo que el movimiento prácticamente se desintegró.

La ruptura de la confluencia de la clase obrera con amplios sectores medios que había surgido en contra del régimen dictatorial fue otro de los elementos fundamentales producidos durante el gobierno peronista, que contribuyó a facilitar el golpe de Estado que lo derribó en 1976.

Un golpe militar y una posterior dictadura no pueden llevarse a cabo, aun contando con toda la fuerza de las armas, si no reciben el apoyo -por lo menos tácito- de un sector significativo de la población.

La dictadura encabezada por Onganía había quedado aislada del resto de la sociedad y, como indicó uno de los generales de ese régimen, no se podía gobernar con todo el país en contra.

Antes de pensar en una nueva intervención, los militares, además de recomponer su situación interna, debía resolver ese problema.

Al llegar a niveles inéditos la crisis política y económica con el gobierno de Isabel, los sectores medios, que en gran parte habían dado su voto al peronismo en 1973, al ver que éste se mostraba incapaz de mejorar su situación, se volcaron a la oposición. Si antes

habían acompañado las movilizaciones de la clase obrera viéndolo en ello el camino que permitiría terminar con la dictadura que ha-



bía afectado gravemente sus condiciones de vida, ahora se oponían a la permanente movilización de los trabajadores que les permitía mantener sus salarios frente a la creciente inflación mientras que los sectores medios, carentes de la fuerte organización sindical de los obreros, veían rezagarse sus ingresos. Por lo tanto, ven ahora a la movilización obrera, que toma proporciones incontenibles hacia el final del gobierno dado el constante aumento de la inflación, sólo como una contribución al "desorden" general.

Así se vuelven a crear las condiciones que permitirán un nuevo golpe de Estado -el que pondrá al graul. Videla en la presidencia-, que será apoyado por buena parte de la clase media.

La caída del soberano peronista

El que la profunda crisis que se desata en el gobierno peronista se presente a continuación de la crisis esencialmente política que había sacudido al anterior régimen militar muestra <sup>que</sup> aquélla no era una crisis del régimen político constitucional y que iba más allá de los problemas internos del peronismo. Era la continuación de la crisis de dominación de clase de la burguesía que se expresaba en la persistente inestabilidad política desde 1955.

La creciente presión de las clases populares se sumaba a las divisiones al interior de la burguesía que llevaban a que unas fracciones, desde la oposición, boicotearan a las que les tocaba estar en el gobierno, contribuyendo al fracaso de su gestión y, a veces en combinación con sectores populares, buscando el derribamiento del gobierno.

El nivel incontrolable a que llegó la crisis en 1975 sólo dejaba dos caminos posibles, o el desencadenamiento de un proceso revolucionario o una dictadura abierta de la burguesía conducida por los militares con un nivel represivo superior a todas las anteriores.

El papel frenador ejercido por el partido que tenía el apoyo de las masas obreras, el Peronista, y las dificultades de los sectores de vanguardia por presentar una alternativa con capacidad de atraer a esas masas, dejaron abierto el camino a la segunda alternativa, una nueva dictadura cuyos métodos represivos significaron, más que un cambio, una intensificación del terrorismo de Estado iniciado en el gobierno peronista.

La evolución del proceso político a partir del ascenso de la lucha popular en 1969 y el papel jugado por el peronismo como la vía que condujo a la salvaje dictadura videlista repitió el esquema seguido por el ascenso de los regimenes fascistas en Europa en el período de entreguerras, particularmente en Alemania.

Tras la derrota en la primera guerra mundial, el conjunto de los sectores populares -clase obrera y sectores medios- coincidieron en su oposición al régimen imperial, poniendo al país en una situación revolucionaria, similar a la que poco antes se había desatado en la Rusia zarista donde las consecuencias de la guerra unieron a toda la sociedad contra el gobierno en la Revolución de Febrero de 1917.

Pero en Alemania, la burguesía logró evitar el estallido revolucionario negociando con el Partido Socialdemócrata -en el que predominaba la línea revisionista bernsteiniana y kautskiana-, se forzó el abducamiento del emperador y se entregó el gobierno a ese partido, que se puso a la tarea de administrar la crisis del Estado burgués, llevando a cabo medidas reformistas buscando contener el ascenso de las masas trabajadoras.

El apoyo mayoritario que tenía este partido en la clase obrera permitió aislar a los sectores revolucionarios que debieron abandonar y fundaron el Partido Comunista Alemán, entre ellos Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que fueron inmediatamente asesinados por las bandas paramilitares que comenzaron a actuar bajo el gobierno socialdemócrata con el apoyo de oficiales del ejército alemán y ante la pasividad de ese gobierno que estaba más empeñado en reprimir a los sectores revolucionarios que a esas bandas.

Este método represivo, en lugar de recurrir a los aparatos legales del Estado -policía y fuerzas armadas-, permitía que las acciones represivas aparecieran ante la masa de obreros socialdemócratas como el enfrentamiento entre sectores extremistas de derecha e izquierda, ocultando el papel represivo del Estado que actuaba a través de esos métodos ilegales y que aparecía como el Estado dirigido por un gobierno popular.

La crisis económica mundial surgida a fines de la década de 1920 acentuó los problemas políticos y económicos que debía afrontar el Partido Socialdemócrata desde el inicio de su gestión, desatándose una crisis profunda que, en un artículo escrito en ese momento, L. Trotsky define con características similares a la que se pro-

buco a mediados de los años setenta en Argentina: "Estamos indudablemente en presencia de una crisis nacional profunda. La vía normal del régimen parlamentario burgués no ofrece ninguna salida. La crisis política de la clase dominante y de su sistema de gobierno es absolutamente indiscutible. No se trata de una crisis parlamentaria, sino de la crisis de la geminación de clase de la burguesía. No obstante, la clase revolucionaria está todavía profundamente dividida por contradicciones internas. El reforzamiento del partido revolucionario en detrimento del partido reformista está todavía en sus mismos inicios y se produce, por el momento, a un ritmo que está lejos de corresponderse con la profundidad de la crisis."

Señala también el proceso de derechización de los sectores medios que dan el triunfo al nacionalsocialismo en las elecciones de julio de 1932, atribuyéndolo a "dos hechos esenciales, una crisis social profunda, que arranca a las masas pequeñoburguesas de su equilibrio, y la ausencia de un partido revolucionario que, desde este momento, juegue a los ojos de las masas un papel de dirigente revolucionario reconocido."

Esta situación lleva a que entre las dos posibles salidas a la crisis, la revolucionaria y la fascista, sea ésta última la que se imponga. Señalando en este sentido que "El fascismo se ha convertido en Alemania en un peligro real; es la expresión del estrecho callejón sin salida en que se encuentra el régimen burgués, del papel conservador de la socialdemocracia frente a este régimen y de la debilidad acumulada del partido comunista, incapaz de derribar dicho régimen". En una situación política con similitudes, en cuanto al papel del partido peronista y las dificultades de organización de los sectores revolucionarios, con la que se presentó en Argentina.

Fue así que el 24 de marzo de 1976, tras un nuevo golpe de Estado, las Fuerzas Armadas y sus mentores civiles del gran capital se apoderaron una vez más del gobierno, sin encontrar ningún tipo de resistencia popular organizada y dando inicio a un régimen que, si bien difirió de los fascismos europeos en el aspecto de la movilización de masas que existió en aquéllos, fue similar en lo que respecta a los niveles represivos -y aun peor si se compara con el caso italiano- y también se asemejó en la política económica dirigida a consolidar la hegemonía del gran capital sobre las restantes fracciones burguesas.

## CONCLUSIONES

El gobierno peronista de 1955/56 demostró que las condiciones económicas y políticas hacían imposible la realización del programa reformista del peronista.

El desarrollo de la economía en los últimos años, manteniendo estructuras arcaicas, como el aislamiento improductivo, y la dependencia del exterior en tecnología, financiamiento y provisión de insumos para la industria, llevaba a que cada nuevo paso adelante generara nuevos conflictos de clase y acentuara las contradicciones entre las clases dominantes y trabajadoras.

En nacional ni internacionalmente existían condiciones <sup>económicas</sup> parciales ~~parciales~~ las que habían permitido el auge del peronismo en los años cuarenta.

En el terreno político también las condiciones para repetir esa experiencia eran adversas.

Anteriormente Perón había llegado al poder, junto con un sector de las Fuerzas Armadas, apoyándose en el equilibrio surgido entre la precariedad de un poder oligárquico crecientemente cuestionado por el conjunto de la sociedad tras trece años de gobierno (1930-1943) apoyado en la corrupción económica y política, y la expansión de sectores urbanos -burguesía industrial y proletariado- con intereses contrarios a los de la oligarquía dominante pero incapaces todavía de derribarlo.

Por otra parte, la debilidad de los sectores extremos del espectro político -dada la debilidad política de la Oligarquía y la inexistencia de sectores importantes en las clases populares que pretendieran cambios fundamentales en la estructura socioeconómica-, fortalecía la posibilidad de avanzar por el centro de ese espectro, como correspondió a los peronistas reformistas.

En los años venientes la situación es totalmente distinta. El peso de los extremos del espectro político es importante, tanto en la derecha, dada el peso creciente del capital monopolístico en la economía, conjuntamente con la orientación represiva de las Fuerzas Armadas, como en la izquierda, donde surgen sectores que roban los marcos partidarios y estructuras del gobierno peronista, el que se ve desbordado después de haber alcanzado el momento más crítico de la situación, tanto en el terreno económico como el político.

El resultado es el auge del peronismo en esos sectores avanzados hacia el centro del espectro político, pero el peronismo reformista de la izquierda y la derecha se desmorona, y el peronismo reformista del

Al dificultar la implantación de una ideología revolucionaria en la clase obrera, sumado a ello las características de los dirigentes políticos y sindicales peronistas, el predominio del peronismo entre la clase obrera hizo potable para sectores del empresariado nacional medio y pequeño, rural y urbano, buscar acercamientos con esa clase con el objetivo de presionar conjuntamente contra gobiernos que aplicaran programas económicos en favor de los sectores minoritarios del gran capital extranjero y nacional asociado, que perjudicaba a aquellos dos sectores de la sociedad argentina.

Con ellos coincidían también, en esos momentos, los partidos políticos tradicionales y los sectores medios que los apoyan -desde que el distanciamiento entre la clase obrera y amplios sectores de clase media durante los primeros gobiernos peronistas se revierte hacia un acercamiento entre ambas clases-, dado que el programa del gran capital suele asociarse a regimenes políticos autoritarios, mientras que el programa reformista es más afín a gobiernos democráticos.

De esta manera la sociedad se polarizó entre un sector ampliamente mayoritario y una minoría que representa los intereses del gran capital, apoyada por las fuerzas armadas.

La convergencia de diversos sectores y la magnitud cuantitativa del primer campo, le permite balancear el poder político y económico del segundo, creándose una situación de un equilibrio relativo de fuerzas que impedia la aplicación a largo plazo del programa de uno u otro sector: social al tener capacidad cada uno de ellos de derribar al gobierno que aplicara el programa de su oponente. Mientras se hacía, al mismo tiempo, cada vez más evidente la inviabilidad de la aplicación de uno u otro programa. El del gran capital, por el hecho de tener que aplicarse enfrentando al conjunto de la sociedad, y el reformista, por dejar intactas las bases en que se apoya el poder de aquél; el cual, luego de aguantar el primer momento de optimismo y expectativas populares con que irrumpo el reformismo, es capaz de doblegarlo una vez que éste cae en sus propias contradicciones que lo llevan a una situación de parálisis política y económica.

La conformación de estos dos campos alrededor de los cuales gira en forma preponderante el conflicto político en esos años, muestra el entrelazamiento que se produce entre la contradicción fundamental capital-trabajo, con las contradicciones entre diversos sectores de la burguesía, que tendrán un peso importante en los enfrentamientos producidos en este año.

El importante avance de la lucha popular en estos años muestra que el populismo, a pesar de sus limitaciones ideológicas, y en parte a causa de esas limitaciones, que moviliza a los masos sin llevar adelante cambios estructurales en la economía y generando por tanto un crecimiento destinado a encontrar limitaciones infranqueables que lleven finalmente a superar los iniciales ventajas obtenidas por los trabajadores, se convierte en una fuerza explosiva.

Más aun cuando estas limitaciones ideológicas permiten llegar a la convergencia esperada con sectores de la burguesía nacional interesados en reorganizar su posición frente a los sectores más poderosos de la economía.

En proceso que la dictadura que tomó el poder en 1976 reprimió no sólo a los sectores de izquierda sino a los que constituyen los pilares del populismo, el conjunto de la clase obrera y la burguesía nacional, generando además cambios profundos en la estructura económica con la intención de consolidar en forma definitiva el predominio del gran capital y evitar la realización de programas económicos de carácter reformista.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

1. Ianni, O., Populismo y relaciones de clase, en Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica, selección de O. Ianni, UNAM, México, 1977, n. 33,4.
2. Luciani F. M., Crisis y movimiento obrero en Brasil, UNAM, México, 1967, p. 20.
3. Idem, p. 31,2.
4. Furtado, C., La economía latinoamericana, Siglo XXI, México, 1964, p. 156.
5. Aljageta E., B. y Chelén R., A., Breve historia de medio siglo en Chile, en América Latina: historia de medio siglo, 1-América del Sur, Coord. F. González Casanova, Siglo XXI, México, 1986, p. 242.
6. Idem, p. 243.
7. De Biz, L., Sociedad y política en Chile, UNAM, México, 1979, p. 70.
8. Arraes, E., Brasil: pueblo y poder, Ed. Era, México, 1971.
9. De Biz, L., ob. cit., p. 77.
10. Ianni, O., El colapso del populismo en Brasil, UNAM, México, 1974, p. 139.
11. De Biz, L., ob. cit., p. 76.

## NOTAS CAPITULO 2

1. Germani, G., Estructura social de la Argentina, Ed. Solar, Buenos Aires, 1987, (1º ed. 1955).
2. Peña, M., Industria, burguesía industrial y liberación nacional, Ed. Fichas, Buenos Aires, 1964.
3. Allub, L., Social Origins of Dictatorship and Democracy in Argentina, University of North Carolina, Tesis Dr. Philosophy, 1973.
4. Cuccorese, M., Historia económica financiera argentina (1862-1930), Ed. El Ateneo, 1966, Buenos Aires.
5. Ciria, A., Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946), Ed. de la Flor, Buenos Aires, 1975.
6. Dorfman, A., Evolución industrial argentina, Ed. Losada, Buenos Aires, 1951.
7. Fuchs, J., Argentina: su desarrollo capitalista, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1965.
8. Imaz, J.L. de, Los que mandan, Ed. EUDEBA, Buenos Aires, 1966.
9. González Alberdi, Por qué está en crisis la economía argentina, Ed. Arco, Buenos Aires, 1949.
10. Peña, M., La clase dirigente argentina frente al imperialismo, Ed. Fichas Buenos Aires, 1973.
11. Somi, L., Los capitales alemanes en la Argentina, Ed. Claridad, Buenos Aires, 1945.
12. Fuchs, J., La penetración de los trusts yanquis en la Argentina, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1958.
13. Cúneo, D., Comportamiento y crisis de la clase empresaria Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1967.
14. CEPAL, El desarrollo económico de la Argentina, México, 1959.
15. Rofman, A. y Romero, L., Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina, Anorrortu, Buenos Aires, 1973.
16. Díaz Alejandro, C., Ensayos sobre la historia económica argentina, Anorrortu, Buenos Aires, 1975.
17. Peña, M., La clase ...
18. Dorfman, A., ob. cit.
19. CEPAL, ob. cit. y Somi, L., Los capitales yanquis en la Argentina, Montegudo, Buenos Aires, 1949.
20. Sautu, R., "Poder económico y burguesía industrial en la Argentina, 1930-1954," en Revista Latinoamericana de Sociología, vol. IV, Nº 3, Noviembre de 1963, Buenos Aires.
21. Abot, J. y otros, El poder económico en la Argentina, Cuadernos de CIEC.



- Buenos Aires, 1971.
22. Sourrouille, J., El complejo auto-otor en Argentina, Nueva Imagen, México, 1980.
  23. Geruani, G. y otros, Argentina sociedad de masas, Eudeba, Buenos Aires, 1959.
  24. Fogó, S., Evolución histórica de la estratificación social en la Argentina, Universidad de Venezuela, IIES, Caracas, 1969.
  25. Sigal, S. y Jallo, E., "La formación de los partidos contemporáneos. La Unión Cívica Radical (1890-1916)" en Desarrollo Económico, vol. 3, Nº 1-2, abril-setiembre 1963 (9/10), Buenos Aires.
  26. Del Mazo, G., El Radicalismo, Ed. Gure, Buenos Aires, 1957.
  27. Foulentzas, M., Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Siglo XXI, México, 1986.
  28. CEPAL, Empresas transnacionales en la industria de alimentos. El caso argentino: cereales y carne, Estudios e Informes Nº 29, Santiago de Chile, 1983.
  29. Baliño, T., La reforma monetaria y bancaria argentina de 1946-57: ¿un caso de encaje bancario total?, CEMLA, México, 1982.
  30. Ibid.
  31. Ciria, A., ob. cit.
  32. Sigal, S., y Verón, E., "Perón: discurso político e ideología" en Argentina, hoy, A. Rouquié (comp.), Siglo XXI, México, 1982.
  33. Díaz Alejandro, C., ob. cit.
  34. Ciria, A., ob. cit.
  35. Munnis, M. y Portantiero, J.C., Estudios sobre los orígenes del peronismo/1, Siglo XXI, Buenos Aires, 1972.
  36. Tamarin, D., The Argentine Labor Movement, 1930-1945, New Mexico Press, 1985.
  37. La Nación, Una selección de la semana, 11 de julio 1988, Buenos Aires.
  38. Doyon, L., "La organización del movimiento sindical peronista. 1946-1955" en Desarrollo Económico, vol. 24, Nº 94 (julio-setiembre 1984), Buenos Aires.
  39. Ibid.
  40. Doyon, L., "El crecimiento sindical bajo el peronismo", Desarrollo Económico, vol. 15, Nº 57, abril-junio 1975, Buenos Aires, p. 158.
  41. Sidicaro, R., El Estado peronista. Estado y alianzas sociales en la Argentina 1943-55, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Tesis doctorado, Paris, 1977. p. 202.

42. Duejo, G., El capital monopolista y las contradicciones secundarias en la Argentina, siglo XXI, Buenos Aires, 1973, p.26.
43. González Alberdi, Por qué está en crisis la economía argentina, Ed. Anteo, Buenos Aires, 1949, p. pp. 112-5.
44. Duejo, G., ob. cit., p.33.
45. Llorente, I., "Alianzas políticas en el surgimiento del peronismo: el caso de la provincia de Buenos Aires", Desarrollo Económico, vol.17 n°65, abril-junio 1977, Buenos Aires, p.66.
46. CEPAL, El desarrollo económico de la Argentina, p.
47. Schwartz, H., The Argentine Experience with Industrial Credit and Protection Incentives 1943-1948, New Haven, Yale University.
48. Ibid.
49. CEPAL, ob. cit., Anexo estadístico, p.438.
50. Eshag, E. y Thorp, R., Economic and Social Consequences of Orthodox Economic Policies in Argentina in the Postwar Years, Bulletin of the Oxford University, 1965.
51. Sourrouille, J., ob. cit.
52. Schwartz, H., ob. cit.
53. Doyon, L., "Conflictos obreros durante el régimen peronista (1946-1955)", Desarrollo Económico, vol.17 n°67, oct-dic 1977, Buenos Aires, p.463.
54. Torre, J.C., "The Meaning of Current Workers' Struggles", Latin American Perspectives, vol.1, n°3, Fall 1974, p.80.

NOTAS · CAPITULO 3

1. Camacho Solís, M., La clase obrera en México, el futuro inmediato, Siglo XXI, México, 1983, p. 52-3.
2. Conil Paz, A. y Ferrari, G., Política exterior argentina 1930-1962, Huemul, Buenos Aires, 1964.
3. Department of State Bulletin, vol. XXII, n° 569, May 29, 1950, p. 861.
4. García Lupo, R., Contra la ocupación extranjera, Sudestada, Buenos Aires, 1963.
5. Pouquié, A., Pouvoir militaire et politique en Argentina,
6. Vilas, C., Derecho y Estado en una economía dependiente, Guadalupe, Buenos Aires, 1974.
7. Eshag, E. y Thorp, R., Economic and Social Consequences of Orthodox Economic Policies in Argentina in the Postwar Era, Bulletin of the Oxford University, 1965.
8. Peralta Ramos, M., Acumulación del capital y crisis política en Argentina (1930-1974), Siglo XXI, México, 1978, P. 186.
9. Cavarozzi, M., Sindicatos y política en Argentina 1955-1958; Estudios CEDES, 2 (1), 1979, Buenos Aires, P. 64.
10. Idem.
11. Cúneo, D., Comportamiento y crisis de la clase empresaria, Pleamar, Buenos Aires, 1967, p. 268.
12. Idem.
13. Cavarozzi, M., ob. cit., p. 62.

NOTAS CAPITULO 4

1. Wolpin, M., Military Aid and Counterrevolution in the Third World, Lexington Books, Lexington, 1972, p. 4.
2. Cimillo, E. y otros, Acumulación y centralización del capital en la industria argentina, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1973, p. 166.
3. Rouquié, A., Pouvoir militaire et politique en Argentina,
4. CEPAL, Boletín Estadístico de América Latina, 1965, vol. 2, nº 1, p. 11.
5. Eshag, E. y Thorp, R., Economic and Social Consequences of orthodox Economic Policies in Argentina in the Postwar Era, Bulletin of the Oxford University, 1965.
6. Cúneo, D., Comportamiento y crisis de la clase empresaria, Plramar, Buenos Aires, 1967, p. 268,9.
7. Florit, C., Las Fuerzas Armadas y la guerra psicológica, Arayú, Buenos Aires, 1963, p. 61.
8. Durand P., V.M., Crisis y movimiento obrero en Brasil, Las huelgas metalúrgicas de 1978-1980, UNAM, México, 1987, p. 19.
9. García Lupo, R., La rebelión de los generales, Jancana, Buenos Aires, 1963, p. 135,6.
10. Selser, G., Argentina a precio de costo, Iguazú, Buenos Aires, 1965, p. 293.
11. Cavarozzi, M., Consolidación del sindicalismo peronista y emergencia de la fórmula política argentina durante el gobierno frondizista, Estudios CEDES, 2 (7/8), Buenos Aires, 1979, p. 40.
12. Perón-Cooke, Correspondencia, Granica, Buenos Aires, 1973, T. II, p. 148.
13. Rouquié, A., ob. cit., p. 558.
14. García Lupo, R. ob. cit., p. 13.
15. Rouquié, A., ob. cit.,
16. Cúneo, D., ob. cit., p. 269,70.
17. Rouquié, A., ob. cit., p. 475.
18. Cúneo, D., ob. cit., p. 275,6.
19. Rouquié, A., ob. cit., p. 496.
20. Puiggrós, R., Argentina entre golpes,
21. Springer, P., "Disunity and Disorder: Factional Politics in the

Argentina Military", en The Military Intervenes: Case Studies in Political Developmen, ed. H. Bienen, New York: Russell Sage Foundation, 1968, p. 157.

22. Rouquié, A., ob. cit. p.498.

23. Idem, p.500.

## NOTAS CAPÍTULOS 7-8

1. Cooke, J.W., La lucha por la liberación nacional, Ed. Papiro, Buenos Aires, 1971, p.10-11.
2. Rouquie, A., Pouvoir militaire et politique en Argentina,
3. O'Donnell, G., "Modernización y golpes militares. Teoría, comparación y el caso argentino", en Desarrollo Económico, vol.12 n°27, oct-dic 1972, p. 79.
4. Veneroni, H., La asistencia militar de los Estados Unidos, Ed. del autor, Buenos Aires, 1964.
5. Wolpin, M., Military Aid and Counterrevolution in the Third World, Lexington Books, Lexington, 1972, p.12.
6. Ibid. p.11, 12.
7. O'Donnell, G., ob. cit. p. 535.
8. Ibid., p. 537.
9. García Lupo, R., Mercenarios y monopolios en la Argentina de Onganía a Lanusse 1966-1971, Achával Selo, Buenos Aires, 1971, p.8.
10. Selzer, G., El Onganiato, C. Samonta ed., Buenos Aires, 1973, p. 214.
11. Cooke, J.W., El peronismo y el golpe de Estado, Ed. Acción Revolucionaria Peronista, Buenos Aires, 1966.
12. O'Donnell, G., El Estado burocrático-autoritario 1966-1973, Ed. de Belgrano, Buenos Aires, 1982, p.133-4.
13. Landi, G., Argentina 1973-1976. Régimen de emergencia y crisis política, CENDES, Buenos Aires, p.4.
14. Sobre la crisis de hegemonía y los cambios en las alianzas políticas: Portantiero, J.C., "Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973", en Revista Mexicana de Sociología, vol.39, n° 2, abr-jun 1977, y "Dominant Classes and Political Crisis in Argentina Today", en Latin American Perspectives, vol.1, n°3, Fall 1974; O'Donnell, G., "Estado y alianzas en Argentina 1956-1976", en Desarrollo Económico, vol.16, n°64, ene-mar 1977, y "Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático-autoritario", en Revista Mexicana de Sociología, vol.39,

- nº 1, ene-mar 1977.
15. Cooke, J.W., Apuntes para la militancia, Ed. Schapiro, Buenos Aires, 1977, p.43.
  16. O'Donnell, G., El Estado burocrático-autoritario..., p.725.
  17. Perón, J.D., La hora de los pueblos, Ed. Norte, Buenos Aires, 1968, p.127.
  18. Ibid., p.128.
  19. Ibid., p.131.
  20. Ibid., p.44.
  21. Fortantiero, J.C., "Economía y política...", p.564.
  22. Peralta Ramos, M., Acumulación del capital y crisis política en Argentina (1950-1974), Siglo XXI, México, 1978, p.200.
  23. Ibid., p.202.
  24. O'Donnell, G., El Estado burocrático-autoritario..., p.266-7.
  25. Braun, O. y Kesselman, R., "Argentina 1971: estancamiento estructural y crisis de coyuntura", en Braun, O. (comp.), El capitalismo argentino en crisis, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973.
  26. Raúl Ceveda, C., Crisis de una burguesía dependiente. Balance económico de la "Revolución Argentina" 1966-1971, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1972, p.95.
  27. Guglielmelli, E., 120 días en el gobierno, Ed. del autor, Buenos Aires, 1971, p.103.
  28. Peralta Ramos, M., Acumulación del capital..., p.227.
  29. Sourrouille, J.V., El complejo automotor en Argentina, ILEFT, Nueva Imagen, México, 1980,
  30. Peralta Ramos, M., Acumulación del capital..., p.210.
  31. O'Donnell, G., El Estado burocrático-autoritario..., p.337.
  32. Peralta Ramos, M., Acumulación del capital..., p.212.
  33. Duejo, G., Contradicciones secundarias en la sociedad argentina,
  34. Ibid., p.71,72.
  35. Fortantiero, J.C., "Economía y política...", p.565.

36. Duejo, C., Contradicciones secundarias..., p.76.
37. Feralta Ramos, M., Acumulación del capital..., p.210.
38. Ibid., p.216.
39. Ibid., p.260.



## NOTAS CAPITULO 7

1. Duejo, G., Contradicciones secundarias en la sociedad argentina
2. Di Tella, G., Argentina under Perón, 1973-76, The Macmillan Press, Hong Kong, 1983, p. 86.
3. CEPAL, Empresas Transnacionales en la industria de alimentos. El caso argentino: cereales y carne, Estudios e informes de la CEPAL, N° 29, Santiago de Chile, 1983.
4. Los datos económicos fueron tomados de G. Di Tella, ob. cit.
5. LASA, La represión en Argentina. 1975-1974 documentos, FCPys, UNAM, Serie Estudios 55, México, 1978, p. 91 y ss.
6. Escobar, J. y Velazquez, S., Examen de la violencia argentina, FCE, México, 1975, p.135.
7. Tomado de Lesseps, M. y Traveler, L., Argentina un país entregado, Castellote Editor, Madrid, 1978, p. 71 y 94.
8. Gillespie, W., Soldiers of Perón. Argentina's Montoneros, Clarendon Press, Oxford, 1982, y James, D., The Peronist Left, 1955-1975, en Journal of Latin American Studies, 8, 12, Nov. 1976.
9. Jelin, E., Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976, CEDES, Estudios Sociales N° 9, Buenos Aires, 1977.
10. Roldán, I., Sindicatos y protesta social en la Argentina (1969-1974). un estudio de caso: el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, CEDLA, Amsterdam, 1978, p. 406; 411 y ss.
11. Trotsky, L., La lucha contra el fascismo, Fontanara, Barcelona, 1980, p. 16 y ss.

## BIBLIOGRAFÍA

- Agot, J. y otros, El poder económico en la Argentina, Cuadernos de CIEPO, Buenos Aires, 1971.
- Alber, L., Social Origins of Dictatorship and Democracy in Argentina, University of North Carolina, Tes. e Dr. Philosophy, 1975.
- Arnoso, M., Mésfil: pueblo y poder, Ed. Lda, México, 1971.
- Baró, G., Evolución histórica de la estratificación social en la Argentina, Universidad de Geneva, IFEA, Ginebra, 1969.
- Bellón, T., La reforma monetaria y bancaria argentina de 1946-57: un caso de encaje bancario total?, CIEPA, México, 1982.
- Braun, G. y Kesselman, B., "Argentina 1971: estancamiento estructural y crisis de coyuntura", en Braun, G. (comp), El capitalismo argentino en crisis, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973.
- Cecchi Sella, M., La clase obrera en México, el futuro inmediato, Siglo XXI, México, 1980.
- Cavarozzi, M., Consolidación del sindicalismo peronista y emergencia de la fórmula política argentina durante el gobierno franchista, Estudios CIEPO, 2 (7/8), Buenos Aires, 1979.
- , Sindicatos y política en Argentina 1955-1958, Estudios CIEPO, 2 (1), 1979, Buenos Aires.
- CIEPAL, El desarrollo económico de la Argentina, México, 1959.
- , Empresas transnacionales en la industria de alimentos. El caso argentino: cereales y carne, Estudios e informes N° 29, Santiago de Chile, 1980.
- , Estadística Estadística de América Latina, 1965, vol. 2, n° 1.
- Grillo, A. y Saron, Acumulación y centralización del capital en la industria argentina, Hacia Centauro, Lda, Buenos Aires, 1973.
- Griño, A., Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946), Ed. de la Flor, Buenos Aires, 1975.
- Gutiérrez, A. y Gurel, M., Política exterior argentina 1930-1962, Hacer, Buenos Aires, 1964.
- Wachs, G., Los años con la militancia, Ed. Schapiro, Buenos Aires, 1977.

- , *La Uchu por la liberación nacional*, Ed. Papiro, Buenos Aires, 1971.
- , *El peronismo y el golpe de Estado*, Ed. ARP, Buenos Aires, 1966.
- Cacerese, H., *Historia económica financiera argentina (1902-1930)*, III, Alenou, Buenos Aires, 1966.
- Cáceres, D., *Contrahegemonía y crisis de la clase obrera*, Pioner, Buenos Aires, 1967.
- Del Negro, G., *El Radicalismo*, Ed. Oure, Buenos Aires, 1957.
- Department of State Bulletin, vol. XXII, n° 569, May 29, 1950.
- De Foa, L., *Sociedad y política en Chile*, UNAM, México, 1979.
- D'Es Alejandro, G., *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Ameghino, Buenos Aires, 1975.
- El Talla, H., *Argentina under Perón 1973-76*, The MacMillan Press, Hong Kong, 1987.
- Fordham, A., *Evolución industrial argentina*, Losada, Buenos Aires, 1974.
- Daron, E., "El crecimiento sindical bajo el peronismo", *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 57, abril-junio 1975, Buenos Aires.
- , "La continuación del movimiento sindical peronista 1945-1955", *Desarrollo Económico*, vol. 24, n° 94, julio-diciembre 1984, Buenos Aires.
- , "Conflictos obreros bajo el régimen peronista 1946-1955", *Desarrollo Económico*, vol. 17, n° 67, octubre-diciembre 1977, Buenos Aires.
- Doggio, E., *El sindicalismo monopolista y las contradicciones secundarias de la clase obrera argentina*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974.
- Domínguez, M., *Orígenes y movimiento obrero en Brasil*, UNAM, México, 1971.
- Figueroa, R. y Galán, A., *Breve historia de medio siglo en Chile*, en *Historia del Sur: historia del Sur*, Siglo XXI, México, 1986.
- Froeman, J. y Valenzuela, G., *Surcos de la violencia argentina*, FCB, México, 1978.
- Frucht, S. y Shalaby, D., *Economic and Social Consequences of Orthodox*

- the Oxford University, 1962.
- Florit, G., Los Fuerzas Armadas y la guerra psicológica, Arca, Buenos Aires, 1964.
- Fuchs, J., La penetración de los trusts yólicos en la Argentina, Cartago, Buenos Aires, 1938.
- , Argentina: su desarrollo capitalista, Cartago, Buenos Aires, 1935.
- Furcolo, G., La economía latinoamericana, Siglo XXI, México, 1966.
- García Lupo, R., Contra la ocupación extranjera, Sudestada, Buenos Aires, 1968.
- , La rebelión de los generales, Jancana, Buenos Aires, 1963.
- , Mercenarios y monopolios en la Argentina de Onganía a Leizaola, 1966-1971, Achával Folo, Buenos Aires, 1971.
- Germani, G., Estructura social de la Argentina, Solar, Buenos Aires, 1957.
- Germani, G. y otros, Argentina sociedad de masas, JUDEBA, Buenos Aires, 1959.
- gonzález allardi, Por qué está en crisis la economía argentina, Anteo, Buenos Aires, 1949.
- Gigliolaini, E., 120 años en el gobierno, ed. del autor, Buenos Aires, 1971.
- Gillespie, R., Soldiers of Perón. Argentina's Montoneros, Clarendon Press, Oxford, 1968.
- Ignazi, G., El colapso del populismo en Brasil, UNAM, México, 1970.
- Ignazi, G. y otros, Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica, ed. Tró, México, 1977.
- Jarr, J.M., Las ciudades, JUDEBA, Buenos Aires, 1966.
- Joffé, E., Sindicatos laboristas en la Argentina 1923-1970, CUBES, Estudios Sociales 271, Buenos Aires, 1977.
- La Nación, Una selección de la semana, 11 de Julio 1968, Buenos Aires.
- Leval, G., Argentina 1973-1974. Lógica de emergencia y crisis política, CUBES, Buenos Aires.
- Leval, G., La revolución de Argentina 1972-1974, Documentos, CUBES, UNAM, México

Benegas, M. y Tróvler, L., Argentina un país entregado, Castellote editor, Madrid, 1972.

Borotto, J., "Alianzas políticas en el surgimiento del peronismo: el caso de la provincia de Buenos Aires", Desarrollo Económico, vol. 12, n° 48, abril-junio 1972, Buenos Aires.

Bucchi, P. y Portantiero, J. L., Estudios sobre los orígenes del peronismo/1, Siglo XXI, Buenos Aires, 1972.

O'Donnell, G., "Modernización y golpes militares. Teoría, comparación y el caso argentino", Desarrollo Económico, vol. 12, n° 47, octubre 1972, Buenos Aires.

-----, El Estado burocrático-autoritario 1966-1973, Ed. de Belgrano, Buenos Aires, 1981.

Deza, M., Industria, burguesía industrial y liberación nacional, Ed. Financas, Buenos Aires, 1964.

-----, La clase dirigente argentina frente al imperialismo, Ed. Financas, Buenos Aires, 1973.

Peralta Mason, M., Acumulación del capital y crisis política en Argentina (1930-1974), Siglo XXI, México, 1976.

Verón, J. D., La hora de los pueblos, Forta, Buenos Aires, 1968.

Feron-Coste, Correspondencia, T. II, Tecnica, Buenos Aires, 1973.

Portantiero, J. L., "Economía y política en la crisis argentina: 1966-1973", Revista Mexicana de Sociología, vol. 39, n° 2, Mar-jun 1977.

Poulantzas, N., Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Siglo XXI, México, 1966.

Quiroga, R., Argentina entre golpes,

Rovell-Cabada, C., Crisis de una burguesía dependiente. Balance económico de la "Revolución Argentina" 1966-1971, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1971.

Solner, J. y Solner, L., Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina, Amorrortu, Buenos Aires, 1973.

Solaña, J., Sindicatos y protesta social en la Argentina (1969-1974). Un estudio de campo: el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, CIEBA, Montevideo, 1974.

- Rouquié, A., Pouvoir militaire et société politique en République Argentine, Presses de la Fondation Nationale des Sciences politiques, Paris, 1973.
- Saule, R., "Poder económico y burguesía industrial en la Argentina 1930-1954", Revista Latinoamericana de Sociología, vol. IV, n° 3, Noviembre 1963, Buenos Aires.
- Schmertz, E., The Argentine Experience with Industrial Credit and Protection Incentives 1943-1948, New Haven, Yale University,
- Seldes, G., El Organismo, C. Samonta Ed., Buenos Aires, 1973.
- , Argentina a precio de costo, Iguazú, Buenos Aires, 1965.
- Sidicero, R., El Estado peronista. Estado y alianzas sociales en la Argentina 1943-55, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Tesis doctorado, Paris, 1977.
- Sisal, S. y Gallo, E., "La formación de los partidos contemporáneos. La Unión Cívica Radical (1890-1916)", Desarrollo Económico, vol. 3, n° 1-2, abr-jun 1963, Buenos Aires.
- Sisal, S. y Verón, E., "Perón: discurso político e ideología", Argentina Hoy, A. Rouquié (comp.), Siglo XXI, México, 1982.
- Somali, L., Los capitales alemanes en la Argentina, Claridad, Buenos Aires, 1945.
- , Los capitales yanquis en la Argentina, Monteagudo, Buenos Aires, 1949.
- Sourrouille, J., El complejo automotor en Argentina, Nueva Imagen, México, 1980.
- Sorjager, P., "Disunity and Disorder: Factional Politics in the Argentine Military" The Military Intervenes: Case Studies in Political Development, ed. H. Eisen, New York: Russell Sage Foundation, 1968.
- Tarshis, B., The Argentine Labor Movement 1930-1945, New Mexico Press, 1980.
- Torres, J.M., "The Meaning of Current Workers' Struggles", Latin American Perspectives, vol. 1, n° 3, Fall 1974.
- Wrobleky, H., La lucha contra el fascismo, Fontanar, Barcelona, 1969.
- , El fascismo en el Altar de los Estados Unidos, Ed. del autor,

Buenos Aires, 1964.

Vilco, G., Derecho y Estado en una economía dependiente, Guadalupe,  
Buenos Aires, 1974.

Wolpin, H., Military aid and Counterrevolution in the Third World. Lex-  
ington Books, Lexington, 1972.